ISSN 0327-9588

UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA**

WORKING PAPER N° 63

HIPÓTESIS DE CONFLICTO
EL CONO SUR FRENTE AL EJE CHÁVEZ-FARC

Carlos Escudé • Mariana Souto Zabaleta

Mayo de 2001

ABSTRACT:
Aunque en la actualidad Sudamérica pasa por un momento sin precedentes en términos de la abolición de las hipótesis de conflicto interestatal tradicionales, nuevas amenazas de un carácter hasta ahora desconocido se ciernen sobre ella. Una de las varias caras del proceso de globalización es la mundialización del delito. En Colombia, el potencial colapso del Estado se potencia con nuevas organizaciones delictivas globalizadas (como la "mafia rusa"), que se suman al narcotráfico, la violencia insurgente, el trueque de drogas por armas, la industria del secuestro, y un nuevo populismo emergente en la vecina Venezuela (cuyo caudillo es sospechoso de apoyar tácticamente la insurgencia colombiana). A esto se suma la equivocada política norteamericana de luchar contra la droga puertas afuera, desde el lado de la oferta en vez de la demanda, exportando aún más violencia a Colombia. Como consecuencia del "Plan Colombia", esta violencia amenaza con derramarse hacia el Sur. El embate norteamericano contra las FARC y su
principal fuente de financiamiento (la droga) ya hizo crecer la industria del secuestro (que es su segunda fuente de financiamiento). Y la debilidad de los aparatos de seguridad de países como la Argentina hacen de ellos los blancos probables de dicha industria en un futuro próximo. Emerge así una nueva hipótesis de conflicto, vinculada a las "nuevas amenazas".

* Universidad Torcuato Di Tella
Departamento de Ciencia Política y Gobierno
Miñones 2159/7
C1428ATG Capital Federal
Tel.Fax: 4784-0080 int. 163

** Los juicios y opiniones vertidas en los documentos de trabajo de la Universidad Torcuato Di Tella son de la exclusiva responsabilidad de los autores y no comprometen a la institución académica que los publica.

PRÓLOGO

El presente trabajo es producto de una investigación auspiciada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la República Argentina. Es una versión preliminar de una obra que, en su versión definitiva, contendrá más elementos teóricos y conceptuales. Consideramos importante difundir la versión actual como documento de trabajo para que los abundantes datos documentados puedan ser sometidos al escrutinio de la comunidad científica.

El estudio se llevó a cabo mediante la metodología de investigación por Internet "*GlobalIntel"*, que el abajo firmante desarrolló personalmente y ya utilizó en dos libros anteriores, *Mercenarios del Fin del Milenio: Estados Unidos, Europa, y la Proliferación de Servicios Militares Privados*, Buenos Aires: Belgrano, 1999; y *Estado del Mundo: Las Nuevas Reglas de la Política Internacional Vistas Desde el Cono Sur*, Buenos Aires: Ariel (Planeta), 1999. La metodología también se utilizó para impartir clases sobre la investigación por Internet, a la Secretaria de Inteligencia del Estado de la República Argentina, y a su Escuela Nacional de Inteligencia, durante la gestión de Fernando de Santibáñez.

Los autores agradecen a Peter Waldmann (Universidad de Augsburgo, Alemania) el intercambio de ideas y de conceptos sobre la guerra civil colombiana, como así también los comentarios críticos de Mónica Vilgré La Madrid (socia-gerente de Markwald, La Madrid y Asociados) y de Beatriz Gurevich (directora del área de Derechos Humanos, Centro de Estudios Internacionales "Carlos Saavedra Lamas").

Carlos Escudé, Ph.D. (Yale '81)
Profesor, Universidad Torcuato Di Tella
Director, Centro de Estudios Internacionales
"Carlos Saavedra Lamas"

LA HIPÓTESIS

El 16 de marzo de 2001, el diario *Ámbito Financiero* informó que la gendarmería argentina está preocupada por el posible desembarco de grupos narcotraficantes y de organizaciones guerrilleras de origen colombiano a través de la frontera norte del país. Específicamente le preocupa que como consecuencia de la erradicación de cultivos cocaleros y el enfrentamiento militar generados por el Plan Colombia, tanto narcotraficantes como guerrilleros se replieguen hacia estas tierras australes. Al respecto, hubo conversaciones con los gobernadores de las provincias norteñas y con el embajador de los Estados Unidos.

Varios meses antes, la periodista Malú Kikuchi había tenido una entrevista con una alta autoridad del gobierno argentino, quien le confesó (después de cierta insistencia) que estaban ingresando armas de contrabando por la frontera del Noroeste. La Sra. Kikuchi dijo con énfasis: "¡estamos hablando de armas de las FARC!", y el funcionario asintió. No obstante, le quitó relevancia al tema diciendo que el flujo era pequeño y controlable, y que después de todo siempre había contrabando de armas. Dijo que existía un "foco minúsculo". Frente a la pregunta sobre qué medidas se habían tomado para eliminar el incipiente problema, el funcionario dijo que el gobierno estaba "apagando demasiados incendios en demasiados frentes" como para ocuparse del asunto. Quedó claro que la entrevista era *on the record*.

Aún antes de eso, uno de los autores de esta obra compartió una amable comida en casa de Juan Tokatlián, especialista en relaciones internacionales argentino dos veces expatriado, una vez huyendo de la violencia argentina de la década del '70, y la segunda vez huyendo de la colombiana, para abandonar su país de adopción y regresar al nativo. En esa ocasión, Tokatlián dijo que en su opinión la Argentina era un país ideal para el establecimiento de una industria del secuestro a-la-colombiana (ver Capítulo 4), por las deficiencias y corruptibilidad de sus organismos de seguridad.

En verdad, los secuestros están aumentando fuertemente en Colombia y ya se están derramando a países contiguos, debido a que la destrucción de campos cocaleros priva a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) de parte de sus ingresos, y esto se compensa aumentando la otra fuente de ingresos: los rescates de secuestros. Si en la Argentina existen condiciones propicias, es probable que lo intenten aquí en connivencia con grupos locales. Eso es lo que hacen en Bogotá, donde las FARC no tiene poder propio: secuestran a través de bandas de delincuentes comunes a las que subcontratan, dividiéndose la ganancia (30% para la banda, 70% para las FARC).

Como veremos en el Capítulo 1, las FARC tienen cómplices poderosos en Colombia y otros países. El "chavismo" venezolano es fuertemente sospechoso de brindar apoyo a sus hermanos "bolivarianos" de la guerrilla colombiana. Y la trama de vínculos entre altos funcionarios corruptos, traficantes de armas, narcotraficantes y mafias diversas, incluyendo la rusa, es una pesadilla que no escapará nuestra atención en los capítulos venideros, y que no será fácilmente derrotada por el Plan Colombia, al menos tal como viene enunciado. Ya cayó un gobierno sudamericano, el de Alberto Fujimori en Perú, por la triangulación de armas de origen ruso, legalmente compradas por el gobierno peruano al de Jordania y luego transferidas a las FARC.

El rompecabezas que confeccionaremos, y la trama que se irá revelando, inexorablemente conduce a una gravísima hipótesis de conflicto que terminaremos de documentar en el Capítulo 4: consideramos que (coincidiendo con Tokatlián) es altamente probable que las FARC exporten su industria del secuestro a la Argentina. Chile probablemente esté mejor protegido porque sus fuerzas armadas mantienen intacta su moral y su capacidad operativa. Pero en la Argentina es probable que se avecinen días siniestros, que harán parecer cosa menor los aborrecibles crímenes de la dictadura que sufrimos entre 1976 y 1983.

Es para intentar contribuir a evitar ese escenario que publicamos este trabajo. Vale la pena aclarar, sin embargo, que la siniestra hipótesis de conflicto que es su eje no fue vislumbrada por nosotros cuando comenzamos la investigación. Originalmente, el libro iba a llamarse “El Estado de América Latina”, una suerte de sucedáneo de “Estado del Mundo”, publicado por uno de los autores de este trabajo en 1999. Sin embargo, como suele ocurrir, la investigación cobró vida propia, y la trama que lentamente fue develándose nos hizo desembocar en algo infinitamente más tenebroso que lo que jamás imaginamos.

El cambio de título es anécdota secundaria. Terminamos la escritura del libro perturbados y estremecidos.

CAPÍTULO 1: EL CONOSUR FRENTE AL EJE CHÁVEZ-FARC

Los intocables

El 12 de octubre de 2000, mientras se desarrollaba la visita de Estado a la Argentina del presidente colombiano Andrés Pastrana, un centenar de activistas de izquierda atacó con piedras y bombas de estruendo la fachada de la embajada de Colombia, causándole serios daños e hiriendo dos policías.

Los atacantes (algunos con pasamontañas) se habían desprendido de una manifestación convocada por la "Comisión Argentina Contra la Intervención en Colombia", que protestaba contra la presencia de Pastrana en el país y +ç

contra el Plan Colombia. A pesar de la violencia y destrucción producida por los autores del ataque a la embajada de Colombia, la Policía Federal informó al diario *La Nación* que no hubo detenidos por los disturbios, que comenzaron a las 21 horas y finalizaron 10 minutos después[1].

La mayor parte de la prensa argentina no informó sobre el suceso, cosa rara en un país donde la violencia insurreccional y del Estado causó estragos durante la década de 1970, con violaciones masivas de derechos humanos. Ese trágico episodio histórico debió habernos enseñado que el Estado debe instrumentar todos los medios legales a su alcance para evitar su repetición.

No hay peor violencia que la violación de derechos humanos por parte del Estado, pero la tolerancia de la violencia política de grupos insurgentes y afines inevitablemente engendra más violencia política, y contribuye a gestar las condiciones de polaridad que muchas veces desembocan en inhumanos abusos de parte del Estado mismo. Para evitar la emergencia de tales circunstancias, es imprescindible reprimir legalmente, con la fuerza pública, toda violación de la ley, particularmente cuando se trata de un ataque a una embajada, que daña su fachada y hiere dos policías.

Pero el hecho no puede sorprender cuando es del dominio público que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que cuentan con 17 mil combatientes en su país y dominan el 40% del territorio colombiano, tienen representantes para-diplomáticos que entran, se pasean y salen del país como si fueran pacíficos turistas. El gobierno argentino anunció que estudia la posibilidad de prohibir el ingreso al país de miembros de las FARC[2], pero dicho "estudio" no se tradujo a medidas concretas, de manera que el comandante Javier Calderón (que integra la Comisión Político Diplomática del grupo insurgente) ha podido recorrer el territorio argentino y conceder entrevistas a medios de la prensa luciendo su uniforme de guerrillero.

El mencionado delincuente es vocero de las FARC en la Argentina, y frente a la noticia de que el gobierno estudiaba una posible prohibición, dijo a AFP: "No nos sorprendió del todo. Es parte del proyecto norteamericano de involucrar a la Argentina en el conflicto colombiano".[3] Acusa al gobierno de Pastrana de "Estado terrorista", apelando a la retórica: "¿Y cómo llamaría usted a un gobierno que recibe armas para reentrenar a su ejército (...)?"[4]

Hay una extraña tolerancia hacia la presencia de representantes de esta peligrosa guerrilla que mantiene en jaque al Estado colombiano desde 1964 y está involucrada con el narcotráfico y la industria del secuestro. Pero no es la Argentina el único país que ha demostrado timidez frente a esta organización. El 23 de septiembre de 2000, uno de los voceros de las FARC en Brasil, el comandante Francisco Antonio Cadenas Collazos, un sacerdote-guerrillero que según las fuerzas de seguridad argentinas ingresó también varias veces a este país, fue arrestado en Foz de Iguazú. Cadenas Collazos[5], que usaba en Brasil el nombre de "Oliverio Medina", había residido en ese país cinco años antes de ser detenido. Durante ese período se comportó como el representante diplomático de las FARC, encontrándose con docenas de legisladores en Brasilia, visitando universidades, y cultivando una amistad con el célebre arquitecto Oscar Niemayer[6].

En Foz de Iguazú el "Padre Oliverio Medina" fue apresado como un "peligro para la seguridad nacional". Los brasileños se habían alarmado ante las posibles repercusiones para ellos del Plan Colombia. Aunque el mismo apresado, en su carácter de representante oficial de las FARC, había dado las seguridades, antes de su arresto, de que su guerrilla no invadiría territorio brasileño (decisión que dijo se había tomado en 1993, "en el transcurso de la 8ª Conferencia Nacional de las FARC"[7]), Brasil no tiene ninguna garantía de ello.

De hecho, han habido incursiones guerrilleras del lado brasileño de la frontera. Además, frente a ofensivas de las FARC, las tropas regulares colombianas se han visto forzadas a refugiarse del lado brasileño: el territorio brasileño ya ha sido escenario de la guerra civil colombiana.[8] Por otra parte, subsiste la espinosa cuestión (indeseable para el gobierno brasileño) de si no habrá un flujo hacia Brasil de población civil colombiana de la región fronteriza, en caso de que el ejército colombiano con ayuda norteamericana ataque frontalmente a las FARC en dicha región[9]. Obviamente, con los campesinos refugiados también podrían ingresar guerrilleros.

Además, de hecho la guerrilla ingresa pacíficamente al territorio brasileño para abastecerse de productos de todo tipo, desde víveres hasta productos químicos para la elaboración de la cocaína. Cada vez más, cuando se captura un laboratorio de las FARC, se encuentran etiquetas en portugués de productos químicos provenientes de Manaos. Y a la vez que mucha droga colombiana sale por Brasil, por este país entran también armas para las FARC. Brasil ya es, en más de un sentido, parte de la economía y la logística del narcotráfico y de la guerra civil misma.[10] Tiene sobrados motivos para detener y deportar a los delincuentes subversivos colombianos que pretenden arrogarse un status diplomático.

Pero la captura de Cadenas Collazos fue todo un escándalo para algunas organizaciones que pretendidamente defienden los derechos humanos, que argüían que éste *no había cometido delitos en Brasil,* como si la comisión del delito de insurgencia en Colombia, acompañado por la trayectoria guerrillera que lo catapultó al rango de comandante de las FARC, no fuera razón suficiente para extraditarlo o deportarlo a su país. Especialmente desde Suecia, donde las propias FARC tienen instalado un sitio de Internet a través de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL), se lanzaron "desesperados" pedidos de ayuda para la liberación del "Padre Medina". La Cuarta Internacional también fue muy activa en la campaña por la liberación de este sacerdote, guerrillero y diplomático de múltiples identidades.

Encontrar noticias sobre la resolución del trámite judicial en Brasil, sin embargo, fue más difícil para los autores de este libro. La prensa informó sobre la captura de Cadenas Collazos, pero casi ningún medio dijo nada sobre su liberación, concretada el 16 de octubre de 2000 por orden de un juez federal de Foz de Iguazú, que restableció su derecho de residir en Brasil. Nuestra única fuente fue un breve comunicado del World Socialist Web Site, que a su vez cita un comunicado de las FARC del 17 de octubre y un cable de "Vientos del Sur-Interactivo" transmitido por AFP, del 18 de octubre de 2000.

En su declaración judicial, Cadenas Collazos (alias Padre Oliverio Medina) manifestó que "su principal función es buscar el reconocimiento de Brasil a las FARC, porque son un Estado paralelo que gobierna Colombia". Este dicho converge con el de Javier Calderón a un periodista de *La Nación* en mayo de 2000, en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde su presencia (auspiciada por organizaciones estudiantiles de izquierda) fue profusamente anunciada en las paredes con varios días de anticipación:

"Las FARC son un partido en armas en lucha por el poder. Somos un Estado dentro del Estado. Tenemos, de hecho, el reconocimiento como fuerza beligerante y pretendemos que lo sea de derecho. En este marco nadie nos puede negar poseer nuestra propia representatividad ante el mundo y llegar a todos lados para explicar la verdad de lo que somos. Esa es nuestra función político diplomática (...)".[11]

Por otra parte, Cadenas Collazos reconoció sus contactos con el movimiento brasileño "Sin Tierra", lo que deja abierta la pregunta de si no aspirará a que ese grupo insurgente campesino sea también (como lo son pretendidamente las FARC en Colombia) un "Estado paralelo que gobierna" Brasil. Aunque este desenlace está lejos aún, no hay ninguna duda de que enfrentamos un movimiento que extiende sus tentáculos internacionalmente, y que mientras en Europa puede buscar sólo apoyos logísticos y diplomáticos, en América latina ansía expandirse y representa un problema para la seguridad y un factor desestabilizador para las democracias de la región. A la vez (y esta es la paradoja) siempre que exista voluntad política, fuera de Colombia son legalmente controlables y reprimibles, porque en su país son delincuentes.

Pero es evidente que tal voluntad política no existe. Brasil pudo lanzar su "Operativo Cobra" para intentar cerrar militarmente su extensa frontera con Colombia, a sabiendas que las FARC dan apoyo logístico a los Sin Tierra, pero liberó al "Padre Oliverio Medina", casi como si temiera la ira de las FARC, a pesar de que esta organización ya atacó bases militares brasileñas en la frontera[12]. Y la justicia argentina ni siquiera osa dar el primer paso de encerrar (para luego deportar) a Javier Calderón, a pesar de la protección que dan las FARC a los productores de coca de su país, a pesar de las ganancias que reciben de traficantes y de secuestros, y a pesar de su reconocida actividad en la triple frontera argentino-brasileña-paraguaya[13].

Por cierto, en una entrevista publicada por *La Nación* Javier Calderón ratificó estos hechos:

"El oficialismo sabe que estoy en la Argentina y sabe qué hago porque me he reunido con gente importantísima del Gobierno, de la que no puedo dar los nombres... (También me reuní) con sindicalistas, que excepto Carlos 'Perro' Santillán, nada tienen que ver con el gremialismo de

Colombia, que es más combativo (...). (Me reuní) con Raúl Alfonsín y con legisladores de la oposición y del oficialismo".

El vocero de Alfonsín, Federico Polak, confirmó la reunión. Calderón venía de participar en Salta en un acto organizado por la denominada Comisión de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos, donde reclamó el apoyo de la región y en especial de los argentinos a la lucha de las FARC. Y frente a la pregunta de la cronista "¿Cómo se conciben el asesinato y el secuestro?", Calderón no encontró mejor respuesta que: "Secuestramos por política, no por financiamiento, pero nos los adjudican todos"[14].

Las FARC y su entorno: presentación en sociedad

Cuando en noviembre de 2000 las FARC rompieron las negociaciones de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, sabían que estaban paradas sobre terreno firme. Saben que (al menos por ahora) pueden conseguir más por vía de las armas que a través de la paz, por lo que no deben hacer concesiones, a la vez que saben que el anzuelo de una negociación de paz en la que, a pesar de las expectativas, no hacen concesiones, les sirve para ganar tiempo y para mantener una "zona desmilitarizada" dos veces mayor que la provincia de Tucumán, donde la legalización de su impunidad les resulta extremadamente útil. La cuestión táctica es hasta donde tensionar la cuerda. Cuando Pastrana amenazó con eliminar la zona desmilitarizada, las FARC regresaron a la mesa de negociaciones, y así obtuvieron en febrero de 2001 una extensión de ocho meses para la vigencia de la zona. Por otra parte, saben que deben actuar con energía antes de que comience el asedio militar que seguramente generará la inyección de la cuota bianual de 1300 millones de dólares por EE.UU. a través del Plan Colombia (aporte total: U$S 7500 en cinco años), que aunque pretende combatir al narcotráfico, no a la guerrilla, se invertirá principalmente en armamentos y otros gastos militares.

Mientras tanto, la existencia de una zona en la que, por ley, las FARC no pueden ser perseguidas, ayuda enormemente a éstas a ganar legitimidad externa e interna. Allí los campamentos de guerrilleros, hombres y mujeres, están a la vista en cerros cercanos al pueblo de San Vicente de Caguán. En uno de esos cerros suele apostarse el "mariscal de campo" del ejército rebelde. Jorge Briceño Suárez, cuyo nombre de guerra es "el Mono Jojoy" es, según se cuenta, un hombre fortachón y jovial de unos 50 años con estudios secundarios inconclusos. Su cuerpo de guardaespaldas es femenino, y es *vox populi* que la comandante del mismo es su amante.[15]

Por encima de Briceño está, por supuesto, el mítico Manuel "Tirofijo" Marulanda, mandamás de los guerrilleros. Y aparte existe un secretariado de siete hombres que incluye a Luis Edgardo Devia Silva (a cargo de las finanzas y las relaciones internacionales de la agrupación); Rodrigo Londono Echeverri (un médico de 37 años); Luciano Marín Arango (el educado intermediario con el narcotráfico, a cargo también de los frentes de las FARC en el noroeste), y Noel Matta Matta (el intermediario en la compra de armas, de 62 años). La organización está dividida en "bloques" (divisiones regionales) que a su vez se dividen en "frentes", y éstos en "cuadrillas". Sus ingresos anuales son de aproximadamente mil millones de dólares. Más de un 50% proviene de la industria de la droga. El resto es producido por la industria del secuestro y por los "impuestos" extorsivos cobrados a negocios legítimos que se desarrollan en su zona de influencia.[16]

Pero como se sabe, las FARC no son la única organización insurgente de Colombia. Les sigue en importancia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con una fuerza de aproximadamente 5000 combatientes y un sistema de financiación similar al de las FARC, es decir, una mezcla de beneficios obtenidos del narcotráfico y de la industria del secuestro, aunque sus recursos y métodos son mucho menos sofisticados. No obstante, el tributo de "protección" que las empresas petroleras pagan al ELN constituye una rica fuente de ingresos. Estas empresas casi nunca se prestan a una entrevista con la prensa sobre el ELN.[17]

A pesar de estos ingresos, se dice que el embate de los paramilitares tiene debilitado y arrinconado al ELN, y que será más fácil negociar una paz con ellos que con las FARC (lo que demuestra la persistente funcionalidad de los denostados paramilitares para la estrategia del gobierno). Más aún, aparentemente el plan de Pastrana es obligar a las FARC a negociar de verdad, una vez que se haya cerrado un trato con el ELN parecido al que se cerró con la guerrilla M-19 en 1990, que se incorporó al proceso electoral. Para ello, ya se ha acordado (pero aún no se efectivizó) una nueva zona desmilitarizada, mucho más pequeña, que el gobierno y el ELN utilizarían para negociar. Se trata de unas 400.000 hectáreas en el pueblo petrolero de Barranca Bermeja.[18] Pero aunque la estrategia parece ser la de obtener primero concesiones del más débil, en los hechos las poderosas FARC fueron beneficiadas mucho antes con una zona desmilitarizada mucho mayor.[19] Y las fumigaciones realizadas hasta marzo de 2001 se realizaron en regiones que abastecen de coca a los paramilitares, no a las FARC.[20] En verdad, la relación entre Pastrana y los narcoinsurgentes está plagada de ambigüedades.

Por otra parte, el proceso de negociaciones se complica mucho porque, aparte de las FARC y el ELN, existen un total de 17 organizaciones guerrilleras pequeñas. La segmentación y enorme dispersión geográfica de estos grupos podría hacer incontrolable un acuerdo de tregua. Si se produce una acción armada, no habrá manera de saber con certeza que no se trató de una violación del acuerdo sino del accionar de elementos independientes.

El contingente de grupos guerrilleros pequeños está encabezado por el EPL (Ejército Popular de Liberación), un grupo maoísta la mayor parte de cuyos miembros se desmovilizaron en 1991, pero cuya facción disidente continuó operando en Santander, Norte de Santander, Magdalena, Risaralda y Nariño. Cuenta con una fuerza de entre 300 y 500 combatientes pero carecen de un liderazgo claro porque su principal comandante, Francisco Caraballo, está preso.

Por otra parte, el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) es un incipiente grupo que hizo su presentación en sociedad en junio de 2000 a través del secuestro y liberación de funcionarios de la localidad de Tiquisio, sobre el Caribe. El ERP cuenta con unos 350 combatientes. Otra agrupación chica es el Movimiento Jorge Eliécer Gaitán (JEGA), que se escindió del EPL en 1987, y opera intermitentemente en el centro del país y en las regiones cafeteras del oeste y sudoeste. Su acción más importante fue el secuestro y posterior liberación de Carlos Gaviria, hermano del ex presidente de Colombia y secretario general de la OEA. Se considera que el EPL, el ERP y el JEGA son grupos consolidados porque tienen apoyo político en las regiones donde operan, además de una estructura financiera, aunque sufren problemas de liderazgo que dificultan su crecimiento.

Las otras catorce organizaciones son mucho más pequeñas y luchan en su mayor parte por reivindicaciones étnicas y regionales. Raíces Por Colombia (RPC) promueve los derechos de los negros y opera esporádicamente en el oeste del país. Los Comandos Revolucionarios Populares dicen luchar por los campesinos que fueron desposeídos de sus tierras por grandes terratenientes. El Movimiento 26 de Abril Carlos Pizarro Leongómez (MP-26) cuenta con 40 disidentes del desmovilizado M-19 y opera en las regiones cafeteras del centro y sudoeste. El Ejército Republicano Independentista del Caribe (ERICA) tiene 70 combatientes que luchan por la separación de los departamentos caribeños de Colombia. La Organización para la Liberación de Putumayo (OLP) tiene unos 70 guerrilleros que luchan por la independencia de Putumayo. El Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) tiene 100 hombres que operan en el empobrecido departamento del Choco. La Organización Revolucionaria Pueblo Armado, con 30 hombres, dice luchar por los pobres en el departamento de Antioquia. El Comando Álvaro Ulcue, que tomó su nombre de un cura indígena asesinado, dice luchar por las minorías étnicas. Las Fuerzas de Integración Bolivarianas (FIB) luchan desde 1995 por ideales de auto-determinación regional y rechazan los programas de apertura económica. El Comando Miliciano Revolucionario (CMR) es un grupo guerrillero urbano de Medellín, al igual que el Comando Armado Popular (CAP) y el Frente Popular de Liberación (FPL), grupos que según las autoridades han sido "diezmados". También están las Fuerzas Armadas Revolucionarias Indígenas del Pacífico, y el Movimiento Jaime Bateman Cayón, las organizaciones indigenistas más grandes de Colombia.[21]

Pero más allá de estos grupos revolucionarios pequeños y dispersos que enrarecen el clima de las negociaciones, el ambiente en que se desenvuelven las FARC es mucho más complicado aún por la operación de los paramilitares, sus peores enemigos, que operan con la complicidad del ejército y otros segmentos del Estado colombiano, que también se financian con los beneficios del narcotráfico y que en el año 2000 asesinaron a 1560 civiles.[22] Reclutan jóvenes preguntándoles cuánto les pagan las FARC, y duplicando esa cifra a cambio de que denuncien colaboradores de las FARC y el ELN, o simpatizantes de los guerrilleros entre empresarios y comerciantes, desde industriales hasta zapateros.[23] En realidad, los paramilitares (que hoy movilizan unos 8000 combatientes[24]) fueron fundados como ejércitos privados de los grandes barones de la droga, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gache, siendo adiestrados por mercenarios israelíes.[25] Posteriormente fueron nutridos por el mismo ejército colombiano, no obstante lo cual fueron ilegalizados en 1994.

Pero cuando a fines del año 2000 unidades de las FARC intentaron atacar a Carlos Castaño (el dirigente de la organización paramilitar más importante, las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC), las fuerzas regulares del gobierno terminaron defendiendo a los paramilitares. Sin embargo, haciendo gala de una crónica ambigüedad, justo antes del comienzo de las conversaciones pactadas para febrero de 2001 con las FARC, el gobierno obligó a las fuerzas regulares a emprender un importante operativo contra las AUC en el norte de Colombia (la zona en que éstas son más fuertes), debido a que el gobierno estaba aún más interesado en reabrir las negociaciones con las FARC que los guerrilleros mismos.[26]

Las AUC no sólo operan en el norte. La búsqueda de ganancias procedentes de la droga las ha impulsado hacia la parte de la provincia de Putumayo no controlada por las FARC. En la localidad de Puerto Asís poseen unos cuarteles generales a apenas unos cinco minutos de distancia de la base del ejército regular, a pesar de la pretensión de las autoridades colombianas de no brindar apoyo a esta agrupación irregular. Allí poseen una lujosa mansión, en cuya piscina

se recrean en escenas reminiscentes de los días del cártel de Medellín. No es extraño, ya que Carlos Castaño heredó el cetro de su difunto hermano Fidel Castaño, quien fue parte del cártel.

Aunque los paramilitares niegan ser narcotraficantes, su involucramiento con la industria de la droga es mayor que el de las FARC. Pagan 2,4 millones de pesos colombianos (U$S 800) por un kilo de base de coca, contra apenas 1,8 que paga las FARC, y hay evidencia de muchos más laboratorios para la producción de cocaína bajo su dominio que de las FARC. En mayo de 1999 se descubrió uno de los más grandes conjuntos de laboratorios, en Magdalena Medio, que es uno de los epicentros del poder de las AUC. Capaz de producir ocho toneladas de cocaína por mes, el complejo cubría siete millas cuadradas con laboratorios de cuatro pisos que sobresalían claramente de la selva. Cada laboratorio estaba protegido por una torre de control. El sitio tenía instalaciones para que durmiesen 200 personas. Carlos Castaño reconoció que el 70% de los ingresos de las AUC provienen de esta industria, pero al igual que los guerrilleros no considera que su organización sea traficante, porque según dice no se encarga directamente de la venta al por menor del producto final.

Las AUC operan de manera simple y efectiva. Su arma secreta es la "masacre" y hay un promedio de una por día en Colombia. El terror es la mejor manera de erosionar el apoyo a la guerrilla. Los escuadrones de la muerte llegan a una localidad en que se supone hay simpatizantes de la guerrilla y previa tortura para obtener información, matan a todos los que figuran en su lista, independientemente de su edad o sexo. En los días posteriores a su llegada a Puerto Asís, donde tienen sus cuarteles generales de Putumayo, mataron un promedio de ocho personas por noche. Allí ya no quedan simpatizantes de las FARC.[27]

Según el general Fernando Tapias, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Colombianas, las AUC son el ejército ilegal de más rápido crecimiento en el país. No obstante, por ahora el grado de organización de las FARC supera ampliamente a sus contrincantes, y en el territorio que dominan son ampliamente superiores al gobierno: allí, las FARC son lo que más se aproxima a un Estado. Cuando el campesino Manuel Gómez quiere vender el producto de sus campos de coca, viaja hasta las selvas de Putumayo corriendo graves riesgo, porque es allí donde la guerrilla tiene su Bolsa de la Coca. Los precios que allí establecen las FARC a través de un mecanismo que se asemeja al del mercado abierto son mejores que los que Gómez puede obtener de los intermediarios, quienes por otra parte han sido prácticamente eliminados por las FARC. Los insurgentes controlan la mayor parte de Putumayo, que es el epicentro de la región coquera de Colombia. Y a través de las distintas etapas del negocio obtienen una ganancia estimada en 400 millones de dólares anuales. La organización cobra tributo a las cosechas, a la cocaína, a los aviones que entran y salen de sus territorios, a las pistas de aterrizaje, a la vez que constituyen un monopolio de la base de coca que se produce en Putumayo, alrededor de 300 toneladas anuales. Los campesinos venden la base de coca por menos de 600 dólares el kilo, mientras que en las calles de Miami la cocaína vale 60.000 dólares el kilo y en Londres, 70.000, una diferencia de más del 1000%.

Estas ganancias les dan un poder enorme. Como dice el periodista Jeremy McDermott: "Lejos están los días del Che Guevara y la Revolución Cubana, donde la gente se levantaba contra dictadores opresivos. Colombia es una democracia, y las guerrillas pueden comprar todo el fervor revolucionario que necesitan".[28]

Por cierto, como se documentó en un libro de uno de los actuales autores, (*Mercenarios del Fin del Milenio: Estados Unidos, Europa, y la Proliferación de Ejércitos Privados*)[29], así como los diamantes financian a los rebeldes de Angola y otros países africanos, en Colombia se financian con la droga y los secuestros. En las palabras de una alta fuente militar occidental, "hemos entrado en una fase nueva de la insurgencia, en la que ya no depende del fervor revolucionario sino de ingresos de tipo mafioso".[30]

En verdad, como veremos en el próximo acápite y también en el capítulo que sigue, no se trata sólo de un gerenciamiento financiero de estilo mafioso, sino también de alianzas con la mafia rusa y algunas otras organizaciones internacionales del crimen: la italiana, la israelí, la mexicana (especialmente la de Tijuana, cuya familia mafiosa Arellano-Félix compró droga a las FARC a través de Carlos Charry, un médico colombiano intermediario en el tráfico de drogas conocido como "el doctor", arrestado en diciembre de 2000).[31]

Pero el vínculo más valioso y prometedor es el ruso. Tanto las FARC como la mafia rusa tienen algo que la otra necesita. Los rusos quieren drogas, las guerrillas quieren armas. El apetito ruso por la cocaína, que introducen a Europa occidental, es insaciable. La demanda ha alentado a las FARC a expandir su actividad en el campo, y ya no se limitan, como hace algunos años, a comprar la base de coca y venderla a traficantes para que la refinen y exporten, sino que ya han establecido sofisticados laboratorios, algunos incluso en la zona desmilitarizada que les proveyó el gobierno de Pastrana, para refinarla y obtener cocaína pura. En julio de 2000, por ejemplo, la tercera brigada del ejército colombiano descubrió cuatro laboratorios de las FARC, capaces de producir tres toneladas de cocaína por mes. Este desarrollo fue facilitado también por la caída de los grandes cárteles de narcotraficantes, que ahora operan como una multitud de mini-cárteles con laboratorios familiares.

Lo que aún no ha ocurrido con las FARC, sin embargo, es que se conviertan ellas mismas en traficantes de la droga: no la exportan ellos mismos (la venden a quien la exporta), ni la distribuyen ellos mismos en las calles de las ciudades. Esta distinción les permite argüir, al igual que los paramilitares, que no son narcotraficantes, y que si existiera un programa adecuado para la sustitución (y no simple erradicación) de cosechas, ellos lo alentarían. Refuerza el argumento el hecho de que las FARC luchan desde 1964, mientras que el cultivo masivo de coca en Colombia no se remonta mucho antes de 1990. Su sinceridad es dudosa, sin embargo, porque con el fin de la Guerra Fría y del apoyo cubano o soviético que podían obtener para su lucha, la fuente de financiación provista por la cocaína sería difícilmente sustituible, y las armas modernas que les permiten continuar su lucha son muy caras.

Naturalmente que la única fuente de ingresos no proviene de los tributos de las diversas etapas de producción y venta de la droga, sino que la industria del secuestro es también un recurso de enorme importancia. La sofisticación tecnológica de los insurgentes es tan grande que en los puntos de inspección para el cruce al territorio que dominan, hay guerrilleros con computadoras *laptop* con conexión satelital, que les permiten acceder a los registros financieros de quienes intentan cruzar el límite. De tal manera, evalúan la conveniencia de secuestrarlos. El promedio de secuestros en Colombia es de ocho por día, la mayoría por la guerrilla.[32]

Los tentáculos se extienden: Fujimori suministró armas a las FARC

Como se dijo, las FARC poseen sólidas aspiraciones a la toma del poder, que han explicitado y se avalan en una actividad militar que se remonta a 1964. Si se ven acorraladas por la ofensiva del Plan Colombia, se derramarán hacia otros países de la región. Aún si eso no ocurre, sus necesidades de armas y otros recursos las transforman inevitablemente en un elemento de perturbación regional. Su dinero, que proviene del narcotráfico y los secuestros, es capaz de comprar voluntades en muchos países. Más aún, como dice Howard La Franchi, un tráfico de armas en la escala necesaria para mantener bien suministradas a las FARC *requiere* de una conexión oficial: sin corrupción de los gobiernos, las FARC no podrían sobrevivir.[33] El hecho de que sean más poderosas que nunca demuestra que esa corrupción está bien lubricada. El caso peruano es el hilo del ovillo que lo demuestra: como es de público conocimiento, la caída del presidente Alberto Fujimori y de su superasesor Vladimiro Montesinos en Perú se debió a que unos diez mil fusiles Kalshnikov (AK-47) comprados legalmente por Perú al gobierno de Jordania, fueron triangulados a las FARC.[34]

Esto fue revelado a fines del año 2000 por el mercader de armas Sarkis Soghanalian[35], un ciudadano libanés nacido en Turquía de origen armenio y frecuente colaborador de la CIA, quien afirmó que durante todo el proceso de negociación "me reuní y conversé con oficiales del ejército y la inteligencia del Perú, en Lima y en Amman". Según *La República*:

> "Durante el conflicto entre Irak e Irán, Soghanalian organizó una operación para vender helicópteros de fabricación norteamericana al régimen de Saddam Hussein, en pleno bloqueo decretado por Washington. La CIA facilitó el envío del armamento porque Irán en los años ochenta era el enemigo número uno de los intereses estadounidenses. La colaboración de la CIA con Saddam Hussein tenía como objetivo que el dictador iraquí derrumbara al gobierno revolucionario islámico del Ayatollah Jomeini, que mantenía como rehenes a decenas de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Después, Sarkis Soghanalian cooperaría con operaciones de la CIA en Centroamérica: surtió de equipos de combate a los 'contras' dirigidos por el comandante Edén Pastora, que pretendieron derrumbar al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que gobernaba en Nicaragua. Y cuando enfrentó un proceso judicial y fue condenado a cinco años y medio de prisión por haber seguido vendiendo armamento a Saddam Hussein, la CIA presionó para conseguir su libertad. El gobierno estadounidense aceptó que Soghanalian entregara información sobre una organización de árabes que inundaba el mundo con dólares falsificados casi a la perfección, a cambio de un beneficio penitenciario. La banda fue identificada y arrestada, y Sarkis Soghanalian consiguió abandonar la cárcel. Para Estados Unidos el libanés resultaba más útil libre que en prisión"." [36]

Soghanalian es una de las principales figuras de los últimos treinta años en el tráfico de armas mundial. Junto con Ernst Werner Glatt, fue el principal proveedor de armas en el escándalo de Irán-Contras (que fuera parcialmente financiado por su colega saudita Adnan Khashoggi). Cuando Estados Unidos comenzó a brindar apoyó extraoficial a Irak en su guerra contra Irán, Sarkis comenzó a vender abundantemente a Saddam Hussein, a cuyo país puede ingresar sin visa.

Anastasio Somoza también fue su cliente.[37] Y casi al pasar, le vendió mísiles Exocet a la Argentina durante la guerra de Malvinas.[38]

Aparentemente, fue en 1998, en París, que operadores peruanos se le acercaron por primera vez para negociar la compra de las armas que se triangularían a las FARC. El teniente (r) peruano José Luis Aybar Cancho, asesor de Vladimiro Montesinos, estaba interesado en comprar fusiles AK-47 para la "rama de inteligencia" del ejército peruano.[39] El militar retirado operaba junto con su hermano, Luis Frank Aybar Cancho, y entre ambos encabezaban lo que la revista *Expreso* de Lima llamó "la más grande mafia de traficantes de armas de Latinoamérica", bautizándola "organización internacional Aybar Cancho".[40]

Según el *Inter-Press Service*, la primera de todas las operaciones llevadas a cabo por esta banda se encubrió bajo la forma de un transporte aéreo para un circo ruso. Entre el cargamento destinado a ese servicio toneladas de cocaína salieron de Colombia, y eran pagadas a la guerrilla con rifles de asalto AK-47 y municiones de procedencia rusa.[41]

Conforme avanza la investigación, los vínculos entre los Aybar y Soghanalian van quedando al descubierto. Se sabe que éste fue quién hizo el contacto entre los militares jordanos y los peruanos. Por otra parte, Soghanalian es el principal abastecedor de armamento bélico para los ejércitos de Iraq y Jordania, y está vinculado a mafias de contrabandistas de Lituania, Ucrania y Rusia.[42]

Como las fuerzas armadas peruanas tienen muchos pertrechos soviéticos, legado del régimen populista de Velasco Alvarado en la década de 1970, la propuesta de los Aybar no era sorprendente. Pero el traficante negoció con los peruanos en Jordania porque allí tenía licencia para operar, y porque había sido invitado por las autoridades de Amman a intermediar en la venta de excedentes de fusiles AK-47 de la ex Alemania Oriental. Los peruanos deseaban comprar 50.000 fusiles a 95 dólares cada uno (para revenderlos a las FARC, según se supo después, a 600 dólares por unidad[43]). Proveyeron al traficante de cartas de crédito, certificados de destino que indicaban que el comprador era el gobierno, y documentos que los identificaban como representantes del ejército peruano. Soghanalian también adujo haber urgido a Amman hacer revisar el negocio por la embajada de los EE.UU., y el departamento de Estado confirmó que sus funcionarios fueron consultados por los de Jordania.[44]

Por su parte, el gobierno de Colombia declaró que este tipo de operación no era nueva y que ya había sido identificada por ellos. No obstante, el gobierno de Pastrana pidió explicaciones al de Fujimori cuando (después de producido el escándalo) el gobierno de Jordania dijo que se había tratado de una venta legal al Perú. Además, la embajada colombiana en Egipto informó a Pastrana que la venta incluso habría sido incluida en el presupuesto peruano. El gobierno jordano a su vez informó en la negociación participaron conjuntamente su jefe de las Fuerzas Armadas, Abdel Al Hafez, el general peruano Lucio Olivera y un representante del gobierno norteamericano.[45]

Entre el 12 y el 18 de enero de 1999 Soghanalian se reunió en Lima con el Alto Mando Militar y con miembros de la SIN (el Servicio de Inteligencia Nacional entonces dirigido por Montesinos). Con José Luis Aybar, que coordinaba el operativo, Soghanalian se reunió también en Amman. El mercader de armas tiene facturas para demostrar la legalidad de la operación.

Frente al alegato peruano de que los oficiales que participaron de la transacción se habían retirado del ejército mucho tiempo antes, el gobierno jordano confirmó que se comunicó con el de Perú para verificar la autoridad de los emisarios del país andino y la autenticidad de sus credenciales. Además, en Lima Aybar acompañó a Soghanalian a las bases militares más importantes. Finalmente, el gobierno de los Estados Unidos suele estar al tanto de las ventas de armas de Jordania, que es uno de sus principales aliados del Medio Oriente, y en el caso de esta operación (como se dijo) un funcionario norteamericano participó de la negociación misma.

Esta fuera de toda duda, pues, que la operación fue de gobierno a gobierno, y la responsabilidad de haberla convertido en una triangulación con las FARC es de Fujimori y su elenco.[46] Según declaración de Aybar, Montesinos le había hecho firmar un documento que dejaba constancia que éste recibiría un honorario de 50.000 dólares por un trabajo que sería "estrictamente secreto". En los hechos, José Luis Aybar fue quien coordinó la operación con las FARC, reuniéndose siete veces con enviados de la guerrilla en sus oficinas de Nippon Corporation. A su vez, Nippon era proveedora del ejército y había realizado contrataciones con diversas entidades del gobierno.

Otro personaje clave en la operación fue Charles Acelor, un prófugo francés nacionalizado estadounidense, quién junto al ruso Viatcheslav Raschivkine viajaba desde Miami a Ucrania, Rusia y Jordania para entrevistarse con los traficantes de armas. Por cierto, este episodio ayudó a develar la trama que une la mafia rusa con agentes corruptos en Jordania y el tráfico de armas a Colombia, una trama que fue presentada al público por un informe del sistema de noticias estadounidense MSNBC.[47]

El informe reconstruyó la ruta seguida en la primera fase del contrabando por aviones de carga que despegaban de los aeropuertos de Rusia y Ucrania y que invariablemente hacían una parada en Amman para abastecerse de combustible. Allí pasaban los controles de Aduana con la complicidad de diplomáticos extranjeros y funcionarios jordanos.[48] Un informe de MSNBC de abril de 2000 documenta la existencia de una banda de tráfico de armas y drogas entre Colombia y Rusia que incluye jefes de organizaciones criminales, diplomáticos e insurgentes. Se estima que mueven regularmente cargamentos superiores a los 40.000 kilos de cocaína a la ex URSS, a cambio de grandes cargamentos de armas.[49]

En oportunidad de la reunión de Lima, según Aybar y otros testigos, Soghanalian se reunió con Montesinos y altos mandos militares. Estos llevaron al mercader en un helicóptero militar hacia una región selvática en la que se le informó que las armas serían lanzadas en plataformas de madera con paracaídas (la llamada modalidad Drapla). Según los militares peruanos, esta era la única manera de hacer llegar las armas a tropas estacionadas en una región tan remota.

No obstante, lo que más perturbó a Soghanalian fue que los peruanos súbitamente exigieron hacer sus pagos en efectivo. El mercader temía que esto alarmara a las autoridades norteamericanas, porque los grandes pagos en efectivo forman parte de las prácticas de los narcotraficantes, y por ello insistió en transferencias bancarias. Pero los militares insistieron en que recogiera los pagos en efectivo en la embajada peruana de España.

Por lo menos cuatro cargamentos fueron lanzados sobre la selva en marzo, junio, julio y agosto de 2000, entregándose unos 10.000 fusiles. Debido a la escasa autonomía de vuelo del avión ruso utilizado para la tarea, la ruta tenía varias escalas: Amman, islas Canarias, Mauritania, Granada. Después del lanzamiento sobre la selva, el destino final era Iquitos. Pero los lanzamientos se hicieron sobre la selva colombiana.

Según Soghanalian, sus sospechas sobre la operación crecieron hasta que hacia julio o agosto de 1999 se retiró del negocio, habiendo recibido pagos por la mitad de los fusiles entregados. Según el departamento de Estado norteamericano, a su vez, el gobierno jordano rescindió el contrato cuando recibió información de que las armas no estaban llegando a Perú. Por su parte, Soghanalian informó de sus sospechas a la unidad de contra-terrorismo del FBI en Miami. En realidad, hacia julio de 1999 la misma CIA había informado a la inteligencia militar de Jordania que las armas no habían sido desembarcadas en el aeropuerto de Iquitos, como estipulaba el contrato firmado entre el gobierno de Perú y las autoridades jordanas, y que los fusiles estaban en manos de las FARC[50].

Lo que ocurrió durante el año siguiente no está del todo claro. Las autoridades colombianas dicen que capturaron fusiles AK-47 de las FARC y los rastrearon a la transacción jordana-peruana[51]. El capítulo central de la versión colombiana se remonta a marzo de 1999 cuando un guerrillero desertó y reveló a la inteligencia militar que las armas se entregaban desde el aire y que el "Negro" Acacio, jefe del Frente 16 de las FARC, y José Eliseo Prieto (Esteban González), se encargaban de encaletarlas o distribuirlas entre los insurgentes. En base a esa información, cuando las FARC lanzaron una ofensiva en pueblos cercanos a la zona de despeje, las tropas regulares abatieron a González e incautaron más de cien fusiles. Las autoridades entonces apelaron a la ayuda de la CIA.

El primer informe enviado desde Washington indicaba que los números de serie de dieciséis de los fusiles concordaba con las de rifles de asalto fabricados por la ex Alemania Oriental, y que a principios del '98 habían pasado a ser parte de un excedente del arsenal oficial de Jordania. A comienzos de 1999 uno de los intermediarios en la operación peruana había sido arrestado en los Estados Unidos, pero Jordania mostró a los investigadores de la CIA documentos oficiales que amparaban la operación con Perú. No obstante, los servicios de inteligencia norteamericanos mantuvieron el monitoreo de las rutas probables del ingreso clandestino de armas.

También se informó que en junio el ejército colombiano alertó a la fuerza aérea peruana sobre la llegada de un avión ruso que había partido de Jordania y que haría escalas en Azores, Surinam y Granada. A pesar de todo, las autoridades peruanas informaron que la nave llevaba una carga legal de granadas para aviones de combate y elementos para dotación de hospitales. Oficiales colombianos confirmaron que el punto de embarque había sido Amman.[52]

El escándalo irrumpió cuando *se hizo público* que los números de serie de algunas armas capturadas a las FARC indicaban que pertenecían al gobierno peruano. En una conferencia de prensa del 21 de agosto de 2000, que no fue más que un montaje publicitario para descargar culpas (más de un año después que la CIA informara a Jordania que las armas estaban en manos de las FARC), Fujimori y Montesinos afirmaron haber descubierto una banda de oficiales peruanos que suministraron armas a los guerrilleros colombianos. Presentaron un complejo

diagrama de la operación, a la que denominaron “Plan Siberia”, la supuesta contramedida de las FARC para el Plan Colombia. Entre los nombrados en el diagrama—y por ende inculpados por el dúo Montesinos-Fujimori—estaba Soghanalian[53]. A su vez, los norteamericanos dicen haber dado información a la cúpula peruana sobre las revelaciones que estaban por producirse, desencadenando la inefectiva pantomima de Montesinos y Fujimori[54] Los once miembros de la banda de traficantes que estaban en Perú fueron arrestados en agosto de 2000, mientras el resto es buscado por Interpol.[55]

La diferencia entre los 95 dólares que pagaron los peruanos por cada rifle de asalto AKM, y los 600 dólares que recibieron por cada uno vendido a los rebeldes colombianos, pone de manifiesto el poder de compra (y la presencia) de las FARC más allá de las fronteras de Colombia. Pero subsiste la pregunta: ¿porqué no fue la operación desenmascarada por la CIA antes de que la captura de los fusiles revelara que eran legalmente propiedad del ejército peruano? Téngase en cuenta que, según el jefe de Operaciones del Comando Sur de los Estados Unidos**,** mayor general del Ejército Soligan:

> "En mayo de 1999, nuestro satélite detectó que aviones arrojaban bultos con paracaídas en Colombia, cerca de la frontera con Perú".

Y según *La República* ,

> “Se trataba sin duda alguna de los aviones de carga ucranianos Ilyushin-76 contratados por los traficantes de armas para lanzar en paracaídas los 10 mil fusiles AK-47, comprados por el gobierno de Perú al reino de Jordania.”

¿Porqué entonces no se interceptó antes la operación? Según la hipótesis de *La República* de Lima, y del mismo Soghanalian, porque el Congreso norteamericano tenía dudas y objeciones al Plan Colombia propuesto por el presidente Clinton:

> “Con los 10 mil fusiles comprados a los contrabandistas dirigidos por Montesinos, las FARC aumentaron su capacidad de fuego y sus acciones le permitieron ampliar las áreas de territorio bajo su control. Sólo así los congresistas estadounidenses, espantados por la duplicación de la violencia armada en Colombia, aprobaron el financiamiento, con lo que la CIA se aseguró una participación importante. Montesinos, vinculado estrechamente a la CIA, no podía ser ajeno a la estrategia de la central de inteligencia.”[56]

No obstante, y como se sabe, Montesinos terminó exilado en Panamá y Fujimori en Japón; sus futuros son inciertos.

La campaña diplomática de las FARC

Como ya se documentó a través de las declaraciones de Javier Calderón y Oliverio Medina, el objetivo diplomático de las FARC es ser reconocidas legalmente como parte beligerante en una guerra civil colombiana, y por lo tanto poseer el status y derechos que corresponden a tales actores. Para ello, desde principios de la década del ’90 vienen realizando una intensa campaña diplomática encabezada por Edgardo Devia Silva, mejor conocido por su nombre de guerra, Raúl Reyes, el “canciller” de las FARC.

A principios de la década del ’90 se creó el “frente internacional”, con delegados en los principales países de América y Europa. Instalaron oficinas en Buenos Aires, México, Caracas, Brasilia, Estocolmo, y también en varios países de la ex Unión Soviética. Su página web[57] tiene versiones en castellano, inglés, portugués, italiano, francés, alemán y ruso. Reclutaron guerrilleros de varios países de América latina (lo que no resulta difícil, ya que un guerrillero tiene un sueldo tres veces mayor que un soldado de un ejército regular de la región), a la vez que establecieron contactos con las principales ONG del mundo dedicadas a la defensa de los derechos humanos, para denunciar las violaciones perpetradas contra ellos por el gobierno colombiano[58].

La táctica del presidente Andrés Pastrana de negociar la paz con las FARC fue en extremo funcional para los objetivos diplomáticos de la guerrilla. El mero hecho de concederles una zona desmilitarizada del tamaño de Suiza en pleno territorio colombiano, donde las FARC no pueden ser perseguidas legalmente[59], proporciona a la guerrilla un argumento de corte jurídico para su pretensión de ser reconocida legalmente como parte beligerante en una guerra civil, y no como simples delincuentes insurgentes.

El primer gran éxito diplomático de la guerrilla fue quizás el más inesperado de todos, y constituyó un verdadero “golpe” publicitario. En junio de 1999, el presidente y vice-presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), Richard Grasso e Yves Morvan, penetraron en las profundidades de la selva colombiana para entrevistarse con el “canciller”, comandante Raúl Reyes. En su aventura en helicóptero fueron acompañados por el ministro de Finanzas Juan Camilo Restrepo y el Alto Comisionado para la Paz del gobierno colombiano, Víctor G. Ricardo (ex embajador en la Argentina). Según Grasso, el objetivo era hacerle comprender a la dirigencia guerrillera las oportunidades que habría para Colombia en el mercado de capitales cuando se alcance la paz. Aclaró que el gobierno de los EE.UU. no había tenido ninguna participación en la iniciativa, que era del sector privado.[60]

En realidad, el gobierno de los EE.UU. había tenido contactos anteriores con las FARC, entre ellos uno muy comentado en San José de Costa Rica en diciembre de 1998. Funcionarios de nivel medio del departamento de Estado (dirigidos por Phil Chicola, de la Oficina para Asuntos Andinos) y altos dirigentes de las FARC se reunieron durante dos días. El objetivo fue conversar sobre posibles rehenes norteamericanos, y recalcar a los guerrilleros que su apoyo a la producción y el tráfico de drogas era “no negociable” de parte de los EE.UU. Esto seguramente significaba que otros temas (como el dominio que ejercen las FARC en un enorme territorio colombiano, o su eventual participación en el gobierno de ese país) sí podrían negociarse eventualmente[61].

Las FARC figuran en la lista de grupos terroristas internacionales del departamento de Estado, y esta fue su clasificación tanto antes como después de la reunión de fines de 1998. Los norteamericanos habían declarado solemnemente que no tendrían tratos con las FARC hasta que se liberaran tres misioneros norteamericanos que se sospechaba en manos de los guerrilleros. Esta promesa fue violada flagrantemente con el encuentro de San José. Pero EE.UU. rompió toda relación con las FARC después de conocerse el asesinato de los tres norteamericanos, que acompañaban a un grupo indígena colombiano.

La iniciativa de acercar a las partes fue entonces retomada por el sector privado. Según Michael Shifter, un analista del Diálogo Inter-Americano, "es posible que ahora Wall Street entienda que es mejor estar involucrada en el diálogo que enajenada"[62]. Las fotos con el fraternal abrazo entre Grasso y Reyes causaron aún más sensación en la prensa norteamericana que la noticia, medio año antes, de que había habido reuniones entre las FARC y el departamento de Estado[63]. Grasso caracterizó a las FARC como una "organización no gubernamental terrorista", que realizaba un intercambio de opiniones con el presidente de otra organización del sector privado, la Bolsa de Valores de Nueva York. Se trataba pues de un diálogo entre organizaciones del sector privado de ambos países.

Dado este éxito inesperado, no extraña que a principios del año 2000 seis representantes de las FARC hayan emprendido, *conjuntamente con dos funcionarios del gobierno y ocho representantes del Congreso y de la industria colombianas*, una gira europea. Dieciséis voceros de ambas partes viajaron con el presunto objetivo de conocer las estructuras productivas de varios países y usarlas como referencias en la negociación de un nuevo modelo económico y social para Colombia.[64]

Es difícil saber si esta no es, más que un medio para "educar" a la FARC (cuyas propuestas castristas corren a contramano de la historia), una estratagema de Pastrana para renegociar su propio modelo de desarrollo con los norteamericanos y las instituciones crediticias multilaterales. De cualquier modo, el hecho es que al realizar este tipo de maniobra, Pastrana les ha dado a las FARC una legitimidad sin precedentes que probablemente no tenga consecuencias positivas sobre la situación colombiana y sudamericana.

Entre los voceros de las FARC viajaban, además del "canciller" Raúl Reyes (quien presidió la delegación rebelde), los jefes guerrilleros Joaquín Gómez, Fabián Ramírez, Iván Ríos, Felipe Rincón y Simón Trinidad. El jefe de los representantes del gobierno fue Víctor Ricardo, el Alto Comisionado para la Paz de su país. Para hacer posible el viaje, el gobierno colombiano suspendió las órdenes de captura internacional que pesan sobre varios de éstos, y se aseguró que en Europa no hubiera pedidos de captura de parte de países como España e Italia, algunos de cuyos ciudadanos fueron secuestrados por las FARC.[65]

Los guerrilleros estaban particularmente interesados en estudiar los modelos de desarrollo económico y social de Suecia y Noruega (como si Colombia, con su población mucho mayor y su riqueza incomparablemente menor, pudiera imitarlos). Además, visitaron España, Francia, Suiza e Italia. La gira culminó con una visita al Vaticano. La comisión mixta ingresó a la Santa Sede por la puerta del Santo Oficio y llegó al pensionado de Santa Marta, donde los esperaba monseñor Giorgio Lingua, el diplomático especializado en Colombia de la Secretaría de Estado del Vaticano.

Monseñor Lingua declaró que había tomado nota de los planteamientos de los guerrilleros y el gobierno, y que presentaría un informe al cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado del Vaticano. A su vez, el cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos, que fue presidente de la Comisión Episcopal para América Latina (CELAM), dijo que "sean o no pecadores, el Papa recibe a todos sus hijos"[66]. Evidentemente, esta gruesa inexactitud se aproxima más a la verdad cuanto más exitosa es la violencia de un "hijo". Por otra parte, la apertura de las puertas del

Vaticano sentó el precedente más fuerte (y también riesgoso) para que la organización guerrillera pueda estar representada oficialmente en países como la Argentina, Chile, México y el Brasil.

Naturalmente que la complicación radica en que, mientras en Europa los guerrilleros intentan legitimar su lucha frente a la comunidad internacional, en los países de América latina su accionar no se limita a esto, sino que también tejen alianzas con sectores marginados del poder que pueden ser potenciales focos de insurrección e insurgencia: lo que no es desestabilizador en Europa, puede muy bien serlo en América latina. El ya mencionado Cadenas Collazo (alias Padre Oliverio Medina), Rafael Fontes (alias Comandante Franco) y Carlos Bernárdes son algunos de los "diplomáticos" de las FARC que no sólo se encuentran con representantes de los gobiernos de los países que visitan, sino que también firman acuerdos con partidos políticos y establecen contactos con organizaciones de izquierda.[67] Por cierto, a través de la red de instituciones "bolivarianas", las FARC han tejido alianzas tácticas con agrupaciones vinculadas a Hugo Chávez en Venezuela, los Sin Tierra brasileños, alcaldes ecuatorianos, indigenistas bolivianos, zapatistas mexicanos, sindicalistas y carapintadas argentinos, abarcando un amplio abanico que comparte enemigos más que premisas ideológicas. Los enemigos comunes a todos estos conjurados son el neoliberalismo y los EE.UU.

El "Estado dentro del Estado"

La pretensión de las FARC de obtener reconocimiento diplomático internacional como parte beligerante que posee por lo menos algunos de los atributos de un Estado, además de dominar una parte importante del territorio colombiano, viene acompañada de un esfuerzo de organización que incluye la promulgación de para-leyes, un sistema judicial, y un partido político clandestino.

Hasta el momento, las FARC han promulgado tres "leyes" conocidas. La Ley 001, anunciada a principios de mayo de 2000, está basada en la proclama de fundación del grupo rebelde del 20 de julio de 1964, y en resoluciones del octavo plenario realizado en 1993. La "ley" se titula "Primera Ley de la Política Agraria Revolucionaria" y contiene ocho puntos: 1. Tierra gratuita (que el gobierno de las FARC entregaría a campesinos); 2. Confiscación de tierras de latifundios (que serían distribuidas equitativamente); 3. Creación de unidades económicas del campo (según la fertilidad del suelo, y de un mínimo de 20 hectáreas); 4. Anulación de deudas de campesinos; 5. Crédito y facilidades de pago para semillas y herramientas de trabajo de campesinos; 6. Precios básicos para los productos de la canasta familiar (para mantener una economía de bolsillo estable); 7. Respeto por las tierras de los indígenas; y 8. Confiscación de terrenos ocupados por extranjeros.[68]

La "Ley 002, sobre la tributación", fue anunciada una semana antes que la 001, y ordena a los efectivos de las FARC a cobrar un "impuesto para la Paz" del 10% a todas las personas y empresas con patrimonios superiores al millón de dólares. El comunicado fue leído por el "canciller" Reyes, desde el "campamento de paz" Villa Nueva Colombia, en el centro de la zona desmilitarizada. La ley tiene tres artículos. El primero establece lo dicho arriba. El segundo dictamina que a partir de la fecha de su promulgación, todos los afectados deben acudir a cumplir con la ley, porque en un segundo llamado se aumentará el monto. Finalmente, el tercero advierte que quienes no cumplan podrán ser "retenidos" y que su liberación dependerá "del pago que se determine".[69]

La Ley 002, vilipendiada por el presidente Pastrana como violatoria del Derecho Internacional Humanitario, fue defendida por voceros de las FARC con el argumento de que a pesar de las negociaciones de paz, el gobierno de Bogotá se prepara para librar la guerra, aludiendo a los 1300 millones de dólares bianuales aportados por EE.UU. al Plan Colombia. Por otra parte, arguyen que el impuesto guerrillero es la contrapartida de los "bonos de guerra" cobrados a los ricos por el gobierno colombiano desde 1992, y que ya desde esa fecha las FARC han exigido un tributo a los ricos del 10% de su patrimonio.[70] La "promulgación" de esta "ley" provocó la renuncia de Víctor Ricardo como Alto Comisionado para la Paz. Pastrana nombró en su lugar a un asesor suyo, Camilo Gómez.[71]

Finalmente, a fines de mayo de 2000 las FARC promulgaron su "Ley 003", que manda sancionar y castigar a políticos y funcionarios corruptos. Iván Márquez, uno de los voceros políticos de la organización guerrillera, anunció que: "Vamos a meter mano a uno de los problemas de fondo nacionales ya que la Justicia no está cumpliendo sus funciones y nosotros como gobierno sí lo podemos hacer para poner orden en este país".

Como penas a la corrupción, la Ley 003 establece la "detención indefinida" y el cumplimiento de trabajos forzados en las zonas más pobres del país. La ley se propone obligar la devolución del dinero mal habido y la indemnización de los damnificados por la corrupción.[72]

Como las FARC dicen dominar (incluso políticamente) casi 200 de los 1090 municipios del país (además de grandes espacios rurales), pueden tener cierto poder para hacer cumplir sus leyes en forma regular fuera de las grandes ciudades (que no controlan). Esta presencia, que no es sólo militar, les permita avanzar en la organización de un sistema judicial, según anunció Tirofijo. En una entrevista concedida al *Corriere de la Sera,* Tirofijo anunció la formación de tribunales de justicia propios para el juzgamiento de civiles en zonas rurales, y precisó que además de la tributación del 10% del patrimonio a quienes tuvieran más de un millón de dólares, quienes tuvieran un patrimonio menor serían obligados a negociar el impuesto correspondiente. Agregó que "no se impondrán tasas a quien no tiene nada, pero es evidente que los narcotraficantes, los cocaleros y los grandes propietarios serán tratados según nuestro sistema fiscal".[73]

Como se dijo, la presencia política de las FARC se ha visto potenciada por la concesión, de parte del gobierno, de la zona desmilitarizada, donde los guerrilleros no son perseguidos. En esta zona del tamaño de Suiza, las campañas políticas para la elección de candidatos de las FARC a cargos municipales se hacen a cara descubierta[74]. Estos candidatos pertenecen al partido de las FARC, que más allá de la zona desmilitarizada opera en forma clandestina.

El partido fue lanzado oficialmente en la plaza central del municipio de San Vicente del Caguán, la capital de la zona desmilitarizada, en abril de 2000. Al acto, que formalmente instituyó al "Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia", asistieron al menos 5000 guerrilleros uniformados, con fusiles Gali y AK-47, flamantes sombreros de camuflaje y un brazalete con los colores de la bandera colombiana. La situación ilustra la asimetría generada por la controvertida medida del gobierno de crear una zona desmilitarizada: las fuerzas armadas regulares tienen prohibido su ingreso a la zona, pero los guerrilleros la tienen por casa propia.

El acto fue encabezado por el propio Tirofijo, quien fue secundado por el comandante Alfonso Cano, el principal ideólogo del movimiento (un intelectual y ex profesor universitario). Durante el transcurso del mismo, se anunció oficialmente que el partido sería clandestino hasta que exista un acuerdo de paz firme con el gobierno, debido al temor a la ultraderecha paramilitar y a la por demás obvia ilegalidad de las FARC en el resto del territorio colombiano. Por otra parte, subsiste la memoria histórica de la Unión Patriótica, un partido vinculado a las FARC cuyos 3000 dirigentes fueron sistemáticamente exterminados en la década del '80, destruyendo las negociaciones entre la organización guerrillera y el entonces presidente Belisario Betancur.[75] Además, algunos analistas especulan con que la formación de un partido político de las FARC obedece a la necesidad de ampliar su base de apoyo social, que es muy débil: las encuestas muestran que un 90% de los colombianos desaprueban de la organización insurgente.

El eje Chávez-FARC y la "internacional bolivariana"

Pero el mismo nombre del partido político de las FARC es una llave que abre un laberinto de vínculos y tramas internacionales que han venido tejiéndose desde hace muchos años: a nadie escapa el hecho de que "bolivarismo" es el mote con que el actual presidente de Venezuela, coronel Hugo Chávez, llama a su movimiento. Los vínculos entre las guerrillas colombianas y Chávez son múltiples y añejos. Para ilustrar esto con un ejemplo relevante: funcionarios del departamento de Estado de los EE.UU. reconocen en forma pública o semi-pública que las guerrillas de las FARC tienen santuario en territorio venezolano, y que las mismas autoridades fronterizas de ese país autorizan su paso siempre que dejen sus armas en la frontera y las recojan a su regreso, después de su merecido descanso. Dichos funcionarios dicen que (en el contexto de conversaciones oficiales con EE.UU.), Chávez no niega esta situación pero echa la culpa a los gobernadores de provincia[76].

El recurso al vocablo "bolivariano" de parte de las FARC es, pues, más que una maniobra oportunista, y la historia de Hugo Chávez y su travesía política e ideológica así lo demuestran.[77] Los vínculos del actual mandatario venezolano con la guerrilla de Colombia se remontan a casi dos décadas. Como se sabe, el coronel Chávez fue fundador en Venezuela del Movimiento Revolucionario Bolivariano 200 (MRB-200). Según Gustavo Pietro, el actual representante a la Cámara por la ex-guerrilla colombiana M-19, Chávez le contó que el movimiento (que él fundó en secreto junto con otros dos oficiales) se inspiró en el acto fundacional del M-19, que consistió en robar en 1974 la espada de Simón Bolívar. Hacia 1983 el plan de Chávez consistía en tomar unos helicópteros militares, aterrizar en una casa-museo y robar una espada de héroes venezolanos o algún objeto de Simón Rodríguez. Luego iban a internarse en el monte junto con ex guerrilleros como Douglas Bravo o Alí Rodríguez, para comenzar la insurrección armada. Posteriormente el plan fue desechado y Chávez ingresó a la Escuela Bolivariana, el centro de formación de la oficialidad venezolana.[78]

Pero en 1992 las huestes de Chávez perpetraron dos cruentos intentos golpistas contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en que murieron por lo menos 500 personas según cifras oficiales[79]. Entonces, los militares venezolanos involucrados recibieron ayuda de miembros "reinsertados a la sociedad" del entonces recién desmovilizado grupo guerrillero colombiano M-19, quienes posibilitaron el traslado clandestino de los insurrectos al Ecuador y Perú, donde recibieron asilo. Chávez fue capturado y encarcelado.[80]

En su paso por Colombia los insurrectos de Chávez consolidaron vasos comunicantes no sólo con el desmovilizado M-19 sino también con el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN), el ya mencionado segundo grupo guerrillero de Colombia. Estos contactos resultaron útiles cuando en 1994 Chávez y otros jefes fueron amnistiados por el nuevo presidente Rafael Caldera, a cambio de retirarse del servicio militar activo. Fue entonces que Pietro Cueva, "reinsertado" del M-19, asesor político de Cuesta y director de la Fundación Cultural Simón Rodríguez, invitó a Chávez a Colombia. Éste aceptó por afinidades ideológicas y porque quería conocer los pormenores de la asamblea constituyente colombiana. Allí se vinculó con militantes de izquierda y con militares colombianos agrupados en lo que entonces se denominaba Movimiento Bolivariano 2000.

Fue así como comenzó a gestarse la idea de un II Congreso Anfictiónico. En octubre de 1994 hubo un encuentro en una remota región fronteriza entre José Cuesta, un militar colombiano retirado, y capitanes del MRB-200, para organizar una reunión preparatoria del proyectado Congreso. La llamada Primera Reunión Preparatoria tuvo lugar en diciembre de 1994, en Santa Marta. Allí asistieron 26 delegados venezolanos encabezados por Chávez, siete colombianos, tres panameños torrijistas[81] y dos invitados especiales: el sociólogo argentino Norberto Ceresole y el delegado del Partido Comunista Cubano y encargado de la Oficina de Asuntos para América Latina del gobierno de la isla, José Luis Joa.[82]

Mientras tanto, en Venezuela Chávez estaba sindicado como golpista y sospechoso de cómplice de la guerrilla colombiana. Cuando en 1995 el ELN llevó a cabo incursiones a través de la frontera, penetrando en territorio venezolano y amenazando con destruir instalaciones petroleras en el estado de Tachira si las empresas no pagaban protección, el coronel quedó en la mira de los servicios de inteligencia y de seguridad de su país. Es así como en marzo de 1995, acusaciones de complicidad con el ELN justificaron una redada de una treintena de miembros del MRB-200 de Chávez, junto con otros 120 presuntos terroristas (dando lugar también a fuertes reclamos de violación de derechos humanos). Chávez declaró que sobre él pesaba una sentencia de muerte.[83]

En esas circunstancias, Chávez designó como su representante y defensor en Colombia al abogado Ernesto Amézquita. Este letrado, que ya había defendido a golpistas venezolanos, se convirtió también en defensor de ciudadanos de ese país detenidos y acusados de ser guerrilleros de las FARC, en el departamento de Vichada. Coherentemente con esta escalada de sospechas, cuando entre el 22 y el 25 de ese año se realizó en Caracas la Segunda Reunión Preparatoria del II Congreso Anfictiónico, los delegados colombianos no obtuvieron visa para ingresar a territorio venezolano en razón de su presunta pertenencia a una "Internacional Bolivariana".

Cuando Chávez finalmente llegó a la presidencia de Venezuela, en febrero de 2000, se reunieron cerca de Caracas representantes de por lo menos 14 organizaciones internacionales interesadas en participar en el Congreso Anfictiónico (actualmente en la agenda para diciembre de 2001). Entre los presentes estaba Andrés París, uno de los voceros internacionales de las FARC, quien durante mucho tiempo las representó en Caracas. Según analistas colombianos, esta ocasión marcó un punto de encuentro entre el bolivarismo de Chávez y el de las FARC. Para José Cuesta, es "el resultado de la caída del muro de Berlín, que deja un vacío llenado por lo bolivariano". Aunque desde algunos segmentos se acusa a las FARC de oportunismo, no se puede negar que Hugo Chávez estuvo cerca de agrupaciones guerrilleras colombianas desde la

década de los ’80, y que la aparente proximidad ideológica actual de las FARC con Chávez, desde lo “bolivariano”, es en gran medida el resultado de esa historia, que incluye una retórica compartida.

Por otra parte, si puede haber una cuota de oportunismo de las FARC en su uso político de Hugo Chávez, también lo hay de éste con respecto a las FARC. A principios del año 2001 el bolivarianismo de Chávez se administra por dos vías paralelas, una más informal, en que las FARC están presentes, y otra más protocolar, con presencia oficial de embajadores, donde se las puede dejar de lado porque, al fin y al cabo, Venezuela no quiere ni puede darse el lujo de presentarse, sin motivo alguno, como enemiga declarada del vecino gobierno de Colombia. A las FARC se las excluyó, por ejemplo, en el Congreso de Países Bolivarianos y Americanos para la Paz, llevado a cabo en diciembre de 2000. Pero claro, ese congreso se realizó en Bogotá, lo que permite a Chávez lavarse las manos respecto de la presencia o ausencia de una delegación guerrillera.

A su vez, reuniones como la de Bogotá ayudan a limar otras asperezas dentro de la “internacional bolivariana”. Por ejemplo, intentar convencer (transitoriamente) a los ecuatorianos de que Chávez es un actor necesario y tolerable de esa parte del mundo, a pesar de que golpistas ecuatorianos como el coronel Lucio Gutiérrez están invitados al Congreso Anfictiónico.[84] Y de realizarse, finalmente, este muy anunciado evento, es casi seguro que las FARC no estarán ausentes. Después de todo, ya entraron al Vaticano por la puerta del Santo Oficio. Han sabido tejer bien la maraña diplomática que las hace aceptables en todas partes, aún en países (como la Argentina) donde por otras vías se alían con contestatarios cuyo objetivo estratégico es la desestabilización política.

Mientras tanto, en diciembre de 2000 Colombia protestó oficialmente y con gran enojo por el apoyo que el gobierno de Chávez presuntamente presta, a nivel político, a las FARC y el ELN. No es extraño, si se considera que el 23 de noviembre, Olga Marín, importante funcionaria de las FARC, había sido invitada a pronunciar un discurso en un simposio de parlamentarios latinoamericanos que tuvo lugar en el mismísimo Congreso venezolano, controlado por Chávez. Colombia convocó a su embajador ante Caracas “para consultas”, lo que ocasionó idéntica medida de parte de Venezuela. Desde Colombia, las acusaciones de apoyo en dinero y armas de Chávez a las FARC y el ELN son constantes, y siempre negadas desde Venezuela. Pero en una punzante alusión a la incapacidad colombiana de gobernar su propio territorio, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, afirmó que su gobierno tendría razón en negociar con los rebeldes, “porque hay que conversar con quien realmente gobierna”. Según parece, es de práctica que militares venezolanos crucen la frontera para negociar con la guerrilla la libertad de algún secuestrado[85]

También los gobiernos de Bolivia y Ecuador se quejaron privadamente ante Chávez por su apoyo a movimientos violentos en sus países. El presidente boliviano, Hugo Banzer, se quejó del apoyo prestado a Felipe Quispe, el dirigente de un movimiento de cocaleros bolivianos que estuvo al frente de una cruenta huelga nacional algunos meses antes. En agosto de 2000, en el curso de una visita de tres días, Chávez se habría encontrado con Quispe, antes de la irrupción de la violencia que dejó un saldo de once muertos y 120 heridos. Posteriormente, las huestes de Quispe publicaron panfletos alegando el apoyo de Chávez.

El ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Javier Murillo de la Rocha, también se quejó a Chávez. Pero el gobierno boliviano mantiene la queja a nivel privado, no diplomático, porque Venezuela es uno de los pocos países que apoya a Bolivia frente a Chile respecto de la quimera de recuperar un litoral marítimo.

A su vez, en el Ecuador hay informes sobre la presunta ayuda material de Chávez al golpista coronel Lucio Gutiérrez, que provocó la caída del presidente Jamil Mahuad el 21 de enero de 2000. Gutiérrez (cuyo levantamiento tuvo el apoyo de movimientos indigenistas insurreccionales, agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE[86]) se ha declarado un "admirador del presidente Chávez", y la donación de medio millón de dólares se habría producido después del golpe.

Gutiérrez estuvo preso durante algunos meses, después de la caída de la Junta que encabezó por menos de un día[87], y ya habiendo asumido la presidencia Gustavo Noboa (el vice-presidente del depuesto Mahuad). Mientras estaba preso, Gutiérrez habría sido visitado por un diplomático venezolano. Más aún, el ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Heinz Moeller, declaró que existía información de que después de su liberación, Gutiérrez y algunos de sus coroneles habían viajado a Venezuela para obtener ayuda. Por cierto, la fuente del financiamiento de las campañas de Gutiérrez y sus partidarios es un misterio.

Por su parte, Peter Romero, entonces el más alto funcionario del departamento de Estado de los EE.UU. en materia de asuntos latinoamericanos, dos veces confirmó que "hay indicaciones de que el gobierno de Chávez apoya movimientos indígenas violentos en Bolivia", y que "en el caso del Ecuador incluyó apoyo a oficiales rebeldes del ejército".[88] El canciller venezolano retrucó diciendo que la nariz de Romero es como la de Pinocho y seguirá creciendo.[89] A su vez, en una conferencia de prensa de cuatro horas, Chávez expresó su ira diciendo que Peter Romero es "un agitador internacional", y lamentó que el gobierno norteamericano tuviera semejantes funcionarios.[90]

El coronel Chávez y su "Rasputín argentino"

Donde hay piqueteros, donde hay una huelga, donde hay un potencial para la insurrección y la violencia, es casi seguro encontrar "bolivarianos". Los representantes para-diplomáticos de las FARC en otros países operan en varios frentes al mismo tiempo: el oficialismo, la oposición, los grupos proclives a la rebelión armada, etcétera. Y el chavismo es una bolsa de gatos donde casi todo lo que se encuentra huele a desestabilizador.

En el "respetable" Congreso de Países Bolivarianos y Americanos para la Paz, por ejemplo, donde se excluyó a las FARC, uno de los representantes de Chávez fue su asesor en temas políticos, el filósofo alemán Heinz Dieterich. ¿Y quien es Heinz Dieterich? Aparte de autor del reciente libro *Hugo Chávez: Con Bolívar y el Pueblo, Nace un Proyecto Latinoamericano*, Dieterich[91] es un amigo de los zapatistas mexicanos. En marzo de 1996 participó del foro contra el neoliberalismo organizado por las huestes del subcomandante Marcos en plena selva de Chiapas, y regresó profiriendo todo tipo de elogios a las "semillas" ideológicas plantadas por los insurrectos mayas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Se congratulaba de que las "simpatías" obtenidas por el grupo armado en el mundo entero alentaran a todos los sectores opuestos al neoliberalismo.[92]

Que un filósofo alemán se entretenga frívolamente con los proyectos zapatistas es un dato irrelevante (después de cierta edad, la vida académica puede ser bastante aburrida), pero el hecho de que todo lo que rodea a Chávez tenga características similares es de gran relevancia. No olvidemos la importante alianza táctica desarrollada por Chávez con Saddam Hussein en el año 2000. Chávez viajó a Bagdad, convirtiéndose en el primer jefe de Estado en honrar así al dictador iraquí después de la guerra del Golfo.[93] Chávez y Saddam tienen en común una fuerte inclinación contestataria frente a la estructura del mundo actual... y comparten también importantes intereses petroleros. La combinación es dinamita, especialmente cuando además se incluye a Moammar Kadafi, a quien Chávez también visitó e invitó a Venezuela.[94] Y tampoco olvidemos la oferta que hizo a Cuba de ayuda económica mientras jugaba al *baseball* con Fidel Castro. Petróleo subsidiado ya fluye de Venezuela a Cuba, lo que empobrecerá aún más a los miserables de Venezuela. ¿A cambio de qué será?[95]

Por otra parte, en abril de 1999, tres meses después de asumir la presidencia. Chávez le escribió al terrorista Carlos (alias "el chacal", cuyo verdadero nombre es Ilich Ramírez Sánchez), preso en París y confeso asesino de 89 personas (una fracción de lo que se le atribuye), compartiendo sus reflexiones sobre el tiempo apropiado para las revoluciones, y expresándole su simpatía y "profunda fe en la causa y la misión, ahora y siempre". Y como sabemos, Chávez también articula alianzas tácticas y vasos comunicantes con el M-19, el ELN, las FARC... y los carapintadas argentinos.[96]

Su vínculo con los carapintadas se torna pintoresco cuando se lo aborda desde quien ha sido llamado el "Rasputín argentino" de Hugo Chávez, el ya mencionado sociólogo Norberto Rafael Ceresole, nacido en Buenos Aires en 1943. El mote le fue endilgado por una publicación colombiana, la Revista *Cambio*, cuyo consejo editorial está presidido por Gabriel García Márquez[97], que lo califica de:

> "Barbudo y truculento personaje, amigo sucesivo de Perón, los Montoneros (y otros), como podría haberlo sido de Hitler, Ceresole es el típico aventurero, disfrazado de intelectual, que se sube al tren de las revoluciones nacionalistas de izquierda o de derecha en América latina para convertirse en el Rasputín de un hombre fuerte. Apenas conoció a Chávez, en una visita que éste hizo a Buenos Aires en 1994, entre los dos hubo un entendimiento instantáneo, una especie de *coup de foudre* político. Regresaron ambos a Caracas y recorrieron todo Venezuela haciendo un tumultuoso proselitismo. El gobierno de Caldera terminó expulsando a Ceresole cuando descubrió que en estos paseos el sociólogo del sur andaba predicando un alzamiento militar. ¿Qué le aportó Ceresole a Chávez? Algo muy importante: la tesis de que estamos viviendo en América latina la era de la 'posdemocracia', en la cual conviene concentrar el poder en manos de un caudillo providencial(...). Sí, algo semejante a lo hecho por un Saddam Hussein o un Kadafi. Dentro de ese esquema los nuevos enemigos son, en su orden: la globalización, el neoliberalismo, el capitalismo, el imperialismo, la Pepsi Cola y los Mac Donalds. Los buenos de la película son, en cambio, los Estados árabes fundamentalistas, Cuba y la guerrilla colombiana, nada menos."[98]

Por cierto, este sujeto que en la década del ’60 militaba en el grupo Praxis de Silvio Frondizi[99], fue dirigente montonero durante los ’70 y hoy se considera enrolado en el “peronismo resistente”. Ejerce influencia ideológica sobre los sectores de las fuerzas armadas argentinas que se sublevaron durante el gobierno de Raúl Alfonsín[100]; fue miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética (algunos de sus libros fueron traducidos al ruso); entre 1969 y 1971 fue asesor del general Velasco Alvarado en Perú; actualmente mantiene estrechos lazos con gobiernos y movimientos árabes y musulmanes; niega terminantemente el Holocausto judío como un mito sionista; y en tiempos recientes, además de un libro sobre el mandatario populista titulado *Caudillo, Ejército, Pueblo: la Venezuela del Comandante Chávez*, publicó *Terrorismo Fundamentalista Judío: Nuevos Escenarios de Conflicto* (Libertarias, Madrid 1996), y *El Nacional-Judaismo: un mesianismo pos-sionista* (Libertarias, Madrid 1997). Algunos de sus últimos libros, *España y los Judíos* (Amanecer, Madrid 1997) y *La Conquista del Imperio Americano* (Al Andalus, Madrid-Buenos Aires 1998) fueron también editados en lengua árabe, para todo el mundo árabe, desde Beirut, y en lengua farsi, desde Teherán, para el Asia central. También pueden leerse por Internet a través de un sitio ubicado en Francia. Finalmente, su obra más reciente, del año 2000, se titula *La Falsificación de la Realidad: la Argentina en el espacio geopolítico del terrorismo judío*, que según él mismo anuncia pronto se publicará también en árabe. Ceresole vive actualmente en España, vinculado al CEDADE (la institución neonazi fundada por el belga León Degrelle y ahora perseguida por la Justicia) o a sus instituciones sucesoras (por ejemplo, el “Instituto de Investigaciones Geopolíticas”, de Madrid).[101]

Aunque la prensa argentina poco y nada informó sobre el vínculo entre Ceresole y Hugo Chávez, quizá para no promocionar al exitoso ideólogo del caos y la discordia, el vínculo fue ampliamente divulgado por la prensa internacional. El 28 de julio de 1999 el *New York Times* informó sobre el vínculo, tildando a Ceresole de “sociólogo argentino marginal” (*obscure*), y agregó que Chávez se había molestado porque Ceresole orgullosamente lo llamó “mi discípulo” en público. El matutino discurre también sobre las ideas “posdemocráticas” de Ceresole, según las cuales un vínculo casi místico entre caudillo y masas elimina la necesidad de partidos políticos.

Más impresionante es la reseña de la influencia de intelectuales sobre Chávez realizada por el *Christian Science Monitor* el 7 de septiembre de 1999, titulada “Libros de cabecera para un gobernante de puños de acero” (*Bedtime reading for an iron-fisted ruler*). El principal parece ser “El oráculo del guerrero”, una obra filosófica pop de un biólogo chileno. Pero lo que más preocupa es la influencia de Norberto Ceresole, a quien describe como “un autor argentino que sostiene que el Holocausto (judío) fue inventado por Hollywod”. El prestigioso diario documenta entrevistas a Chávez publicadas en un libro en 1998, donde el actual presidente venezolano expresa entusiasmo por varios de los proyectos de Ceresole. El matutino cita también el diario caraqueño *El Universal*, que publicó un estudio que rastrea el pensamiento constitucional e integracionista de Chávez, a Ceresole.

El *Los Angeles Times* del 1º de septiembre de 1999 es aún más dramático: “Lo más alarmante son los contactos de Chávez con Norberto Ceresole, un ideólogo y autor antisemita salido de las sombras y vinculado a los extremistas comandos ‘carapintada’ argentinos (…). Posteriormente conformaron un partido marginal de derecha cuyos miembros son sospechosos de ayudar a los terroristas que hicieron volar una institución de la comunidad judía en Buenos Aires, matando a 86 personas”. Finalmente, entre los diarios importantes, el *Washington Post* del 27 de

octubre de 2000 también abordó el tema, enfatizando el parentesco entre la "teoría posdemocrática" del neonazi argentino y el Movimiento de la Quinta República de Hugo Chávez. En lo que al propio Chávez se refiere, reconoce su amistad con Ceresole, pero públicamente rechaza su antisemitismo.[102]

El Foro de Sao Paulo

La proclividad de Chávez por cuanto elemento desestabilizador y contestatario a Occidente se le cruza se hace patente otra vez con el enrolamiento en 1995 de su MRB-200, en el llamado Foro de Sao Paulo, que agrupa 112 organizaciones políticas y sociales de la izquierda de América latina.[103]

Fundado por Fidel Castro en 1990, dicho foro alienta la revolución en la región aunando los esfuerzos y recursos del Partido Comunista de Cuba, el Partido de los Trabajadores del Brasil, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar -que reúne a las FARC y el ELN colombianas-, el Frente Farabundo Martí de El Salvador, el Frente Sandinista de Liberación de Nicaragua, la Izquierda Unida del Perú, el FREPASO argentino[104], el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y el MRB-200 de Hugo Chávez. En Brasil, el Foro publica una revista llamada *América Libre*.[105]

Como señala la Revista *Cambio*, de estas agrupaciones la única que ha llegado al poder después de 1995 es el movimiento de Hugo Chávez, lo que supondría un compromiso solidario con quienes todavía luchan por alcanzar el objetivo. Son frecuentes las acusaciones lanzadas contra Chávez de apoyar la guerrilla colombiana, a través de su membresía del Foro de Sao Paulo y otros mecanismos. Uno de los acusadores, el ex candidato a la presidencia Alejandro Peña Esclusa, divulga un dossier con importantes documentos probatorios de la colusión, incluyendo la entrega de dinero y armas de la Venezuela de Chávez a las FARC. Muchos militares de ambos países dan por ciertas estas versiones.

También circulan en Venezuela crecientes rumores de que agentes de inteligencia enviados por Fidel Castro estarían contribuyendo a crear cuerpos especiales de inteligencia para consolidar a Chávez en el poder. Concretamente, el coronel Braulio Carrazana, un militar cubano con frondosa experiencia en las guerras libradas por Cuba en Angola, Zaire, Liberia, Argelia, en los conflictos armados de Nicaragua y Panamá, y en la lucha armada de Venezuela de la década del '60, tendría a su cargo la creación de redes de espionaje, especialmente en las regiones fronterizas del país. Además, según parece aviones cubanos del tipo Antonov e Illyushin aterrizan cada 48 horas en la Base Aérea Rafael Urdaneta de Maracaibo.

Por otra parte, substanciando estas noticias, cuando en octubre de 2000 Fidel Castro realizó una visita de cinco días a Venezuela, Chávez anunció una nueva política exterior que apunta a la creación de "un nuevo centro de poder político" para contrarrestar la influencia norteamericana en el hemisferio occidental. Declaró que "la profundización de nuestras relaciones con Cuba es parte de esa política".[106]

El derrame de la violencia colombiana

Así se termina de cerrar el círculo que engendra el eje FARC-Chávez. Es un eje peligroso por donde circula el tráfico de armas (con el auxilio de la mafia rusa y Surinam), el de drogas y la industria del secuestro. Es asimismo un eje que tiende sus tentáculos desde Chiapas hasta Buenos Aires, con múltiples alianzas tácticas y maniobras para-diplomáticas, a la vez que gana respetabilidad en Europa gracias a la política del gobierno de Pastrana en Colombia, que prácticamente encumbró a las FARC como parte beligerante oficialmente reconocida en la guerra civil colombiana.

Es un paso más en la estrategia del Foro de Sao Paulo. Con el lanzamiento del Plan Colombia, que probablemente acorrale militarmente a las FARC, probablemente llegue el momento de usar los vínculos trabajosamente tejidos para sembrar el caos en otros países del continente y descomprimir su propia posición, como aspirantes a tomar o compartir el poder en la misma Bogotá.

Mientras tanto, aún antes de intensificarse la guerra, la violencia ya se está derramando. Los de Panamá y Ecuador son casos paradigmáticos. En Panamá, a fines de 2000 se descubrieron operativos de contrabando de armas para las FARC. Y en el Ecuador, aunque la frontera siempre ha sido porosa, y los guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes colombianos siempre encontraron santuario en las regiones limítrofes, el cruce de la frontera se está intensificando.

En octubre de 2000 un contingente de colombianos, empujado por la escalada de violencia, cruzó la frontera y expulsó a los campesinos locales de sus tierras, amenazando con "venganzas de estilo colombiano" si no cedían. Además, soldados ecuatorianos han descubierto cuatro pequeños laboratorios para el procesamiento de cocaina, y paramilitares colombianos fueron detenidos en la región fronteriza del Ecuador por haber montado una mafia local dedicada a la extorsión. Tanto las FARC como el ELN cruzan la frontera con creciente impunidad y en ocasiones preparan emboscadas contra comerciantes ecuatorianos, a los que asaltan y asesinan. Las débiles fuerzas armadas ecuatorianas, peor equipadas, no pueden enfrentar a la guerrilla colombiana; lo que es más grave, tampoco les interesa.

En Lago Agrio, una localidad fronteriza ecuatoriana, las autoridades informan sobre un aumento en los secuestros y las extorsiones, que atribuyen a la guerrilla y a los paramilitares colombianos. Además, muchas de las localidades fronterizas del Ecuador tienen alcaldes marxistas que simpatizan con las FARC. En las mismas, a veces hasta el 80% del comercio local es dependiente de las FARC y los paramilitares, que se abastecen en esos pueblos. Máximo Abad, el popular alcalde de Lago Agrio declara: "No condono la violencia, pero debo comprender las luchas por la justicia y la libertad. El mensaje de las FARC es universal y resuena aquí y en todas partes". En Lago Agrio los guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes e informantes del gobierno se cruzan por la calle y toman cerveza en la misma taberna: los paramilitares (reconocibles por un corte de pelo) en una punta, y los guerrilleros (con su propio corte característico) en la otra.

Para colmo, en el norte del país han surgido dos grupos nuevos de jóvenes insurgentes ecuatorianos, uno de los cuales se titula FARE (Fuerzas Armadas Revolucionarias del Ecuador), un acrónimo que resuena a FARC.

La violencia en el Ecuador promete hacerse más intensa, por otra parte, debido a que el gobierno de ese país negoció con EE.UU. la instalación de una base "para la lucha contra el narcotráfico" en la ciudad portuaria de Manta, una medida que los dirigentes de las FARC describieron como "una declaración de guerra" de parte del Ecuador. Considerando que el principal oleoducto del Ecuador, su principal fuente de divisas, se encuentra a apenas veinte minutos de auto de la frontera, el condicionamiento y extorsión que podrá ejercer la guerrilla allí ya es terrible.[107]

Un emergente paradigmático de la situación son las declaraciones de Arturo Valenzuela, jefe de asesores sobre asuntos latinoamericanos de la Casa Blanca bajo Clinton, poco antes de dejar su puesto. Pronosticó que las negociaciones de paz con las FARC fracasarían, que la guerra continuaría, y que el mayor desafío de Washington sería seguir muy de cerca la situación venezolana e intentar estrechar relaciones con Brasil. "No hay un sustituto para el involucramiento norteamericano", dijo Valenzuela. "Debemos seguir apoyando fuertemente a Colombia, pero ser conscientes de que necesitamos una estrategia regional, que todavía no está completamente instalada". La guerrilla colombiana puede ser sofocada, pero sólo con el apoyo permanente de los EE.UU. En cambio, la situación venezolana es menos controlable, porque "todo depende de la personalidad del presidente".[108]

CAPÍTULO 2 – LA MAFIA RUSA:
LA METAMORFOSIS DE UNA SUPERPOTENCIA
HACE METÁSTASIS EN AMÉRICA LATINA

Una poderosa mafia emerge del colapso de una superpotencia

Cuando en octubre de 1997 el embajador ruso en Colombia, Ednan Agaev, advirtió severamente que se había establecido una fuerte alianza entre el crimen organizado ruso y las FARC para el intercambio de armas por cocaína, sus palabras llenaron titulares de prensa pero fueron desestimadas por funcionarios norteamericanos en Bogotá y Washington, quienes calificaron los conceptos del diplomático ruso como "exageraciones".[109]

Sin embargo, no sólo tuvo razón el ruso (al punto de que, como vimos, debido a este vínculo cayó el gobierno de Fujimori en Perú), sino que la evidencia de una conexión mafiosa entre delincuentes rusos, y los narcotraficantes y guerrilleros colombianos, puede rastrearse hasta por lo menos 1992, cuando un operativo de Cali fue identificado en Moscú. Un año más tarde, la policía rusa incautó una tonelada de cocaína en San Petersburgo. Otras capturas se produjeron en los aeropuertos de Kiev y Milán. Organizaciones criminales rusas se aliaron con grupos mafiosos italianos para administrar el creciente comercio de cocaína colombiana, con destino a Europa y los EE.UU. A la vez, ya en los últimos años de la década del '90, comenzaron a surgir en Bogotá una pequeña multitud de restaurantes rusos o de propiedad rusa, indicadores de una metástasis que se propaga por senderos imprevisibles.

La sencilla fórmula consiste en intercambiar drogas por armas. Ya a fines de 1997 eran frecuentes en Colombia las incautaciones, en campamentos de las FARC, de rifles de asalto, pistolas, granadas de fragmentación, minas, y lanzadores de cohetes RPG-7, de origen soviético. Se sospecha que la mafia rusa también proveyó a la guerrilla de mísiles tierra-aire, muy efectivos para derribar helicópteros de la policía[110]

Pero las fórmulas sencillas a menudo requieren, para su instrumentación, una organización compleja y poderosa. La mafia rusa la tiene, y su origen se entronca con fenómenos económicos y políticos de orden global. Parte de los recursos que hicieron de la Unión Soviética una superpotencia ahora nutren a la mafia rusa, o "mafiya". El colapso de la URSS condujo a una fuga masiva de capitales, estimada en unos 300.000 millones de dólares desde 1992. Con estos fondos, bancos rusos establecieron una fuerte presencia en Chipre, Latvia, Turquía, Dubai, Austria, Alemania e Inglaterra. Casi simultáneamente, llegaron también al hemisferio occidental. No es de extrañar, si se considera que según la estimación de 1997 del entonces primer ministro Víctor Chernomyrdin, el crimen organizado manejaba el 60% de la mismísima economía rusa.[111]

Por cierto, según explica Azalea Dolgova, presidente de la Asociación Rusa de Criminología y ex fiscal, Rusia prácticamente no tiene legislación sobre el lavado de dinero. Esta es la señal más clara de la ausencia de voluntad política del Estado ruso para combatir los delitos de la mafia. Con la caída de la URSS, la mafia ubicó a su propia gente en las principales industrias privatizadas y también en el gobierno. Este fue el caso, por ejemplo, de la notoria organización Solntsevo, la más poderosa de Moscú (cuyos principales dirigentes ahora viven en

Viena), enquistada en posiciones del gobierno ruso y generadora de una enorme variedad de negocios turbios, entre los que se destaca el contrabando de armas y diamantes. Cuando algún sector de la policía rusa intenta un operativo contra elementos mafiosos importantes, éstos reciben la información casi instantáneamente, de modo que el operativo casi siempre fracasa. En 1997 se estimaba que Solntsevo contaba con unos 2000 agentes en Moscú solamente. En el desorden generalizado producido por el colapso soviético, además, el crimen organizado gana apoyos dentro de la población rusa, porque es un Estado dentro del Estado y sirve (por ejemplo) a los comerciantes para cobrar incobrables, a cambio de un seguro de protección. La percepción de los propios mafiosos es que ellos están al servicio de quienes tienen miedo, es decir que son "buenos".[112]

Testimonios presentados a la Cámara de Representantes de los EE.UU. a fines de 1999 coinciden en que el crimen organizado ruso posee el apoyo del Estado. Se acusa de complicidad con grupos estrictamente mafiosos a grandes grupos financieros (que se ubican por encima de la ley), agentes de inteligencia, funcionarios del Estado y empresarios. Esta es la nueva "oligarquía" que hoy maneja a Rusia. Según el testimonio de Richard L. Palmer a la Comisión de Relaciones Internacionales (en el contexto de los hearings sobre la corrupción del gobierno ruso), el poder y la riqueza del Estado ruso y de algunas de las ex repúblicas soviéticas ha sido usurpado por miembros de la vieja "nomenclatura", miembros del viejo "complejo militar-industrial", y grupos del crimen organizado. Esto sería el producto intencional de viejos miembros del Partido Comunista para conservar su poder, riqueza y privilegios. El crimen organizado ruso actual, más que un uso de la nomenclatura por parte de la mafiya, sería un uso de la mafiya por parte de la nomenclatura, en una relación (según algunas versiones) del 85 al 15%.[113]

Por otra parte, el sistema no tendría nada de nuevo, ya que según testimonio del director de la CIA James Woolsey de 1994: "Durante la era soviética los grupos criminales y el mercado negro frecuentemente funcionaron como una extensión del Partido Comunista y la KGB (...). Hacia fines de la década del '80 vimos fuertes indicaciones de que el poder estatal había comenzado a desvanecerse".[114]

Hacia fines de 1994 un informe de la CIA reproducido por el Washington Times informaba que más de la mitad de los 25 bancos más grandes de Rusia estaba vinculado al crimen organizado. Estos bancos pagaban (y siguen pagando) comisiones a funcionarios para que suministren a la mafia información anticipada sobre devaluaciones. Además, informan a los mafiosos sobre la evolución de cuentas de clientes, para poder someterlos a extorsión cuando se observa acumulación.[115]

Por otra parte, informes elaborados para el presidente Boris Yeltsin en 1994 revelaron que el 75% de las empresas privadas de Rusia pagaban entre un 10 y un 20% de tributo a organizaciones mafiosas, porcentaje que subió del 20 al 30% hacia 1997. Se estima que la mafia es propietaria del 55% del capital financiero de todo el país y del 80% de las acciones de privatización, cuyo proceso controló. Sólo ocasionalmente, el Estado ruso pone presos a mafiosos, quizás quienes cayeron en desgracia perdiendo la protección de los más poderosos...[116]

Por otra parte, la propiedad privada dista de ser un derecho absoluto, ya que depende del equilibrio de poder entre organizaciones criminales y políticas. Hoy por hoy, el "propietario" de una fábrica privada no se encuentra en una posición demasiado diferente al gerente general de

una fábrica estatal de la era comunista: éstos dependían del favor del partido; aquellos dependen del favor de la "oligarquía".[117] Es por ello que, como lo documenta John Lloyd, los "oligarcas" propietarios de las empresas privatizadas frecuentemente ubican a sus socios más cercanos e incluso a hijos en altos niveles de la burocracia pública: así arman un tejido dentro del gobierno mismo para defender sus intereses privados, objetivo para el cual la ley no basta.[118]

Según el testimonio presentado a la comisión de la Cámara de Representantes, habiendo demostrado su poder a los empresarios y a la nación entera, la mafia rusa disfruta ahora casi de poderes plenos. Su poder corruptor alcanza todos los niveles del gobiernos, ya que el 50% de las ganancias de la mafia se gastan en comisiones para los funcionarios: comen y dejan comer. De esta manera, los altos funcionarios ("oligarcas") también consolidan su propio poder, desarrollándose una alianza que ya más que táctica es estratégica.[119]

Visto desde aquí, el escándalo financiero norteamericano dado a conocer por el New York Times en agosto de 1999, que puso en gravísimos aprietos al Bank of New York por el blanqueo de unos U$S 15.000 millones (cifra de Jane's Intelligence Review[120]), es apenas la parte más visible en el corazón de Occidente de la capacidad corruptora de la transformación de una superpotencia estatal en mafia globalizada. Fue el mayor caso individual de lavado de dinero en la historia de los EE.UU. El dinero era ruso, pudo rastrearse al mafioso Semyon Yukovich Mogilevich, y de él el rastro pasa a uno de dos gigantes de la política y la economía rusas, rivales entre sí: Boris Berezovsky o Yuri Luzhkov. Pero cualquiera sea el caso, la cadena pasa siempre por la famosa Solntsevo a través de los vínculos entre Mogilevich y holdings de empresas ligados a dicha organización. Estos vínculos fueron confirmados no sólo por el matutino mencionado, sino también por Jim Moody, ex director asistente del FBI para investigaciones del crimen organizado entre 1987 y 1996. Por otra parte, el periódico ruso Izvestia observó que la información de inteligencia debió llegar al New York Times desde una fuente semioficial norteamericana o británica, lo que la transformaría en una suerte de mensaje a la élite política rusa de parte de las potencias anglosajonas: sabemos cuál es su juego. Por la magnitud del lavado, la presunción en EE.UU. fue que se trató de robos de parte del patrimonio ruso de recursos naturales, realizados por los más altos funcionarios durante el proceso de privatización, con una alianza con la mafia.[121]

La expansión hacia el exterior de la mafia rusa no es sino el resultado inevitable de esta enorme acumulación de poder, más la fuga de capitales y la instalación de bancos en diversas capitales. Solntsevo ya es poderosa en Berlín y Frankfurt, mientras que la mafia chechena lo es en Frankfurt y Hamburgo. Hay una presencia menor en Francia, España, Grecia, Portugal, España, e incluso en Italia (donde la mafia local y la experiencia policíaca le interpusieron límites). Gran Bretaña es más difícil de penetrar, pero precisamente por ello es ideal como lugar de residencia para las esposas e hijos de dirigentes, que estudian allí. Sirve para inversiones "legítimas" que son seguros personales para el caso de que las cosas se pongan difíciles en Rusia. Y las islas del Canal son un paraíso fiscal de la Corona que sirve para lavar dinero, que luego ingresa respetablemente a la city londinense.[122]

Por otra parte, la conexión asiática de la mafiya no es de depreciar: desde Vladivostok, las organizaciones rusas operan con las tríadas chinas; y en Osaka, Fukuoka, Nara y Tottori colaboran con la yazuka japonesa. A veces también hay conflicto, y es difícil pronosticar que sería peor: si la cooperación o la guerra entre las mafias rusa y asiáticas. Pero una sola cosa está

clara: el alcance planetario de la mafia rusa es tan importante, a nivel delictivo, como lo fue, a nivel político, el de la colapsada URSS.[123]

En el hemisferio occidental esto se vislumbra con claridad. Hacia mediados de 1998 la mafia rusa ya tenía más de 60 empresas fantasma en el Caribe. Poseen bancos offshore, holdings, trusts y empresas de seguros en por lo menos seis países del Caribe, habiendo sido rechazados por otros tres para evitar el lavado de dinero. Han comprado hoteles de lujo, casinos y mansiones. Entre 200 y 300 rusos han comprado ciudadanías en tres ex colonias británicas, incluyendo una que les permite utilizar nuevos nombres en sus nuevos pasaportes (el precio fluctúa entre U$S 25 y 50 mil). Aunque no residan en sus nuevas "patrias", con estos pasaportes los rusos pueden ingresar sin visa a más de una cincuentena de países. En 1994 un gran mafioso fue incluso cónsul honorario de Rusia en Costa Rica[124]: Sergei Mikhailov, jefe de la organización Solntsevo, quien fuera luego detenido en Suiza pero liberado por falta de evidencia[125]. Los refugios que albergan estos mecanismos de la mafia rusa incluyen a las Islas Caimán (propiedad de la Corona Británica, la cual acepta leyes bancarias laxas, diferentes de las del Reino Unido, en sus paraísos fiscales), las Bahamas, Antigua, Aruba, las Antillas Neerlandesas, las islas Granadinas y San Vicente. Varios bancos preexistentes pasaron al control ruso y fueron vaciados, sus viejos clientes estafados. Otros permanecen porque son indispensables para las operaciones de lavado. La mayoría de éstos están vinculados a bancos establecidos en Rusia desde antes, también controlados por el crimen organizado.[126]

Mientras tanto, su penetración en Norteamérica fue explosiva. Quizá el primer énclave fue la Brighton Beach Organizatsiya, en Nueva York, dónde comenzó la cooperación con la Cosa Nostra siciliana. [127] Poco después establecían bases operativas en Puerto Rico, Boston, Los Ángeles, San Francisco, Cleveland y urbes canadienses (a través de una docena de organizaciones rusas que trabajan en por lo menos veinte ciudades norteamericanas, y en Canadá con la cooperación de los italianos). A la vez, el sur de la Florida se pobló de notorias figuras de la mafia rusa.[128]

Antes refugio exclusivo de la Cosa Nostra, Miami ahora atrae no sólo a la nueva y poderosa mafia rusa sino también a la israelí, muy vinculada a la rusa porque Israel fue vía de tránsito a EE.UU. para muchos mafiosos rusos. La mafia rusa incluye a israelíes de origen ruso. Por su parte, la mafia estrictamente israelí, organizada en Brooklyn y ya instalada en la Florida, por ahora se especializa en distribuir éxtasis en clubes nocturnos, y está compuesta por jasídicos que reclutan sus huestes de sus propias comunidades en Williamsburg y Borough Park[129].

La Florida es atractiva para los mafiosos por su sol, por la abundancia de potenciales negocios, y por su fácil acceso a los negocios del Caribe. Los mafiosos rusos comenzaron a llegar a fines de la década del '80, cuando el presidente Mikhail Gorbachov relajó los controles de emigración, pero los pesos pesados comenzaron a llegar a recién partir de 1991, generando alianzas poderosas con burócratas rusos corruptos y veteranos de la KGB. En 1992 hubo una reunión de jefes en Moscú, donde se decidió enviar a uno de los principales, Vyacheslav Ivankov, para explorar las posibilidades de la enorme comunidad de emigrados de Brighton Beach en Nueva York. Pero a los pocos meses, Ivankov fue visto en Miami, y así comenzó la penetración en serio en los EE.UU. En Rusia, Ivankov era jefe de la mafia de Nishni Novgorod, una importante ciudad industrial que produce desde submarinos nucleares hasta aviones de guerra MiG.

Hacia 1994 la oficina del F.B.I. de Miami había penetrado la organización de Ivankov y recopilado importantísima información sobre las prácticas y los integrantes de estas mafias. Ivankov fue arrestado por extorsionar a dos rusos, y sentenciado a nueve años de cárcel en 1995. No obstante, los mafiosos siguieron entrando a la Florida. La obtención de información de inteligencia es un grave problema, especialmente por barreras idiomáticas. Se necesitaban menos recursos humanos altamente especializados para realizar espionaje en la URSS que para penetrar en los tentáculos de un submundo mafioso globalizado.

No todos los operativos fracasan. En diciembre de 1997, por ejemplo, fue apresado el jefe mafioso Oleg Kirillov, acusado de exportar cocaína de Miami a Moscú. Pero en Miami mandos intermedios se reúnen periódicamente con sus pares de las mafias italiana y colombiana. Allí el notorio Sergei Aksyonov, jefe de la segunda y más violenta organización mafiosa de Rusia, compró varias propiedades lujosas a través de dos parientes. Allí el poderoso Anzor Kikalischvili, a quién ahora se le niega la visa, tiene a su disposición 600 empleados.

Pero aunque estos hechos son profusamente investigados, las autoridades norteamericanas a cargo de la lucha contra la droga consideran que el problema es secundario, en tanto la mayor parte de la droga comercializada por estos mafiosos no tiene como objetivo el mercado norteamericano sino el europeo. Dicen que es más un problema europeo que norteamericano. Sin embargo, el nexo con el Caribe y la misma Colombia es demasiado cercano como para creer que su presencia en Miami es irrelevante para los objetivos estratégicos de los EE.UU. respecto del narcotráfico.[130]

Por otra parte, la mafia rusa es de una sofisticación muy superior a otras organizaciones criminales. Posee, por ejemplo, científicos con doctorados de primer nivel y financistas que ya han lavado miles de millones de dólares. No son unidimensionales sino que se dedican a una multitud de actividades, y están segmentados en una multitud de grupos semi-independientes que operan en unos 60 o 65 países. La mafiya está dominada pero no controlada por “vory v zakone” de alto nivel (“ladrones respetuosos del código”, que son figuras de autoridad tradicional), y por “avtoritety” (“autoridades” típicamente más jóvenes, dedicadas al lanzamiento autónomo de nuevas empresas delictivas)[131]. Además, a diferencia de otros grupos mafiosos, cuando sus actividades se superponen con las de organizaciones de otros orígenes establecidas anteriormente, están dispuestos a negociar y establecer alianzas.[132] De ahí su disposición a reunirse con italianos (incluidas la Mafia siciliana, la Camorra napolitana y la Ndrangheta calabresa), mexicanos, israelíes, colombianos... Si a la presencia de estos poderosos mecanismos para la delincuencia en el patio delantero de Colombia, se agrega el colapso de la cadena de mandos en Rusia, militares dispuestos a vender por cuenta propia importantes elementos del arsenal del Estado, y agentes de inteligencia dispuestos a trabajar horas extra para quien pueda pagarles bien, tenemos la explosiva ecuación que puede conducir, incluso... a la venta de un submarino para el transporte de drogas.

No sólo ello. En 1996 se encontró en manos de traficantes 2,5 gramos de uranio-235, rastreable al jefe de seguridad del presidente Eduard Shevardnadze, de la ex república soviética de Georgia. Por su parte, el berilio incautado por la policía en Lituania en 1993 provino directamente del crimen organizado ruso, y antes de ser detectado casi llegó a destino: Corea del Norte. En otro episodio de diciembre de 1995, nueve miembros de una organización criminal

fueron detenidos en Novosibirsk con uranio-235 proveniente del Kazakatán. Y en 1994 doce miembros de nuestra conocida organización Solntsevo fueron detenidos con uranio-235. El líder del grupo, Yuri Kazaryan, ya habría desarrollado métodos eficientes para contrabandear materiales nucleares fuera de Rusia, y explorado el prometedor mercado externo.[133] Un submarino para narcotraficantes es, pues, poca cosa.

Detalles operativos sobre la mafia rusa en Colombia y el resto de América latina

Pero antes de pasar al tema del submarino, que parece de política ficción, revisaremos en forma breve y fragmentaria las operaciones de la mafia rusa no sólo en Colombia sino en gran parte de la región, donde también está presente aunque menos intensivamente.[134] En Bolivia opera con el financiamiento del cultivo de coca, su producción, y el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. A principios de 2001 se acusó a un legislador boliviano (Josef Kobzon) de estar estrechamente conectado con la mafia rusa.[135] En Brasil, opera con la prostitución y el lavado de dinero. Hay una investigación sobre estas vinculaciones realizada por el diario O Globo. Además, han aparecido rifles AK-47 y lanzamisiles soviéticos en las favelas. Se estima que las armas ingresan a Brasil siguiendo las mismas rutas de la droga colombiana, que abastece a Río y San Pablo.[136]

En España se produjo la incautación de más de 10 toneladas de cocaína y 200 kilos de heroína del buque Tamare, de bandera de San Vicencio y Granadina. La tripulación estaba vinculada con una red colombiana en España, y era íntegramente rusa y ucraniana.[137] Por otra parte, la Operación Cobalto de 1988 produjo el arresto de 11 ciudadanos rusos en Marbella acusados de extorsión y lavado de dinero, presuntamente vinculados a la venta de armas a Libia y Perú.[138]

En Chile se incautaron 9 toneladas de cocaína en el buque Nativa de bandera panameña. El capitán era colombiano y la tripulación ucraniana.[139] En Paraguay, en la zona de la Triple Frontera, agentes de inteligencia argentinos detectaron contactos entre agentes del terrorismo islámico y organizaciones independentistas chechenias, vínculo que posee un peligroso potencial terrorista.[140] En México opera con una red de robo de automotores. En Uruguay opera con el lavado de dinero. La mafia rusa controlaría varios bancos de ese país.[141] En la Argentina su actividad es reducida, aunque en los últimos meses se ha detectado una presencia creciente.[142]

Pero como se dijo, el problema grave está en Colombia. En los últimos tiempos se han encontrado evidencias que vinculan a la mafia rusa no sólo con los traficantes de drogas y las FARC, sino también con el ELN guevarista y los paramilitares amparados por militares y segmentos del mismo Estado.

El sofisticado arsenal proveniente de la ex URSS y de Europa Oriental con que cuenta la insurgencia guerrillera colombiana quedó en pública evidencia cuando las FARC emergieron de la selva para el inicio de las conversaciones de paz con el gobierno de Pastrana, en enero de 1999. En esa oportunidad, funcionarios y periodistas colombianos pudieron observar en forma directa que el grupo estaba equipado con rifles de asalto AK-47, fusiles Dragunov y otras armas de procedencia soviética.[143]

Se estima que el tráfico de estos armamentos se ha incrementado debido al creciente consumo de cocaína en Europa, especialmente en los países de la ex URSS, sumado a la creciente disponibilidad de armas para la venta a través de Europa Oriental. De acuerdo al general Barry Mc Caffrey, el "zar" de la lucha contra el narcotráfico del gobierno de Clinton, Europa consume actualmente entre 80 y 130 toneladas de cocaína por año, de las cuales se estima que por lo menos 10 toneladas son suministradas vía Rusia. Parte de la cocaína se destina al mercado ruso, pero la mayor parte se embarca hacia Europa. Los traficantes de drogas pagan en efectivo o cambian cocaína por armas, y realizan los envíos de armas en los mismos contenedores que utilizan para el envío de drogas.[144] Funcionarios norteamericanos y colombianos estiman que por esta vía se provee regularmente a las FARC no sólo de rifles de asalto sino también de armas pesadas, municiones, artillería pequeña y granadas. Asimismo de acuerdo a informes de inteligencia se presupone que las FARC cuentan con mísiles antiaéreos SA-14, para lanzar desde el hombro.[145] A fines de 2000 la Policía Antidrogas colombiana descubrió un embarque de 480 rifles AK-47 de fabricación ucraniana cerca del Puerto de Turbo en el Caribe.[146] Como también se puntualizó, el potencial para llevar a cabo una escalada tecnológica cada vez más sofisticada es enorme. Los hasta ahora fallidos intentos de importar un submarino probablemente tengan éxito alguna vez, y sistemas de mísiles capaces de destruir aviones y helicópteros provistos por el Plan Colombia probablemente estén a la vuelta de la esquina, sino están ya ocultos en algún arsenal selvático.

Por otra parte, de acuerdo a un informe de la televisión colombiana las armas que las FARC compra entran al país a través de 21 puntos en la frontera con Venezuela, 10 en la frontera con Ecuador, 37 en la frontera con Panamá y 14 en la frontera con Brasil.[147] La ruta peruana ya fue ampliamente documentada en nuestro capítulo 1. Por otra parte, desde Ecuador las armas destinadas a la guerrilla son enviadas por río o en paracaídas hacia las regiones de Putumayo y Caquetá. A su vez, los grupos paramilitares son provistos de armas desde Ecuador, y por barco en el norte de Colombia, especialmente en la región de Córdoba.[148]

Otra ruta importante de entrada de armas y salida de drogas es la brasileña. Entre muchos antecedentes, puede citarse el de febrero de 1999, cuando fue arrestado Jorge Enrique Ferreira Rengifo, quién se presume el principal contacto entre los cárteles colombianos y la mafia rusa. Por otra parte, un barco con cinco toneladas de cocaína fue capturado, con tripulación rusa. La droga, destinada a EEUU, salió de la selva colombiana a través de Brasil.[149]

A su vez, según un informe del diario colombiano El Espectador, el asesinato de un ciudadano ruso en Tolima proveyó evidencia sobre las rutas de tráfico de drogas de la mafia rusa, que serían: 1) En barco desde el Puerto Buenaventura cruzando por el Canal de Panamá hacia Goteborg (Suecia), y de allí hacia Kotka (Finlandia) y finalmente a San Petersburgo (Rusia); 2) Por aire hacia el valle norte o las planicies del este o Venezuela, de allí por tierra hacia el puerto de La Guaira, y de allí a Milán y posteriormente a Rusia; 3) Buenaventura-Guayaquil-Italia-Rusia; y 4) Buenaventura-Lima-Grecia-Rusia[150]

Pero más allá de estos importantes detalles logísticos, la magnitud del problema no termina de evaluarse si no incursionamos en burdeles de Miami donde se han tramado y se traman algunos de los operativos más audaces de una mafia que no se construyó, como otras, de abajo hacia arriba, sino que heredó algunos de los mecanismos de poder de una superpotencia colapsada de alcance planetario.

El submarino amarillo, clase Tango

Según Mark Fineman del Los Angeles Times, aquella era una típica noche de abril en Porky's, un club nocturno conocido por sus strippers rusas en el turbio suburbio de Hialeah, en Miami. Mientras las chicas practicaban la rutina de su oficio, en las oficinas del club su dueño, Ludwig "Tarzán" Fainberg le contaba a un agente encubierto ruso-parlante de la D.E.A. sobre su papel como intermediario en la venta de un submarino soviético de la Guerra Fría, por valor de 35 millones de dólares, a un cártel colombiano.[151]

Hacía semanas que Tarzán, un inmigrante ruso venido de Israel, había estado jactándose del negocio en puertas. La D.E.A. le había tendido una buena trampa, ya que había reclutado a un informante ruso-parlante de Brooklyn, Gregory Roizis, y lo había puesto a trabajar con un agente encubierto, Alexander Yasevich, ambos los cuales se conocían de Brighton Beach en Nueva York, localidad frecuentada por la mafia rusa y por el mismo Tarzán, que había operado allí tiempo atrás. Se planeó una puesta en escena en Babushka, un restaurante de Miami de propiedad de Fainberg, especializado en blinis y borscht. Allí los dos fingieron un inesperado encuentro, con abrazo de oso y alegres exclamaciones en ruso, recordando sus días de Brighton Beach delante del mismo Tarzán. Éste cayó en la celada. Eran gente de confianza.[152]

Poco tiempo después, Fainberg alias Tarzán ya había presentado el agente encubierto ruso-parlante a Juan Almeida, un intermediario de vehículos "exóticos" nacido en Cuba, de quien los fiscales dicen tenía importantes contactos con el submundo de la droga colombiana. Según documentos tribunalicios, Fainberg y Almeida ya habían provisto a los colombianos de media docena de helicópteros militares soviéticos MI-8, obtenidos a través de contactos militares en Rusia por un millón de dólares cada uno. Esa venta se hizo sin la aprobación de las agrupaciones mafiosas rusas poderosas, por lo que durante un tiempo Fainberg estuvo en la mira de la mafia rusa, para ser asesinado. Pero éste acudió a la ayuda del poderoso (y ahora ausente) mafioso Anzor Kilalischvili, que operaba desde Nueva York, y éste negoció su protección a cambio de favores futuros.

Contando ya con una mejor inserción en la mafia rusa, aquella noche en el club Fainberg le mostró al agente un mapa del oeste de los Estados Unidos, y le contó sobre sus planes de "globalización", trazando un circuito que uniría el eje Rusia-Colombia con el sur de California. El viaje del submarino tendría una escala en México, y pasaría inadvertido cerca de la base naval de San Diego para depositar su carga en la costa de Santa Bárbara. La conversación fue una entre unas 11.000 grabadas en varias lenguas para este operativo, en Porky's y otros lugares, en 1995. Aquella transacción nunca llegó a concretarse (probablemente el motivo por el que, poco después, los narcotraficantes aguzaron su ingenio, pero se vieron otra vez frustrados cuando el gobierno colombiano interceptó dos mini-submarinos de fibra de vidrio, de fabricación casera, y dos más en construcción).[153]

Fainberg y Almeida fueron procesados, pero sólo Fainberg purgó una condena por confesar un delito menor, a pesar de que pudo demostrarse que ambos viajaron a Rusia para intentar comprar helicópteros, aviones y submarinos. Fainberg negoció una pena menor, una visa segura, y su incorporación, junto con la de su hija de seis años, al "programa de protección de testigos" (Federal Witness Protection Program), a cambio del suministro de información.[154]

Algo de información posee. Por cierto, durante aquel viaje a Rusia Fainberg utilizó sus contactos con delincuentes para reunirse con un vicealmirante retirado que había comandado una fuerza de submarinos de la Fuerza Soviética del Norte. El marino organizó una visita secreta del grupo a la importante base rusa de submarinos de Kronstadt, en el golfo de Finlandia, no lejos de San Petersburgo. Allí, después de estudiar modelos que variaban en precio desde 20 hasta 75 millones de dólares, eligieron uno de la clase Tango, un sumergible de propulsión diesel construido para patrullar aguas de poca profundidad a 16 nudos por hora bajo el agua[155].

Las operaciones de Fainberg iban mucho más allá de Colombia. Las grabaciones clandestinas demostraban que entre 1994 y 1995, usó sus oficinas para organizar grandes envíos de cocaína a los EE.UU. y Rusia, escondida entre langostinos del Ecuador; transportar cigarrillos robados de los estados de Nueva York y Georgia; organizar traslados a Miami de prostitutas rusas, y comprar armas y vehículos blindados para organizaciones criminales rusas instaladas en diversos países.

Los documentos de los tribunales dicen que seis días después del encuentro de Fainberg con el agente encubierto, aquel se reunió en Miami con el jefe de la mafia Luberetsy de Moscú, "para organizar una reunión de todas las organizaciones criminales rusas importantes en agosto de 1995 en Miami. Esta reunión serviría para dividirse el territorio de los EE.UU."

No obstante su frustración, el caso del submarino sirvió de advertencia para comprender las aterradoras perspectivas de que el dinero de la droga colombiana aprovechara la quiebra de la cadena de mandos producida en Rusia después de la caída de la Unión Soviética, la generalizada escasez de dinero en ese país, y el enorme arsenal de alta tecnología legado de la Guerra Fría y hoy en gran medida fuera de control, para aumentar sideralmente el poder de los narcotraficantes, el de las guerrillas insurgentes, y el de la mafia rusa.[156]

Esta posibilidad, ya explicada por uno de los actuales autores en su libro Estado del Mundo: las Nuevas Reglas del Juego de la Política Internacional Vistas desde el Cono Sur[157] respecto del terrorismo internacional, es central también a la problemática que abordamos en este trabajo especialmente en el caso colombiano. Ya hacia 1995, la D.E.A. había identificado 47 aviones del ex bloque oriental en Colombia, usados para el transporte de narcóticos y de agentes químicos necesarios para procesar narcóticos. Más aún, una investigación de 1996 del Los Angeles Times revelaba que por lo menos 20 aviones de carga de diseño soviético se habían vendido a narcotraficantes.[158] Y hacia 1997 se vieron tanques rusos en manos de la guerrilla.[159]

En pocos años, este tráfico se intensificó, como vimos a través del episodio de la triangulación peruana a las FARC. Y los esfuerzos por agenciarse de un submarino no cejaron de parte de los narcotraficantes colombianos, aún después de desmantelado el cártel de Cali. Hay dos versiones divergentes de cómo las autoridades colombianas descubrieron en julio de 1999 un submarino de diseño ruso en construcción, en plena tierra colombiana, a 440 millas del puerto más cercano, y a una milla y media sobre el nivel del mar. La de Kirk Semple del New York Times acredita el descubrimiento a la policía nacional de Colombia, que interceptó una serie de comunicaciones radiales extrañas, las rastrearon, creyendo que se trataría de algún grupo guerrillero, y eventualmente fueron a parar a una aldea de Cundinamarca llamada Cartagenita. La

de Juanita Darling del Los Angeles Times acredita el hallazgo a unos lugareños de la aldea de Facatativa, que sospecharon de extranjeros inamistosos y avisaron a la policía[160].

En cualquier caso, los investigadores eventualmente llegaron a un deposito del tamaño de una cancha de tenis, que contenía tres enormes cilindros de metal, dos de ellos sellados en una punta y abiertos en la otra. La policía no sabía de qué se trataba, pero a alguno se le ocurrió una teoría alocada. Convocaron al capitán Ismael Idrovo de la marina colombiana, quien confirmó que se trataba de la mitad de un submarino de 78 pies de largo. Con un fuerte casco, hubiera podido sumergirse unos 100 pies, lo suficiente como para evadir la mayoría de los sonares, y hubiera podido realizar una travesía de mil millas náuticas y permanecer en el mar durante 13 días con una tripulación de cinco hombres.

La mayoría de las herramientas eran rusas, aunque también las había de origen norteamericano, y había manuales escritos en ruso, aunque con caracteres latinos en vez de cirílicos. Dos de los extranjeros que habían despertado las sospechas de los lugareños eran según parece rusos, y el tercero quizá fuera norteamericano. Poco después del descubrimiento del submarino, el agregado policial ruso declaró “es uno de los nuestros”, aunque poco después negó sus dichos.

En los tiempos del cártel de Cali los rusos pagaban con armas las drogas que importaban y distribuían en Europa, a la vez que el cártel vendía las armas a los guerrilleros. Además, la mafia rusa lavaba (y sigue lavando) el dinero de la droga a través de sus bancos y casinos en el Caribe. Más allá del intenso y sospechoso tráfico telefónico que existe entre Colombia y Rusia, siempre en aumento, el descubrimiento del submarino a medio construir fue la primera prueba sólida de que existe una sociedad estrecha entre los pequeños nuevos cárteles colombianos, y la mafia rusa. Los investigadores descubrieron que el proyecto era un esfuerzo cooperativo entre varios grupos pequeños, que compartían el costo total aproximado de U$S 25 millones, y también el riesgo de grandes cargamentos de drogas.

La “mano de obra desocupada” de la ex KGB

Si ferretería del calibre de un submarino puede llegar en cualquier momento a los narcotraficantes o a la guerrilla, el intercambio de armas por drogas realizado entre rusos y colombianos podría producirle una debacle al Plan Colombia, ya que los helicópteros Black Hawks y Hueys que los norteamericanos piensan enviar como parte de su contribución de U$S 1300 millones bianuales serían muy vulnerables a una escalada tecnológica. Sin embargo, la posibilidad de que también emerja una alianza entre narcotraficantes, guerrilleros y la mafia rusa en materia de inteligencia es casi igualmente alarmante.

Por cierto, la comunidad de inteligencia rusa, antes integrante de la desmantelada y notoria KGB, es experta en el contrabando de drogas a partir de su experiencia en el escamoteo de heroína de Afganistán durante la década de los ’80. Según la policía colombiana, el gran poder de las organizaciones mafiosas rusas es que la mayor parte de ellas está constituida por ex agentes de los servicios secretos. Los analistas del American Foreign Policy Council, de Washington, son aún más enfáticos. J. Michael Waller, investigador de dicho instituto, afirma que el vínculo es aún mayor: es conocido y tiene el apoyo tácito de los servicios oficiales actuales.

Según Waller, para poder mantener un servicio de inteligencia eficiente sin un presupuesto adecuado, los rusos se vieron forzados a permitir que sus agentes hagan trabajos free lance. La misma estructura de los servicios de inteligencia rusos lo permite, ya que en ellos existe la categoría de "agente activo": profesionales que viven sus vidas privadas, con sus propios asuntos, mientras operan como agentes de inteligencia. Frank J. Ciluffo, investigador del Center for Strategic and International Studies de Washington, observó que: "hay que poner la delincuencia rusa en la perspectiva de una mezcla tóxica de crimen, negocios y política. No es fácil saber quién es el títere y quién es el amo".

Porque agentes de inteligencia del pasado y quizá también del presente están involucrados, los narcotraficantes colombianos pueden comprarle a la mafia rusa no sólo armas muy sofisticadas sino también inteligencia y contrainteligencia. De esta manera, podrían contribuir a hacer fracasar los operativos de inteligencia del gobierno colombiano y su aliado norteamericano. La lucha no es contra una mafia cualquiera: es contra organizaciones delictivas que se apoyan en el remanente mafioso de un segmento del aparato del Estado que durante décadas compitió con los EE.UU. por el poder mundial. Es la prolongación de la Guerra Fría en el subsuelo de la sociedad internacional, a través de mecanismos sin precedentes en la historia mundial: una superpotencia colapsada sufre una metamorfosis que canaliza gran parte de su poder a una mafia.[161]

CAPÍTULO 3 – DROGAS POR ARMAS: TRUEQUE DE LA NARCO-INSURGENCIA

Los honorarios de los "mercaderes de la muerte"

Cuando Sarkis Soghanalian, el mercader de armas cuyo perfil describimos en el Capítulo 1, declaró que los fusiles de origen ruso que terminaron en manos de las FARC le habían sido comprados legalmente por el gobierno peruano, y que en Lima había sido tratado a cuerpo de rey por Vladimiro Montesinos, revelaba apenas la punta del ovillo de una trama con incontables ramificaciones. El gobierno suizo, presionado por EE.UU. y la DEA, no tuvo más remedio que abrir el secreto sobre las tres cuentas de Montesinos en Zurich (en los bancos Leumi, Fibi y CAI), en una de las cuales había depositados U$S 48 millones. Según Mario Vargas Llosa:

> "En menos de 48 horas, igual que conejos de la chistera del prestidigitador, (aparecieron) nuevas cuentas y empresas fantasma desperdigadas por Montesinos en Panamá, Islas Caimán, Argentina, República Dominicana, España y Estados Unidos, para canalizar unos ingresos tan fabulosos que, luego de rastrear diversas fuentes, el periodista Francesc Relea, de *El País,* ha calculado (en) mil millones de dólares".[162]

Es posible que Soghanalian no supiera que los fusiles eran para las FARC, pero es improbable que la cuestión le haya preocupado, siempre que tuviera las espaldas cubiertas con documentos probatorios de que las armas eran para las fuerzas armadas peruanas. Después de todo, su objetivo es mantener un nivel de ganancias personales (en blanco) de por lo menos 12 millones de dólares por año, y eso sólo se consigue vendiéndole a Dios y al diablo, y arriesgando procesos penales como los mencionados en el Capítulo 1, que con su prolijidad el mercader suele sortear exitoso.

Sarkis es un hombre de verdadera vocación. En Miami tiene una aerolínea registrada a nombre de su hijo, Pan Aviation Inc., con una flota de B-707, B-727, Jet Star 731 y helicópteros, a los que se les atribuyen muchos envíos de armamentos.[163] Y a veces Sarkis exige pruebas de la efectividad de las armas que vende. Ha alardeado que desde el Líbano, jóvenes soldados cristianos le enviaban jarros con orejas humanas preservadas en formol.[164]

Un conflicto como el colombiano invita y exige la participación de estos personajes, que en realidad son parte del engranaje que mueve al mundo. Suministran a las FARC, casi nunca caen presos, muchas veces son amigos de las gentes más poderosas y prestigiosas del mundo entero, y también son informantes de la CIA. Sus nombres emergen cuando estalla un escándalo como el de la triangulación peruana a las FARC, pero las más de las veces sus negocios permanecen en las tinieblas. El nombre de Soghanalian en relación con las FARC emergió sólo por el escándalo peruano; de lo contrario sería imposible asociarlo a la guerrilla colombiana.

¿En cuántos negocios parecidos estará, que no hemos podido rastrear? Por ejemplo, en este capítulo documentaremos el intercambio de drogas por armas realizado entre las FARC y Surinam. ¿Pero qué mercader de armas está detrás de las falsas compras de Surinam cuyo destino son las FARC? Todavía no estalló el escándalo que haga pública esa información. Cruzando "Surinam" con los nombres de mercaderes de armas como Al Kassar, Khashoggi, Soghanalian, Ernst Werner Glatt, no salta nada en los bancos de publicaciones confiables, como el de Dow

Jones. En cambio, cuando un escándalo abre las puertas de la información, como en el caso del lavado de dinero del ahora clausurado *Bank of Credit and Commerce International* (BCCI), aparecen juntos el narco-Estado de Surinam, el ex presidente y hoy presidiario panameño Manuel Noriega, el mercader de armas Adnan Khashoggi, el actual presidente norteamericano George W. Bush y el sempiterno "bueno" e insospechable Jimmy Carter.

La droga es *big money*, y donde hay una guerrilla financiada por droga no faltan candidatos a vender armas y blanquear dinero. Estos mercaderes y financistas están a su vez vinculados a los poderosos del mundo, y muy frecuentemente a los jefes de Estado que dicen haberle declarado una guerra a la droga.

Pero como todo círculo debe cerrarse, la *guerra contra* la droga también es *big business.* Si el Plan Colombia implica la transferencia de U$S 1300 millones a Colombia en el año 2001, en gran medida para gastos militares, y un total de U$S 7500 en cinco años, la violencia se va a desparramar sobre países vecinos. Los indefensos sufrirán lo que deban. Quienes tengan más recursos, como Brasil, deberán invertir grandes sumas para cerrar su frontera con Colombia: un total de alrededor de U$S 10.000 millones, para ser precisos. Sólo los sofisticados radares que se comprarán a los EE.UU. costarán U$S 1400 millones. La modernización y adaptación de la fuerza aérea al nuevo desafío costará U$S 3000 millones.[165] El principal negocio, pues, será legal y legítimo. Allí las comisiones de los mercaderes de armas serán proporcionalmente mucho menores, pero la gran industria mundial que representan se verá muy beneficiada. El *establishment* casi siempre gana. Gana con la droga y gana contra la droga. Gana, gana y gana...

Tráfico de armas hacia Colombia

El eje de nuestro análisis, no obstante, es el desafío planteado, para todo el continente sudamericano, por la narco-insurgencia de las FARC (y en menor medida, del ELN). Es por ello que en este capítulo nos concentraremos en el tráfico de armas hacia ellas: se trata de uno de los temas cruciales en cualquier análisis del potencial de la violencia colombiana para derramarse hacia otros países. Analizaremos su arsenal, los orígenes de ese arsenal, las rutas por las que llega a destino y su financiación. Naturalmente que la financiación nos conduce directamente al narcotráfico y la industria del secuestro, vinculados como se sabe no sólo a la guerrilla sino también a los paramilitares, y a poderosos sectores de la economía colombiana a través del lavado de dinero. Por su parte, el suministro del arsenal bélico nos lleva al estudio del tráfico de armas, un tráfico que también involucra tanto a la guerrilla como a los paramilitares (que como se dijo operan con la alianza subrepticia de los militares y por de lo menos parte del aparato del Estado).

Se estima que, en conjunto, las FARC y el ELN poseían, a mediados de 2000, unas 45.000 armas (las FARC más de 30.000; el ELN cerca de 15.000), y que sólo de rutas marítimas desde el Ecuador ingresan no menos de una tonelada de armas y explosivos por día.

Las autoridades colombianas afirman que han descubierto más de 20 rutas internacionales y 30 nacionales para el tráfico de armas con destino a la guerrilla y los paramilitares, que pagan esos cargamentos con dinero en efectivo o cocaína. El cargamento ingresa a la selva colombiana a través de rutas aéreas, fluviales, marítimas y terrestres. Entre otras rutas, las armas se introducen a través de El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, por el mar Caribe o el

océano Pacífico. La isla caribeña de San Andrés, la zona bananera de Urabá (fronteriza con Panamá), y el departamento de Nariño en la frontera con Ecuador, son puntos de acopio de armas y pertrechos procedentes de América Central. En sus 35 años de existencia una de las fuentes de armas usadas adquiridas por las FARC fueron las desarticuladas guerrillas centroamericanas.[166] La guerrilla del ELN y los paramilitares se abastecen también en Centroamérica. El fin de la guerra civil en Nicaragua llevó a los traficantes a mirar hacia Colombia para vender sus armas, que en el medio del conflicto llegaban de Bulgaria, Corea del Norte, Rumania y otros países de Europa del Este.[167]

También ingresan armas a través de Venezuela por la región de Catatumbo, uno de los principales centros productores de coca y cocaína de Colombia. Asimismo, se ha detectado contrabando de armas en las fronteras con Ecuador y Perú. Aún otro conducto es el que introduce armas procedentes de Asia, África y Europa, a través de Surinam y la selvática frontera con Brasil.[168]

Otro ejemplo de las rutas y mecanismos empleados quedó al descubierto con un operativo conjunto de los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Colombia, realizado en Cali en mayo de 2000. Entonces se capturó a dos israelíes cuando estaban arreglando una entrega de miles de rifles a las FARC. En junio se desmanteló la banda, que unía criminales rusos e israelíes y que tenía contactos en Austria, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Panamá y Perú. Las armas provendrían de América Central, Brasil e Israel, y entrarían a Colombia por mar.[169]

Muchas armas incautadas llevan el sello de la Guardia Republicana del Perú: fusiles FAL, rifles G-3 y ametralladoras MAK. Otras proceden de la Compañía Anónima Venezolana Industrial de Municiones (CAVIN). También están claras las huellas de la fábrica brasileña Tauros (de pistolas y municiones). Las armas semiautomáticas son norteamericanas, y traficantes de ese país han conseguido contrabandear rifles egipcios de la la Compañía Maladi, y rifles Morninco de la China. Proliferan, por supuesto, los rifles de asalto AK-47, de origen ruso (en este capítulo dejaremos de lado el tráfico de armas proveniente de esa mafia, ya estudiado en el anterior).[170] En campamentos de las FARC cercanos a la frontera con el Ecuador se han hallado toneladas de municiones de origen español.[171]

También hay evidencias de una ruta mexicana. El cártel de los hermanos Arellano Félix, la más poderosa de las organizaciones de tráfico de drogas de México, envió armas y dinero a las FARC a cambio de grandes volúmenes de cocaína, según informó la Procuraduría General de la República (PGR). Según el Director de la Unidad Antidrogas de la PGR, el acuerdo habría sido alcanzado entre el colombiano Carlos Ariel Chávez, alias “El Doctor”, y el mexicano Ismael Higuera, descripto como segundo en comando de la banda de los Arellano Félix. Ambos se encuentran en una prisión de máxima seguridad en México. Los investigadores tienen constancia de que se celebraron al menos dos reuniones entre los dos y uno de los hermanos Arellano, en diciembre de 1999 y en agosto de 2000.[172]

Por otra parte, el líder paramilitar Carlos Castaño reconoció que importa rifles traídos desde Surinam vía Brasil.[173] Según un periódico bogotano por lo menos 4000 armas adquiridas en el mercado negro por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habrían terminado en poder de las FARC en el mes de mayo de 2000, luego de que las cambiaran por cocaína. Castaño admitió que estaba desembolsando 750 dólares por cada fusil, y que las FARC le arrebataron el

contacto y la ruta al pagar, a punta de droga, todo el cargamento. La guerrilla entregó 7000 kilos de droga a cambio del arsenal, que fue retirado y trasladado en avión desde Belem, Brasil, hacia territorio colombiano. Castaño afirmó que por este hecho los paramilitares dieron la orden de asesinar a un traficante de apellido Ángel y a uno de sus enlaces. Las AUC además secuestraron a otros dos contactos de la red. Según sus declaraciones, cada fusil fue canjeado por dos kilos de cocaína de alta pureza, que puestos en el mercado internacional sobrepasan los 60.000 dólares y que terminaron distribuidos en las calles de Holanda. Desde entonces la ruta clandestina que venía abasteciendo a los paramilitares quedó en manos de las FARC.[174]

Por otra parte, en diciembre de 1999 se informó que los iraníes invirtieron tres millones de dólares en un frigorífico en Colombia, en pleno territorio de las FARC, y lejos de la mejor zona ganadera del país. Las negociaciones comenzaron en septiembre de 1999 con la aprobación del gobierno. En octubre se firmó el acuerdo entre el embajador de Irán, Hossein Sheik Zeineddin, y el alcalde de San Vicente de Caguán. Víctor G. Ricardo, el Alto Comisionado para la Paz del gobierno, fue el garante del acuerdo. A la vez, los militares colombianos acusaron a los iraníes de operar como asesores militares de las FARC.[175] Por cierto, hace ya mucho que se conoce la existencia de un vínculo entre el Hezbollah y la provisión de armas a las guerrillas, para lo cual se ha usado la ruta paraguaya administrada por el cártel de Pedro Juan Caballero.[176] No sólo eso: el ejército rojo japonés aparentemente les ha suministrado mísiles tierra-aire, y pilotos de las FARC fueron entrenados en Libia.[177]

Es lógico por ende que este nuevo involucramiento iraní con la economía de las FARC, y la tolerancia del gobierno de Andrés Pastrana hacia este sospechoso acontecimiento, haya llamado poderosamente la atención de los analistas en el mundo entero. Se piensa que puede haber un aumento en el flujo de armas de Irán a las FARC, y que puede nacer una nueva ruta para la cocaína colombiana, cuyo principal mercado, el norteamericano, está casi saturado.[178]

Otra conexión con el Medio Oriente se hizo visible en junio de 2000, cuando una operación llevada a cabo por la policía antinarcóticos ecuatoriana (Arsenal 4) descubrió una organización criminal de ecuatorianos y colombianos que proveían a las FARC con armamento, municiones, uniformes y otros elementos. Una valija incautada entonces contenía dinares. Raúl Bustos Mina, el ecuatoriano identificado como proveedor de las FARC, los tenía en su poder. De acuerdo a fuentes policiales, la moneda iraquí está siendo utilizada en El Caguán.[179]

La ruta ecuatoriana

Profundizando en la conexión ecuatoriana, sabemos por un miliciano de las FARC que cada semana se envían tres cadáveres desde Venezuela o Ecuador, junto a los cuales viaja gran cantidad de armas. De acuerdo a esta fuente las FARC tienen importantes contactos en los países vecinos: se trata de miembros de la organización que se encargan de conseguir en Venezuela y Ecuador no sólo armas, en su mayoría granadas de fragmentación, sino también cadáveres, en los que se esconden las armas. Los guerrilleros ubican los cuerpos humanos en carruajes mortuorios normales, que luego son transportados hasta Colombia con la excusa de que los familiares de los difuntos los están esperando en cualquier ciudad del país.[180]

Este macabro medio de tráfico de armas de Ecuador a Colombia es quizá el menos significativo. De acuerdo a declaraciones del Jefe de la Policía Judicial Colombiana se han detectado numerosos vuelos clandestinos hacia San Vicente del Caguán, que supuestamente llevarían armas procedentes de Europa del Este. Además de las armas rusas que se han encontrado se sabe que las FARC utilizan cilindros de gas a los que se le agrega nitroamonio, pentatonita, polvo negro y alambres detonadores. Según los informes del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, la mayoría de esos cilindros proviene ilegalmente de Ecuador, donde el producto se consigue más barato que en Colombia.[181]

Informes de inteligencia colombianos muestran que muchas de las armas con las que cuenta la guerrilla son entregadas vía Ecuador por río, o en pequeñas entregas por paracaídas en las regiones sureñas de Putumayo y Caquetá. Varias entregas por paracaídas con cientos de armas fueron detectadas.[182] La complicidad de militares y funcionarios corruptos se da por descontada, poniendo en evidencia una vez más la capacidad de compra de la insurgencia colombiana.

Por otra parte, en octubre de 1996 la policía de Colombia capturó de las FARC 18 cohetes fabricados en los Estados Unidos y vendidos al Ejército ecuatoriano en 1977. En esos meses también se interceptaron una serie de embarques provenientes de Ecuador que incluían armas de fuego, explosivos, uniformes, equipos de comunicaciones y equipo militar destinado a las FARC. Las operaciones se realizaron en la frontera ecuatoriana, especialmente en Ipiales y San Miguel, en el departamento de Putumayo. Las actividades de tráfico están muy bien organizadas, al punto que se identificó un cártel que proveía su material a los grupos subversivos a razón de 12 a 15 toneladas por año.[183]

También, gracias a un operativo realizado en junio de 2000 se pudo establecer que una banda israelí ingresaba armas a territorio colombiano utilizando como puertas de entrada Guayaquil (por mar) y Quito (por tierra). Desde allí se dirigían a Esmeralda, Tulca y Lago Agrio antes de ingresar a Colombia.[184]

Esta región, mencionada en el Capítulo 1, es una de las más sensibles. De acuerdo a la Comisión Antidrogas de Ecuador, en Lago Agrio hay un flujo ininterrumpido de personas, combustible, armas y drogas a través de la frontera. La ciudad es utilizada como fuente de provisión, descanso y recuperación con la complicidad de las autoridades locales. Por otra parte, el mismo informe menciona que la región de Sucumbos es crecientemente peligrosa, ya que sus mismos habitantes participan de las actividades de los narcotraficantes y la guerrilla colombiana. Se estima que más de 4000 ecuatorianos trabajan del lado colombiano de la frontera en las plantaciones de coca.[185]

La ruta peruana

Por otra parte, como quedó claro en el Capítulo 1 cuando se trató el caso de la triangulación de armas jordanas de origen ruso hacia las FARC (causa de fondo de la caída del dúo Fujimori-Montesinos), una de las rutas del tráfico de armas de la mafia rusa hacia la impenetrable selva colombiana pasa por el Perú.

Pero el involucramiento peruano no se limita a ese conocido escándalo. De acuerdo a documentación encontrada en la filial nicaragüense de Nippon Corporation (empresa

perteneciente, como se dijo en el Capítulo 1, a la mafia peruana de los hermanos Aybar), Yugoslavia y China podrían también ser puntos clave en la trama. Los traficantes hicieron análisis confidenciales de dos puntos de embarque de armamentos: Managua y Zagreb. Con respecto a Managua, el documento informaba que el avión seleccionado sería un Boeing 707 con registro panameño. Indicaba asimismo que el pago debía ser en efectivo, y que el 5% debería ser depositado en cuentas en Panamá a través de la Oficina Militar peruana en ese país. Similares precisiones se realizaron para el caso de Zagreb, especificando que la descarga debía hacerse en el Grupo Aéreo N° 8 con personal militar. Se encontró asimismo una carta enviada a China al empresario Luo Shiqing, donde se le pregunta acerca de valores por unidad de armas y municiones.[186]

De acuerdo a un informe de MSNBC, los aviones utilizaban las instalaciones de carga de las Royal Jordanian Airlines en Amman, donde los funcionarios ignoraban las falsas declaraciones de cargamento. Los aviones transitaban bajo protección diplomática de una embajada de habla hispana en Amman. Aunque no se dio a conocer cuál era la embajada, sólo hay dos de habla hispana: la española y la chilena.[187]

Existen más datos extraños. En octubre de 1996 el coronel peruano Francisco Celi (mencionado por el ex militar Luis Aybar Cancho como una de las personas vinculadas al transporte de armas) falleció en la Argentina en un accidente aéreo. El helicóptero en que viajaba, junto con el general de brigada peruano Hugo Soto Núñez y dos oficiales del ejército argentino, se estrelló cerca de Buenos Aires. Los oficiales argentinos eran el general Juan Carlos Andreoli y el coronel Juan Carlos Aguilar. Ambos habían sido involucrados en el caso de tráficos de armas hacia Ecuador.[188]

Según una investigación de la agencia de noticias Imediaperú, los difuntos militares peruanos, a los que se acusa de traficar armas hacia la guerrilla colombiana, habrían tenido nexos con el Servicio de Inteligencia Nacional del Perú. Como se dijo en el primer capítulo, los hermanos Aybar (ahora detenidos) habrían estado conectados con el súper-asesor presidencial peruano, Vladimiro Montesinos. José Luis Aybar habría sido agente del SIN hasta marzo de 2000. Hasta esa fecha habría dispuesto de un teléfono satelital de propiedad del SIN. Su hermano Luis Frank, suboficial retirado, habría mantenido contactos con el SIN a través de su primo, el coronel de la policía Manuel Aybar, actual jefe de la Dirección Nacional de Seguridad de Dignatarios. La agencia Imediaperú apunta más lejos al señalar que la empresa Nippon Corporation podría ser una de las varias firmas fantasmas creadas por el SIN para que no queden huellas de sus adquisiciones.[189] Como se ve, el poder de compra de las FARC ha sido enorme y no queda títere con cabeza en la región que no haya sido contaminado por una complicidad corrupta y delictiva.

Brasil: un paraíso incontrolable para el derrame de ambos tráficos

Aún más problemático que Perú y Ecuador, Brasil es una parte esencial de la logística de la guerrilla y el narcotráfico. Ello no puede sorprender si se considera la longitud de su límite fronterizo con Colombia. Todo se derrama hacia ese gigante de dimensiones continentales, con inconmensurables regiones selváticas de difícil control para su gobierno.

Por cierto, Brasil se ha convertido en la ruta de tránsito más importante del mundo para la cocaína, y ocupa también uno de los principales lugares como vértice de triangulación para las armas que la guerrilla colombiana adquiere a cambio de droga. El 60% de la cocaína consumida en los Estados Unidos proviene del llamado "triángulo blanco", una región que abarca áreas fronterizas de Brasil, Colombia y Perú. Esta actividad genera para la economía brasileña por lo menos un cuarto de millón de puestos de trabajo, desde los campos de marihuana hasta la venta callejera en las ciudades, pasando por los cada vez más numerosos laboratorios de cocaína instalados en su territorio. Como dijo un jefe apresado del cártel de Medellín, Carlos Lehder Rivas, en el contexto de declaraciones que incriminaban al ex dictador panameño Manuel Noriega, "la cocaína es la bomba atómica latinoamericana". Su impune distribución a través de los caminos laberínticos de las selvas brasileñas demuestra su vigencia como arma de destrucción masiva.[190]

Según el comisionado Mauro Spósito, superintendente de la Policía Federal del Brasil y miembro del GAN (Grupo de Informaçao sobre o Narcotráfico), los laboratorios de procesamiento de cocaína que se están estableciendo en su lado de la frontera pronto pueden convertirse en la base de un equivalente brasileño del otrora poderoso cártel de Medellín. Los traficantes expulsados de Perú y Colombia rápidamente se están organizando en Brasil. El GAN ya tiene confeccionada una lista de cientos de políticos y empresarios brasileños involucrados en la actividad. Por otra parte, en Manaos, la capital del Amazonas brasileño, opera FIRMA, una organización de narcotraficantes y sicarios montada por hombres de negocios y policías. Más aún: son catorce los cárteles que operan en todo el país. [191]

Aunque Brasil ha sido una importante ruta de tránsito desde la década del '80, sólo recientemente se ha evaluado correctamente su papel. Solamente en el estado de Río de Janeiro se han identificado 23 rutas internacionales: 18 "de salida" (hacia Europa y los EE.UU.), cuatro "de entrada" (desde Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay), y una "de tránsito" (que triangula heroína de Hong Kong en ruta a EE.UU.).[192]

Más allá de Río, entre las principales escalas brasileñas en la ruta de la cocaína y la marihuana en su camino a Miami y Europa, están las localidades ubicadas en la frontera con Bolivia, como también los puertos de Itajaí en Santa Catarina y Santos en Sao Paulo, y misma metrópolis paulista. La dificultad de erradicar la actividad se aprecia cuando se considera que, gracias a ella, la mendicidad ha desaparecido de las 30 municipalidades ubicadas en las 256 pequeñas islas del río San Francisco, antes el centro del cultivo de la cebolla en Brasil, pero ahora la capital del cannabis. El trabajador rural empleado en una plantación de marihuana gana 30 dólares por día, diez veces más de lo que gana el que trabaja cultivando cebollas. [193]

Aunque recientemente su desempeño mejoró mucho, la DEA ha criticado al Brasil por no poner freno a estas actividades y, especialmente, por no ejercer un control adecuado del lavado de dinero. En 1997 se calculaba que en el país se lavaban por lo menos unos U$S 20.000 millones anuales, cifra que probablemente haya aumentado. Por otra parte, un correlato del fenómeno es el aumento de la violencia. La tasa de asesinatos del país como un todo es de 25 por cada 100.000 habitantes, comparados con los 7,4 de Estados Unidos. En algunos pueblos, esta tasa se dispara a 140 por cada 100.000. Además, la tasa de "masacres" (asesinatos múltiples) aumenta constantemente. En la zona del Gran Sao Paulo se produjeron 47 masacres en 1996 y también en 1997, pero en 1998 la cifra escaló 189. Casi todos estos crímenes están vinculados al narcotráfico

y ocurren en zonas suburbanas "pesadas". La inmensa mayoría de ellos quedan impunes. En Río, sólo el 15% del total de asesinatos se "resuelve".[194]

"Beira-Mar", paradigma del mafioso brasileño

En junio de 1996, después de pasar once meses en la cárcel de alta seguridad de Belo Horizonte, el narcotraficante brasileño Luiz Fernando da Costa, conocido como Fernandinho Beira-Mar, se fugó (previo soborno de medio millón de reales) y se refugió en el Paraguay. Por el momento tuvo más suerte que su principal competidor en el negocio de la droga de Río, Ernaldo Pinto de Medeiros (alias "Ue"), que está preso desde 1996, aunque desde la cárcel continúa dominando un imperio de 25 favelas a través de sus lugartenientes: su cuñado Wanderley Soares, y el secuestrador Paulo César Dos Santos (alias "Linho").[195] Beira-Mar era dueño de la distribución del 40% del negocio de la cocaína en Río de Janeiro (concentrado en las favelas del norte de la ciudad), y de un porcentaje mucho mayor del total brasileño, calculado entre el 60 y el 70%.[196] Fernandinho recién caería preso nuevamente en abril de 2001, después de que su avioneta fuera forzada a descender en medio de la selva colombiana por aviones de guerra de la fuerza aérea de ese país.[197] El hecho fue posterior a la entrega del primer manuscrito de este trabajo para su publicación.

Según Luis Esnal, Fernandinho es "un mulato bajito" que una vez fue grabado por la policía "dirigiendo una sesión de tortura y asesinato de un colaborador que osó tener una relación con su novia". Lo llaman "Beira-Mar" por la maravillosa vista que tiene desde su departamento en Copacabana. Otras versiones atribuyen su alias al nombre de la favela donde nació.[198] Pero más allá de la anécdota, las redes de Beira-Mar van mucho más allá de la favelas cariocas. El narcotraficante es amigo de las FARC porque ha sido de gran ayuda en el intercambio de cocaína por armas, y parte de este tráfico se realizó bajo el cacicazgo de Beira-Mar, desde Paraguay, donde maneja el cártel de Pedro Juan Caballero. Por ello, no sorprende que este país haya sido el primer refugio en su huída del Brasil.

Desde el Paraguay, Beira-Mar siguió manejando sus negocios cariocas, más los muchos otros de su gigantesca red de operaciones vinculadas al doble tráfico de drogas y armas. En ese país Fernandinho es socio del mayor narcotraficante lugareño, Jorge Rafael Guerra, y ambos fueron vinculados al asesinato, en 1999, del vicepresidente Luis María Argaña,[199] a pesar de que según parece el mismo Argaña protegió a Beira-Mar durante un período.[200] También hay versiones (atribuidas a la investigación del Congreso brasileño) sobre vínculos entre Beira-Mar y el ex presidente y ahora senador vitalicio Juan Carlos Wasmosy (sobre quien pesa una multitud de denuncias penales).[201]

Más contundentemente, según el testimonio a la Comisión Parlamentaria de Alda Inés dos Anjos Oliveira (ex novia de Beira-Mar), ella acompañó al mafioso al Paraguay para un encuentro con el ex general Lino Oviedo, acusado del asesinato de Argaña. Beira-Mar habría estado fuertemente vinculado a los planes políticos del ex militar (que como se sabe intentara un golpe de Estado en 1996).[202] Y yendo todavía más lejos, la Comisión brasileña aseguró en su informe sobre el crimen organizado en Paraguay que Oviedo mantuvo negocios con Fernandinho,[203] lo cobijó en una hacienda suya, y que lo hizo con el conocimiento del ex jefe de policía de Paraná, Ricardo Noroña.[204] La Comisión acusó al mismo Oviedo de contrabando internacional de drogas y armas, y de asociación ilícita.[205]

Por otra parte, informes de la DEA recogidos en el dossier parlamentario brasileño señalan que Beira-Mar y Oviedo compartieron negocios en el tráfico de armas y de drogas; que luego de la caída de los cárteles de Cali y Medellín, Beira-Mar es una suerte de sucesor de Pablo Escobar, y que uno de los principales circuitos para la droga colombiana y boliviana pasa por Paraguay (entrando por Pedro Juan Caballero), y desde allí pasa a Brasil, donde es distribuida en Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, San Pablo, Río de Janeiro y Espirito Santo.[206] Extraditado al Brasil, el encarcelamiento de Fernandino fue festejado con un despliegue de fuegos artificiales por su principal rival actual en el narcotráfico de Río de Janeiro, Celso Luiz Rodríguez, alias "Celsinho", cuya fiesta en la favela carioca de Vila Vitém costó unos U$S 7000 según estimaciones de la policía. Es decir que la caída de un mafioso sólo significa el ascenso de otros. Mientras haya una alta demanda para la droga, habrá una oferta.Y mientras esa droga sea ilegal, habrá violencia: la fiesta de Vila Vitém quizá sea prematura, ya que Celso Luiz Rodríguez tiene competidores, entre ellos el sucesor nombrado por Beira-Mar, Rodrigo Barbosa Marinho (alias "Rolinha"), jefe de la distribución de la droga en el morro de Fazendinha. Rolinha tiene conexiones en cinco estados brasileños y casi toda la sofisticación delictiva de su predecesor. Se teme una guerra entre mafiosos candidatos a la sucesión de Beira-Mar.[207]

Gana quien gane, lo que es seguro es que importantes segmentos del poder político no dejarán de ser ajenos al lucrativo negocio. Digno es de destacarse que Beira-Mar no es el único traficante mafioso con quien Lino Oviedo tuvo estrechos vínculos. También los tuvo con un coronel retirado del ejército israelí que a mediados de la década del '90 llegó a ser agregado militar en Buenos Aires, y que a fines de la década operaba como traficante de armas e instructor de grupos paramilitares fieles al ex golpista guaraní. El ex coronel Meir Zamir fue detenido por agentes antinarcóticos paraguayos en julio de 1999, e interrogado durante 36 horas en presencia de agentes de la DEA y la CIA destacados en Asunción. Así se supo que Zamir conocía en detalle el lugar de Buenos Aires donde los partidarios de Oviedo, asilado en Argentina desde marzo, almacenaban gran cantidad de armas.[208] De acuerdo con los voceros, el interrogatorio de los paraguayos fue seguido por agentes norteamericanos instalados en Paraguay, pues la DEA y la CIA sospechan que Zamir vendió fusiles a la guerrilla colombiana, a grupos paramilitares de ese país y a cárteles de narcotraficantes en Perú, Bolivia y Paraguay. [209]

La complicidad paraguaya

Como lo indican estos datos, la República del Paraguay no es un problema menor para el control del tráfico de armas en Sudamérica: las armas son el principal medio de pago para la cocaína que llega al Paraguay. Gran cantidad de armas exportadas desde Brasil diariamente regresan ilegalmente a ese país a través de la frontera paraguaya, donde prácticamente no existen controles. Además, armas pesadas fabricadas en otros países ingresan por la misma vía. Reporteros de *O Estado* recorrieron 750 kilómetros de caminos en el sur de Mato Grosso do Sul sin encontrar policías, a pesar de que la región es la ruta principal de traficantes de drogas y armas hacia Brasil. Algunas armas se quedan allí y otras fluyen hacia otros destinos: por ejemplo, Colombia. Hay solamente 80 miembros de la Policía Federal cuidando 500 km. de frontera con el Paraguay. Estos hombres están distribuidos en tres estaciones, pero sólo 50 de ellos están verdaderamente involucrados en las operaciones.[210]

Más allá del Brasil, en 1993 una comisión parlamentaria paraguaya informó que una isla del Caribe perteneciente a Colombia era utilizada como base para militares paraguayos involucrados en el tráfico de armas a Sudáfrica. Armas norteamericanas y alemanas eran embarcadas desde la isla de San Andrés hacia Colombia y Nicaragua. El ejército paraguayo también fue sospechado de vender armas a Irán hacia finales de los 80, durante el conflicto con Iraq.[211]

Hechos como estos abrieron una investigación de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Paraguay. La CBI comenzó la investigación de tres firmas que se dedican a la venta de armas: Chaco Trading y Hi Tech de Asunción, y Pantanal de Pedro Juan Caballero. Se manejaba entonces información de que militares de alto rango recomendaron la habilitación de estas empresas. En esa oportunidad se había solicitado a la firma Pantanal copias del acta de su constitución, fecha de apertura, importaciones realizadas, nombre de los propietarios, tipo de municiones que venden, y si tenían alguna conexión con la Dirección de Material Bélico (DIMABEL) dependiente de las Fuerzas Armadas. La empresa no envió los materiales requeridos y su propietario, Luis Ramírez Suárez, negó cualquier vinculación con el tráfico de armas. Aseguró que jamás tuvo relaciones con los militares y que si el Ejército Paraguayo traficara armas no estaría en la difícil situación económica que atraviesa en estos momentos. Hi Tech sí entregó los documentos solicitados. Chaco Trading respondió por escrito alegando que ya no se dedica a la importación y comercialización de armas.[212]

Beira-Mar y su etapa colombiana

Los hallazgos de la CBI dejan mucho que desear: denuncian peces chicos y encubren grandes personajes. Las revelaciones brasileñas son, por el contrario, mucho más serias y contundentes, cosa que no sorprende porque en el Paraguay todo el mundo del poder está en alguna medida involucrado con el tráfico de drogas y armas.

La situación paraguaya, que facilita ambos tráficos[213], es consecuencia directa de las complicidades señaladas por la Comisión Parlamentaria brasileña. Beira-Mar y sus operaciones (que continuarán a pesar de la caída del mafioso) tienen las espaldas bien cubiertas en Paraguay, donde *ninguno* de los principales políticos está libre de sospechas en materia de tráfico de drogas y de armas. Es por ello que, cuando las circunstancias ya no permitieron que Fernandinho siguiera en Paraguay, éste pudo escapar fácilmente, poniéndose bajo la protección de quienes le compran las armas.

Por cierto, cuando en mayo de 2000 la mano derecha de Beira-Mar, Marcelo da Silva Leandro (alias “Marcelino Niteroi”), fue apresado en Paraguay[214], se supo que aquel había pasado a refugiarse en Colombia con protección de las FARC, en un campamento sito en plena zona desmilitarizada comandado por el jefe subversivo conocido como “el Negro Acacio” (cuyo verdadero nombre es Tomás Medina Caracas).[215] Según el jefe de la División de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía Federal del Brasil, Getulio Becerra, pocos meses después de ser nombrado comandante del Frente 16 de las FARC, este jefe guerrillero se asoció con Beira-Mar para facilitar el negocio de intercambiar cocaína por armas.[216]

En enero de 2001, rumores no confirmados esparcidos por la cadena brasileña *Globo News* lo dieron por muerto, quizá para sacarlo de los radares de las pesquisas.[217] Posteriores noticias de febrero de 2001, sembraron la especie de que Beira-Mar habría abandonado Colombia con destino desconocido.[218] Estas versiones tampoco sorprenden si se considera la actividad desplegada recientemente por las fuerzas regulares colombianas, ansiosas de demostrarle al general Peter Pace, comandante de las fuerzas norteamericanas en América latina, su compromiso en la lucha contra la droga.

Por cierto, en su primera fase la "Operación Gato Negro" (lanzada el 11 de febrero de 2001) no consiguió apresar a Beira-Mar ni a su protector el comandante Negro Acacio, pero sí detuvo a la novia del primero y a otros 28 traficantes. Los soldados regulares cayeron por sorpresa, en medio de la noche, sobre la pista del pueblo amazónico de Barranco Minas, 190 kilómetros al norte del Brasil y a una distancia similar al oeste de Venezuela. La región es considerada un bastión del célebre Frente 16 de las FARC, una unidad dedicada casi con exclusividad al intercambio de drogas por dinero, armas y tecnología de comunicación. Según informaron las autoridades, los suministros para las FARC llegan en aviones manejados por pilotos expertos que trabajan para Beira-Mar.[219] Barranco Minas tiene una pista de aterrizaje de 1800 metros, que permite la operación de aviones del porte de un DC-10. Gracias a ella, Beira-Mar y su asociado de Goias, el empresario hotelero Leonardo Dias Mendonça, pudieron coordinar la entrega de armas desde Surinam, con la complicidad del cártel del ex presidente Dési Bouterse (a quien dedicaremos un acápite más abajo).[220]

Como ya se sugirió, hacia el sur Beira-Mar posee una importante organización en la localidad paraguaya de Pedro Juan Caballero, que a pesar de algunos avances todavía no ha podido desmantelarse. En febrero de 2001 se informó que Fausto Rodríguez Quiñónez, ciudadano colombiano y guerrillero de las FARC, había sido arrestado en dicho pueblo junto al brasileño Robson Cantos Farías.[221] Rodríguez era el lugarteniente del comandante Acacio, protector y cliente de Beira-Mar. Ya había sido aprehendido en enero de 1998, cuando se interceptó una operación de intercambio de cocaína por armas en el aeropuerto municipal de Juruena, en el Mato Grosso brasileño, pero se fugó en julio de 2000, sólo para caer nuevamente en Paraguay. Según las autoridades de este país, hay numerosos guerrilleros de las FARC en la franja fronteriza del Paraguay y Brasil, entre las ciudades de Pedro Juan Caballero y Ponta Porá.[222]

Más aún, según fuentes de inteligencia norteamericanas, Da Costa (nuestro Beira-Mar) participó de operativos de triangulación de armas jordanas a las FARC (descriptos, en su fase peruana, en el Capítulo 1) desde su base paraguaya de Pedro Juan Caballero. A las armas las obtenía a través de un comerciante libanés, Fuad Jamil, que usaba una empresa de importación legítima para el contrabando de armas desde la misma localidad. Dentro de Colombia este intercambio se coordina a través del pueblo de Barranco Minas, es decir el baluarte del Frente 16 de las FARC , por su comandante el Negro Acacio. [223]

Por otra parte, aunque la mayor parte de las armas trianguladas desde Pedro Juan Caballero fueron a las FARC, cierta cantidad se destinó también al Hezbollah, la guerrilla fundamentalista islámica de origen iraní que ha calado raíces en Argentina, Paraguay, Ecuador, Venezuela y Brasil, y que ha sido autora de grandes atentados terroristas en Buenos Aires.[224] Este parentesco es poco sorprendente cuando se recuerda un hecho que describimos más arriba: que en

diciembre de 1999 los iraníes invirtieron tres millones de dólares en un frigorífico en Colombia, en pleno territorio de las FARC y sospechosamente lejos de la mejor zona ganadera del país (lo que demuestra que no están allí para maximizar beneficios económicos).[225]

Por su parte, las autoridades colombianas no siempre mostraron gran empeño en cooperar con las brasileñas en la búsqueda de Beira-Mar; en todo caso, el aparente empeño es reciente y se debe a la presión norteamericana. Más aún, en octubre de 2000 una operación encubierta de la policía brasileña para localizar al mafioso en Bogotá fue frustrada por las autoridades bogotanas en el aeropuerto de Eldorado. La misión era comandada por el propio secretario regional de Seguridad Pública de Río de Janeiro, coronel Josias Quintal, quien fue acompañado por el subsecretario de operaciones de la Policía Civil, coronel Lenine de Freitas, y la fiscal Marcia Velasco. Pero los funcionarios fueron retenidos en el aeropuerto con excusas triviales (falta de certificados de vacunas), y su presencia fue dada a conocer, frustrando su objetivo.[226]

Por su parte, el coronel Quintal pidió a la policía brasileña que esté atenta a la presencia de extranjeros en las favelas de Río. Se teme que los narcos y guerrilleros colombianos usen el aparato montado por Beira-Mar en Río para refugiarse cuando llegue el embate del Plan Colombia.[227]

No sólo las autoridades colombianas son sospechosas de haber sido poco cooperativas hasta muy recientemente cuando se trataba de apresar a Fernandinho. Gracias al uso de escuchas telefónicos autorizados, la Policía Federal del Brasil logró capturar a policías cómplices de éste.[228] Más importante aún, Beira-Mar tiene fuertes conexiones con una serie de diputados y jueces en diversas regiones del Brasil. Incluso usó aviones militares para enviar droga a Europa, hecho demostrado con el arresto del Teniente Coronel de la Fuerza Aérea, Paulo Sergio Pereira de Oliveira. Los nexos interpersonales son tan complejos que el vínculo entre oficiales corruptos de la Fuerza Aérea Brasileña y Beira-Mar se establecía a través de un contacto boliviano, la traficante Lila Mirta Ibáñez López, ahora presa en Río de Janeiro.[229]

Por su parte, la Comisión Parlamentaria de Investigación abierta para estudiar los lazos del narcotráfico en Brasil descubrió una maraña de nexos entre Fernandinho, políticos, diputados, ex ministros, ex gobernadores, fiscales, intendentes, jueces, policías, empresarios, militares, y los catorce cárteles que operan en Brasil.[230] Desde la caída de Beira-Mar, en abril de 2001, sus declaraciones comprometieron gravemente a unas novecientas personalidades brasileñas conocidas.[231] Aún antes de ello, ya pesaban graves cargos sobre el legislador federal Augusto Farias, hermano de aquel Paulo César Farias asesinado en 1996 y tesorero del ex presidente Fernando Collor de Mello. No sólo se sabe que el diputado Farias está vinculado a los cárteles de la droga; ahora se sospecha que mandó a matar a su hermano.[232]

El informe de la Comisión incluye también 31 empresas telefónicas acusadas de no brindar los datos requeridos sobre clientes sospechosos. Asimismo, la dirección impositiva brasileña y el Banco Central están bajo sospecha “por demorar las informaciones relacionadas con sospechosos que movían cuentas bancarias multimillonarias en el exterior”. La Comisión dice que el Banco Central, conducido por el reputado financista Armiño Fraga, “impidió” la identificación de posibles testaferros. A la vez, los legisladores entablaron procesos penales contra el HSBC, el Banco de Amazonas, el Banco del Estado de Goias, el Banco Rural, y el Banco Mercantil Finasa.[233]

Hasta recientemente, las principales redes criminales brasileñas en la mira eran las del noroeste, la de la región amazónica, la de Sao Paulo y la del puerto de Río de Janeiro, pero ahora se suma a éstas el cártel de Paraná, cuya existencia era conocida pero cuya envergadura fue puesta al descubierto por la Comisión.[234] Esta organización tiene su base en la triple frontera con la Argentina y Paraguay. Los relatos de siete testigos que, encapuchados para no ser reconocidos, declararon en el Congreso, revelan que no sólo alrededor de 200 policías trabajan para esta mafia, sino que también lo hacen numerosos empresarios. El cártel posee un sofisticado sistema de lavado de dinero, y utiliza por lo menos *cuatro mil empresas como pantalla*. Según el diputado Angelo Vanhoni, "si todas estas empresas fueran reales no habría un solo desempleado en Foz de Iguazú".[235] Estos nexos, multiplicados por los catorce cárteles que operan en el país, son la otra cara de la moneda de las dificultades que ha enfrentado el presidente Fernando Henrique Cardoso para aprobar una ley que permita eliminar el secreto bancario para combatir el narcotráfico, tres veces enviada infructuosamente al congreso brasileño.[236]

La ruta brasileña y la conexión Surinam

El rompecabezas del doble tráfico de armas y drogas no se acaba con Colombia, Brasil y Paraguay. La llamada "conexión Surinam" se reevaluó en 1999, gracias en parte al trabajo de la Policía Federal Brasileña y la Comisión Parlamentaria de combate al narcotráfico del Brasil. Esta conexión fue puesta en evidencia cuando en agosto de ese año cinco brasileños, entre ellos dos pilotos, fueron detenidos en Oriximiná, en el sur del estado de Pará. Dentro del grupo había tres hombres de negocios del estado de Goiás (donde está situada Brasilia). La banda estaba vinculada al ex dictador de Surinam, Dési Bouterse, buscado por Interpol a pedido de Brasil y de Holanda por el envío de drogas a través del Brasil con destino a Ámsterdam y el resto de Europa. En poder del grupo se encontraron más de 20 aeronaves, mísiles tierra-aire y otros capaces de hundir barcos.[237]

En realidad, la conexión Surinam venía investigándose desde mucho antes. Después de las ejecuciones de opositores de 1982, el director de la CIA William Casey estudió la posibilidad de derrocar a Bouterse, pero encontró oposición en el Congreso norteamericano y sus agentes informaron que tenían escasas posibilidades en el campo de operaciones.[238] En 1986, el capitán Etienne Boerenveen, el más cercano ayudante de Bouterse y su segundo como comandante del ejército, fue sentenciado a doce años de cárcel en Miami por conspirar para permitir a los cárteles colombianos el uso de las pistas de aterrizaje de Surinam para transportar droga a los Estados Unidos. Fue el propio Bouterse quien pagó U$S 600.000 para la defensa de Boerenveen, y cuando éste fue liberado bajo palabra el año siguiente, Bouterse lo promovió a comandante y lo hizo jefe de la policía militar y de los servicios de inteligencia de Surinam. [239]

En 1990, dos diplomáticos surinameses fueron expulsados de Holanda por actividades vinculadas al narcotráfico, y en 1991 otro estrecho colaborador de Bouterse fue apresado en ese país. Ese año, altos funcionarios norteamericanos declaraban que el país se estaba "convirtiendo en un importante punto de embarque para el mercado de drogas norteamericano y quizá llegará a ser un centro de laboratorios permanentes para la elaboración de cocaína en gran escala". Según estas fuentes y los resúmenes de análisis de inteligencia occidentales, Dési Bouterse permitió que su país se convirtiera en un importante cruce de cargas de drogas y armas, hacia fines de la década del '80. Según fuentes de Surinam, el ejército protege y permite el uso de numerosas

pistas clandestinas de aterrizaje, aparte de las dos oficiales que hacen posible el uso de aviones de mayor porte. Importantes laboratorios para el refinamiento de cocaína han sido avistados, y aviones privados no vinculados al narcotráfico, con planes de vuelo oficiales, han sido derribados por el ejército cuando se aproximaron a estos sitios.[240]

Según el *Washington Post*, los "violadores significativos" de la ley de narcóticos nombrados por los informes de inteligencia occidentales incluyen nueve funcionarios de Surinam (incluido Bouterse), dos colombianos que sirvieron como contactos con el cártel de Medellín, y tres empresas establecidas en Surinam y el Caribe. El mismo embajador de Bouterse en Washington, Wim A. Udenhout, declaró en 1991 que el 60% de la cocaína colombiana que ingresa a Rótterdam, uno de los puertos de entrada más importantes de Europa, proviene de Surinam. El país también se convirtió en un punto de intercambio y triangulación para los agentes químicos necesarios para producir cocaína, prevenientes de Holanda y Alemania.[241]

Estos hechos son una ilustración más de algo señalado en el primer capítulo: que el tráfico en gran escala de armas y narcóticos requiere de la complicidad oficial; y que la corrupción de los organismos de un Estado, y el tráfico de armas y narcóticos en gran escala, no son sino dos caras de una misma moneda. Se necesitan funcionalmente y el uno no puede existir sin el otro, particularmente cuando la droga se abona con armamentos. En el caso que analizamos las investigaciones e imputaciones norteamericanas (luego retomadas por Holanda) incluyeron al Banco Central de Surinam, que fue una pieza necesaria del cártel armado por Bouterse.[242]

Por otra parte, la subcomisión de relaciones internacionales del Senado norteamericano para el terrorismo, los narcóticos y las operaciones internacionales, investigó el uso que hizo Bouterse del Bank of Credit and Commerce International (BCCI), para lavar los beneficios de sus operaciones de narcotráfico. Según Jonathan Winer, un investigador de la subcomisión del Senado, habría en este punto una gran similitud con el depuesto dictador panameño, Manuel Noriega, quien también usó al BCCI para el lavado de dinero del narcotráfico. El Banco Central de Surinam tenía cuatro cuentas en la filial de Miami del BCCI. La subcomisión del Senado norteamericano sospechó de sus operaciones cuando identificó el depósito de 1986, en la cuenta Nº 01007647 que el Banco Central de Surinam tenía en el BCCI, de U$S 200 millones en carácter de préstamo, otorgado por la empresa fantasma Camari Corporation, basada en las Antillas Neerlandesas y prácticamente sin capital.[243]

A pesar de las sospechas, y no obstante el hecho de que la insurrección de los rebeldes de la selva ya estaba derrotada hacia 1988 y liquidada en 1990, Surinam continuó importando cantidades importantes de armamentos a Brasil, Yugoslavia y Polonia. Brasil le vendió tanques y vehículos blindados. De Polonia llegaron aviones con cargamentos de armas manufacturadas en Bélgica, Finlandia y Austria. Informes de inteligencia norteamericanos estiman altamente probable que gran parte de estas armas terminaran en manos colombianas, ya sea en el cártel de Medellín o en la guerrilla que en los hechos era su aliada. Entre 1987 y 1989 se detectaron tres o cuatro viajes de Pablo Escobar a Surinam.[244] Por otra parte, es necesario destacar que mientras duró la guerra civil contra los insurrectos "marrones" de la selva, por lo menos parte de las armas compradas con cocaína fueron para el ejército de 2500 hombres del propio Bouterse. Esto incluyó una partida de helicópteros Bell triangulada desde Venezuela, que era el supuesto comprador.[245]

Concluida la guerra civil, hacia fines de la década del ’90 emergió más evidencia sobre el cártel de Bouterse. Desde 1998 la policía federal del Brasil ha capturado cerca de 40 traficantes brasileños acusados de obtener cocaína de las FARC a cambio de armas adquiridas con la ayuda de las autoridades de Surinam. Estos casos surgen del Informe de la “Operación Tornado” que documenta la realización de decomisos de 977 kilos de cocaína, nueve aeronaves, y sumas de dinero quizá exageradas por los medios, de 2198 millones de dólares y un 1,4 millones de francos franceses. [246]

La Operación Tornado comenzó en septiembre de 1998 cuando la policía decomisó 141 kilos de cocaína en Buritucupu y arrestó cinco narcotraficantes. La policía federal brasileña descubrió que representantes de la guerrilla tienen libertad de movimiento en Brasilia, donde también se radica el embajador de Surinam, Rupert Christofer. El Comité Investigativo en Tráfico de Drogas del Congreso declaró que Christofer es amigo de Dési Bouterse, quien ya fue condenado en Holanda por narcotráfico. El éxito principal de la policía federal fue el desmantelamiento de la banda del ya mencionado empresario hotelero Leonardo Dias Mendonça. Según un testigo, Mendonça visitó a Dino Bouterse, hijo del ex dictador y también buscado por INTERPOL. El propósito de la visita era comprar armas para ser entregadas a las FARC. Mendonça negó las acusaciones, pero las coordenadas geográficas encontradas en los planes de vuelo de una de las aeronaves decomisadas identificaban una parada en Barranco Minas, ciudad controlada por las FARC en el noreste de Colombia.[247]

Aún otro caso, ya en 1999, es el de un avión proveniente de Surinam que realizó un aterrizaje de emergencia en el estado de Pará. Llevaba una carga de armamentos para las FARC, incautadas por las autoridades brasileñas. Como en casos anteriores, éstas acusan a la mismísima embajada de Surinam en Brasilia de estar involucrada en la operación, mientras el embajador se niega a prestar declaración invocando su inmunidad diplomática. En otro episodio similar de julio de 2000, dos aviones pequeños de Surinam fueron detectados en vuelo ilegal sobre espacio aéreo brasileño, pero pudieron llegar a destino en la pista clandestina de Vaupes, en Colombia, y desembarcar su carga de armas.[248]

Otra fuente de información sobre las operaciones del cártel de Bouterse es el narcotraficante colombiano, Joaquín Hernández Giménez, detenido en octubre de 1998 en Brasil. Su banda confesó ante la policía que adquiría cocaína en Colombia en canje por armas, y luego se encargaba de su distribución en Brasil y su exportación a Europa, cruzando el Atlántico a través de Surinam.[249] Esta detención fue la base de una investigación que llevó a inculpar a tres hombres de negocios del estado de Goias, incluido Mendonça.[250]

Según informó uno de los vicepresidentes de la comisión que investiga estos delitos, las aeronaves brasileñas cargan las armas en Surinam y las transportan a través del Amazonas hacia localidades colombianas fronterizas con Brasil. Allí cargan la cocaína. Las armas encontradas son de alta tecnología: ametralladoras Uzi, pistolas Glock, fusiles AK-47 e incluso mísiles. Son provistas por traficantes desde la Florida y por la mafia rusa. Se trataría de las mismas organizaciones que proveyeron armas a Yugoslavia durante la guerra. Esto surge a partir de las declaraciones de los pilotos y miembros de la mafia rusa detenidos por la policía federal. Sólo parte de la cocaína queda en Brasil; es descargada en pistas clandestinas del sur del estado de Pará. El grueso va a Europa y los Estados Unidos.[251]

La investigación que lleva el nombre de "Conexión Surinam" se vincula asimismo con la detención el 22 de septiembre de 2000 de nuestro conocido Francisco Antonio Cadenas Collazo (alias Padre Oliverio Medina), el sacerdote que cumplió labores de coordinador de prensa en San Vicente de Caguán y que desde comienzos de 1996 es "embajador" de las FARC en Brasil. Aunque luego fue liberado, fuentes militares brasileñas y colombianas afirman que la detención formó parte de las investigaciones por tráfico de armas y cocaína a través del Brasil. El caso fue destapado por la policía federal con apoyo de la comisión parlamentaria de combate al narcotráfico de ese país. Veinte avionetas y algunos mísiles tierra-aire fueron decomisados, y 44 pistas clandestinas cerca de la frontera con Colombia fueron destruidas.

Como se dijo, Hernández confesó que se dedicaba a canjear armas por cocaína con las FARC. La información recopilada parece comprometer a esta guerrilla insurgente y a su "embajador" en Brasil, el Padre Medina. En una situación similar se encontró hace un año y medio Marcos Calarcá, otro integrante de la comisión internacional de las FARC, quien fuera detenido en Bolivia en marzo de 1998. Calarcá casi fue deportado a Colombia, pero el gobierno boliviano consideró que el guerrillero tenía un status político y que eso primaba sobre una petición de deportación por parte de Bogotá.[252] Otros personajes involucrados en la investigación "Conexión Surinam" son nuestros conocidos Fernandinho Beira-Mar y el "Negro" Acacio. Un ex traficante declaró haber trabajado durante tres años en Barranco Mina para ellos, cargando cocaína en aviones brasileños. A cambio, se descargaban armas traídas de Surinam, uno de los canales de distribución de droga colombiana hacia Europa y el mundo gracias al espíritu empresarial de un ex sargento convertido en político y hombre fuerte.[253]

El caso de Dési Bouterse

Como se dijo, el teniente coronel Dési Bouterse y su hijo Dino están buscados por INTERPOL a pedido de Holanda, acusados de participar en una banda que trafica armas y drogas entre Surinam y Colombia pasando por el Amazonas brasileño.[254] Durante veinte años, Bouterse dominó la política de Surinam, un país que en un principio fue colonizado por ingleses enviados de Barbados, y que en 1667 fue intercambiado con Holanda por la isla de Manhattan. Se independizó en 1975. En 1980 un golpe de suboficiales catapultó al poder al entonces sargento Bouterse, derrocando el régimen constitucional de Henk Aaron. A partir de entonces y hasta mayo de 2000, el auto-promovido teniente coronel Bouterse fue el poder detrás del trono en Surinam. En 1982 fue responsable de la ejecución de 15 dirigentes de la oposición, motivo por el cual en 2001 (ya convicto por narcotráfico) se le iniciaron investigaciones por violaciones de derechos humanos en Holanda. Fue un sangriento represor de los "marrones" (*marroons*, o *bush people*, el violentamente rebelde pueblo tribal de origen africano que vive primitivamente en la selva, y que durante más de una década llevó a cabo ataques contra empresas y obras de infraestructura en Surinam).

En 1987 Bouterse redactó y sancionó una Constitución que otorga importantes poderes de intervención al ejército (institución a la que esta "ley de leyes" denomina "la vanguardia del pueblo"). También prohíbe la extradición de surinameses a otros países. Aunque en 1987 la Asamblea del Pueblo eligió a un presidente civil, Ramsewak Shankar, Bouterse continuó siendo el verdadero poder en Surinam.

No obstante, Bouterse estaba descontento con la evolución política de su país, y a fines de 1990 ejecutó otro golpe de Estado, esta vez contra Shankar, comprometiéndose a efectuar elecciones en cien días. Como resultado de éstas en 1991 la presidencia pasó a Ronald Venetiaan, un civil respetado. Pero Bouterse sumó a su condición de caudillo del ejército un nuevo papel: jefe del principal y más popular partido político (el NDP). El hombre fuerte de Surinam es muy popular, amado por los pobres e indigentes (siempre que no sean de la etnia selvática de los "marrones"). El secreto del éxito político de Bouterse consistió en convertirse en el líder de la mayoría de gentes de razas mixtas, no representadas por los partidos más viejos, uno de los cuales es hindú (el VHP), otro africano (el NPS) y uno más pequeño de etnia indonesa (el KTPI).

En 1996 la presidencia pasó a Jules Wijdenbosch, uno de sus lugartenientes en el golpe de 1980 y miembro del NPD. Cuando se le preguntó si era el hombre más poderoso del país, Bouterse contestó: "No se trata de mi ambición personal. Todos los presidentes de este país llegaron a esa posición a través de mi influencia". [255]

Eso fue hasta que, en mayo de 2000, un hombre que ya había sido presidente y que ahora es su enemigo, Ronald Venetiaan, ganó las elecciones. Al momento de escribirse estas líneas Bouterse es diputado en el parlamento y hay amenazas de un golpe de Estado que estaría inspirado por sus fuerzas, a la vez que el presidente Venetiaan contraataca amenazando con dejar sin efecto la cláusula constitucional que impide extraditar delincuentes de Surinam, y enviarlo a Holanda donde ya tiene sentencia firme por narcotráfico. Bouterse sonríe pero su futuro es incierto. También lo es el de sus enemigos.[256]

Durante su largo dominio de la política de Surinam, Bouterse logró construir un cártel de tráfico de armas y drogas, con ramificaciones en Holanda,[257] frecuentemente usando territorio brasileño y demostrando la vulnerabilidad de la frontera del gigante del subdesarrollo. Aunque sus enemigos lo han llamado "Noriega II", en espera de una improbable intervención norteamericana como la que tuvo lugar en Panamá, el cártel surinamés de Bouterse cuenta con múltiples cómplices y socios, entre ellos, como se dijo, el ejército y el Banco Central de su país. Por cierto, las autoridades holandesas presentaron cargos de tráfico de drogas contra el Presidente del Banco Central de Surinam, Henk Goedschalk. Aunque no hay pruebas contundentes, se sospecha que Goedschalk lava dinero para la banda de Bouterse. Junto a éste también son acusados dos empresarios de Surinam, Richard Ronald Lowes y Moenipersad Misier, por previas operaciones de tráfico con el cártel de Medellín.[258] Bouterse fue sentenciado en ausencia por una corte holandesa a 16 años de prisión, pero por ahora se ríe de estas pretensiones de la justicia neerlandesa desde su bunker político en Surinam.[259]

El BCCI, Jimmy Carter y el lavado de dinero

La detección de lavado de dinero con la complicidad del Banco Central de Surinam, a través del *Bank of Credit and Comerce International* (BCCI), es particularmente interesante porque el BCCI fue el centro de uno de lo más grandes escándalos financieros de décadas recientes. Banco de capitales árabes fundado en 1972, financiado desde Abu Dhabi pero concebido en Karachi y manejado por paquistaníes, estaba legalmente establecido en Luxemburgo pero su sede central estaba en Londres. En Estados Unidos tenía cinco filiales: en Nueva York, Los Ángeles, Miami, Boca Ratón y Tampa. Como se ve, tenía una importante

concentración de negocios en la Florida. Era la elección preferida de narcotraficantes, mafiosos, y dictadores como Bouterse y el panameño Manuel Noriega, que también operaba con el BCCI.

Pero a la vez, el banco tenía una asociación cercana con hombres de Estado más "respetables". Una de las fundaciones manejadas por el filantrópico ex presidente norteamericano Jimmy Carter recibió una donación de ocho millones de dólares directamente del fundador del BCCI. Y el secretario de defensa de Carter, Clark Clifford, fue asesor del BCCI. Por otra parte, la subrepticia toma de control del banco norteamericano *First American* de parte del BCCI se llevó a cabo durante el gobierno de Carter, y bajo la dirección del íntimo amigo de éste y ex director del *Office of Management and Budget*, T. Bertram Lance. El vínculo entre los principales políticos del estado norteamericano de Georgia (de donde es oriundo Carter) y el BCCI fue en todo momento muy estrecho. Algunos de estos personajes se liberaron de deudas importantes gracias al BCCI. Y Carter jamás hizo averiguaciones sobre los negocios del hombre que financiaba sus empresas filantrópicas.[260] El banco se clausuró cuando el Banco de Inglaterra lo acusó de fraude masivo, estimado entre 5 y 15 mil millones de dólares. Carter no estuvo entre los damnificados sino entre los beneficiados.[261]

Uno de los aspectos más paradójicos sobre la caída del BCCI es su relación con la CIA y con la comunidad de inteligencia de los EE.UU. La documentación disponible demuestra que la CIA conocía los negocios del BCCI mucho antes de su denuncia y clausura, y que hubieron reuniones entre el ex director de la CIA William Casey y el presidente del BCCI, Agha Hasan Abedi. Adnan Khashoggi, el mercader de armas saudita (socio del presidente de Barrick Gold, Peter Munk, quien a su vez le comprara a la familia De la Rúa la mina de oro de Diablillos) era cliente del BCCI, y fue quien financió la compra de armas en el operativo Irán-Contras con la anuencia de sectores del gobierno norteamericano durante la administración de Ronald Reagan.

El vínculo entre agentes u operativos de la CIA y el BCCI era fuerte. Según el informe al Congreso de los senadores John Kerry y Hank Brown, la CIA no sólo conocía las actividades corruptas del BCCI, sino que lo usaba para sus propios fines políticos. También conocía los vínculos entre el BCCI y su secreto banco subsidiario estadounidense, el *First American* (el más importante de Washington DC), pero en ningún momento los denunció a la Reserva Federal, a la DEA ni al Departamento de Justicia. Más aún, los principales contactos de la CIA en el Medio Oriente, Kamal Adham y Abdul Raouf Khalil, eran accionistas del BCCI.[262]

Pero lo más "sensacional" (desde un punto de vista "amarillo") fue la relación entre el BCCI y la familia Bush. Decimos "familia Bush" porque en 1991 se hablaba en esos términos cuando el involucrado era George W. Bush, el hijo del entonces presidente. Por cierto, el actual presidente de los Estados Unidos era en 1991 un empresario petrolero que había fracasado en sus primeros negocios y que se iniciaba en una segunda intentona a través de una modestísima empresa llamada Harken Energy Corporation, de la que era accionista y miembro del directorio. A partir de la participación del hijo del presidente en ese directorio, Talat Othman, otro de sus miembros, comenzó a tener asiduos contactos, antes desconocidos, con la Casa Blanca, que comenzó a consultarlo sobre su política hacia el Medio Oriente. Y muy pronto la empresa tuvo su primera gran oportunidad comercial, derrotando al gigante Amoco en una licitación del gobierno de Bahrain para perforar pozos *offshore*.

La conquista del contrato era sospechosa debido a la absoluta falta de experiencia de Harken Corp. en materia de perforaciones en el mar, pero no llamó la atención de nadie hasta que estalló el escándalo del BCCI, y allí las piezas empezaron a encajar en un rompecabezas siniestro. El banco de los narcotraficantes del mundo entero estaba muy bien representado en la empresa cuyo directorio estaba integrado por un accionista que es el actual presidente de los EE.UU. La trama era así, tal como fue contada por el *Wall Street Journal* mucho antes de que sospechara que aquel poco prestigioso hijo del presidente se convertiría en presidente:

- El jeque Khalifah bin-Salman al-Kalifah, primer ministro de Bahrain y hermano del emir reinante, jugó un papel clave en el otorgamiento del negocio a la empresa. El jeque era un accionista importante del BCCI.
- El jeque Abdullah Bakhsh, un accionista de gran importancia en Harken Corp., representado en su directorio por Talat Othman (el asesor de Bush padre y amigo de Bush hijo), era socio de dos accionistas importantes del BCCI, uno de los cuales, el ahora famoso y fraudulento banquero Ghaith Pharaon, actuaba como su hombre de relaciones públicas.
- Los banqueros de inversiones que trabajaban para Harken Corp. fueron los gestores del ingreso del BCCI a los Estados Unidos. Estos mismos banqueros ayudaron a Harken a refinanciar deudas acuciantes, a través de un banco suizo que entonces era socio del BCCI.
- Entre los consultores que asesoraron a Harken Corp. estaba Kamal Adhman, uno de los principales dueños del BCCI e íntimo amigo de Ghaith Pharaon.[263]
- Por último, uno de los principales colaboradores de la misma Casa Blanca, Edward Roger, era un cercano asociado del mencionado Kamal Adhman.[264]

La trama, en la cima del poder y la riqueza, cierra un lazo con el subsuelo de los narcotraficantes y narcoinsurgentes. Harken Corp. fue salvada de la bancarrota por la Unión de Bancos Suizos gracias a la intermediación de Jackson Stephens, un amigo de George W. Bush. La Unión de Bancos Suizos era entonces copropietaria con el BCCI, de un banco menor anclado en Ginebra. A su vez, Stephens estaba vinculado al BCCI desde la década del ‘70, cuando sugirió por primera vez que intentara comprar al *First American*. El BCCI usó este tejido de relaciones para succionar fondos sucios y lavarlos. Los narcotraficantes lo aprovecharon mientras pudieron, y también salieron gananciosos los mercaderes que gracias al BCCI pudieron cobrar dinero “limpio” por las armas que los narcoinsurgentes pagaban con cocaína. Cuando el Banco de Inglaterra cerró al BCCI, no lo hizo por lavado sino por fraude masivo: había prestado enormes sumas a amigos que jamás devolverían los dineros. Mucha gente, seguramente la más inocente y débil, perdió sus depósitos. Pero Bush se benefició, como también salió ganando Carter.

En sus manejos financieros Dési Bouterse nunca estuvo en mala compañía.

De tal modo, queda claro que la maraña de intereses corruptos que se teje en torno del tráfico de drogas, el tráfico de armas y el lavado de dinero, involucra no sólo a campesinos indigentes, delincuentes de la periferia, mafiosos rusos y magnates del Medio Oriente, sino también a sectores poderosos e incluso respetados del llamado “Primer Mundo”. Y como en el caso de la mafia rusa frente a la “oligarquía” post-soviética, aquí tampoco se sabe quién es el títere y quién el amo.

CAPÍTULO 4 – HIPÓTESIS DE CONFLICTO: LA INDUSTRIA DEL SECUESTRO EN COLOMBIA Y SU PROBABLE DERRAME HACIA EL SUR

Introducción

Gracias a los esfuerzos de las FARC y el ELN (y en medida menor, también los paramilitares) Colombia puede vanagloriarse de ser la capital mundial del secuestro. Nada mejor para percibir esa agobiante realidad que asistir a una convención de empresarios en Medellín, como la que tuvo lugar en noviembre de 2000:

> "Seis soldados vestidos de fajina y armados con ametralladoras vigilan las entradas principales. Los empresarios asistentes, todos blancos de probables secuestros, se bajan de sus automóviles con pistolas prolijamente enfundadas cerca de su cintura, el contorno de cuyas culatas se acentúa por el contraste con sus camisas almidonadas. El movimiento de los sacos sucesivamente descubre y oculta esos significativos contornos, mientras los guardaespaldas escoltan a los hombres de negocios, y agentes de seguridad vestidos de civil se pasean discretamente entre la concurrencia. Al mismo tiempo, un vigilante conduce a un ovejero alemán que olfatea los lustrados zapatos y los bordes de los vestidos largos. En esta sociedad, estos procedimientos y situaciones, en un hotel de cinco estrellas, llaman tanto la atención como el uniforme de un botones. Es parte de la vida cotidiana. Aunque, como confiesa un local, ´todo el mundo tiene miedo aunque simule no tenerlo`".[265]

Tal es el miedo que, en este país subdesarrollado de 40 millones de habitantes, donde la gran mayoría no puede huir porque se le niega una visa extranjera para evitar que se conviertan en residentes ilegales, tanto como dos millones han emigrado en los últimos cuatro años. La tasa de emigración crece rápidamente, y crece también el número de familias pudientes que residen en Miami mientras el jefe del hogar viaja semanalmente a su país para atender sus negocios.

No obstante, el problema del secuestro colombiano, asociado al financiamiento de las actividades de guerrilleros insurgentes y paramilitares contrainsurgentes, es parte de una problemática mundial más general. Incluso países como Argentina, Chile y Uruguay deben desarrollar anticuerpos para evitar contaminarse. Quizá no sin razón (como se mencionó en la introducción a este libro), el dos veces expatriado profesor Juan Tokatlián (que primero huyó a Colombia de la violencia argentina de la década del ´70, y luego regresó huyendo de la colombiana) dijo a uno de los autores de este libro que en su opinión la Argentina sería un blanco ideal para empresarios del secuestro, por la corruptibilidad y escasa sofisticación y recursos de sus fuerzas de seguridad. Y es elemental reconocer que con la libre circulación en el territorio argentino que se ha otorgado a los "diplomáticos" de las FARC, ellos mismos podrían encargarse de la organización de una industria rioplatense del secuestro, que les sería de gran ayudar para hacer frente a los embates del Plan Colombia.

Algunas cifras

Por cierto, el secuestro se ha convertido en un negocio exitoso en muchos países. El número de secuestros por rescate registrados alcanzó niveles récord en el año 2000, llegando a un

total de alrededor de 20.000 en el mundo. Pero los números verdaderos son difíciles de estimar porque muchos secuestros nunca son informados a la policía. A la vez, la industria del secuestro ha generado un lucrativo negocio legítimo en torno de la recuperación de los secuestrados.[266] Los principales países afectados son Colombia, México, Filipinas, Brasil, Pakistán, Guatemala, Venezuela, India y Ecuador. [267]

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia y México[268] ocupan el primer lugar en el mundo, con unos seis mil secuestros en 1999. Más de la mitad de las pólizas por secuestro y pago de rescate tienen como destinatario empresas que hacen negocios en estos países.[269] Y según Business Risks International, alrededor del 85% de los secuestros del mundo ocurren en América latina. Esto provocó un significativo incremento en los gastos en seguridad de las empresas.[270] El departamento de Estado advierte a los norteamericanos evitar no sólo países como Colombia, México y Brasil, sino también Perú, Ecuador y Guatemala.[271]

El secuestro es un crimen relativamente seguro para su perpetrador. Si bien consultores en seguridad afirman que en Estados Unidos el 95% de los secuestradores son llevados a la justicia, lo opuesto ocurre en América latina. Una de las razones es el rechazo de las víctimas a cooperar con la policía, debido a que es mucho más probable sobrevivir al secuestro si se mantiene el episodio en la esfera de lo privado. De acuerdo a la agencia Kroll Associates, cuando se intenta un rescate rompiendo las reglas del juego del secuestro, el 79% de las víctimas terminan asesinadas.[272]

En Colombia la industria es tan sofisticada que hay grupos especializados en cada etapa del secuestro: el seguimiento inicial, la captura, el cautiverio y la negociación.[273] Hay secuestradores de tiempo parcial free lance, que venden sus capturados a grupos más grandes y mejor organizados (a menudo guerrillas), con la capacidad de pedir sumas más grandes por rescate. Los rescates oscilan desde algunos miles a más de un millón de dólares.[274]

Según la fundación privada País Libre, que promueve la lucha contra este delito, durante el primer trimestre de 1999 la práctica de los secuestros aumentó un 8% respecto del mismo período del año anterior. Un total de 856 secuestros fueron denunciados en ese período. De ese total 538 fueron por motivos económicos. Las FARC cometieron 215, el ELN 186, el EPL 116, el ERP[275] 9, la delincuencia común 60, desconocidos 221, y los paramilitares 48.[276] Aunque hay menos secuestros paramilitares, sus víctimas casi siempre desaparecen, mientras la mayoría de las de la guerrilla sobrevive... siempre que se pague.[277]

En el año 2000 las cifras registraron otro ascenso. Según cálculos extraoficiales al menos 3162 personas fueron secuestradas en Colombia ese año, lo que representa un promedio de nueve capturas por día y un incremento del 7% respecto de 1999. De acuerdo a País Libre, las capturas producidas ese año fueron 3029, mientras que un periodista de Radio Caracol indicó que según sus propias investigaciones, el número supera los 4200. En contraste, sólo 60 personas son secuestradas anualmente en los Estados Unidos. El departamento de Cundinamarca, donde habita el secuestrador número uno de las FARC (el Negro Antonio), compite por el record con Antioquia, Valle; Bolívar y Santander.

De acuerdo a declaraciones del jefe del Comando Policial Antisecuestro, por los menos 270 de los capturados fueron menores de edad. Las autoridades, País Libre y el periodista

coinciden en que los secuestros fueron cometidos principalmente por guerrilleros izquierdistas, paramilitares y delincuentes comunes. El ejército colombiano indicó que los comerciantes, agricultores y ganaderos son las víctimas más frecuentes. De acuerdo al informe castrense, 173 personas murieron en cautiverio durante el año 2000.[278]

Se estima que por lo menos el 50% de los secuestros son llevados a cabo por las FARC y el ELN, y algunos cálculos llevan esta proporción al 80%.[279] Pero varios expertos sostienen que a menudo estos grupos son acusados injustamente. Si bien muchos secuestros son cometidos por ellos, otros son realizados por paramilitares y otros aún por delincuentes comunes que los atribuyen a la guerrilla para provocar pánico entre los familiares de las víctimas.[280]

De acuerdo a un estudio gubernamental reciente, el sector privado colombiano perdió 800 millones en secuestros, extorsiones y robos entre 1990 y 1994. [281] En las áreas rurales cercanas a la zona de control de las FARC, la guerrilla realiza masivos cortes de ruta para secuestrar a sus víctimas. Su liberación normalmente insume entre ocho meses y un año.[282]

Por otra parte, la industria del secuestro en Colombia deja ganancias de aproximadamente 120 millones al año.[283] Un informe reciente del ejército colombiano estima que las FARC y el ELN ganaron por lo menos 5300 millones de 1991 a 1998, de los cuales 2300 millones provinieron del narcotráfico, 1800 millones de la extorsión, y 1200 millones del secuestro.[284]

Mientras la mayoría de los secuestros se hacen exclusivamente con fines de lucro (también llamado “financiamiento de la revolución”, o de “la lucha contrainsurgente”), hay algunos que tienen también un objetivo político. En abril de 1999, por ejemplo, el ELN secuestró un avión de Avianca con 39 pasajeros y sus tripulantes. El propósito no era sólo llenar las arcas de la organización guerrillera, sino también enviar un mensaje político a Pastrana para que siga considerando al ELN como una fuerza militar viable, capaz de hacer frente a los paramilitares. Por otra parte, y ante la adjudicación a las FARC de una "zona desmilitarizada", los líderes del ELN buscan ser tratados como iguales frente a sus hermanos mayores, y el secuestro puede ser un instrumento para este fin.[285] Entre otras acciones del ELN que pueden atribuirse a una mezcla de móviles, económicos y políticos, se destacan el secuestro de 81 personas en un restaurante en las afueras de Cali (tres secuestrados murieron en cautiverio por causas naturales), y el secuestro en mayo de 1999 de 140 practicantes en una concentración en una iglesia de Cali (la mayoría fue mantenida en cautiverio varios meses antes de que se pagara su rescate).[286]

Por otra parte, algunos secuestros parecen ser el resultado del deseo de castigar a los terratenientes, empresarios y políticos. Los rebeldes rara vez explican sus motivos. A menudo demoran varias semanas en contactarse con los familiares de las víctimas para ejercer presión psicológica en las negociaciones de rescate.[287]

Los gastos corrientes en seguridad (que aumentaron desde que las FARC decretaron su “impuesto revolucionario” con el secuestro como represalia) van desde 125.000 al año para una empresa con oficina de ventas en Bogotá, a un millón para las multinacionales actuando en áreas controladas por la guerrilla. De acuerdo a declaraciones del jefe de seguridad de una multinacional, los directivos están invirtiendo entre un 30 y un 35% de su tiempo en la coordinación de la seguridad de sus empresas.[288]

Como contramedida, el presidente Pastrana lanzó un plan antisecuestro con un presupuesto de U$S 10 millones, que incluye un refuerzo de las penas a los secuestradores, con un mínimo de 25 años de cárcel. Propuso además actualizar una ley que permite al gobierno el congelamiento de las cuentas bancarias de los secuestrados y sus familiares, para prevenir el cobro de rescates.[289]

Al encender una radio en la noche colombiana es usual escuchar esposas e hijos de secuestrados enviando mensajes a sus familiares. Los programas de radio de este tipo se han convertido en una forma de terapia de grupo nacional. En las librerías se encuentran dos best sellers del año: "Cómo sobrevivir a un secuestro", en el que un psicólogo aconseja a las víctimas; y "Secuestrado", la narración de un adolescente que relata su secuestro por las guerrillas. Autobuses con personal armado esperan a los niños en las escuelas privadas de Bogotá. [290]

Por otra parte, el agravamiento del problema es en parte resultado de la guerra norteamericana contra las drogas en Colombia, que como se sabe cuenta con el aval del Estado colombiano. Mientras el gobierno del país caribeño comienza su intervención militar en las áreas cocaleras del sur, se espera que las FARC sufran grandes pérdidas de sus ingresos provenientes de los tributos de los cocaleros y de la industria de la cocaína. Como forma de mantener sus ingresos, se volcarán crecientemente a los secuestros. Casi diariamente familiares de las víctimas llegan a San Vicente del Caguán. Una oficina de relaciones públicas de las FARC en el centro de la ciudad es atendida por guerrilleros que reciben a periodistas y delegaciones pacifistas. También llegan familiares desesperados que preguntan por sus parientes secuestrados. [291]

El sector petrolero: un blanco predilecto para la extorsión y los secuestros

En las etapas iniciales de las conversaciones de paz, la guerrilla expresó su deseo de negociar el tema. No obstante, ideológicamente los rebeldes mantienen su compromiso con los secuestros, a los que justifican como una forma más del impuesto de guerra.[292] Tanto las FARC como el ELN han manifestado claramente que continuarán con los secuestros hasta que se les provean medios de financiamiento alternativo. El ELN ha sugerido incluso que si se les pagara a ellos lo que las empresas petroleras extranjeras pagan por seguridad, terminarían con los secuestros. Pero las compañías petroleras continuarán siendo los principales blancos de los rebeldes debido a su alto perfil en áreas rurales y la magnitud de sus inversiones. Las acusaciones sobre la codicia de las multinacionales son una bandera ideológica conveniente que ayuda a las guerrillas a ganar el apoyo de la población.[293]

Hubo 23 secuestros vinculados al sector petrolero en los primeros diez meses de 1999, 11 de los cuales eran extranjeros. Los secuestros van desde pequeñas a prolongadas detenciones. Algunas veces terminan en la muerte. Algunos secuestros son planeados, pero muchos ocurren cuando las precauciones básicas de seguridad son descuidadas. En noviembre de 1998, el geólogo francés Claude Steinmetz fue detenido en Agua Azul en Casanare. De acuerdo a los informes de la prensa lugareña, el frente local del ELN llamó en marzo de 1999 a la Cruz Roja Internacional para que recuperara su cuerpo. Murió en cautiverio de un ataque al corazón. Otro caso individualizable es el del trabajador británico Alistair Taylor, recientemente secuestrado por la guerrilla. Para la víctima la experiencia puede ser (cuando menos) traumática. Para la compañía un secuestro puede tener una serie de consecuencias negativas: exposición a la prensa, pérdida de

tiempo, impacto negativo en la moral de los trabajadores, y consideraciones éticas y financieras acerca de cómo la empresa debe proteger a su personal.

Por otra parte, la guerrilla emplea varias tácticas para extraer beneficios económicos de las diferentes etapas de los proyectos petroleros. Al principio identifican los proyectos y reúnen información preliminar. En esta etapa, no atacan ni impiden el desarrollo del proyecto, sino que intentan generar confianza y hacer contactos. Esto les permite juntar información sobre los proyectos en los que las compañías están involucradas. Las guerrillas quieren asegurarse la posibilidad de infiltrarse en las compañías o participar en los proyectos utilizando empresas de fachada. En algunos casos, los grupos subversivos toman el control de la tierra en el área del proyecto para tomar ventaja en su futura explotación.

En la etapa de exploración y construcción, las guerrillas entran en contacto con la empresa y desarrollan una campaña de presión distribuyendo panfletos en los que se exigen provisiones, suministros médicos, o la instrumentación de proyectos sociales. También se exigen contribuciones financieras por extorsión directa, telefónica o escrita, y con pequeños ataques terroristas.

Estas acciones generalmente están dirigidas contra empresas subcontratadas, usualmente de otras regiones o extranjeras. Rara vez son dirigidas a la compañía principal. Los grupos subversivos en esta etapa quieren demostrar a las compañías su poder regional y su capacidad para desestabilizar el proyecto, y demostrar que pueden utilizar eso para extraer beneficios económicos del proyecto cuando entre en su fase productiva.

Si el proyecto no progresa, las guerrillas utilizarán la extorsión o los secuestros para presionar a las empresas a retirarse de la región. Si esto no funciona, las declararán objetivos militares, lanzando ataques terroristas que causen el mayor daño posible. Por otra parte, en la etapa productiva de un proyecto exitoso, las guerrillas ejercen su poder extorsivo para obtener beneficios económicos. [294]

No obstante, e incurriendo en flagrantes contradicciones, las FARC muchas veces niegan que financien sus operaciones con los secuestros. Jorge Briceño Suárez (alias “Mono Jojoy” [295]), vocero de las FARC, declaró que: "Hemos estado siempre en contra de los secuestros - hemos ordenado unas pocas detenciones políticas. No tenemos nada que ver con los secuestros económicos". Pero la fundación País Libre mostró una grabación de una comunicación de radio entre la comandante Wilma Garzón y la madre de un administrador de campo de 31 años secuestrado el 30 de octubre de 1993:

"El chico ya ha muerto así que te cobraremos 10 millones de pesos para enviarte el cuerpo. Si no lo quieres de ese modo, lo tiraremos en un pozo en algún lugar".

La madre pagó el dinero (aproximadamente 14.000 dólares) pero nunca recibió el cuerpo de su hijo.

Y más allá de ese macabro episodio, la “Ley 002, sobre la tributación”, que describimos en el Capítulo 1, establece claramente que quien no pague el arbitrario impuesto revolucionario

(calculado como un 10% del patrimonio del “contribuyente”) será secuestrado. ¿Puede haber prueba más clara de que las FARC usan al secuestro como fuente de financiación?

Pesca milagrosa

Durante años la elite colombiana convivió con el temor de ser secuestrada por la guerrilla, pero una nueva forma de secuestros indiscriminados y en masa está expandiendo el temor a ciudadanos comunes que no pueden costearse guardaespaldas ni vehículos protegidos. La práctica se denomina "pesca milagrosa". Una banda de guerrilleros aparece de la nada, bloquea una ruta, detiene cada auto o colectivo, se lleva todos los pasajeros que parecen adinerados y los tiene en cautiverio hasta que se paga el rescate. La técnica toma su nombre de un juego de niños tradicional en Colombia. Por ejemplo, el caso ya mencionado en que treinta guerrilleros del ELN invadieron una iglesia en la que se celebraba un servicio en Cali y se llevaron a 140 personas. Una lista de secuestrados confeccionada por la fundación País Libre incluye médicos, abogados, granjeros, pilotos, ingenieros, estudiantes y maestros. La persona de mayor edad tiene 77 años y la menor es un niño de un año. Hasta una orquesta mariachi, Grupo Garibaldi, fue capturada en una ruta en la Provincia de Santander y detenida por tres semanas.[296]

A pesar del disgusto público contra los secuestros, los líderes guerrilleros han dejado en claro que no abandonaran la práctica. Un estudio del gobierno hecho público en mayo de 1999 estima que las fuerzas guerrilleras del país han obtenido mas de 1200 millones en rescates en los últimos años. Raúl Reyes, comandante y “canciller” de las FARC, declaró en un programa televisivo que "mientras continúe, la guerra debe financiarse". El director de País Libre afirma que "la pesca milagrosa no está dirigida solamente a reunir dinero, sino también a generar miedo y crear una atmósfera de guerra".[297]

La subcontratación del secuestro

Las autoridades han probado 240 casos de secuestros por encargo, desde 1996, en los que se han movido cerca de 500.000 millones de pesos. Delincuentes comunes realizan los secuestros “de poca monta” a cambio de una comisión de las guerrillas. El sistema de secuestro por encargo es una prueba más de que la guerrilla no secuestra sólo por motivos políticos. No repara en clases ni en condiciones sociales. Esta modalidad suele usarse en los llamados “secuestros relámpago”, en los que se cobra poco (entre 20 y 50 millones de pesos) y se negocia rápido. Para esto creen contar con la indiferencia de las autoridades que, al parecer, sólo se ocupan de investigar con celo los casos en los que están de por medio personas poderosas e influyentes.[298]

Para muchos, este tipo de prácticas demuestran hasta qué punto ha llegado la degradación del conflicto. Hace no más de dos años a nadie se le ocurriría que guerrilla y delincuencia común trabajaran aliadas. Hoy han constituido un verdadero ‘outsourcing’ para compartir dividendos en la industria criminal más rentable.

Aun los secuestros que en teoría tenían móviles políticos han degenerado en prácticas extorsivas. Así lo demuestran los recientes casos del Fokker de Avianca, y los secuestros masivos de la iglesia La María y del kilómetro 18, en Cali. ¿Puede comprenderse que un delito común les sirva a las organizaciones armadas para conseguir dividendos políticos? La pregunta viene al punto porque cada caso se ha resuelto con la promesa de que pronto habrá nuevos espacios para

la negociación. Eso explica por qué, después de la liberación de sus últimos rehenes, el ELN se alistaba para ir a hablar de paz en París.[299]

Al principio los agentes especiales no entendían cómo la guerrilla podía ejecutar y manejar tantos secuestros desde las principales ciudades, donde hay más vigilancia y la gente asume más controles para su protección. El misterio se resolvió cuando los investigadores detectaron que, ante los riesgos de desplazarse hasta las ciudades, las FARC comenzaron a trabajar con bandas de delincuentes comunes o 'levantadores'. Según los Escuadrones Antisecuestro y el GAULA (Grupo de Acción Unificada de Lucha Antisecuestro, un cuerpo militar de élite a cargo de operativos para liberar secuestrados), una de las bandas más temidas es (o era) la de 'Los Calvos'. Varias otras operan en Bogotá. Los datos que manejan los investigadores indican que reciben instrucciones directamente del 'Mono Jojoy', principal estratega militar de las FARC, y que trabajan para varios frentes guerrilleros. Una vez que tienen a las víctimas en su poder las entregan rápidamente. Los secuestrados son llevados a las zonas de influencia de la guerrilla para evitar operativos de rescate de los organismos de seguridad. Las bandas, según el GAULA, cobran entre el 15 y el 30 por ciento del total de lo que recaudan las FARC.

Esta situación ha llevado a que los escuadrones antisecuestro de la policía centren sus esfuerzos en desmantelar estas organizaciones criminales. Pero las negociaciones para las liberaciones no se hacen con estas bandas comunes. Para eso cada frente asume la responsabilidad. En algunos casos es el mismo comandante el que pide el dinero a los familiares. En otros se designan negociadores. Quienes han tenido contacto con algunos de ellos aseguraron que, en la mayoría de los casos, eran personas rudas e inflexibles. Afirmaron que guerrilleros como 'Romaña' tienen fama de 'poner conejo', recibir el dinero e incumplir. Por esa razón —y dependiendo del monto— hay secuestros que pueden durar años. Pero si se trata de sumas inferiores a los treinta millones de pesos, el trámite demora pocos meses.

El dinero, según investigaciones del Ejército, es recaudado por cada frente o cuadrilla. Estas tienen que cumplirles a los bloques con unas cuotas previamente determinadas por el estado mayor central. Por ejemplo, en 1997, cada frente debió entregar 15.000 millones de pesos para un total de 105.000 millones. Para el manejo de estos dineros el Secretariado General cuenta con el apoyo de un secretariado logístico y de una comisión de finanzas. Ellos son los que regulan la entrada y distribución del dinero. [300]

En una entrevista publicada por la Revista Semana a principios de 2001, uno de los encargados de coordinar los secuestros de las FARC respondió a una serie de preguntas:

- ¿Cuál es su profesión?
- Soy guerrillero y estoy de comandante encargado del frente 22 de las FARC.
- ¿Cuáles son sus funciones?
- Yo me encargo de coordinar los secuestros, de recaudar la plata y coordinar con las bandas que hacen los levantes.

Así empezó su confesión Hugo, el secuestrador más temido en 20 municipios de Cundinamarca. Durante dos años y medio estuvo al mando de ese frente pero, según dijo, no en propiedad. "Iba para comandante. Para eso uno tiene que demostrar efectividad y eso se hace a

través del recaudo de dineros y de operaciones", reconoció a los fiscales. En su indagatoria Hugo hizo varias confidencias a la fiscalía. Explicó con detalles el mecanismo de una operación:

"Los secuestros se levantan en Bogotá por las bandas de delincuencia común. Después los llevan a las fincas. Allí, con el apoyo de pobladores de las zonas, se esconde la gente".

El guerrillero sostuvo que, una vez que la víctima está en poder de las FARC, el trato lo hace un negociador experto. Sólo en casos muy exclusivos, añadió con naturalidad, él asumía esa diligencia.

Sin embargo Aníbal Francisco Burgos, más conocido como 'Julián' y principal intermediario entre las bandas de 'levantadores' y las FARC, fue más específico. "Un grupo hace la evaluación de posibles secuestrados. Una vez que se ejecuta, se negocia con las FARC". Dijo que él se comunicaba directamente con Hugo, y que si recibía a las víctimas, el guerrillero negociaba directamente. El otro método, aclaró, era por encargo directo del grupo guerrillero:

"Entonces yo acordaba con las bandas quién lo podía 'levantar'. Y una vez hecho el pago se divide el porcentaje. Es un 70 por ciento para las FARC y un 30 por ciento para la banda."

Julián reveló que las dos bandas especialistas son la de Los Calvos y la de Miguel o El Mono:

"Cada una está conformada por 20 a 30 personas. Incluso en una hay como nueve policías, entre ellos un teniente haciendo curso para capitán".

Las autoridades que les seguían la pista desmantelaron a principios de 2001 a Los Calvos. Hay varios capturados procesados por secuestro y extorsión. El día de la captura Hugo acababa de regresar de la zona de distensión. "Venía del Caguán, de reportarme con las instancias superiores". Es decir, con el secretariado, y específicamente con el Mono Jojoy. "Iba a entregar el dinero recaudado", dijo. Ese era un viaje que hacía con frecuencia. Según los registros de las autoridades, el Mono Jojoy dio la orden de entregar los dineros a las FARC de manera inmediata, después de la muerte de Miller Perdomo,[301] el comandante a cargo de las FARC en las región aledaña a Bogotá, de muy alto perfil en las operaciones de secuestros[302]. Esto porque cuando murió Miller, en un operativo de las autoridades de 1999, se fue con un gran secreto: el escondite de las ganancias producto de los secuestros. Ese dinero aún no ha aparecido, según los investigadores. Y con Hugo preso, recalcó la fuente, las FARC estaban perdiendo mucho más dinero.[303]

El derrame hacia el Ecuador

En septiembre de 2000 un americano y siete canadienses trabajadores de la industria del petróleo fueron secuestrados. El 12 de octubre de 2000 unos 40 hombres armados secuestraron a otros cinco estadounidense, dos franceses, un neozelandés, un argentino y un chileno que trabajaban en una campamento petrolero de la Amazonia ecuatoriana. Esto se suma a tres españoles y un canadiense que realizaban trabajos sociales en el país. Fueron secuestrados por 30 hombres armados presuntamente pertenecientes a la guerrilla colombiana.[304] Uno de los

secuestrados fue asesinado con cinco tiros en la espalda, adjuntándole una nota en su espalda "por no pago de rescate". Los restantes siguen en cautiverio luego de cuatro meses.[305]

Tras negociaciones con los captores de los ocho técnicos petroleros, el ministro de Defensa del Ecuador, Hugo Unda, dijo que una industria del secuestro podría consolidarse en el país. Según fuentes petroleras, las empresas para las que trabajaban los extranjeros están negociando con los secuestradores. Por otra parte, la violencia en la provincia de Sucumbios, en la frontera con Colombia, ha aumentado en los últimos tiempos. Autoridades locales denunciaron que el plan para erradicar los cultivos de coca en el país vecino hará prosperar el negocio del secuestro y los grupos armados que lo derraman hacia el Ecuador.[306]

Por cierto, como hemos visto en capítulos anteriores, las guerrillas y los narcotraficantes de Colombia cruzan frecuentemente la frontera con Ecuador en busca de armas y precursores químicos. Soldados ecuatorianos han descubierto y destruido cuatro pequeños laboratorios de procesamiento en los últimos meses. Combatientes paramilitares han sido arrestados por comandar bandas extorsivas. Las FARC cruzan la porosa frontera con creciente impunidad. El ELN también acrecentó su actividad del lado ecuatoriano. En Lago Agrio las autoridades locales informaron sobre el alarmante crecimiento de los secuestros y la extorsión atribuidos a la guerrilla y a los paramilitares. El temor se acrecienta debido a la autorización que el gobierno otorgó a Estados Unidos para utilizar la base de Manta, hecho que las FARC consideraron una declaración de guerra. En un fracasado intento de extorsión en agosto, Jorge Washington Cox Carvajal fue amenazado por milicias colombianas. Dos de los sospechosos fueron capturados por la policía, admitiendo ser miembros de los grupos paramilitares colombianos. Declararon que entraron al Ecuador buscando a Cox por su presunto apoyo a las FARC.[307]

La contra-industria de la protección y los seguros contra secuestro

Frente a la bonanza de la industria del secuestro, la industria de la protección contra ese siniestro también tiene su auge. Las empresas de seguridad se están centrando cada vez más en los secuestros. Según Hiscox Insurance Group, una organización de Lloyd´s de Londres, entre el 60 y el 65% de las 500 grandes empresas de la lista de Fortune contrataron empresas de protección y rescate de secuestros. Estas empresas emplean profesionales capacitados en situaciones de crisis, como ex policías y militares, agentes de la CIA y el FBI, y también ex agentes secretos. Por otra parte, las pólizas de seguros de secuestro y rescate (K&R), que a veces también incluyen la extorsión, generan 150 millones por año en primas alrededor del mundo.[308] Las aseguradoras no sólo proveen pólizas de secuestro, rescate y extorsión. También intentan prevenirlos a través de las empresas de seguridad que subcontratan. Protegen a los clientes y les enseñan como protegerse.[309] Y son eficientes. Dicho sea de paso, los seguros son secretos.

La industria tiene su historia. En 1927, tras el secuestro y asesinato del hijo del aviador Charles Lindlebergh, la organización Lloyd´s[310] creó el concepto de seguro de rescate. Actualmente, las empresas individuales más importantes son Chubb de New Jersey y AIG de Nueva York. Pero la mitad del mercado de seguros contra secuestros en América latina está controlado por dos sindicatos de Lloyd´s: el Cassidy Davis Hiscox Consortium y el Roger Dwyer Consortium. Las compañías de seguros contratan expertos en seguridad para asistirlos en los casos de secuestros. AIG contrata a Kroll Associates, Chubb al Ackerman Group, y Hiscox al Control Risk Response Group.[311] Las empresas de seguridad, a su vez, poseen fuertes vínculos

con el Pentágono, la CIA, el Mossad o las SAS, según el caso. En otras palabras, hay en la floreciente industria una suerte de cadena de producción que incluye a:

- la aseguradora que toma riesgos cobrando altas primas,
- la empresa de seguridad contratada por la aseguradora, que intenta prevenir el secuestro y que, producido éste, introduce en el juego negociadores profesionales que son los únicos intermediarios con los secuestradores, y
- profesionales de apoyo, normalmente contratados por las empresas de seguridad, que se encargan de tareas preventivas y, consumado el siniestro, de terapias psicológicas e incluso de vacaciones pagas para el secuestrado y su familia (como parte de la terapia).[312]

Internet también se ha convertido en un recurso al que acuden individuos atemorizados de cualquier parte del mundo. Algunas aseguradoras, principalmente empresas estadounidenses que a su vez se reaseguran con firmas francesas e inglesas, ofrecen pólizas por este medio. Tal es el caso de Global Assurance, con sede en Miami, que ofrece por Internet una síntesis de la póliza estándar, contra secuestro, rescate y extorsión (K/R&E: Kidnap, Rescue and Extorsion). La clasificación de la prima a pagar por el contratante se efectúa tomando como base diversos aspectos, tales como ingresos y patrimonio del asegurado, ubicación de la persona cubierta, perfil e incidentes anteriores, medidas de seguridad existentes, tipo de actividad profesional o comercial, y el límite de la cobertura. [313]

También hay especializaciones más acotadas dentro del rubro. La empresa Pinkerton Consulting de Kansas opera con la aseguradora Cigna y provee seguridad a los norteamericanos que viajan al exterior. Tiene empleados en más de 30 países y expertos en 200 países más. Sus agentes a menudo esperan a sus clientes en los aeropuertos, los acompañan a sus eventos y les informan qué lugares evitar. El supervisor de investigaciones de Pinkerton afirma que "todos los norteamericanos son considerados ricos, aunque no lo sean". [314]

Control Risks, que como se dijo opera con un consorcio asegurador del grupo Lloyd´s, no limita sus operaciones a norteamericanos o europeos, y ha encarado y analizado miles de secuestros en el mundo. Está dirigida por Kenneth Newman, ex funcionario de Scotland Yard en los ochenta. La empresa ofrece asesoría tanto para el manejo de crisis como para el posterior tratamiento físico y psíquico de la víctima. En América latina, Control Risks compite con la estadounidense Kroll Associates, que cuenta con 51 oficinas en el mundo, siendo las principales las de Hong Kong, París, Colombia, Brasil y México.[315] En México el Consejo Nacional de Empresas de Seguridad Pública estima que en 1970 había 28 empresas de este tipo. Actualmente existen cerca de dos mil. [316]

Alrededor del 50% de las pólizas de seguros por secuestro del mundo entero se venden en América latina. Dependiendo del riesgo las primas varían. En promedio, una prima anual para una familia de cinco ronda los 9000 o 10000 dólares para una cobertura de un millón, pero las primas son mucho más altas para el caso colombiano.[317] Por supuesto que esta sofisticada industria del seguro de rescates es para un segmento muy minoritario de la población, ni remotamente para el 43% de los colombianos que, según sondeos del año 2001, se sienten amenazados por la posibilidad de un secuestro.

Según Kroll Associates, el mundo empresarial gasta anualmente 70 mil millones de dólares en seguridad, cifra que en el 2010 ascendería a 200 mil millones. La desigualdad norte-sur incide en el costo de los seguros contra secuestro. Una familia de un acomodado suburbio de Londres puede pagar entre 300 y 500 dólares anuales por una cobertura de un millón de dólares. Pero en Colombia, una de igual condición desembolsará 25 mil dólares anuales. Las pólizas incluyen el monto del rescate, accidente individual producido durante el secuestro, pérdida de dinero, gastos de representación de la agencia, honorarios de un negociador independiente, cuidados médicos y psiquiátricos, asesoramiento jurídico, sueldos que haya dejado de percibir el secuestrado, intereses sobre préstamos obtenidos para pagar el rescate, comunicaciones, equipos de grabación, gastos de publicidad.

El negocio rinde y (como se dijo) las empresas son eficientes. Según el Insurance Journal, un norteamericano con cobertura tiene cuatro veces más probabilidades de sobrevivir a un secuestro que uno sin ella.[318] En el período comprendido entre 1980 y 1994, el 90% de los dos mil secuestrados en México sobrevivió después de pagar o negociar rescates por decenas de millones de dólares. En Colombia, la gran mayoría de los secuestrados por la guerrilla sobreviven, pero los secuestrados por los paramilitares corren mayor peligro. Los secuestros de alto perfil andan por encima de los 100 mil dólares. Según Guy Squires, que trabajó infructuosamente para liberar a tres misioneros norteamericanos, el precio actual para un ejecutivo petrolero es de 200.000 dólares.[319] La táctica es pedir 10 millones para finalmente pactar el 5 o 6% de lo requerido inicialmente.[320]

Los servicios de Kroll no son baratos. Consumado el secuestro ninguna investigación baja de los 20 mil dólares y el costo promedio asciende a 350 mil dólares. Estos gastos, naturalmente, son costeados por la aseguradora cuando hay póliza. Para evitar que puedan dar la póliza como garantía de un préstamo bancario que cubriera el rescate, los clientes tienen prohibido revelar que están asegurados (como se dijo antes, las pólizas son secretas). Además, la policía debe ser informada inmediatamente del secuestro. Cualquier intento de pagar el rescate sin notificación previa invalida la póliza del seguro.[321]

En Colombia los costos son más altos, las pólizas (como se dijo) más caras, y mayores tanto los riesgos como las ganancias de las aseguradoras. En una edición reciente de la revista Vanity Fair se aborda la situación en ese país y se afirma que las compañías estadounidenses especializadas en protección contra secuestros cobran hasta 400 mil dólares por trasladar un experto hasta el país sudamericano para que se encargue de las negociaciones.[322]

Tanta sofisticación tiene su contrapartida entre los secuestradores. La primera máxima del buen secuestrador es “trata bien a tu cautivo, que es un prisionero de guerra”. O más bien, trátalo lo mejor posible, en las circunstancias imperantes. Aliméntalo bien, permítele bañarse con jabón, facilítale mudas de ropa e incluso galletitas. Esto disminuye los intentos de fuga y aumenta las posibilidades de cobrar el rescate. Un récord malo, de rescates cobrados sin devolución de la víctima, puede significar la muerte de la gallina de los huevos de oro. No obstante, otra regla es la de agravar la angustia de los familiares, demorando hasta un mes la revelación del monto exigido en primera instancia como rescate. Los profesionales del secuestro están altamente especializados. Las bandas colombianas a las que acuden las FARC tienen más de quince miembros cada una. Tienen un equipo para relevar el terreno, otro para efectuar el secuestro, un tercer equipo para retenerlo bajo guardia, y un cuarto para negociar.

Pero también hay reglas para los familiares del secuestrado y sus negociadores profesionales. La primera es no apresurarse a pagar y jugar al póquer con la vida del secuestrado, simulando que alcanzar a reunir el monto finalmente convenido requiere ingentes esfuerzos, pidiendo un préstamo aquí, vendiendo algún inmueble, hipotecando otro. Y permanentemente, el consejo de los negociadores profesionales es que los familiares de la víctima deben pedir a los secuestradores "pruebas de vida", que suelen consistir en la respuesta a preguntas que sus captores no conocen: el apodo de un pariente y al mes siguiente de otro; el cumpleaños de un amigo y al mes siguiente el aniversario de un vecino; el nombre de una mascota y la clínica donde se la curó hace tres años... De tal modo, no sólo se tiene la prueba de vida, sino que también se demuestra cierta firmeza frente a los delincuentes, que no obstante no debe ser excesiva. Y el secuestrado debe ser sumiso pero debe evitar humillarse. La actitud más conveniente es "me someto porque me esperan en casa". Si se humilla demasiado le pierden el respeto y lo tratan peor, pero si se revela puede perder la vida.[323]

Como se ve, después de décadas de aprendizaje ya existe un saber acumulado por profesionales de ambas partes. En un caso particularmente exquisito, Norbert Reinhart, un ejecutivo minero canadiense, reemplazó a un empleado secuestrado, de mutuo acuerdo con los secuestradores con quienes se negociaba. Jamás había visto siquiera al secuestrado original, Ed Leonard, que ya había pasado meses en cautiverio. "Su turno terminó", dijo Reinhardt a Leonard, quien retornó a Canadá. Mientras duró su propio cautiverio, los guerrilleros facilitaron a Reinhardt hasta una barra de ejercicios para que no perdiera su estado físico. Cuando se hartó de la folclórica yuca le cambiaron el alimento. Y nunca le faltó una radio para oír las noticias, ni un chocolate caliente con el desayuno.[324]

Obviamente, el negocio –y este es un gran negocio- exige que la tasa de sobrevivientes sea alta. Mientras ello sea así la gente pudiente comprará pólizas secretas y las grandes empresas adquirirán seguros para cubrir a sus funcionarios, que de tan secretos serán desconocidos por sus mismos beneficiarios individuales. Además, las aseguradoras contratarán a las empresas de seguridad; y éstas a su vez contratarán asesores antisecuestro, negociadores de rescate, y psicólogos para las víctimas y sus familias. Por su parte, la guerrilla seguirá generando parte de los recursos que necesita para su campaña insurgente a través de los rescates. Cuanto más éxito tenga el Plan Colombia erradicando sembrados de coca, menores serán los "impuestos" cobrados a los cocaleros y mayor será la dependencia de la guerrilla de esta fuente alternativa de ingresos. Ya se han expandido al Ecuador y Venezuela; quizás incluso al Brasil. Y el Cono Sur puede ser una oportunidad espléndida, tal como lo vaticinó Tokatlián a uno de nosotros. Depende de los gobiernos y sociedades civiles del Cono Sur reunir la voluntad política para generar anticuerpos eficientes. Cosa que no les falta a las FARC.

CAPÍTULO 5
MERCENARIOS NORTEAMERICANOS Y... ¿BRASILEÑOS?

Las grandes empresas de mercenarios

El mentado Plan Colombia, que proveerá a ese país de U$S 1300 millones de origen norteamericano que se invertirán principalmente en pertrechos militares, y que contará con algunos modestos recursos adicionales de origen europeo (sustancialmente reducidos por la oposición europea a que la ayuda norteamericana se concentré en lo militar)[325], no será el único ingrediente foráneo destinado a intentar poner un freno a la expansión de la narcoinsurgencia. También jugarán un papel importante los mercenarios privados, contratistas principalmente por el Pentágono y la CIA, y en alguna medida también importados por empresas privadas como servicios de seguridad.

El tema de los mercenarios ya fue abordado por uno de los autores de este libro en *Los Mercenarios del Fin del Milenio: Estados Unidos, Europa y la Proliferación de Servicios Militares Privados*.[326] El foco de análisis allí, sin embargo, fue la proliferación de ejércitos privados en África y Asia, especialmente a través de los grandes conglomerados mercenarios *Executive Outcomes* (de origen sudafricano) y *Sandline International* (de origen británico pero asociado al anterior). Todavía no había suficiente información sobre este fenómeno en América latina, que está empezando a surgir recién ahora, con la materialización del Plan Colombia.

La proliferación de ejércitos privados es un fenómeno emergido con el fin de la Guerra Fría. Puede atribuirse a un factor de orden político y otro de orden institucional. Por una parte, con el fin de la Guerra Fría el 30% de las Fuerzas Armadas norteamericanas pasaron a situación de retiro, y la única capacidad profesional de la gran mayoría de ellos es militar.

Por otro lado, la guerra de Vietnam aumentó enormemente las sensibilidades de la población norteamericana respecto de las bajas en combate. No es lo mismo la muerte de un soldado regular, todo un hecho político, que la caída de un mercenario, un acontecimiento de apariencia policial cuya víctima está estigmatizada por su profesión. Los mercenarios aspiran a ser llamados "consultores" o "contratistas", pero el público les da su nombre de siempre cuando no otros más despectivos como "soldados de fortuna" o "perros de la guerra" (*dogs of war*, una figura shakespereana). El gobierno de los Estados Unidos quiere evitar bajas de soldados regulares pero no puede evitar estar presente en múltiples focos de conflicto. Como consecuencia, se privatiza la acción militar.

Lo mismo han hecho Gran Bretaña, Francia y Serba, a la vez que en Canadá, Bélgica e Israel han surgido empresas sin vínculos conocidos con el Estado, y de Rusia y Ucrania emerge mucha mano de obra que va a parar a organizaciones de diverso origen. La proliferación de ejércitos privados aumenta, además, porque una vez formadas las grandes empresas militares, muchas de ellas se ponen al servicio de dictadores del Tercer Mundo que necesitan defenderse de rebeldes, y otras aún se ponen al servicio de rebeldes que les pagan con el derecho a la explotación campos diamantíferos que están bajo su control. En ocasiones, las grandes empresas mercenarias de origen europeo y sudafricano han llegado a la recolonización económica de países enteros del África, porque de la minería pasaron a la telefonía celular, la aviación civil (fácilmente convertible a usos militares) y hasta el turismo. Son empresas capaces de movilizar

2000 aguerridos soldados en 48 horas, con pequeñas pero poderosas fuerzas aéreas propias dotadas de aviones de guerra MiG; empresas que han puesto y depuesto gobiernos en países paupérrimos.

Las empresas mercenarias de origen estadounidense están más controladas, porque el Pentágono es el mayor empleador del mundo de servicios militares privados, y puede imponer condiciones. Antes de ofrecer asistencia militar a gobiernos extranjeros, las empresas norteamericanas de mercenarios deben tramitar una *licencia* de la Oficina de Control del Comercio de Defensa, del Departamento de Estado (*Office of Defense Trade Controls*).[327]

Entre las principales empresas mercenarias norteamericanas se encuentran:

1. S.A.I.C., un gigante de alta tecnología que factura U$S 1000 millones anuales. Entre sus principales contratos está el control de las defensas aéreas sauditas. Sus cuarteles generales en San Diego sirven de base para el entrenamiento de militares extranjeros. Entre los miembros del directorio de la empresa se encuentran dos ex secretarios de defensa, William Perry y Melvin Laird, y dos ex jefes de la CIA, John Deutch y Robert Gates.

2. M.P.R.I. (*Military Profesional Resources Incorporated*), entre cuyos contratos principales se encuentra el entrenamiento de dos ejércitos de los Balcanes. Fue fundada en 1987 y tiene contratos por alrededor de U$S 60 millones en diversas partes del mundo. Trabaja muy de cerca con el Comando de Operaciones Especiales del Pentágono. Entre sus ejecutivos se encuentran su fundador, el general Carl Vuono, quien fuera jefe del estado mayor del ejército durante la invasión a Panamá y la Guerra del Golfo; el general Ed Soyster, ex jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa (*Defense Intelligence Agency* –DIA), el general Frederick Kroesen, ex comandante de las fuerzas del ejército norteamericano destacadas en Europa, y el general James Chambers, quien sirvió como director de operaciones contingentes en Bosnia. M.P.R.I. ayudó a rearmar el ejército croata, violando el embargo imperante pero con un guiño del Pentágono, facilitando el enlace con el alemán Ernst Werner Glatt, que era entonces el mercader de armas favorito de la CIA. El vínculo entre Glatt y M.P.R.I es de larga data, y aquel ha sido socio de Soyster. M.P.R.I. también está fuertemente involucrad en Angola, donde apoya al gobierno central (antes marxista) contra los rebeldes de la UNITA (quienes durante la Guerra tuvieron fuerte apoyo de la CIA). Por presiones del gobierno norteamericano, la empresa ha logrado desplazar a los mercenarios sudafricanos de Executive Outcomes. El negocio incluye la organización de la notoria "policía de intervención rápida", conocida como el "R.I.P. del Ninja".

3. *Vinell*, una empresa perteneciente a B.D.M., que es propiedad de la *Beltway*, a su vez controlada poor el *Grupo Carlyle*. Éste está encabezado por el ex secretario de Estado James Baker, el ex jefe de presupuesto de la Casa Blanca Richard Darman, y el ex secretario de defensa Frank Carlucci. El presidente de B.D.M., Philip Odeen, encabezó la fuerza de tareas del Pentágono para reciclar las fuerzas armadas norteamericanas para el siglo XXI. Entre los principales

contratos de Vinell está el entrenamiento de la Guardia Nacional saudita, una fuerza que se estima mucho más eficiente que el ejército de ese país. Vinell tiene mil agentes en Arabia Saudita, muchos de ellos veteranos de las Fuerzas Especiales del ejército de los EE.UU.

4. *Booz-Allen & Hamilton,* que también pertenece a Beltway y junto con la marina y la infantería de marina de los EE.UU., tiene a su cargo la inspección de la infantería de marina saudita, una fuerza creada después de la Guerra del Golfo. También maneja la Escuela Superior de Guerra saudita. Su personal destacado en ese país que se estima entre 200 y 1000.

5. *O'Gara Protective Servicies*, que está constituida por ex agentes de la CIA y el Servicio Secreto, y fue contratada directamente por el Príncipe Sultán para proteger a la familia real saudita y sus propiedades, y también para entrenar las fuerzas de seguridad del país. Según los observadores, la suma de contratos de estas empresas en Arabia Saudita hace del aparato de seguridad de ese país una subsidiaria privada del Pentágono.[328]

6. *Eagle Aviation Services and Technology Inc. (¿East Inc.?),* una misteriosa empresa privada establecida en la Base Patrick de la fuerza aérea norteamericana, que recluta y emplea pilotos para volar aviones OV-D10D, actualmente usados para tareas de fumigación.[329] Los aviones están registrados a nombre de una empresa ficticia, *American Warbirds Inc.*, que no tiene teléfono registrado en guía y que en realidad no es más que un comercio de radios. La mayoría de los aviones no tienen un número de registro visible.[330]

7. *Northrop Grumman*, de Los Ángeles, es una empresa de alta tecnología que ha diseñado aviones robotizados de última generación. Es la principal contratista en el Sistema Conjunto de Radar para la Vigilancia y Ataque de Blancos (*Joint Surveillance Target Attack Radar System - Joint* STARS), el sistema áereo más avanzado del mundo para hacer blanco y administrar batallas. También es el principal contratista para el bombardero "invisible" B-2 Stealth Spirit.

8. *Betac*, una empresa normalmente contratada a través de la CIA y con frecuencia trabaja en forma conjunta con el Comando de Operaciones Especiales de los EE.UU. (*U.S. Special Operations Command*-SOCOM) en la base de la fuerza aérea Mac Dill de Tampa, Florida. Este comando está a cargo de los *Seals* de la marina, los *Rangers* del ejército y de la Fuerza *Delta.* A pesar de que Betac tiene su página de Internet donde informa que tiene oficinas dentro del mismo SOCOM, funcionarios del SOCOM han negado su existencia.[331]

9. *DynCorp,* de Reston, Virginia, que también está más vinculada a la CIA que al Pentágono, y es una de las más grandes y antiguas empresas de este tipo. Se fundó en 1946 para administrar excedentes de aviones de la Segunda Guerra Mundial.. Actualmente factura entre U$S 1200 y 2500 millones por año, el 95% de los cuales proviene de contratos con el gobierno norteamericano. Está a cargo del mantenimiento de la fuerza aérea de Kuwait, administra una base militar de

> los EE.UU. en el pueblo hondureño de Palmerola, y vende excedentes procedentes de las antiguas bases norteamericanas en Panamá.[332] Otro de sus principales contratos actuales es el entrenamiento y despliegue de la Policía Nacional de Haití, sucesora de los infames Tonton Macoutes.[333] En el presente, se tiene conocimiento oficial de que DynCorp está contratada para erradicar plantaciones de coca colombianas por vía aérea. [334]

No todas estas empresas están involucradas en la guerra civil colombiana, y algunas de las que sí participan no están mencionadas arriba porque no fueron identificadas por estos autores. Pero la lista de arriba sirve para comprender que el uso de mercenarios es una política de Estado de los Estados Unidos, y será una de las dimensiones más importantes y quizá siniestras de la política internacional en el siglo XXI.

Como dijo Robin Kirk de *Human Rights Watch*, con esta proliferación de empresas privadas dedicadas a servir militarmente al Estado, "estamos asistiendo a la contratación de la guerra de manera tal que queden difuminadas las responsabilidades".[335] No sólo se evita el costo político de padecer bajas de soldados regulares, que en el imaginario público representan a la nación (norteamericana); no sólo se resuelve el problema de la mano de obra militar que quedó desocupada por la Guerra Fría; también se desresponsabiliza al gobierno de los EE.UU. respecto de las casi inevitables violaciones de derechos humanos que las operaciones bélicas suelen producir. El responsable directo deja de ser el Estado, y en la medida en que las empresas privadas tienen asignadas tareas encubiertas que no figuran en la letra de su contrato legal, en un plano estrictamente técnico también es difícil atribuirle al Estado la responsabilidad indirecta.

Ahora bien, siendo un hecho reconocido que el uso de empresas mercenarias es parte esencial de la estrategia militar norteamericana de la post Guerra Fría, cabe preguntarse: ¿en qué medida puede tomarse en serio el planteo oficial, compartido por Washington y Bogotá, de que los mercenarios paramilitares autóctonos de Colombia, las infames Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) lideradas por Carlos Castaño, son *enemigas* en igual medida que las FARC y el narcotráfico, porque se financian con cocaína? ¿En qué medida puede tomarse en serio cuando, para apresar a Pablo Escobar, el gobierno norteamericano se alió al hermano de Carlos, Fidel Castaño, y su banda de "Los Pepes" ("Pueblo Perseguido Por Pablo"), paramilitares que se nutrían gustosos del narcotráfico?[336]

Por ahora, esta pregunta deberá quedar pendiente, y dirigiremos nuestra atención a las operaciones en Colombia de los mercenarios norteamericanos, que también son, como todo mercenario, "paramilitares".

El M.P.R.I. en Colombia

Al menos media docena de empresas norteamericanas trabajan actualmente con las fuerzas de seguridad colombianas, ya sea contratadas directamente por el gobierno de Bogotá o con contratos del Pentágono o la CIA. Otras tantas intentan ingresar al lucrativo mercado. Más allá de los mercenarios propiamente dichos, muchas otras empresas lucran con la guerra. Bell-Textron y Sikorsky Aircraft, por ejemplo, facturarán U$S 600 millones con la venta de helicópteros.[337] Y las Industrias de Defensa Israelíes (*Israeli Defense Industries*), que pertenecen al departamento de Defensa del Estado de Israel, también tienen varios contratos en Colombia,

principalmente en el campo de las comunicaciones y la electrónica.[338] Más allá de ello, cuatro ciudadanos israelíes fueron apresados y acusados por el fiscalía general colombiana de entrenar grupos paramilitares: Yair Gal Klein, Terry Melnyk, Tzedaka Abraham e Izhack Shosny Merariot, ex oficiales del ejército de Israel.[339]

Cientos de ciudadanos norteamericanos ya se encuentran efectuando misiones aéreas sobre campos de coca o manejando radares en plena selva. Hay entre 300 y 500 soldados regulares, un tercio de los cuales son Boinas Verdes destinados a la base de Larandia del ejército colombiano, a dos horas de auto del centro de operaciones de las FARC. Está en vigencia una prohibición terminante a las entrevistas con la prensa. Se supone que allí entrenan soldados colombianos.[340]

Pero como se dijo, un número creciente de los norteamericanos involucrados en las operaciones no son soldados regulares. Washington los llama "contratistas" (*contractors*) mientras el diccionario los denomina "mercenarios". El embajador de los Estados Unidos en Colombia, Myles Frechette, fue claro: "Es muy práctico tener un traje que no sea parte de las fuerzas armadas estadounidenses, obviamente".[341]

Es por eso que la contratación en Colombia del M.P.R.I. fue aprobada por el Congreso norteamericano. Otras, más subrepticias, no lo son. Pero el M.P.R.I. está trabajando a tiempo completo en ese país con un pequeño pelotón de catorce empleados de excesiva jerarquía, que incluye un general y seis coroneles retirados del ejército norteamericano.[342] Aunque operan fuera de la vista del público, pueden ser identificados en cualquier momento. Por razones políticas, el Comando Sur con sede en Miami no puede permitirse el envío de catorce hombres de estas características, cuya misión no es ni más ni menos que la de contribuir a instrumentar una reforma militar.

Según *Jane's Intelligence Review,* M.P.R.I. está operando de manera muy similar a como lo hizo en los Balcanes, donde firmó con el gobierno croata un Programa de Gestión de Largo Plazo, diseñado para ayudar a los croatas a "establecer la arquitectura, estructura, organización y sistema para llevar acabo funciones de planificación, programación y presupuesto para el Ministerio de Defensa". Aunque se suponía que el M.P.R.I. sólo operaría como asesor, el éxito rotundo de las operaciones militares croatas poco después de la entrada de la empresa mercenaria hace suponer que la "asesoría" llegó hasta el campo de batalla.[343] Particularmente exitosa fue la "Operación Tormenta Eléctrica", donde el hasta entonces endeble y tibio ejército croata arrasó a los serbios en la región de Krajina, quemando y saqueando aldeas, matando a cientos de civiles y obligando la evacuación de 170.000. La empresa felicitaba a sus clientes y se auto- congratulaba orgullosa: "Los croatas aprendieron a coordinar blindados con artillería e infantería". Es por ese éxito que el año pasado el gobierno bosnio le dio un contrato de U$S 400 millones a los mercenarios, financiado por Arabia Saudita, Kuwait, Brunei y Malasia.[344]

Y es por el mismo motivo que ahora comienzan a operar en Colombia. El general retirado Ed Soyster, portavoz del M.P.R.I., declara con todo candor: "Nos están utilizando para llevar a cabo la política exterior norteamericana. Es cierto que no determinamos la política exterior, pero podemos ser parte del gobierno de los Estados Unidos al llevar a cabo la ejecución de la misma". Por otra parte, según dijo al Congreso norteamericano Luis Alberto Moreno, embajador de Colombia en Washington, no se trata de intervención porque: "Colombia le dice al M.P.R.I. que

necesitamos ayuda o asesoramiento en un área determinada". El gobierno colombiano está complacido porque aunque el Pentágono le paga al M.P.R.I., Colombia es la receptora de sus servicios.[345]

DynCorp en Colombia

Al menos por ahora, más importante que el aporte de M.P.R.I. a la guerra civil colombiana es el de DynCorp, una empresa que, como se dijo, está más cerca de la CIA que del Pentágono, y por ello es más propensa a participar en operaciones encubiertas. A veces su participación militar directa es visible al público: en febrero de 2001, por ejemplo, dieron la cara combatiendo a la guerrilla para salvar a la tripulación de un helicóptero caído de la policía colombiana.[346]

Las operaciones de DynCorp siempre despertaron las sospechas de las organizaciones de derechos humanos. A principios de la década del '90 estuvo a cargo de helicópteros prestados al gobierno peruano para la lucha contra la droga. Pero agentes de DynCorp murieron en Perú en circunstancias que demuestran que no estaban allí para el mantenimiento de los helicópteros, que es lo que decía la letra del contrato. Según el hijo de uno de esos agentes caídos, su verdadera misión era introducir agentes de la DEA al país, hacer estallar laboratorios de cocaína, quemar sembradías de coca y coordinar programas de erradicación aérea. El agente, Robert Hitchman, le había contado a su hijo que DynCorp tenía contratos similares en Bolivia, Ecuador y Colombia, en conjunción con la DEA.[347]

En el presente, la empresa provee una gran gama de servicios en Colombia, desde consultores de logística que visten saco y corbata hasta pilotos de guerra, algunos de los cuales ya han caído.[348] Su principal contrato, que asciende a U$S 600 millones, es con la Oficina para la Aplicación Internacional de la Ley de Narcóticos, del departamento de Estado (*International Narcotics and Law Enforcement Bureau*). Su objetivo es apoyar los programas de erradicación de coca en Colombia, Perú y Bolivia. Provee pilotos norteamericanos para aviones de fumigación y helicópteros artillados que protegen las misiones de fumigación. También provee equipos de búsqueda y rescate, como el utilizado en el incidente mencionado arriba con el helicóptero derribado por la guerrilla.

La policía reconoce la presencia de 30 pilotos estadounidenses que pertenecen a la empresa, a los que se suma un centenar de colombianos, peruanos y guatemaltecos. Los pilotos norteamericanos ganan U$S 90.000 al año, y los mecánicos de ese origen 60.000; trabajan en sitios remotos, en turnos de 45 días de trabajo y 15 de licencia. El personal de DynCorp tiene prohibido el acceso a periodistas, pero sus hábitos de borrachines permite abordarlos con una caja de cerveza.

La empresa no está limitada por las órdenes del Congreso norteamericano, que prohíben a las fuerzas regulares entrar en combate, y no está claro si se le aplican las restricciones del Congreso al contacto con unidades de seguridad colombianas sospechosas de estar vinculadas a los paramilitares.[349]

Otros contratistas de servicios militares en Colombia

En Colombia, el gigante tecnológico Northrop Grumman provee un número desconocido de norteamericanos que operan y mantienen cinco estaciones de radar en el este y el sur de Colombia, y que están a cargo del rastreo de vuelos de contrabando. La información es transmitida a Key West en la Florida, cabecera de la Fuerza de Tareas de la Inter-Agencia Conjunta del Este (*Joint Interagency Task Force-East*), bajo un contrato de 1998 administrado por el Comando de Combate Aéreo del Departamento de Defensa (ubicado en Hampton, Virginia). El papel de Northrop Grumman es de menor perfil que el de las empresas que están más cerca del campo de batalla, pero no es menos importante para el éxito del esfuerzo bélico.[350]

Por otra parte la misteriosa *Eagle Aviation Services and Technology Inc.*, que opera desde una base aérea norteamericana con aviones que están registrados a nombre de una empresa fantasma, provee pilotos entrenados por la división aeronáutica de la ya mencionada Oficina de Aplicación Internacional de la Ley de Narcóticos, del departamento de Estado. También conocida como East Incorporated, ha puesto avisos pidiendo pilotos especializados en revistas como *Ag Pilots*, para trabajar en Sudamérica y América Central con base en la Florida. Entre sus pilotos ya hubo bajas fatales en Colombia. Las *Israeli Defense Industries* probablemente equipen los anticuados aviones OV10-D Bronco, que hacen la fumigación y datan de la era de Vietnam, con tecnologías de observación más modernas.[351]

Mercenarios "Made in Brazil"

Pero el ámbito de la formación de cuerpos de mercenarios para secundar los esfuerzos bélicos del Plan Colombia no se limita a estas empresas especialmente licenciadas por el departamento de Estado para contratar servicios militares privados. En Brasil se han venido reclutando mercenarios para luchar en Colombia desde 1999. La iniciativa tiene el aspecto de una típica operación de la División de Operaciones Clandestinas (*División of Clandestine Operations*) de la CIA. Las misiones para las que se recluta son más riesgosas que las emprendidas (en el escenario colombiano) por las empresas mencionadas arriba, y la paga es proporcionalmente mayor. Un piloto puede ganar hasta U$S 12.000 en una sola misión.

Pero el piloto debe tener experiencia comprobable en misiones de alto riesgo, y la mayoría de los contratados son veteranos de la guerra de Angola, donde lucharon contra el UNITA y a favor del gobierno de Luanda, reclutados por los portugueses. (Según el UNITA, que frecuentemente ataca intereses brasileños en Angola, el gobierno brasileño participó de esas operaciones comprando aviones Tucano a Vietnam y triangulándolos al gobierno central de Angola.)

A estos "confiables" veteranos se les da un fuerte entrenamiento para pilotear Hércules C-130 y DC-8. Una vez terminado el entrenamiento, el mercenario viaja a Chile, desde donde se llevarán a cabo las misiones a Colombia desde bases militares no reveladas. Antes de alistarse, sin embargo, se les hace firmar un contrato por el que renuncian a toda compensación en caso de muerte o heridas, para sí y para sus familias. A diferencia de los contratos sudafricanos de las buenas épocas de Executive Outcomes, estos mercenarios no tienen seguiros de vida. También renuncian al derecho de su familia a recuperar el cuerpo.

El grupo de pilotos no se limita a brasileños, sino que incluye un número de veteranos de Vietnam, de El Salvador, y Contras nicaragüenses. Según los informantes, dos pilotos reclutados y veteranos de Angola que hablaron a la revista brasileña *Istoé* bajo condición de anonimato, los aviones pertenecen a un individuo que ejecuta misiones para la CIA y que los guarda en hangares en Sudáfrica. Según estas informaciones habría un total de diez aviones, de los cuales sólo seis se usarían en estas misiones cuyo blanco principal son las FARC y el narcotráfico. Los vuelos desde Chile hacia el espacio aéreo colombiano serían extra-oficiales, es decir, con el conocimiento de las autoridades colombianas pero sin un registro oficial. Uno de los mercenarios dijo que si daba más detalles sería identificado e inmediatamente asesinado.[352]

Las fuerzas especiales

Pero no sólo operan estos mercenarios de diversas pelambres, a veces grandes empresas contratadas por el Pentágono, otras veces operaciones encubiertas de la CIA. Aparte de ello, como se dijo, las fuerzas norteamericanas regulares dan entrenamiento a las fuerzas armadas locales, y lo vienen haciendo desde mucho antes de que se pensara en instrumentar un "Plan Colombia".

El caso más conspicuo fue objeto de una transmisión del conocido programa noticiero de la CBS, "*60 Minutes*", de mediados del año 2000. Se trata de los llamados "comandos copes", una fuerza pequeña de mortíferos guerreros adiestrada por fuerzas especiales norteamericanas. Uno de los entrenadores, el mayor Gil Macklin, fue entrevistado televisivamente por el periodista Dan Rather, quien dijo que los copes son el equivalente colombiano a la fuerza Delta norteamericana. Se decidió formarla y entrenarla para dar caza a Pablo Escobar, después de que éste hiciera derribar un avión de pasajeros de Avianca sólo para matar a un enemigo suyo que viajaba a bordo.

El entonces presidente George Bush (padre) y su embajador en Colombia Morris Busby decidieron armar una verdadera máquina autóctona de la muerte. Convirtieron a la embajada en Bogotá en un virtual comando de guerra, y reclutaron un grupo de jóvenes colombianos fanáticos, impolutos, atléticos, que dieran poco valor a la vida, para comenzar su bestial entrenamiento en una antigua misión jesuítica al pie de los Andes. La instrucción militar, al estilo Rambo, incluyó ejercicios como el disparo de verdaderas municiones a escasos centímetros de sus cabezas. La filosofía grupal es matar o ser matado. En operaciones, usan pasamontañas para no ser reconocibles. El ideal alcanzado por los 120 sobrevivientes del período de instrucción es matar sin compunción y morir sin quejas. Los copos fueron puestos bajo el mando del general Rosso José Serrano, considerado incorruptible en tiempos en que miles de militares y policías están comprados por el narcotráfico.

Para defenderse, Escobar a su vez contrató algunos de los mejores mercenarios del mundo: británicos, israelíes y rusos. Pero como sabemos, no le alcanzó. La batalla librada por los copos consistió en bajar los lugartenientes de Escobar, uno por uno, destruir su infraestructura, derribar todas sus barreras de protección, con cientos de ataques sorpresivos, tirando a matar, lanzados contra el sistema nervioso del cártel de Medellín. La mitad de los 120 copos murió en combate. Pero finalmente se encontraron con el éxito y Escobar cayó.

Reflexiones

No obstante, como fue señalado por Rather al ex embajador Morris Busby, también entrevistado en la ocasión, es difícil hablar de éxito cuando, a pesar de que Escobar fue muerto en diciembre de 1993, hacia el año 2001 más cocaína que nunca entra a los EE.UU. Cayó el cártel de Medellín sólo para que emergiera el de Cali, y cuando cayó el de Calí surgió una multitud de cárteles chicos que alimentan a una guerrilla cada vez más poderosa. Y cada vez se produce, vende y consume más cocaína.[353]

Más aún, como argumentó el periodista Arnaud de Borchgrave ante el presidente Pastrana en una entrevista para el *Washington Times*, Bogotá libra una guerra de cuatro frentes: contra las FARC, el ELN, los paramilitares de la AUC y los narcotraficantes. Colombia es siete veces más grande que Vietnam del Sur, donde los Estados Unidos perdieron 3800 helicópteros en 10 años durante la guerra, la mayor parte de los cuales fueron derribados por un ejército guerrillero campesino. ¿Qué le hace pensar, a Pastrana y al gobierno norteamericano, que con 60 helicópteros norteamericanos (18 modernos Black Hawks y 42 anticuados Hueys de la era de Vietnam) provistos por el Plan Colombia, van a poder cambiar el balance del poder a favor del gobierno?[354]

Aunque siga siendo insuficiente, quizá parte de la respuesta sea que en realidad los paramilitares no son, como pretende Pastrana, enemigos del gobierno, sino aliados encubiertos. De hecho, han conseguido arrinconar y debilitar al ELN, lo que constituye una fuerte carta en la negociación de Pastrana con las FARC. El desafío enfrentado por el gobierno y las fuerzas regulares es quizá insuperable aún con la ayuda norteamericana, pero la guerra no es de cuatro frentes sino de dos frentes y medio, y quizá en una primera etapa, esencialmente contra las FARC.

No obstante, los U$S 7500 millones distribuidos durante cinco años que aportará el Plan Colombia parecen suficientes como para asegurar una escalada, pero gruesamente insuficientes para cambiar el equilibrio de poder en país cubierto de selvas, de 40 millones de habitantes. ¿Es realmente tan estúpido el gobierno de los Estados Unidos que no comprende que no puede hacer en Colombia, con sólo U$S 7500 millones, y en guerra también con sus aliados naturales, los paramilitares, lo que no pudo hacer en Vietnam con recursos infinitamente mayores y menos contradicciones? ¿O por el contrario, el Plan Colombia no será sino la punta del ovillo de una estrategia donde fuerzas mercenarias con apoyo norteamericano encubierto serán la principal punta de lanza, en una guerra en que los paramilitares serán aliados públicamente estigmatizados pero valiosos a la hora de la verdad?

Pongámoslo de otra manera. Los mercenarios norteamericanos son paramilitares que (en principio) no trafican con droga, aunque salen caros. Los paramilitares colombianos nacieron como mercenarios al servicio de narcotraficantes y empresarios, se financian con drogas; pero tienen fuertes aliados en el Estado y ejército colombianos, son el peor enemigo de las FARC, y sus operaciones son gratuitas y muy beneficiosas para el gobierno norteamericano. ¿Es posible que el gobierno que no sólo fue capaz de usar a “Los Pepes” para cazar a Escobar, sino que también arriesgo a la familia de éste usándola como anzuelo (ya que el mafioso padecía la debilidad de ser un padre y esposo de corazón tierno), sea ahora tan escrupuloso que va a desperdiciar un recurso tan poderoso como el que le brindan las AUC de Carlos Castaño? ¿Es

posible que el gobierno que convierte en política de Estado el uso de recursos militares que están más allá del control del público y del Congreso, sea tan escrupuloso cuando enfrenta una campaña que no puede ganar a no ser que maximice el uso de todos los recursos a su alcance, santos y non sanctos?

El discurso oficial no cierra ni es creíble. Carlos Castaño está condenado a ser aliado de la CIA.

.

CAPÍTULO 6 – UN DOCUMENTO

LOS PARAMILITARES EN LA VISIÓN DE LAS FARC

Introducción

La temática de los paramilitares es harto compleja e inquietante. Como las FARC, son una organización poderosa que amenaza con "derramarse" más allá de las fronteras colombianas. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos ha denunciado que las AUC (al igual que los narcotraficantes) están comprando tierras fronterizas en el Ecuador, con la intención de cultivar coca. El informe fue apoyado por campesinos obligados a huir de sus hogares debido a la fumigación de cultivos de coca en la región colombiana de Putumayo. La localidad de Sucumblos, en Ecuador, ya es considerada "zona de paramilitares", y las autoridades municipales están conscientes de que las AUC le dan también un valor militar: detener a las FARC si intentan cruzar al Ecuador. Las FARC acusan a los Estados Unidos y la CIA de dar apoyo a esta iniciativa de las AUC, incluyendo el uso de mercenarios internacionales.[355]

Aparentemente, fueron paramilitares colombianos los responsables del ataque al helicóptero de Repsol-YPF en octubre de 2000, con el subsiguiente secuestro de sus pasajeros. La empresa opera en la provincia de Orellana, cerca de Sucumblos y a apenas 100 kilómetros de la frontera. Muchas operaciones paramilitares en la zona se realizan con la intención de culpabilizar a las FARC. Tal el caso, según parece, del frustrado intento de hacer volar el puente fronterizo sobre le río San Miguel, recién construido. El 26 de septiembre de 2000, dos días antes de su inauguración por los presidentes Noboa y Pastrana, el ejército ecuatoriano interceptó un camión con una carga de municiones y explosivos. Según las autoridades, fue un típico operativo de los paramilitares.[356]

Por otra parte, ni el gobierno de los Estados Unidos duda de que se trata de una fuerza que se financia con el narcotráfico (si éste no se ha convertido ya en su principal razón de ser), que viola derechos humanos masivamente, y que está protegida por segmentos del Estado y la parte más importante del ejército. Es por ello que muchas veces tanto el gobierno colombiano como el norteamericano han reiterado públicamente que, en la lucha contra la droga, los paramilitares son enemigos en una medida no menor que el narcotráfico mismo, las FARC y el ELN.

Los vínculos entre los paramilitares y los militares colombianos están en evidencia. Los escuadrones de la muerte paramilitares han atacado ciudades, matando a los simpatizantes de la guerrilla, bajo la mirada de las bases militares. Entre abril y agosto de 1999, el presidente Pastrana destituyó cinco funcionarios de seguridad, incluyendo generales, por patrocinar ataques a civiles por parte de los paramilitares. Pastrana ha entrado frecuentemente en conflicto con el alto comando de las fuerzas armadas. Según el Ministro de Defensa Rodrigo Lloreda, 14 de los 30 generales y 200 otros funcionarios militares presentaron su renuncia en protesta a las concesiones de Pastrana hacia la guerrilla, aunque finalmente convenció a los generales y a otros funcionarios de que permanezcan en sus puestos.[357]

De acuerdo a un informe de *Human Rights Watch*, la mitad de las unidades del ejército colombiano están vinculadas a la actividad paramilitar. En una carta enviada en febrero de 200 a la Secretaria de Estado Madeleine Albright HRW dice contar con "detallada, abundante y comprometedora evidencia de continuos vínculos estrechos entre el ejército colombiano y los grupos paramilitares responsables de importantes violaciones a los derechos humanos".[358]

De acuerdo a la Oficina del Procurador colombiano los escuadrones de la muerte mataron aproximadamente 1000 personas en más de 125 masacres en 1999. Recientes informes de Human Rights Watch y de Naciones Unidas e investigaciones de fiscales colombianos señalan que las unidades militares colombianas han provisto su apoyo a los escuadrones de la muerte o han fracasado en atender los llamados de ayuda de los pueblos atacados. Para evitar tales abusos, el Congreso Norteamericano aprobó la enmienda Leahy en 1997, prohibiendo la provisión de ayuda a cualquier unidad militar colombiana que viole los derechos humanos. Como resultado, algunos batallones colombianos han sido descalificados para recibir la ayuda, se formaron nuevas unidades, e instructores en derechos humanos se volvieron un requisito del entrenamiento militar. Pero los críticos de la ayuda del Presidente Clinton insisten no sólo en que deben profundizarse las restricciones, sino también en que deben implementarse mecanismos de control. El autor de la enmienda, Senador Leahy, declara que "el gobierno pinta todo de color rosa, pero la realidad es que los funcionarios del ejército que cometen atrocidades nunca son procesados". "Los vínculos entre el ejército y los paramilitares son amplios". [359]

Serias acusaciones han aparecido afirmando que agentes de la DEA han ofrecido subsidios al líder paramilitar, Carlos Castaño, en retorno a su apoyo en combatir a los narcotraficantes. En una entrevista televisiva Castaño dijo no saber si el requerimiento reflejaba la política norteamericana o si sus agentes actuaban por iniciativa propia. Un informante de la DEA, que dijo haber actuado como intérprete en las reuniones entre los agentes de la DEA, narcotraficantes y miembros de la milicia paramilitar de Castaño, afirmó que los funcionarios norteamericanos habrían acordado reunirse con Castaño para concluir un trato. La historia puede ser pura fantasía, tal como la administración Clinton afirma. Pero no sería la primera vez que agentes de inteligencia norteamericanos tienen tratativas con Carlos Castaño. En 1993, mientras trabajaba para el cártel de Cali, colaboró con la CIA y la policía colombiana para atrapar a Pablo Escobar. [360]

En una entrevista radial de RCN Castaño negó haber tenido contactos con miembros del departamento de Estado, la CIA, la DEA o el FBI. Relató que en una ocasión un terrateniente llegó con información y le dijo que tenía un narcotraficante amigo que estaba hablando con algunos agentes de la DEA. El reportero le comentó a Castaño la existencia de un memorándum de los Estados Unidos en el que aquel habría solicitado ayuda militar para las AUC a cambio de colaboración en el envió de narcotraficantes a la justicia norteamericana. Castaño respondió que su guerra es contra los subversivos y que en la medida en que los traficantes continúen apoyando a la guerrilla el enfrentamiento será con ellos. Dijo desconocer la existencia de ese memorándum. [361]

Uno de los casos más intrigantes en los que participó un ex informante de la DEA, Baruch Vega involucra una estrecha asociación con Carlos Castaño. El relato de Vega, confirmado por otras personas familiares con el caso, provee nueva evidencia de que las autoridades norteamericanas buscaron ayuda del líder paramilitar en su lucha contra las drogas- a pesar de que la DEA lo describió como un importante narcotraficante. El caso involucra a Nicolás Bergonzoli, ganadero colombiano procesado en Connecticut en 1991 por conspiración para importar y distribuir 15000 kilos de cocaína pertenecientes a Pablo Escobar. Luego de una aparición inicial en una corte de Miami, fue liberado al día siguiente. Gente cercana al caso dice que Bergonzoli trabajaba en un acuerdo con los funcionarios norteamericanos. Vega dice que Bergonzoli recibió 200.000 dólares por su ayuda. Agrega que no hubo encuentros directos entre

Castaño y funcionarios norteamericanos. La DEA trató de usar a Bergonzoli para persuadir a Castaño de alentar a narcotraficantes operando en su territorio a entregarse a las autoridades americanas. Vega declara haber actuado como traductor en algunas de las discusiones. La DEA no hizo comentarios, pero Richard Sharpstein, el abogado del suspendido supervisor de la DEA David Tinsley, confirmó que varios encuentros entre Bergonzoli y Tinsley tuvieron lugar entre diciembre de 1998 y febrero de 2000, en Florida y Costa Rica. Castaño declaró en un reportaje televisivo que en agosto, Bergonzoli le pidió en nombre de la DEA que presionara a los traficantes. El periodista Gerardo Reyes, quien escribió sobre el caso Vega en el diario Nuevo Heraldo, dice que Castaño le afirmó que una delegación de funcionarios norteamericanos estaba planeando encontrarse con él en algún lugar de la frontera panameña-colombiana para discutir en profundidad la operación. [362]

Dados estos antecedentes, las declaraciones tanto norteamericanas como del gobierno colombiano sobre el carácter de enemigo que atribuyen a los paramilitares carecen por completo de credibilidad. No sólo el pasado los condena; también es dudoso que el Plan Colombia pueda prescindir de un aliado natural contra la narcoinsurgencia de las FARC (que por más que se niegue, objetivamente es el principal enemigo de los intereses norteamericanos). En todo caso, el desafío de luchar simultáneamente contra cuatro frentes es mayor que el de Vietnam, donde los norteamericanos fueron derrotados, a la vez que los recursos que se proponen invertir en Colombia son, al menos por ahora, mucho menores. Además, los norteamericanos sacrificaron los derechos humanos al pragmatismo necesario para el éxito político y militar demasiadas veces en su historia como para que ahora pueda tomárselos en serio. Aún dándoles el beneficio de la duda, la actitud debe ser un prudente “ver para creer”.

La narcoinsurgencia no es sólo el principal enemigo de los Estados Unidos. Aún en mayor medida, lo es del Cono Sur. A decir verdad, el narcotráfico es principalmente un problema norteamericano y europeo, y los paramilitares son un problema colombiano. En cambio, las alianzas internacionales que teje la narcoinsurgencia en su estrategia por ser reconocida y sobrevivir, la convierte en un factor desestabilizador para todo el continente, y ello será tanto más grave cuanto mayor sea el embate del Plan Colombia y mayor sea el derrame hacia el sur de una guerrilla desesperada.

No obstante, desde el punto de vista de los principios los paramilitares no dejan de ser un elemento esencialmente más abominable, porque en la medida en que son el producto de estrategias instrumentadas por el ejército de Colombia, son terrorismo de Estado. Desde la perspectiva de la teoría liberal del Estado, el terrorismo de Estado es mucho peor que el terrorismo a secas porque pone al Estado en el mismo nivel de la delincuencia terrorista, lo que significa que lo priva de autoridad moral para luchar contra la delincuencia: es una delincuencia contra otra en un contexto en que los ciudadanos fueron privados de sus derechos y el Estado perdió su razón de ser como defensor de esos derechos.

Es muy probable que en la guerra venidera, el terrorismo de Estado paramilitar sea denostado públicamente pero encubiertamente alentado y protegido. Habrá castigos simbólicos, pero más significativos serán los aportes positivos del Estado colombiano y de los Estados Unidos a los paramilitares. De lo contrario, el Plan Colombia fracasará casi ineludiblemente.

Visto desde esta perspectiva, es casi inevitable que las FARC sean víctimas de una hipocresía mayúscula. Aunque ningún conosureño bienpensante puede dudar que su derrota contribuiría a la paz y prosperidad sudamericanas, tampoco es posible dejar de lamentar la violación masiva de derechos humanos que casi con seguridad se perpetrará. Además, el terrorismo de Estado será, como siempre, el peor de los ejemplos, y contra ello deberemos estar en guardia porque, desautorizados moralmente los Estados Unidos, *el motor de defensa de los derechos humanos en nuestros países deberá provenir de nosotros mismos.*

Por ese motivo, los autores de este libro hemos decidido apelar a un recurso poco convencional para tratar el tema de los paramilitares. Probablemente, en la guerra por venir las FARC sean las principales víctimas de estas fuerzas privadas que se toman la justicia por mano propia con la complicidad del Estado. Por ello, y como una cuestión elemental de *noblesse oblige*, hemos optado por incluir, como nuestro capítulo sobre los paramilitares, un documento de las FARC que cuenta la historia de estas bandas, firmado por la organización guerrillera "en las Montañas de Colombia" en 1999, y puesto a disposición del público mundial en una página de Internet.[363] Antes de tomar la decisión definitiva, verificamos su seriedad. Además, lo acortamos para eliminar algunos detalles de interés sólo para colombianos, y eliminamos algunos excesos retóricos típicos del romanticismo revolucionario. Por lo demás, el documento está intacto y es absolutamente fiel al mensaje que Tirofijo quiso enviarnos, desde "algún lugar de la selva colombiana".

"PARAMILITARISMO COMO POLÍTICA CONTRAINSURGENTE DE ESTADO" –

por FARC-EP

Paramilitares, militares y narcotráfico

Quizá el primer antecedente de los paramilitares que conocemos hoy sean los conocidos "pájaros" o "chulavitas" de la violencia de los años cincuenta, fruto de una estrategia estatal organizada directamente por el partido Conservador, partido de gobierno de la época, que buscaba descontar la diferencia política con el otro partido, el Liberal, y apropiarse de las tierras que le quitaba a los campesinos, iniciando una ola de violencia contra campesinos liberales, para consolidar su hegemonía. Ante el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, se desencadenó una guerra civil que dejaría más de 300 mil muertos y dos millones de desplazados del campo.

La lucha entre liberales y conservadores tuvo, entre muchas consecuencias, que las autoridades políticas, los gamonales y caciques, amparados en la violencia institucional, fueran quienes más provecho económico y político sacaran. Del trabajo sucio se encargaron los "pájaros" (paramilitares de la época), que eran el brazo "civil" del ejército.

Primero llegaban militares o policías a un pueblo. Desarmaban a la población y a la madrugada del día siguiente aparecían los "pájaros" para matar a todo el mundo e implantar el régimen del terror, vieja combinación de las formas de lucha del Estado colombiano.

En 1960, en un pacto bipartidista liberales y conservadores acordaron turnarse el poder equitativamente cada cuatro años, en lo que se conoció como el Frente Nacional. Al decretar ese 'perdón y olvido' no sólo se tendió un manto de impunidad a las atrocidades cometidas por el régimen durante esos años, sino que se legalizó la expropiación y robo de tierras de los miles de campesinos desplazados, acrecentando el latifundismo en Colombia.

El actual término “paramilitar” es el reconocido para identificar las diferentes expresiones que han tenido los grupos de justicia privada, escuadrones de la muerte, bandas de sicarios, grupos de limpieza social o autodefensas, que han operado en los últimos 15 años en Colombia. Se conocen más de 350 nombres de estas agrupaciones que aparecen y desaparecen sin dejar rastro, luego de cumplir su objetivo: la selección y asesinato de sus víctimas, el desplazamiento de amplios sectores de la población y la siembra del terror. Esta intermitencia ha facilitado la protección no sólo de sus verdaderas identidades, sino, en especial, de sus promotores y los intereses que persiguen; y al Estado les ha servido para eludir su responsabilidad directa en la existencia cómplice —por acción u omisión— de estos asesinos a sueldo. Pero sobre todo, para impedir que se sepa la realidad del paramilitarismo en Colombia y sus estrechos vínculos desde los años 80 con el narcotráfico, algunos sectores de la empresa privada y una amplia franja de militares.

Tal como lo afirma el investigador Carlos Alberto Ruiz, del Estado nacieron como lo reflejan las disposiciones que crearon y pusieron en marcha esa estructura; según sus directrices se desarrollaron; en su ideología de Seguridad Nacional se formaron; del Estado recibieron armas y ayuda para la redacción de los estatutos y la contratación de los mercenarios; las Fuerzas Armadas y gran parte de las autoridades civiles protegen su avance en las regiones, avalan su proyección política y garantizan la impunidad de sus crímenes; del Estado depende la vitalidad de esas organizaciones que no son, como se sugiere, una rueda suelta.

En el mismo sentido, el libro "Tras los Pasos perdidos de la Guerra Sucia en Colombia", investigación adelantada por seis ONG en Bruselas, afirma que el fenómeno paramilitar no es un hecho aislado sino una política de Estado, clara y conscientemente definida al interior de las Fuerzas Armadas colombianas, contenida en los propios manuales de las instituciones castrenses y que cuenta con el conocimiento y aval de los respectivos gobiernos.

Esta práctica de violencia para-institucional ha golpeado hasta desarticular toda expresión organizada de la sociedad, produciendo más de un millón doscientos mil desplazados del campo hacia centros urbanos en los últimos 10 años, cuyas tierras pasaron a otros dueños, la mayoría testaferros del paramilitarismo o del narcotráfico.

La Triple A

Según las investigaciones adelantadas por varias ONG y recogidas en el libro "Terrorismo de Estado en Colombia", muchas de las amenazas, asesinatos, desapariciones, y los ataque a la sede del Partido Comunista y los periódicos *El Bogotano*, *Voz Proletaria* y la revista *Alternativa*, todos del año 1978, fueron efectuadas por una organización que se hacía llamar la Triple A —Alianza Anticomunista Americana— que operó bajo el Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Turbay Ayala.

Las investigaciones hallaron tras la sigla los nombres de los militares teniente coronel Harold Bedoya Pizarro, capitán Álvaro Velandia Hurtado y mayor Iván Ramírez Quintero. Sólo 25 años después, las denuncias apenas empiezan a dilucidarse y en la actualidad la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía investiga al oficial Iván Ramírez, por presunta conformación de grupos paramilitares y por sus nexos con la CIA.

Otro de los integrantes de la Triple A, Harold Bedoya, continuó ascendiendo en su carrera. En 1990 fue comandante de la VI Brigada en el Meta. Su llegada coincidió con el fortalecimiento de los grupos paramilitares de Gonzalo Rodríguez Gacha y Gilberto Molina. Durante el Gobierno de Samper fue Comandante General de las Fuerzas Militares hasta 1996 y, candidato presidencial (como general retirado) en 1998.

Meses antes de su postulación como candidato, "el gobierno colombiano forzó el retiro del general Harold Bedoya, cuya hostilidad a los derechos humanos y asociación durante toda su carrera con los paramilitares son conocidas. “A Bedoya lo sacamos por derechos humanos”, dijo el Presidente Samper a *Human Rights Watch* en una entrevista.

Primeros acercamientos de paz

A comienzos de los ochenta, la guerrilla colombiana completaba 20 años de lucha. Era la única que continuaba combatiente en el hemisferio. El Presidente Belisario Betancur, interesado en una negociación con su dirigencia, promulgó la ley de amnistía que iba dirigida a su desmovilización. Creó la Comisión de Paz Asesora del Gobierno Nacional e inició conversaciones con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, alrededor de la cual se agrupaban los grupos guerrilleros más importantes. Al final de su gobierno llegaría a la firma de un cese al fuego con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la que surgió el movimiento político llamado Unión Patriótica (UP).

Su ascenso político fue arrollador en todas las corporaciones públicas del país, lo que alarmó a los sectores más conservadores, que decidieron frenar a toda costa esta representación. Se inició así uno de los más oscuros episodios de persecución política en la historia reciente.

Las intenciones de paz de Belisario no habían sido del todo claras. Si bien iban dirigidas a la desmovilización de la guerrilla, los paramilitares no fueron mencionados por ningún lado. Sólo un miembro de la Comisión Asesora, el día de su instalación, consideró como uno de los temas prioritarios de la agenda "investigar y desactivar efectivamente los grupos paramilitares como el llamado MAS". Lejos de este logro, lo que se produjo en los años siguientes fue el recrudecimiento de la violencia paramilitar.

Las acciones de los paramilitares para exterminar a la UP fueron disfrazadas mediante la utilización de 'matones a sueldo' que, como lo demostrarían más adelante las investigaciones, no actuaban solos. El primer senador de la UP asesinado en Villavicencio (Meta) fue Pedro Nel Jiménez, en 1986. Según la investigación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el teniente Miller Tarcisio Coy Núñez planeó y dirigió el asesinato del parlamentario. Así lo confesó Álvaro Serrano Humoa, ex sicario que trabajaba como informante de la red de Inteligencia de la VII Brigada del Ejército. A pesar de la investigación del DAS, la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares se abstuvo de abrir un proceso disciplinario. En febrero de 1989 archivó el caso.

En el primer año de creada la UP, 700 de sus miembros fueron asesinados por sicarios. Diez años después, sumaban más de tres mil. En esta campaña se aliaron el narcotráfico y los partidos tradicionales. Así comenzó una orgía de asesinatos contra senadores, diputados, concejales, alcaldes, sindicalistas, activistas políticos, dirigentes y representantes de numerosos sectores populares de este movimiento político.

En 1987, siendo presidente de la UP el ex magistrado Jaime Pardo Leal, en una rueda de prensa acusó con nombres y grados a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos en asesinatos y desapariciones de miembros de su Partido. También señaló a

varios de los uniformados por su participación en actividades paramilitares. Pero como los demás miembros del Partido, Pardo Leal cayó bajo las balas de sus denunciados. A escasos días de su asesinato, el entonces coronel. Iván Ramírez Quintero atribuyó el homicidio a sicarios al servicio de Rodríguez Gacha**.**

Hasta hoy, ni autores intelectuales ni materiales del aniquilamiento de la UP han sido castigados. Los asesinos continúan libres, pese a conocerse multitud de denuncias de la complicidad entre paramilitares, narcotraficantes y miembros de las fuerzas armadas, y a que en las Naciones Unidas se adelante una demanda contra el Estado colombiano por exterminio político.

El ejército, ajeno al proceso de paz, había persistido en su intención de combatir a la guerrilla, y había hecho llamados a la población y a las fuerzas políticas regionales para crear un frente común de lucha contra la subversión, que extendió hasta un partido legalmente constituido, con los métodos propios de la guerra irregular.

A la alianza regional y económica entre esmeralderos y narcotraficantes se sumó el secuestro, por parte del M-19, de una hermana de los Ochoa -conocidos narcos del cártel de Medellín- como detonante para la conformación de una estructura paramilitar en Puerto Boyacá. Junto con otras organizaciones, en 1981 los nuevos ricos del narcotráfico habían creado el MAS (Muerte a Secuestradores). La guerra contra la guerrilla fue la razón que esgrimieron ganaderos, terratenientes, miembros de las fuerzas militares, comerciantes y multinacionales, para inaugurar uno de los capítulos más siniestros de la historia contemporánea del país. Se refundaría el paramilitarismo en Colombia como un proyecto nacional de carácter político-militar.

La Tenebrosa XX Brigada

El 24 de noviembre de 1984 fue asesinado Oscar William Calvo, reinsertado del Ejército Popular de Liberación (EPL) y vocero de su organización en la firma de los acuerdos de paz con Betancur. Dos años más tarde, la confesión de un suboficial de inteligencia de la XX Brigada ante la Procuraduría, vinculó a los coroneles Iván Ramírez Quintero y Alvaro Velandia Hurtado con la tortura a dos miembros de la Juventud Trabajadora de Colombia en las instalaciones de la Brigada, y relacionó a ésta con el asesinato del ex guerrillero Calvo.

Dicho suboficial, el sargento Garzón Garzón, había tenido la misión de ser agente infiltrado, primero en las FARC y luego en el M-19. Después fue encargado de realizar operaciones encubiertas, como llevar a una finca cerca de Bogotá a los “desaparecidos” para interrogarlos y posteriormente asesinarlos.

La fuga de uno de ellos, Carlos Uribe, guerrillero del EPL, condujo a las autoridades hacia el sargento. Cuando éste se sintió sin el respaldo de sus superiores, decidió hablar. Su primera revelación fue señalar el sitio donde estaban enterradas varias personas desaparecidas entre 1984 y 1989. Se trataba del cementerio de Guayabetal, en la vía de Bogotá a Villavicencio. Una Comisión Judicial halló sepultados como N.N. a varios desaparecidos, entre ellos Nidia Erika Bautista y Amparo Tordecilla, militantes del M-19. Este caso tuvo una amplia repercusión internacional. El suboficial Garzón señaló al coronel Velandia de la XX Brigada como uno de los autores intelectuales del crimen de Bautista.

Según la confesión del ex sargento, estos hechos, junto con el asesinato de Calvo, eran responsabilidad de una estructura de la Brigada. Garzón la describió como un grupo que estaba compuesto por militares activos y civiles. Uno de ellos, el ex soldado José Clemente Menéndez López, miembro del grupo paramilitar de Puerto Boyacá encargado de "matar a las personas

que se levantaban" o sea a los desaparecidos, había sido traído por el propio coronel Velandia Hurtado desde el Magdalena Medio.

El procurador desen‘mas’cara

Mucho antes de ello, el 4 de febrero de 1983, el Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, denunció ante el Congreso de la República que en la creación del MAS habían participado 163 personas, 59 de las cuales eran oficiales del ejército en servicio activo, junto a representantes de la *Texas Petroleum Company*, ganaderos y políticos de la región, cuyo radio de acción se centraba en Puerto Boyacá. Según el Procurador, "se estaba extendiendo la viciosa costumbre de que los militares se apoyaran en gentes privadas, para llevar a cabo sus labores de contrainsurgencia". Tras la sigla del MAS se escondía un grupo creado y dirigido por el entonces segundo comandante del batallón Bomboná, mayor Alejandro Álvarez Henao y por el jefe de su sección de inteligencia, capitán Guillermo Visbal Lizcano.

También el procurador afirmó que entre los 59 oficiales activos del ejército creadores del MAS, se encontraban el coronel Velandia y el capitán Oscar Echandía Sánchez. Más tarde, la confesión del propio capitán Echandía Sánchez serviría para vincular con la creación del MAS a los tenientes coroneles Jaime Sánchez Arteaga y Plazas Vega. Según el mismo testimonio la organización del grupo paramilitar había sido patrocinada por el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. Echandía afirmó en su confesión que existían estrechos lazos entre Rodríguez Gacha y la Escuela de Caballería.

Pero mientras el procurador acusaba a los militares de estar involucrados en paramilitarismo, los gremios de la producción salían en su defensa, dándoles respaldo público a las fuerzas armadas. Pedro Juan Moreno Villa, presidente de la Federación de Ganaderos de Antioquia (Fadegan), acusó entonces a la procuraduría de poner en peligro las vidas de los militares acusados. Varios de los acusados de pertenecer al MAS por el procurador eran ganaderos miembros de Fadegan, y los abogados de esta federación asumieron la defensa de las personas que fueron acusadas por la procuraduría. Seis años después, estos mismos abogados asumirían la defensa de los miembros del MAS de Puerto Boyacá, acusados de las masacres en La Negra y La Hondura, en marzo y abril de 1988 en la región de Urabá.

La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) también salió en defensa de los militares y públicamente los respaldó: "El MAS no existe sino en mentes enfermizas de malos colombianos; las fuerzas armadas saldrán airosas", publicaron en una comunicación conjunta firmada por varios gremios.

A pesar de la gravedad de la denuncia hecha ante el Congreso de la República por el Procurador General de la Nación, lejos de frenarse el proyecto paramilitar, se fortaleció e irradió por todo el país, teniendo como modelo el implantado en el Magdalena Medio.

El modelo Puerto Boyacá

Existen los más diversos grados de complicidad entre las fuerzas militares y los grupos paramilitares. El origen de todo está, sin duda, en haber permitido desde el comienzo que estos grupos de autodefensas fueran usados por grupos mafiosos, como las asociaciones de esmeralderos del Occidente boyacense y el cártel de Medellín.

Desde 1973, con la privatización de la explotación de las minas esmeraldíferas de Boyacá, la conformación de ejércitos privados fue aceptada o al menos tolerada como un rasgo inherente a este negocio, debido al limbo legal en el que se encontraban los guaqueros o mineros artesanales. La zona de mayor explotación está ubicada en la hoya del río Minero, de

donde procede algo más del 80% de las esmeraldas del país. Para los mineros de Borbur, en el municipio de Puerto Boyacá, éste sitio se convirtió en ruta obligada de comercio, cuando su rival de Coscuez les cerró la entrada de Chiquinquirá por Pauna. De allí provinieron nexos permanentes entre este grupo y las posteriores Autodefensas de Henry de Jesús Pérez, en el Magdalena Medio, las cuales fueron organizadas y financiadas -como denunció el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)- por Gilberto Molina, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha.

Pero desde antes de la entrega en concesión, la minería ilegal trabajaba de manera conjunta con el legendario Efraín González y los jefes de estos clanes, los Molina, Silva, Carranza, Murcia, quienes a lo largo de los años se han visto enfrascados en líos judiciales, *vendettas*, homicidios, paramilitarismo y narcotráfico.

Por ejemplo, Gilberto Molina, esmeraldero, narcotraficante y reconocido jefe paramilitar en Cundinamarca, el Magdalena Medio, Boyacá y Puerto Boyacá, fue asesinado en 1989 en Sasaima por sus disputas con Rodríguez Gacha, otro reconocido esmeraldero y narcotraficante. Varios miembros de los Murcia fueron asesinados y un descendiente de Isauro y Olmedo Murcia, jefes esmeralderos tradicionales, fue capturado en mayo de 1998, sindicado de ser miembro importante del cártel de Bogotá. También está el caso de los Gaitán Mahecha (Orlando, Ángel y Custodio), señalados como narcotraficantes y envueltos en episodios de sangre dentro de la llamada guerra verde, como la masacre de Altos del Portal en 1988, en Bogotá. Actualmente se encuentran investigados por paramilitarismo.

Narcotráfico y paramilitares

Hasta los años 80 el paramilitarismo se había conservado con “bajo perfil” y era presentado con el ropaje de las acciones encubiertas del Ejército, en el marco de la conocida doctrina de seguridad nacional y el conflicto de baja intensidad, que seguían los ejércitos latinoamericanos inspirados en la doctrina Kennedy de la Guerra Fría de los años sesenta.

Pero ya en esta década, para el lavado de dinero las mafias del narcotráfico utilizaron, entre muchas otras formas, grandes inversiones en finca raíz en las ciudades y en haciendas rurales. Esto generó un fenómeno que ya se había dado en los años de la violencia de los cincuenta: el cambio de los propietarios de la tierra. Según estudios publicados por Alejandro Reyes, hacia 1995 los narcotraficantes habían comprado fincas en 409 municipios del país, es decir el 42% de los municipios colombianos. Hacia fines de 1997 la propiedad de la tierra en manos de los narcotraficantes ascendía a cuatro millones de hectáreas, y alrededor del 10% del área más productiva del territorio nacional.

La década de los ochenta será recordada con terror por los colombianos. Cuando la mafia de la droga asesinó al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el presidente Barco reavivó el tratado de extradición con Estados Unidos. Entonces los capos de la droga se dedicaron al accionar terrorista para evitar ser extraditados a purgar condenas en dicho país.

En 1987, cuando un noticiero de televisión mostró en el departamento del Huila a paramilitares fuertemente armados, se generó el primer debate nacional sobre el tema. Entonces, el ministro de Justicia José Manuel Arias Carrizosa acudió en su defensa. "Soy partidario de que la gente se defienda porque está consignado en las leyes, porque está consignado en la naturaleza humana".

Mientras tanto numerosos carros-bomba fueron detonados en varias ciudades con multitud de muertos y damnificados; un avión estalló en pleno vuelo y todos sus ocupantes murieron; ante la mirada impotente del país, cayeron asesinados el procurador, varios

candidatos presidenciales, periodistas, magistrados, jueces, activistas de izquierda, sindicales, comunitarios y defensores de derechos humanos, sin que el Estado actuara para impedirlo o para detener a los autores intelectuales y materiales.

Sólo en la ciudad de Medellín, entre 1988 y 1992 fueron asesinados mil jóvenes bajo la modalidad de masacres. Las acciones seguían un mismo patrón: hombres con armas automáticas movilizados en potentes carros que sacaban a sus víctimas de las casas o lugares de trabajo. Aparecían luego los cuerpos en sitios apartados y con visibles señales de tortura, bajo la dirección de estas bandas de sicarios. Fue la conocida guerra de los cárteles de la droga.

En el campo, regiones como Córdoba, Antioquia, Magdalena Medio y Meta se vieron de la noche a la mañana con una nueva clase de dueños: gentes que habían hecho sus fortunas con el negocio de las drogas. Como parte de su accionar, las mafias buscaron consolidación territorial en ciertas regiones del país, ubicadas como zonas de seguridad, y establecieron corredores para facilitar el desarrollo del negocio mismo. Utilizaron grupos de sicarios dedicados a todas las actividades del negocio: protección de materia prima, laboratorios, territorios de los jefes, *vendettas* entre grupos y la proliferación de grandes extensiones de cultivos ilícitos.

Vladimir: paramilitar confeso

En 1988 el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) acusó a la Asociación de Ganaderos y Campesinos del Magdalena Medio (Acdegam) de servir de fachada a la organización paramilitar autora de las masacres de Urabá. Esta acusación respaldaba la declaración de Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, paramilitar confeso condenado a 60 años de cárcel por su participación en las masacres de Segovia, La Rochela y otras planeadas desde la estructura paramilitar del Magdalena Medio.

> "Acdegam tuvo dos juntas: la primera Junta la integraba Henry Pérez, Gonzalo Pérez, Nelson Lesmes, Alejandro Echandía (hermano del Coronel Echandía) y Eduardo Ramírez... Después, cuando se crearon los paramilitares, ellos pasaron a la Junta Militar de los paramilitares. Pero mientras permanecieron en la Junta de Acdegam dirigieron varios delitos; también presionaron a los funcionarios judiciales para que sus crímenes no se conocieran... Acdegam no recibía dinero ni armas. La función de la cooperativa era de colaboración y coordinación de las operaciones militares".

Como confesó Vladimir, las autodefensas creadas con respaldo legal empezaron a violar su naturaleza jurídica por órdenes expresas de altos mandos militares:

> "En una ocasión llegó el general Yanine y nos dio una conferencia en la escuela 01 en donde nos manifestó que debíamos pasar de la defensiva a la ofensiva. Yanine planteó que había que reestructurar las autodefensas....".

En esta reestructuración fue fundamental el papel y los cursos dictados a los paramilitares por mercenarios extranjeros. "Estando en la escuela llegaron el coronel Bohórquez... Rodríguez Gacha, ... Pablo Escobar... Víctor Carranza... Los mercenarios presentes fueron Guid Sadaka, Yair (Klein) y Teddy".

La existencia de paramilitares no sólo benefició a organizaciones delincuenciales y a causas militares antisubversivas. La empresa privada las utilizó también como forma de represión de las protestas laborales, interpretadas por la inteligencia militar como formas de expresión de la guerrilla.

Ejemplo de ello es el caso de la Unión de Bananeros de Antioquia (Uniban), que había realizado en 1986 contactos con Ytzhak Maerot Shoshani, representante de una empresa israelí que suministraba material bélico al ministerio de Defensa de Colombia. Por intermedio de Soshani llegó al país el mercenario Yair Klein, en representación de una firma que ofrecía asesorías en materia de seguridad. Su arribo no fue registrado en extranjería. El israelí dictó cursos de entrenamiento a los paramilitares en Puerto Boyacá. Al poco tiempo, sus alumnos serían autores de las masacres de marzo de 1988, en Urabá (La Hondura y La Negra).

A su llegada a Colombia, el contacto de Klein en Bogotá había sido el mayor Isauro Hernández Hernández, miembro de la XX Brigada y de la organización ultraderechista *Tradición, Familia y Propiedad* (TFP) . Durante los entrenamientos los paramilitares del Magdalena Medio recibieron instrucción por parte de los mercenarios contratados. Estos cobraron 800 mil dólares financiados por TFP, Uniban, y el narcotráfico, según la confesión de Vladimir.

La presencia de Klein en Latinoamérica no se limitó a Colombia. Sindicado de entrenar mercenarios para el cártel de Medellín, salió del país en 1988 hacia Honduras, con el fin de dar instrucción a los Contras nicaragüenses, patrocinados por Estados Unidos.

El uso de las (ahora mejor entrenadas) fuerzas paramilitares de parte de los empresarios lugareños continuó. Según las declaraciones de Vladimir, la infraestructura operaba con el apoyo de los varios batallones de la XIV Brigada. La alianza entre los Batallones del Ejército y Acdegam se concretó en varias masacres, entre ellas la de Segovia (1988).

Por ésta, diez años después un juez regional de Bogotá condenó a nueve personas, entre ellas cinco que se desempeñaban en la época como oficiales activos de las Fuerzas Armadas. Uno de ellos fue el teniente coronel Alejandro Londoño Tamayo. En su declaración, Vladimir reveló que:

> "Yo era el comandante en la zona de Puerto Berrío. Nosotros empezamos a recibir presiones de los coroneles Navas (Rubio) y Londoño. Estos militares querían que hiciéramos una acción rápida en Segovia y Remedios... Cuando el señor César García Pérez perdió las elecciones en Segovia y la alcaldía se la ganó la UP... se comunicó con Fidel Castaño Gil para pedir ayuda y sacar a la UP de Segovia... Entonces acordamos con Henry de Jesús Pérez los planes a seguir: primero, yo me iba a realizar servicio de inteligencia allá en Segovia, y segundo, a hacer la masacre..."

Las investigaciones adelantadas sobre la masacre concluyeron que varias de las amenazas recibidas por los militantes de la UP en Segovia habían sido elaboradas en la máquina de escribir del coronel Alejandro Londoño Tamayo. Y también establecieron que la "*Voz de la verdad*", panfleto amenazante del MNR en Segovia, había sido impreso en el mimeógrafo de la empresa Frontino Gold Mines.

> "Yo me entrevisté con el gerente de la empresa Gold Mines, no recuerdo el nombre, y estuvimos hablando de la financiación que la empresa le estaba haciendo a la guerrilla... Que la empresa estaba siendo extorsionada tanto por las FARC como por el ELN. Yo le manifesté que las intenciones de nosotros eran sacar al ELN y las FARC tanto del casco urbano de Segovia, como del área rural... Después de eso la empresa dio una platica (sic) para la organización"

El 5 de septiembre de 1996 el oficial retirado del ejército, coronel Hernando Navas Rubio, fue detenido luego de presentarse a la fiscalía de San Andrés, por cargos que lo vinculaban con los asesinatos de líderes de izquierda del Magdalena Medio, y como patrocinador de la masacre de Segovia. Navas había sido destituido cuando se desempeñaba como director de prisiones, a raíz de la fuga de Pablo Escobar de la cárcel “La Catedral” en 1992. Las autoridades lo hacían responsable por haber ingresado a la cárcel de manera inconsulta, lo que ayudó a Escobar a que lo tomara como rehén, facilitando su huida. La Catedral no era lo único que tenían en común Navas Rubio y Pablo Escobar. Como lo señaló Vladimir, los dos habían estado muy cerca de la planeación y ejecución de masacres en el Magdalena Medio.

Los Picaleños

El paramilitarismo no sólo ocultaba intereses privados y estatales tras diversas siglas, sino que impuso una lógica de barbarie y crueldad a la guerra, a través de sus prácticas de ejecución.

Según el testimonio de Cargalarga (un paramilitar autor de masacres) sobre cómo mataron a los comerciantes:

> “No hermano, nosotros hicimos una carnicería la hijueputa... Nosotros los llevamos de la Escuela 01 hasta el Palo de Mango, en Puerto Sambito y ahí los matamos, los picamos y los echamos al río. Allá hablar de picalesco es despedazar la persona por las coyunturas. Les quitan las manos, la cabeza, los pies, les sacan los intestinos y echan el cuerpo por aparte. Esto se hace con el objetivo de que no aparezcan flotando por el río, y en ese sitio es donde siempre se mataba a la gente, porque el río pega de frente y el agua se desvía hacia Antioquia. Es como un remolino... se presta para que no queden rastros".

Según Vladimir:

> "En ese tiempo había afán de sacar la guerrilla de todo el Magdalena Medio y los militares nos organizaron para que nosotros hiciéramos lo que ellos no podían hacer, matar la gente y cometer masacres... los paramilitares se encargaron de eso, pero mandados y apoyados por el Ejército".

Pero a pesar de todas las denuncias de Vladimir, y otras muchas denuncias públicas sobre el papel decisivo de las fuerzas militares, y no obstante los 60 años a que fue condenado Vladimir por sus confesiones, la participación del ejército quedó impune. Uno tras otro los oficiales implicados fueron absueltos, como en el caso del comandante Farouk Yanine Díaz, absuelto en 1997 por la Justicia Penal Militar, siendo su juez el comandante general de las Fuerzas Armadas, general Manuel José Bonnet Locarno.

Este caso ilustra la concepción que tiene el ejército de la confrontación armada con la guerrilla. A pesar de negar que la subversión tenga un contenido ideológico, su forma de combatirla se sigue sustentando en las mismas doctrinas de contrainsurgencia de la Guerra Fría. Hace apenas tres años el entonces comandante de la II División general Manuel José Bonnet, dio instrucciones a sus tropas para que concentraran sus tareas de inteligencia en los pueblos y atacaran las "redes de apoyo" civiles, dado que los guerrilleros:

> "tienen su recuperación de enfermos y heridos, las armerías, las sastrerías, las cuentas corrientes, los negocios y demás actividades de tipo logístico esenciales para el combate subversivo".

No es difícil comprender por qué el propio Bonnet fue quien absolvió a Farouk Yanine por los hechos de Cimitarra.

El Carmen y San Vicente de Chucurí

El del Magdalena Medio sólo fue el modelo del proyecto paramilitar, que sería reproducido y adoptado en las diferentes regiones del país, con sólo diferencias menores. A comienzos de la década de los ochenta se creó una base paramilitar en San Vicente de Chucurí y la violencia llegó a la zona en una espiral de acciones criminales.

Lo que ocurrió en El Carmen y San Vicente de Chucurí, al igual que los otros casos, fue a instancias de las XIV y V Brigadas, de la Segunda División. Un ejemplo entre muchos otros fue la incursión de tropas del Batallón Luciano de Luyard (V Brigada, Segunda División) el 29 de mayo de 1988, en la vereda Llana Caliente del municipio de San Vicente de Chucurí. Allí se produjo una ofensiva combinada del Ejército y grupos paramilitares, en la que fueron masacrados decenas de campesinos. En esta operación murió en hechos confusos el coronel Rogelio Correa Campos, del Batallón de Luyard.

Según los informes del batallón, iba acompañado por José Alberto Parra, alias "El Canoso", un civil que en esa ocasión vestía prendas y portaba armas militares. Según los pobladores, Parra era reconocido como uno de los jefes paramilitares de la región. En la ocasión tres labriegos fueron detenidos por los paramilitares y torturados durante varios días. Luego se les obligó a firmar una declaración según la cual las FARC los habían enviado con la misión de matar al comandante del batallón. Después los detenidos fueron puestos a órdenes de un juez civil y dejados en libertad. Dos de ellos fueron asesinados; el otro abandonó la región por amenazas de muerte. El teniente coronel Hernando Navas Rubio, jefe del B2 de la XIV Brigada "personalmente dirigió la tortura de los tres labriegos e ideó las supuestas confesiones. El oficial Navas Rubio no fue investigado ni penal ni disciplinariamente por estos hechos".

El paramilitarismo se había asentado en San Vicente del Chucurí. La población se vio enfrentada como en muchas regiones colombianas a dos posibilidades: ser paramilitar y colaborar con éstos, o ser asesinado. El 25 de febrero de 1992, el general Harold Bedoya, en carácter de comandante de la Segunda División del Ejército, pronunció un discurso en San Vicente del Chucurí invitando a la población a que se defendiera:

> "como todo colombiano tiene derecho a hacerlo... Que no huyan ni se dejen asustar por acusaciones de pertenecer al MAS o de ser paramilitares. Simplemente están defendiendo lo que legítimamente les pertenece".

Barranca: la red de la Armada

En 1991, cuando ya se habían iniciado el exterminio de la Unión Patriótica, la guerra entre los cárteles y las amenazas de Los Extraditables, el Presidente César Gaviria dio a conocer el documento "Estrategia Nacional Contra la Violencia", dentro del cual se incluía un plan de fortalecimiento de la inteligencia militar ejecutado a través de la creación de 44 redes de inteligencia en todo el país: treinta en el Ejército, cuatro en la Armada Nacional y siete en la Fuerza Aérea, urbanas y rurales.

La justificación para este despliegue de redes de inteligencia fue la escalada narcoterrorista por parte del cártel de Medellín, pero el impuesto cobrado por la guerrilla a los narcos sirvió para vincularlos con el narcotráfico y unificarlos con el término "narcoguerrilla". La política ‘antidrogas’ de Gaviria se enmarcaba en la Estrategia Andina diseñada por la

administración de George Bush (1988-1992), que concentraba los esfuerzos de Estados Unidos en los países donde se cultivaba y procesaba la hoja de coca en forma de cocaína.

Sin embargo, al contrario de los objetivos de la Estrategia Andina, la orden 200-05/91, tuvo poco o nada que ver con combatir el narcotráfico. De hecho, la orden "reservada" no menciona las drogas a lo largo de sus 16 páginas. En efecto, la estrategia contra la violencia sólo fue efectiva contra el cartel de Medellín, que culminó con la muerte del capo Pablo Escobar gracias a la ayuda de “Los Pepes”.

En cambio una de las redes, la 07 que operó en Barrancabermeja entre octubre de 1991 y enero de 1993, fue directamente relacionada con casos de persecución política contra sindicalistas y dirigentes de izquierda de esta ciudad. Su forma de operación, como había sido estipulado en la orden de creación de las redes, fue encubierta. Apareció en la ciudad como una empresa que prestaba servicios técnicos a la naviera Colombia, y su jefe el capitán Juan Carlos Álvarez Gutiérrez fue conocido como "el ingeniero".

El grupo de operaciones especiales estaba integrado además por Jaime Arenas Robledo, Saúl Segura Palacios y Carlos David López. El capitán Álvarez recibía órdenes directas del jefe de la dirección de inteligencia de la armada, coronel Rodrigo Quiñones, quien también se identificaba dentro de la organización con los seudónimos de "El gerente" y "Anibal Quincy Carbonell".

Esta infraestructura fue la responsable en 1992 de múltiples masacres y asesinatos selectivos en contra de diversos sindicalistas, militantes del Partido Comunista y activistas de los derechos humanos. Las órdenes emanaban directamente desde la "gerencia", según confesión de Saulo Segura, miembro de la red. En esto Segura coincidió con otro miembro de la red, Carlos Alberto Vergara Amaya, en cuya confesión reiteró:

> "Al coronel Rodrigo Quiñones se mantenía al tanto de todas las investigaciones y de acuerdo a lo que se investigaba, él se comunicaba con el capitán Juan Carlos Álvarez, alias ‘el ingeniero’, dándole el visto bueno si sirve o no sirve el operativo, o sea matar o no a la gente. Después el capitán Juan Carlos Álvarez se comunicaba directamente con Carlos David López Maquillón o con Miguel Durán, quien nos daba a conocer la respuesta".

López Maquillón junto con Saúl Segura revelaron la conexión entre la red y la política militar de Gaviria cuando denunciaron que la red 07 era un organismo adscripto a la dirección de inteligencia de las fuerzas militares. Saúl Segura Palacios, ex oficial de la armada, había sido el encargado de buscar los inmuebles para los negocios fachada de la organización.

Urabá entre los ’80 y los ‘90

En la región de Urabá los conflictos obrero-patronales fueron una constante desde la llegada de la *United Fruit Company* y las compañías multinacionales dedicadas a la exportación del banano en 1963. La región está localizada en el extremo noroeste de Colombia y linda con Panamá. Como región abarca territorios en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. Su ubicación la convirtió desde principios de los años ochenta en área especial para el desarrollo del narcotráfico. También para el tráfico de armas, favorecido por las características selváticas, pocas carreteras, numerosos ríos navegables, buen número de trochas, pistas de aterrizaje clandestinas y un mínimo control por parte de las autoridades.

En el segundo semestre de 1987 varios gremios bananeros comenzaron a celebrar reuniones en torno al tema del "impuesto revolucionario" que las organizaciones insurgentes de

la zona cobraban a los empresarios, pero el conflicto no se limitaba a ese sector de la producción. En la región confluyen los intereses económicos de megaproyectos como el canal interoceánico, el oleoducto trasandino, el canal seco, complejos industriales, turísticos y usinas hidroeléctricas.

En ese contexto, se produjo una nueva oleada de violencia que Vladimir atribuyó a la disposición de Uniban a apoyar el dictado de cursos, lo que condujo al envío de un grupo de paramilitares a Necoclí, Carepa y Arboletes. Las primeras masacres de esa región, como las de La Hondura, La Negra, El Tomate y La Mejor Esquina, fueron efectuadas por 'Fercho' en 1988.

La nueva imagen de los Castaño

Pero en agosto de 1990 Fidel Castaño y algunos paramilitares de la estructura del Magdalena Medio ofrecieron entregar sus armas si la guerrilla del EPL se disolvía. Ya en ese año los guerrilleros del EPL habían sido diezmados por la acción conjunta del ejército y los Castaño. Ahora llamados "Tangueros", éstos actuaban con relativa independencia de la estructura paramilitar del Magdalena Medio. El acuerdo condujo a la desmovilización de más de dos mil militantes del EPL, el primero de marzo de 1992, durante el gobierno Gaviria.

A partir de su firma y por medio de una fundación familiar llamada Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcor), los Castaño donaron tierra, dinero y ganado a cientos de reinsertados del EPL. Al fundarse Esperanza Paz y Libertad como partido legal, las FARC ocuparon gran parte de lo que había sido territorio del EPL. En una entrevista con *Human Rights Watch*, Carlos Castaño afirmó que esta 'toma' de territorio por parte de las FARC fue el motivo por el cual su familia decidió reactivar su ejército paramilitar, ahora bajo el nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

Su finca "Las Tangas", en Córdoba, que ahora entregaba a los reinsertados, había sido una de las escuelas utilizadas por los mercenarios extranjeros y oficiales del ejército en el entrenamiento de sicarios. "Las Tangas" le había valido a Fidel y su hermano ser conocidos como "Los Tangueros", durante una etapa de transición entre el MAS y las ACCU en que los Castaño, fortalecidos, actuaron con cierta autonomía.

Los hermanos Fidel y Carlos Castaño ganaron prestigio en Córdoba con la derrota al EPL y la cooptación de varios de sus cuadros como informantes, enfrentando de manera exitosa a las FARC y al ELN. Esta fue su carta de presentación en Urabá.

Los años 1995 y 1996 significaron para Urabá el constante enfrentamiento entre dos bandos: los Castaño con las ACCU y Esperanza, Paz y Libertad, por un lado; y las FARC y la UP por el otro. A una matanza se respondía con otra. El funesto balance dejó en 1995 un saldo de 86 muertos en seis masacres y otros 952 en casos aislados inferiores a cinco individuos.

Uno de los hechos cruciales del '95 fue la masacre en el bar El Aracatazo, en Chigorodó, Antioquia. Allí fueron asesinadas a quemarropa 18 personas, entre ellos dos niños. Investigaciones posteriores del gobierno relacionaron los hechos con el Batallón de Infantería Voltígeros y ex guerrilleros del EPL.

Una investigación interna del Ejército determinó que soldados del Voltígeros habían permitido que al menos dos ex guerrilleros que trabajaban como informantes, salieran de la base dos días antes de la masacre. Uno de ellos, Gerardo Antonio Palacios, fue condenado por haber participado en la masacre en marzo de 1997. Otro participante identificado por testigos presenciales fue José Luis Conrado Pérez, conocido como "Carevieja".

Tres meses antes de la masacre, Carevieja había aparecido en una foto publicada por Cambio 16, uniformado, fuertemente armado y conversando directamente con el entonces Comandante del Ejército general Manuel José Bonnet. Al año siguiente la misma XVII Brigada, con sede en Carepa, identificó a Carevieja como miembro de un "grupo del crimen organizado (mal llamados paramilitares)" en una lista que entregó a *Human Rights Watch*.

El "pacificador" de Urabá

Aunque los vínculos sean estrechos y de público conocimiento, los oficiales al interior de la institución que se han opuesto a la alianza entre militares y paramilitares han sido retirados del servicio. Es el caso del coronel Carlos Alfonso Velásquez en la región de Urabá, un oficial altamente condecorado por su persecución al cártel de Cali. Como jefe del Estado mayor a las órdenes del general Rito Alejo del Río Rojas de la XVII Brigada, informó a sus superiores que Del Río apoyaba a los paramilitares de Urabá y que mantenía una relación con el mayor retirado del ejército, Guillermo Visbal Lizcano, quien colaboraba con las ACCU. El nombre de Visbal aparecía en la lista publicada por la Procuraduría en el '83 como uno de los creadores del MAS.

Del Río ya había sido relacionado con la estructura paramilitar del Magdalena Medio, que operó bajo diversas siglas en los ochenta. Como comandante del batallón Girardot fue uno de los protectores de los paramilitares de Puerto Boyacá, y por intermedio del mayor Oscar de Jesús Echandía Sánchez, Del Río transmitió permanente información al líder paramilitar de Puerto Boyacá, Henry de Jesús Pérez. Además, Del Río había participado en el transporte de cien subametralladoras M-P5 con destino a los paramilitares del Magdalena Medio.

A pesar de los antecedentes, una investigación del ejército señaló como elemento más peligroso para la institución al coronel Velásquez que al general Del Río. El ejército señaló que Velásquez se reunía con organizaciones de derechos humanos, sindicatos, miembros de la UP y la alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas. Esta conducta, según el informe, revelaba problemas mentales y "se constituía en hechos que son más que suficientes para desconfiar de un oficial que tiene gran amistad con personas e instituciones que se han declarado abiertamente enemigas del ejército". Velásquez se vio obligado a retirarse en 1997.

Ya en 1996, mientras la alcaldesa Gloria Cuartas denunciaba ante el Presidente Samper que su vida se encontraba en peligro inminente por haber sido señalada como auxiliar de la guerrilla, el general Del Río la acusó ante la fiscalía por difamación. La alcaldesa había denunciado cómo un grupo paramilitar había degollado a un menor de 12 años sin que el ejército hiciera nada por perseguir a los autores del hecho.

Las denuncias de Gloria Cuartas y Velásquez sólo relacionaron por omisión a Del Río frente al accionar paramilitar en Urabá, pero los hechos son más contundentes. Durante los dos años que Del Río permaneció al frente de la XVII Brigada en Urabá (1996-1997), creció el paramilitarismo y el número de masacres, muertes de miembros de la izquierda y de la Unión Patriótica. En 1996, de 55 masacres ocurridas en todo el país, 25 correspondían a Urabá; y de 342 muertes violentas, 156 se produjeron allí. Hacia 1997, de 193 masacres producidas en el país, 75 se efectuaron en la región de Del Río, a quien el periodista derechista Plinio Apuleyo Mendoza apodó 'el Pacificador'.

Proyecto militar

Hasta finales de la década del '80 persistió la tesis de que la vinculación de militares con el paramilitarismo era un fenómeno aislado, producto de la indisciplina institucional, a pesar que desde los '70 los manuales de contrainsurgencia ya usaban el término paramilitar. El testimonio

de un ex oficial vinculado a las filas del paramilitarismo reveló que la guerra sucia no era sólo tolerada, sino que era parte de la estrategia de las fuerzas militares, y que el papel del narcotráfico no era desconocido para los agentes estatales vinculados con estos grupos.

En una redada del 1 de noviembre de 1989 para capturar unos narcotraficantes en Bogotá, la Dirección de Policía Judicial (DIJIN) detuvo al ex teniente Luis Antonio Meneses Báez. En el allanamiento la DIJIN halló propaganda del Movimiento de Autodefensa Campesina de Colombia. Meneses resultó ser el mismo Ariel Otero Salazar, comandante de las Autodefensas de la Costa Atlántica**.** Al ser interrogado Meneses confesó ser uno de los principales ideólogos políticos de estos grupos y afirmó que las Autodefensas son una política del gobierno para la lucha anti-subversiva. Según Meneses:

> "Las autodefensas empezaron a ver la necesidad de integrarse con el fin de lograr una cohesión ideológica, compartir experiencias e informaciones. Ya hacia 1986 existía un gran número de grupos paramilitares, en su mayoría coordinados por los S-2 de los batallones (secciones de inteligencia) y brigadas y a escala nacional por el Binci (Batallón de Inteligencia y Contra-Inteligencia) y la XX Brigada... A fines de 1986 en la sede del batallón Charry Solano en Bogotá, se realizó una reunión con el fin de organizar las autodefensas a nivel nacional. Esa reunión estuvo liderada por el servicio de inteligencia del ejército, el Departamento 2 del Ejército E-2. A ella asistieron líderes paramilitares regionales. De esa primera reunión nació la Junta Nacional de Autodefensa compuesta por seis líderes en seis regiones. Estas regiones reagruparon 22 frentes militares donde operan igual número de grupos paramilitares. Durante la reunión se crearon 22 'teatros' de operaciones. La función de la Junta es promover el sistema de Autodefensa y coordinar con el ejército acciones de inteligencia".

Tanto en el ejército como cuando era militar retirado, Meneses tuvo permanente contacto con la XX Brigada y el Binci. Al mando de estas unidades se encontraban los oficiales Iván Ramírez Quintero y Alvaro Velandia Hurtado. La doble misión de Meneses sería hacer trabajo de inteligencia y crear nuevas autodefensas al sur de Bolívar, para frenar una nueva ofensiva de la guerrilla del ELN. A pesar del cambio de jurisdicción Meneses siguió bajo la dirección de la XIV Brigada, donde recibía órdenes directas del Gral. García Eheverri.

Posteriormente su trabajo se concentró en la región del Bajo Cauca y consistió de nuevo en la creación, dirección y entrenamiento de grupos de autodefensas. En 1986 Meneses tomó la decisión de retirarse del ejército cuando un nuevo comandante de su batallón le ordenó suspender sus labores paramilitares por cuestiones tácticas. Por eso, a principios del 87, el ahora retirado teniente Meneses partió para Magangué, al sur de Bolívar y organizó las Juntas Cívicas de Seguridad y Vigilancia (¿posteriores Convivir?) a cuya cabeza se encontraban las directivas de la Primera División del Ejército con sede en Santa Marta.

Con la creación de las autodefensas de la Costa Atlántica quedaban aglutinados varios grupos del Bajo Cauca: Urabá, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena y Cesar. Paralelamente en Montería se montó una oficina que coordinó los grupos de Caucasia en el Bajo Cauca, Planeta Rica, Urabá, Montería, Canalete y Puerto Escondido en Córdoba; y del Sur de Bolívar. El nombre clave de la organización fue el "Zapote", desde donde se coordinaron las masacres de trabajadores y campesinos ejecutadas en el Urabá antioqueño y cordobés en 1988 (La Hondura y la Negra).

Al frente del Zapote estuvieron Meneses y otro militar que se desempeñaba además como jefe de seguridad de Fidel Castaño Gil, uno de los más grandes soportes de la estructura paramilitar. Y como en un rompecabezas, las piezas volvieron a encajar. El escolta de Castaño

era en realidad el mayor Alejandro Álvarez Henao, uno de los creadores del MAS denunciado por la procuraduría en 1983.

En los primeros meses del 88, Meneses recibía de nuevo instrucciones y ahora debía trasladarse a Puerto Boyacá, donde iría a trabajar al lado del mayor Echandía Sánchez (creador del MAS en el 82, como alcalde militar de Puerto Boyacá) y el Capitán León Guillermo Tarazona Correa. Éste, que pertenecía al batallón Bomboná, fue acusado de ser uno de los autores intelectuales de la masacre de Segovia, en ese año. Tarazona, al igual que Meneses, se retiró del ejército para surgir como el nuevo líder paramilitar del Magdalena Medio, bajo el apodo de 'El Zarco'.

Borrando huellas

En los '90 la ofensiva paramilitar se fortaleció con las Autodefensas. Acorralados por investigaciones que poco a poco han ido estableciendo sus verdaderos móviles criminales, en directa relación con el narcotráfico y la recomposición de los carteles de la droga, los paramilitares dejaron a un lado su clandestinidad. Realizaron una cumbre, elaboraron un 'ideario político', e hicieron declaraciones públicas.

En contraste con los '80 cuando el ejército de Castaño era una fuerza fundamentalmente regional, las ACCU no se limitaron a la guerra en Urabá. Esta organización fue la médula de una cumbre nacional para formar una alianza de grupos con ideas afines, que condujo a la fundación de las AUC.

En 1996, Carlos Castaño anunció que su hermano Fidel había muerto en la región del Darién, lo que aún no ha sido comprobado. El anuncio, más bien simbólico, buscó romper con su pasado inmediato y aparentar un giro en la concepción paramilitar hasta entonces desarrollada. Esto se expresó en los 'actos de contrición' plasmados en la Primera Cumbre de las Autodefensas en 1996, en donde teóricamente reconocen excesos de sus antecesores y anuncian una separación absoluta con el narcotráfico.

La actitud aparentemente radical de las Autodefensas en su lucha exclusiva contra la subversión se contradice con los informes del propio departamento antidrogas norteamericano. Según el boletín de Inteligencia de la DEA, de abril de 1998, Carlos Castaño es "un gran narcotraficante por cuenta propia" y socio de los hermanos Arcángel y Orlando Henao. Estos últimos pertenecen al cártel del Norte del Valle del Cauca.

Carlos Castaño, líder de las ACCU, había empezado como guía en la estructura paramilitar de los años '80. Allí combatió con las tropas e identificó a presuntos subversivos. Mientras tanto Fidel, su hermano, fue amasando una fortuna proveniente del narcotráfico e invirtió sus ganancias en tierras, convirtiéndose en uno de los ganaderos más poderosos de Colombia.

Desde sus orígenes Fidel Castaño Gil ingresó a las 'autodefensas' creadas por el Batallón Bomboná, en Puerto Boyacá, en donde recibió "capacitación en lucha contrainsurgente", participando en 1983 bajo las órdenes del capitán Jorge Eligio Valbuena Barriga en la masacre de 22 campesinos en los municipios de Remedio y Segovia (Antioquia), como lo reconoció él mismo en entrevista publicada por la revista *Semana* el 31 de mayo de 1994.

Fidel fue ascendiendo dentro de la organización paramilitar y mantuvo fuertes vínculos con Pablo Escobar, como jefe militar del cártel de Medellín, función que había ocupado Rodríguez Gacha hasta su muerte . Cuando se desató la conocida guerra de los cárteles, en

1992, Fidel decidió separarse de Pablo Escobar y conformar, junto con el Cártel de Cali, el grupo Los Pepes. Así contribuyó a la captura y muerte de Pablo. Otro tanto haría después con José Santacruz Londoño, miembro del cártel de Cali, en una nueva recomposición de cárteles.

Actualmente en el acuerdo de los traficantes sobrevivientes del conflicto que los enfrentó con Pablo Escobar, los Castaño dirigen las principales bandas criminales y la industria del secuestro de Medellín. También aprovechan la desaparición del cártel de Cali, cuyos líderes se encuentran presos, para extender su influencia al norte del departamento del Valle. Los Carranza, por su parte, ganaderos y propietarios de minas de esmeraldas, ejercen su poder en el Meta, Vichada, Boyacá, la región del Magdalena Medio en el departamento de Santander y al sur de los departamentos de Bolívar y Sucre. Ambos grupos tienen un solo objetivo en común: la lucha contra las FARC. Los Carranza (con su líder detenido por el DAS, acusado de conformación de grupos paramilitares) protegen antes que nada su imperio minero y agrario al mismo tiempo que conservan una fachada de legalidad que les permite ejercer un monopolio en el comercio de esmeraldas.

La masacre de Mapiripán de julio de 1997 fue otra prueba de que el cambio de las Autodefensas era sólo aparente: asesinatos atroces, sevicia, vejaciones contra la población desarmada e inerme, y desapariciones, admitidas por Carlos Castaño, no dejan olvidar el origen de su organización. Menos aún el anuncio de que habrá "muchos más Mapiripanes".

De esta forma Castaño ha dejado en claro que el único giro que ha tenido el paramilitarismo en estos últimos años, es la expansión del modelo de Puerto Boyacá, Urabá y el norte del país hacia la conquista del sur, iniciada en los departamentos del Meta, Guaviare y Putumayo:

> "En el último año, grupos de paramilitares de las ACCU y de los Llanos Orientales han realizado incursiones armadas y masacres en Mapiripán (Puerto Alvira), San José del Guaviare, San Carlos de Guaroa, Miraflores y Puerto Trujillo con el propósito de disputar dominio sobre zonas donde hasta hace poco era hegemónica la presencia de la guerrilla de las FARC."

En el caso de Mapiripán, "las unidades locales del ejército y la policía ignoraron múltiples llamadas telefónicas de un juez civil del área, pidiendo ayuda para detener la matanza". Como resultado de una investigación interna del Ejército, el comandante de la VII Brigada, bajo cuya jurisdicción está Mapiripán, fue ‘castigado’ por no parar la masacre ni detener a los responsables, destinándolo a tareas administrativas. Otros oficiales investigados son los mayores Hernán Orozco Castro y Horacio Galeano, y el capitán Luis Carlos López.

Pero las investigaciones se limitaron a militares de rangos medianos y menores. Un año después, los sargentos Juan Carlos Gamarra y José Miller Ureña Díaz, del mismo batallón, fueron detenidos por la fiscalía acusados de homicidio múltiple y paramilitarismo. Mientras tanto el general Uscátegui, después de su irrisoria sanción, volvió al servicio activo sin castigo aparente.

La ‘nueva imagen’ construida por los Castaño deja ver básicamente dos objetivos: borrar las pistas de sus lazos con los oscuros hechos de la época del MAS y el narcotráfico, y hacer creer que su accionar es independiente de los militares. Esto implicaría eliminar las pistas de sus vínculos a cambio de la efectiva colaboración de siempre, y lograr un reconocimiento político que, como en los años del Frente Nacional, legitime su tenencia de la tierra y cubra los horrores con la impunidad.

Como parte del expansionismo territorial de las AUC empieza a dilucidarse una disputa con la subversión con características en cierta medida novedosas: la confrontación urbana. La masacre del 16 de mayo pasado es "un golpe al movimiento social y sindical que existe en Barrancabermeja... Un mensaje siniestro y simbólico dirigido en contra de lo que representa el puerto petrolero como epicentro de resistencia, movilización, lucha cívica y popular ". Pero los hechos del 16 de mayo no son, como lo ilustra el caso de la red 07 de la armada, la primera irrupción del paramilitarismo en Barrancabermeja.

Giro norteamericano hacia los derechos humanos

Pocas horas antes de dejar su cargo como embajador de Estados Unidos en Colombia, en noviembre de 1997, Myles Frechette lanzó serias acusaciones contra el servicio de inteligencia del Ejército Nacional. "En la XX Brigada hubo actividades de escuadrones de la muerte". Esta declaración fue el punto álgido de un giro en la política exterior norteamericana de los últimos dos años.

El 16 de mayo de 1998 el gobierno de Estados Unidos canceló la visa al general Ramírez, ex alumno de la Escuela de las Américas, por acusarlo de violar derechos humanos en Colombia (en la actualidad sigue siendo Inspector General de las Fuerzas Militares). Seis meses más tarde, el secretario de Defensa William Cohen, anuncio que EE.UU. planeaba conceder a Colombia una colaboración para el entrenamiento de militares colombianos en cuestión de derecho humanos, así como en el campo de una reforma judicial.

¿Qué había cambiado desde que, entre 1987 y 1990, cerca de tres mil militares fueron entrenados en la Escuela de las Américas (Estados Unidos), para dominar las artes de la tortura, el asesinato y las desapariciones? La intempestiva preocupación de Estados Unidos por el respeto a los derechos humanos en Colombia, parece ir más allá de las razones humanitarias. La globalización en el contexto de conflictos domésticos y guerras intestinas, con dictaduras militares y atropellos a los derechos humanos, es insostenible. Hay algo muy claro. A la libre concurrencia económica corresponde un régimen de libre concurrencia política. No se puede tener un mundo de alta concurrencia económica con dictaduras. El fundamento del requisito del respeto a los Derechos Humanos es económico, aunque también hay un sector importantísimo en los Estados Unidos que pelea por eso desde el punto de vista ético y político, que no puede desconocerse.

Por esta razón, para Estados Unidos, Colombia se está convirtiendo en un grave factor de desestabilización continental. De ahí que haya lanzado el proyecto Houston en febrero de 1998, como parte de una estrategia en que ha dominado la búsqueda de la paz para Colombia.

Firmado:
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA
EJÉRCITO DEL PUEBLO- FARC-E.P.
Montañas de Colombia, enero de 1999

CAPÍTULO 7 - EL PLAN COLOMBIA

Introducción

La ingenuidad no es una de las cualidades salientes de los endurecidos combatientes de las FARC, pero la lectura de la última parte del documento presentado en el capítulo anterior no deja de conmover por la puerta que la organización guerrillera intenta dejarle abierta al gobierno de los Estados Unidos. Probablemente a estas alturas, los guerrilleros ya están desengañados. Serán combatidos con todos los medios disponibles, incluidos los paramilitares, cuyo destino manifiesto es ser aliados de los Estados Unidos aunque se proclame lo contrario. En esta contienda, la violencia y los cultivos inevitablemente se derramarán hacia el sur, quizá llegando incluso a las civilizadas tierras conosureñas.

Para países como la Argentina y Chile, este predicamento se convierte en una paradoja. El proyecto norteamericano es malo y con toda seguridad fracasará con consecuencias funestas para todo el continente. Pero nuestros países no tienen el poder ni la influencia necesarias para cambiar la política de los Estados Unidos. Estemos en contra o a favor, esa cosa mala que es el Plan Colombia va a existir. Si encima fracasamos en establecer una alianza sólida con Estados Unidos (el factor externo más importante como condicionante de nuestro futuro), entonces estaremos en el peor de los mundos posibles. Países como los nuestros deben apoyar al Plan Colombia no porque sea bueno, que no lo es, sino porque el Plan va a existir con o sin nuestro apoyo, y lo único que sí depende de nosotros es asegurarnos la buena voluntad de los yanquis, para lo cual debemos apoyar sus políticas en el exterior aún cuando están equivocadas.

Como el mismo gobierno de Colombia apoya con entusiasmo el Plan, ni siquiera es este un caso de ingerencia extranjera violatoria de la soberanía de un país latinoamericano. Con realismo periférico, Pastrana aceptó el Plan Colombia para su propio país. Ningún sentido tiene ser más papista que el Papa y negarle apoyo a un proyecto que tiene las bendiciones del país más afectado y de la superpotencia hegemónica a la vez.

Pero como somos animales dotados de la facultad de la razón, no podemos dejar de analizar la situación y hacer un diagnóstico, más allá de cuál sea nuestra postura política. Y el Plan es malo.

La estrategia anti narcóticos del Plan Colombia

La meta establecida por el Plan Colombia para los próximos seis años es la reducción en un 50% del cultivo, procesamiento y distribución de droga. Los objetivos estratégicos en torno de esta meta son:

1- Fortalecer la lucha contra el narcotráfico y desmantelar las organizaciones de traficantes mediante esfuerzos integrales dirigidos por las Fuerzas Armadas. Esto significa una intensificación de la guerra, que probablemente se derramará hacia el sur.

2- Fortalecer el sistema judicial y combatir la corrupción. Esta es una meta que no se alcanza en seis años a no ser que se proceda a repoblar a Colombia. La corrupción responde a causas culturales, es endémica, y sólo puede atenuarse con círculos virtuosos de largo plazo, producidos por complejos procesos benignos.

3- Neutralizar el sistema financiero de los narcotraficantes y decomisar sus recursos para el Estado. Este objetivo no puede alcanzarse acabadamente sin proceder a cerrar algunos de los bancos norteamericanos más importantes, en el mismo territorio norteamericano, ni sin disciplinar a la Corona británica, cuyos paraísos fiscales en las islas Caimán, las islas del Canal, Gibraltar y la isla de Man parecen estar diseñados a propósito para participar del negocio del blanqueo del dinero del narcotráfico.

4- Neutralizar y combatir los agentes de la violencia aliados con los narcotraficantes. Como se dijo antes, para alcanzar el objetivo de derrotar a unas FARC que vienen fortaleciéndose desde 1964 se necesitarán bastante más que los sesenta helicópteros del Plan Colombia. Para *perder* en Vietnam, EE.UU. necesitó más de 3000.

5- Integrar las iniciativas nacionales con los esfuerzos regionales e internacionales. En este plano, ya fracasaron. Es muy escaso el aval político regional e internacional otorgado al Plan Colombia.

6- Fortalecer y ampliar los planes de desarrollo alternativo en las áreas afectadas por el narcotráfico.[364] Este objetivo requeriría un Plan Marshall que no está en el ánimo de los Estados Unidos dispensar a Colombia en la post-Guerra Fría.

Uno de los puntos del objetivo número 1 es el establecimiento del control militar en el sur del país, con propósitos de erradicación. La erradicación de cultivos figura como una de las acciones complementarias de la estrategia, e implica fortalecer y aumentar el uso de operaciones conjuntas de seguridad durante las tareas de fumigación. Piadosamente se agrega que se apoyará el Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, en las pruebas y el desarrollo de agentes de control biológico ambientalmente seguros y confiables, con el fin de encontrar nuevas tecnologías de erradicación.[365]

Colombia piensa gastar 145 millones de ayuda norteamericana para persuadir a los campesinos a cultivar café y algodón, y criar ganado, en reemplazo de cultivos ilícitos. De los 1600 millones de dólares propuestos por Estados Unidos para la destrucción de estos cultivos, Colombia gastará un 21% en desarrollo alternativo. Pastrana declaró que “hay un muy grave problema social y por esa razón no podemos encarar el problema como si solo se tratara de fumigación y erradicación. Tenemos que darle a esa gente una mano”. Pero el 79% de la ayuda norteamericana se destinará a los militares y la policía, incluyendo la compra de helicópteros, entrenamiento militar, equipamiento, y radarización.[366]

El programa de erradicación de cultivos enfrenta una serie de obstáculos. El más importante tiene que ver con la seguridad. Las FARC controlan gran parte del Putumayo y reciben enormes ganancias por la protección de las plantaciones de coca (como los paramilitares en otras regiones). Los esfuerzos del Plan Colombia se centrarán en la región sudeste de Colombia, donde el control de las FARC es mayor. Por lo tanto, es grande la sospecha de que en

realidad el plan es un programa contrainsurgencia.[367] Además, es esperable un intento de reubicación de los cocaleros en el Amazonas.[368]

La gesta del glifosato

La ayuda norteamericana tiene básicamente dos ejes: proveer ferretería militar y entrenamiento a las fuerzas de seguridad colombianas, y efectuar fumigaciones extensivas de los cultivos ilícitos, especialmente en el sur de Colombia. Una parte significativa del financiamiento es para la erradicación-fumigación aérea de la coca con herbicidas. Pero tales esfuerzos parecen haber fracasado dramáticamente en el pasado. De acuerdo al informe del *General Accounting Office* de 1999, Estados Unidos estima que el cultivo neto de coca ha aumentado un 50%. Más aún, la fumigación extensiva presenta riesgos de desastre humano. La posibilidad de cultivos alternativos para los campesinos permanece débil, dada la concentración de la tierra. También el medioambiente se ve en peligro.

Por otra parte, el principal herbicida usado hasta ahora, por lo menos legalmente, es el glifosato, uno de los herbicidas químicos más importantes de la empresa Monsanto, también productora de medicamentos. Fue introducido en América latina hace 25 años, vendido principalmente bajo el nombre *Roundup*, con ventas anuales por 1200 millones de dólares. Está clasificado con la categoría tóxica III, que advierte sobre su manipulación porque puede causar problemas gastrointestinales, vómitos, hinchazón en los pulmones, neumonía, confusión mental y destrucción de tejidos.[369]

En Colombia las fumigaciones con glifosato comenzaron en 1992. A pesar del fracaso, no hubo una revisión a fondo de la metodología. Martín Jelsma del *Trasnational Institute* sostiene que el plan de fumigaciones puede haber disparado un efecto contrario al buscado, e impulsado el aumento del número de hectáreas sembradas. Los campesinos tienden a sembrar más de lo perdido con la fumigación, anticipando futuras pérdidas. Los precios locales de la coca suben en ciertas áreas por la escasez temporal, lo cual estimula a otras personas a entrar en la economía de la coca. El alcalde de Puerto Asís en la región de Putumayo dice que la fumigación aérea ha sido un fracaso. "Colombia es el país más fumigado en el mundo y el cultivo de coca sigue creciendo".[370]

Este fenómeno fue reconocido incluso por funcionarios norteamericanos que aceptaron que, a pesar de que en los últimos años se fumigó cantidades sin precedentes de coca en miles de hectáreas de las regiones de Guaviare y Caquetá, lográndose la reducción de los campos sembrados, este éxito fue contrarrestado por la incapacidad de los aviones para penetrar en la región del Putumayo, donde los cultivos de coca aumentaron más del 300% en el mismo lapso. Por otra parte, el desplazamiento de las áreas de cultivo acelera progresivamente la devastación de la zona selvática.[371]

No sólo fue inefectiva la política de fumigación. También fueron gravísimos los efectos laterales. Entre 1992 y 1998 alrededor de 660.000 galones del herbicida glyfosato fueron esparcidos en Colombia para erradicar más de 46.000 de acres de amapola, y 101.000 de coca. Desde las fumigaciones, en una reserva indígena de Aponte el 80% de los niños han caído enfermos. Sarpullidos, fiebre, diarrea e infecciones oculares comenzaron luego de los procedimientos. Las autoridades niegan cualquier tipo de vinculación entre las enfermedades y

las fumigaciones.[372] Los cuestionamientos del herbicida por su impacto sobre el medio ambiente y su relativa inefectividad para reducir la oferta de droga, impulsó la decisión de adoptar métodos biológicos y no químicos de erradicación.[373]

Mc Caffrey ha dicho repetidas veces que el herbicida *Roundup* es inofensivo para seres humanos y animales. Sin embargo, en Estados Unidos se vende con etiquetas de advertencia avisando que no puede aplicarse en contacto con personas. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos dice que los productos en base al glifosato, como el *Roundup*, deben ser manipulados con precaución y pueden causar graves trastornos. Varios granjeros declararon haber experimentado fiebre desde la fumigación, pero los médicos locales sólo informaron sobre una hospitalización por envenenamiento químico.

Protestas por los efectos en la salud del herbicida *Roundup* hicieron que los gobiernos de Bolivia y Perú enfrentaran a los Estados Unidos y prohibieran su uso. Por otra parte, en Ecuador las recientes fumigaciones en Colombia con el herbicida glifosato están causando un daño ambiental y problemas de salud. Residentes de General Farfán y Puerto El Carmen, en la provincia de Sucumbios, declararon que días después de escuchar a los aviones fumigando docenas de árboles comenzaron a morir. El alcalde de Puerto Guzmán, del lado colombiano, agregó que siete personas habían muerto por intoxicación causada por la fumigación extensiva en los últimos cuatro meses. Un campesino de la zona declara que desde agosto el aire que se respira ya no es el mismo y que hay vecinos que han tenido problemas en los ojos y dolores de cabeza. Un cocalero declaró que mientras los aviones vuelan sobre las plantaciones tirando glifosato y los helicópteros los escoltaban para prevenir ataques de la guerrilla, los soldados entraban en la selva para buscar los campesinos que huían. Del lado ecuatoriano los campesinos informaron que aproximadamente seis horas después de las fumigaciones vieron áreas extensas de yuca y mandioca con las hojas quemadas.[374]

Estas repercusiones no son sorprendentes. De acuerdo a un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California (Berkeley), los seres humanos expuestos al *Roundup* pueden sufrir daños en el estómago, corazón, pulmones y piel. El glifosato es el tercer pesticida causante de enfermedades en los agricultores.[375]

Para colmo, cuando se preguntó a las autoridades qué herbicida se estaba utilizando en las fumigaciones, la respuesta estándar fue “glifosato”. Pero el departamento de Estado respondió afirmativamente cuando se le preguntó si era cierto el rumor de que el tradicional *Roundup* había sido reemplazado hace un tiempo por el producto *Roundup Ultra*. Esto significa que se está esparciendo un nuevo producto. Washington también confirmó que el producto colombiano *Cosmoflux* se agrega a la mezcla. *Cosmoflux* es una especie de jabón que hace que el glifosato entre más rápido y mejor a los cultivos. Según algunos científicos, este agregado podría ser el causante de ciertas enfermedades. La bioquímica colombiana Elsa Nivia afirma que existe una situación absurda, porque la agencia ambiental de ese país es pagada por la policía antinarcóticos para supervisar las fumigaciones. Nivia sospecha que las mezclas que se utilizan no están en conformidad con las indicaciones de sus etiquetas.[376]

A su vez, una coalición internacional de organizaciones indígenas, ambientalistas, y de derechos humanos, advierte que la escalada del programa de fumigación aérea podría dañar seriamente las comunidades indígenas y campesinas, poner en peligro el ecosistema del

Amazonas, y fracasar en la reducción de las producción de drogas y su consumo en los Estados Unidos. Bill Spencer, Director de la Oficina Washington en América Latina declaró que la erradicación aérea y los miles de soldados entrenados por Estados Unidos que están en la región, hacen escalar la tensión social y la violencia política. "Estas operaciones fuerzan a muchos campesinos a unirse a las FARC o abandonar la región". Las oficinas del ómbudsman en derechos humanos a nivel nacional y local han registrado cientos de quejas de campesinos que denuncian que la fumigación aérea les ha causado daños respiratorios, digestivos, en los ojos y en la piel, destruyó los cultivos de subsistencia, enfermó a los animales domésticos y contaminó la provisión de agua.[377]

Pero, ¿cómo luchar contra poderosos intereses económicos, que pueden incluso favorecer la economía de los países del Cono Sur? Con una inversión de 136 millones de dólares que se desarrolló en un lapso de tres años, en el año 2000 Monsanto inauguró en Zárate (Argentina) una planta para elaborar glifosato, herbicida que también se aplica a la soja. Además de abastecer el mercado local, la empresa de origen norteamericano prevé realizar exportaciones a Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Colombia por unos 35 millones de dólares anuales. Además, en la Argentina Monsanto cumple el papel de financiar a los hombres de campo. Está ocupando el lugar que los bancos dejan vacante por sus elevadas tasas de interés. Monsanto tiene unos 400 millones de dólares por cobrar.[378] Y el Cono Sur tiene un interés creado en el Plan Colombia, que en tiempos de recesión y crisis no es de despreciar...

El mortífero *fusarium oxysporum*

Pero hay males peores que el glifosato. La próxima arma en el arsenal de la guerra contra las drogas será biológica. Científicos descubrieron accidentalmente en Hawai tres hongos microscópicos que causan la destrucción de las plantas de marihuana, opio y coca. Por cierto, el paquete de ayuda contiene un financiamiento controvertido: un hongo micoherbicida denominado *fusarium oxysporum*. Mientras los oponentes piensan que estos hongos podrían causar un desastre ambiental, los defensores ven en ellos una alternativa benévola a la fumigación. Su uso potencial se está convirtiendo en un importante parte del debate sobre el mejor modo de combatir el narcotráfico. El ministro de Medio Ambiente de Colombia rechazó la utilización del hongo, pero la capacidad de ese gobierno para resistir las presiones de Washington es dudosa.[379]

Mientras el gobierno norteamericano ha dado luz verde a los experimentos con el *fusarium*, docenas de organizaciones no gubernamentales han advertido el escaso análisis realizado sobre los beneficios del producto, y su capacidad de dañar al ser humano y al ambiente. Por este motivo, EE.UU. ha destinado unos magros U$S 3 millones a las Naciones Unidas para la investigación en la materia.[380]

> Un oficial norteamericano declaró que el hongo anti coca, ya utilizado en el Valle de Alto Huallaga en Perú era como un enviado del cielo. El hongo eliminó un 30% de los cultivos de coca, y las hojas que sobrevivían tenían menores niveles de alcaloide (el ingrediente activo de la cocaína). Pero a los ambientalistas les preocupa lo que puede ocurrir después. Podría tener un impacto sobre otro tipo de vegetación. Se trata de un organismo viviente que se transforma a si mismo para sobrevivir.

Un informe de dos expertos norteamericanos, Jeremy Bigwood y Sharon Stevenson, que han vivido y trabajado en Perú por once años, describe la historia del hongo y sus efectos en varios países. El *fusarium* ya ha demostrado sus efectos destructivos en Perú. La idea de utilizar el hongo herbicida para matar los cultivos ilegales comenzó en los ’70, luego de que el hongo comenzó a matar la coca en una plantación de Hawai. En 1986, el departamento de Investigación Agrícola de EE.UU. comenzó un proyecto de investigación para encontrar otros agentes biológicos para eliminar la coca.

A principios de los ‘90 se aplicó el hongo en la región de Alto Huallaga en Perú. Los residentes locales declararon que el hongo aniquiló todo tipo de cultivos. El hongo infecta los cultivos introduciendo toxinas en la raíz, que pudren y disuelven las células de la planta, a menudo matándolas, o lo que es peor, envenenando los seres humanos y animales que las consumen. Los investigadores señalan que existe sobrada evidencia de los efectos tóxicos del *fusarium* en animales y seres humanos. La toxina que produce causó edemas pulmonares en cerdos, cáncer en ratas, y cáncer de esófago en seres humanos. Otras variedades del hongo son aún más peligrosos. Se ha descubierto que contiene nivalenol, causante de vómitos, diarrea, sangrado y lesiones en la piel, y deooxynivalenol, que es utilizado como agente de guerra química. El contacto directo con el hongo causa una alta tasa de mortalidad entre animales de laboratorio.[381]

Por otra parte, el consultor internacional Roger Rumrrill declaró que mientras en laboratorio las investigaciones muestran que el hongo sólo afecta a la coca, en el terreno se ha observado que otras plantas como la banana o el café también mueren. "El hongo probablemente altera el equilibrio ecológico de alguna manera, favoreciendo la expansión de otros agentes y pestes”. De acuerdo a Hernando Valencia del Departamento de Biología de la Universidad de Colombia, cambios en las condiciones ecológicas pueden alterar la fisiología del hongo, incrementando su virulencia.[382]

En 1999 el estado de la Florida determinó que un hongo similar al *fusarium oxysporum* implicaba una seria amenaza al medio ambiente y a los cultivos legales, particularmente dada su capacidad de mutación. El departamento de Agricultura, mientras tanto, reconoció que en los ‘90 en Perú el micoherbicida no destruyó solamente la coca sino también cultivos alimenticios, incluidos los que se enmarcaban en los proyectos de desarrollo alternativo, en algunos casos eliminándolos por largos años.

Una virulenta mutación del *fusarium*, llamada “RACE 3”, ha provocado problemas a granjeros de la Florida y Georgia, que tuvieron dificultades para controlarlo aún con fungicidas fuertes. Alrededor del mundo el hongo ha causado la destrucción de varios cultivos, ya que a través de sus múltiples variaciones puede permanecer en la tierra por años. Mientras algunas variedades son inofensivas, otras pueden producir microtoxinas venenosas para los humanos.[383]

Quienes proponen la utilización del *fusarium* sostienen que puede probarse que produce menos daños al medio ambiente que los herbicidas químicos. El profesor David C. Sands, que ha conducido gran parte de las investigaciones para la utilización del hongo en la erradicación de la coca, trabajó para revivir el interés del Congreso norteamericano en micoherbicidas, luego de que el departamento de Agricultura comenzara a darle su apoyo para financiar sus investigaciones.

Sands ha trabajado con el fusarium durante veinte años, y fue quien desarrolló la variedad más interesante, conocida como EN-4. El científico opera ahora con su propia empresa, AG/Bio.

Pero no existen estudios exhaustivos sobre las consecuencias que el *fusarium oxysporum* puede tener sobre la salud de los seres humanos y la fauna local. Los resultados de los estudios no son concluyentes porque las pruebas de laboratorio se realizan en ambientes controlados y no pueden medir daños potenciales en un hábitat como el sur de Colombia o el Amazonas. Los biólogos están preocupados de que Colombia no pueda resistir las presiones norteamericanas de probar el hongo fuera del laboratorio. Como el hongo vive en el suelo y trabaja a pesar de la lluvia y el viento, su efectividad frente a otros métodos de erradicación lo hace tentador.[384]

Durante algún tiempo abogados de la Casa Blanca y del departamento de Estado estudiaron cómo utilizar el hongo herbicida sin violar las convenciones internacionales contra la utilización de armas biológicas. Los abogados llegaron a la conclusión de que no hay violación si el país extranjero acepta utilizarlo. Pero (como se mencionó) el ministro de Medioambiente de Colombia declaró que había sido rechazada la primera propuesta para probar el micoherbicida, enviada en abril por el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID). Declaró asimismo que ellos propondrían hacer pruebas solamente con hongos herbicidas ya existentes en Colombia. “Si el *fusarium* no está en Colombia, no lo estudiaremos”.[385]

Pero aplicando su gran poder de negociación, Estados Unidos presionó al PNUFID para que instrumente un proyecto micoherbicida en Colombia. Asimismo le dio su tecnología y una gran cantidad de dinero. La oficina del PNUFID en Colombia le propuso el proyecto al gobierno. El borrador del contrato establecía que el gobierno colombiano sería responsable de cualquier problema derivado del uso del micoherbicidas y que el proyecto sería colombiano, aunque los derechos de propiedad intelectual permanecerían en EEUU. El borrador y las comunicaciones entre el departamento de Estado y el PNUFID también dejaban sentado que la variedad descubierta por Sands ya había sido encontrada en el sur de Colombia y que se estaba extendiendo hacia el norte, obviando en consecuencia la necesidad de violar la ley internacional exportando un nuevo patógeno a Colombia. Sin embargo, en el borrador uno de los investigadores del Servicio de Investigaciones Agrícolas de EEUU dudaba de la presencia de tal variedad en el sur de Colombia. Bigwood y Stevenson investigaron la cuestión llegando a determinar la inexistencia de cualquier tipo de *fusarium* en el sur de Colombia.[386]

A su vez, generando más oposición a la postura norteamericana, el Comité Andino de Autoridades de Medioambiente estableció su rechazo al uso del *fusarium oxysporum* como medio para la erradicación de los cultivos ilegales en los países miembros de la Comunidad Andina. El Comité expresó su solidaridad con la decisión del gobierno colombiano de no permitir pruebas en su territorio.[387] Pero los ecuatorianos temen que en la erradicación de coca los militares colombianos ya estén usando el temido hongo transgénico.[388] Además, fuentes militares ecuatorianas confirmaron que Estados Unidos estaría probando el hongo en el Ecuador. Declararon que pruebas de campo se estarían realizando sin la autorización de las fuerzas armadas, y que fueron detectadas por radar. Sin embargo, el ministro de Medio Ambiente insiste que su país no permitirá experimentos con el hongo. Luego de una visita a la provincia de Sucumbios, el investigador Diego Pérez informó que se están realizando pruebas a cinco kilómetro Lago Agrio, capital de la provincia.[389]

También la organización Acción Ecológica dirigió una investigación sobre las consecuencias posibles y remarcó que el *fusarium* podría amenzar la biodiversidad de todo el Amazonas. "Causa daño en varios cultivos, produciendo diferentes tipos de enfermedades, secando sus hojas, dañando los frutos, e inluso matando la planta. Puede causar también enfermedades en humanos, especialmente en pacientes con sistemas de inmunidad deficientes como el cáncer o el sida".

Porque el hongo tiene capacidad de mutar genéticamente, el Amazonas podría convertirse en un punto focal de contaminación, y sus efectos podrían ser de largo plazo ya que el hongo puede vivir veinte años y diseminarse por aire, tierra y agua. El *fusarium oxysporum* está incluido en el borrador de la Convención de Armas Biológicas y Tóxicas como un agente biológico de guerra, porque una vez lanzado en el ambiente es imposible de sacar, con efectos imprevisibles.[390]

Quizá como solución de compromiso, el gobierno colombiano ha dado su aprobación preliminar para experimentar con controles biológicos para luchar contra los cultivos ilegales, diferentes al *fusarium oxysporum*. El gobierno considera a este hongo como un importante factor de riesgo, y aunque se opone a su aplicación no descarta la opción de estudiar otros medios naturales, siempre y cuando se trate de especies nativas. El tema ha generado una importante controversia. La propuesta significa que se está dejando una puerta abierta para la puesta en marcha de un proyecto biológico en Colombia. Un hongo anti coca, aunque sea nativo, no es necesariamente seguro. Su aspersión a gran escala podría afectar igualmente el ecosistema y producir toxinas tan peligrosas como las del *fusarium*.

Este es motivo particular de preocupación, luego de las declaraciones hechas en un reciente documental de la BBC que dejaron en claro que EE.UU. todavía no se resigna a abandonar la varita mágica del proyecto *fusarium*. Sands, el principal investigador del proyecto, declaró "Sería asunto de 17 incursiones aéreas en un país en particular y eso acabaría con la coca". Respecto a la decisión del gobierno colombiano de rechazar el proyecto declaró "creo que tendrán que sufrir las consecuencias de tal decisión". Y cuando se le preguntó si debería asperjar el *fusarium* aún sin consentimiento del gobierno, sin ninguna vacilación dijo que sí. A la pregunta de la BBC de si el asunto se cierra si Colombia no está de acuerdo, Rand Beers del departamento de Estado respondió: "sería muy difícil recobrarnos, pero no he estado nunca preparado para admitir el cierre de este asunto".[391]

Por su parte, las autoridades brasileñas también expresaron su temor de que los programas de erradicación de cultivos de coca mediante fumigaciones acaben dañando el delicado equilibrio ecológico de la selva amazónica. Según el presidente Fernando Henrique Cardoso, su país está preocupado especialmente por el eventual uso del *fusarium oxysporum*.[392] Según un alto funcionario brasileño:

> "Las autoridades colombianas han recibido una clara advertencia de que si se llegara a comprobar el uso del hongo o de agentes químicos y biológicos que pueden contaminar las aguas y la vegetación de la Amazonia, nuestras relaciones recibirían un duro revés".

Pese a declaraciones al respecto por parte de Colombia, sobran indicios de que el gobierno de Brasil no quedó del todo satisfecho. Altos funcionarios apuntan a la confusión y las aseveraciones contradictorias que emanan de distintas agencias, tanto del gobierno de Colombia como del de los Estados Unidos.[393]

¿Erradicación o desplazamiento?

Por otra parte, y más allá del probable uso de armas biológicas en la lucha contra la cocaína, los analistas de la industria de la droga reconocen que todas las armas y la fuerza del mundo no socavan el deseo de la gente por la droga. Los intentos de erradicar los cultivos ilícitos simplemente conducen a una reubicación global del producto. Esto está ocurriendo actualmente en Colombia. La erradicación exitosa en los departamentos del Amazonas como el Guaviare han sido seguidos de nuevos cultivos en el Putumayo, y de ahí, los cultivos están comenzando a moverse hacia Vuchada, Vaupes, y Catatumbo, entre otros departamentos. Aún si la erradicación total fuera alcanzada, hay 1600 millones de acres en el resto del Amazonas. Eso representa más de 2000 veces los 740.000 acres que se necesitan para saciar la demanda internacional de cocaína.[394]

Por cierto, Colombia erradicó la mayor parte de sus cultivos ilícitos, especialmente entre 1994 y 1998, y vio en el mismo período el mayor crecimiento de sus cultivos de hoja de coca. Además, se comprueba que cuando cae la producción en un país, aumenta en otro. En 1998 el cultivo de coca en la subregión andina ocupaba de 190.000 a 200.000 hectáreas, de las cuales un 53% estaba en Colombia, un 26.7% en Perú y un 19.9% en Bolivia, según un informe de Acción Andina. Estas cifras revelan el crecimiento de la participación de Colombia, donde en 1994 se cultivaban sólo 46.000 hectáreas, apenas un 22.8% del total de la subregión. No es casualidad que el auge en Colombia coincidiera con la caída en Perú.[395] Mientras la producción en Perú y Bolivia cayó un 66% y un 55% respectivamente, la producción en Colombia se ha más que duplicado.[396] La producción total en la región andina se ha mantenido constante. Lo que ha variado es la participación de cada país andino en la producción total. ¿Porqué fracasa el modelo?

Por otra parte, investigadores colombianos que estudian la fumigación del cultivo de marihuana en Sierra Nevada de Santa Marta descubrieron el gran daño que provocan las políticas de erradicación. Los cultivos de marihuana se desplazaron desde las partes más bajas de la región hacia las más altas. Luego de la fumigación, el problema se desplazó a otros países. Consecuentemente, el decrecimiento de la producción de marihuana en Colombia no se debió a la erradicación sino al desplazamiento.

Este proceso de desplazamiento se verifica ahora con la hoja de coca. De un área relativamente concentrada las plantaciones de coca se han trasladado a una zona más dilatada, con serias consecuencias ambientales. El crecimiento de la coca es ambientalmente dañino para la región amazónica, causando deforestación y contaminación del agua. Mientras la producción se traslada, las consecuencias ambientales crecen. De este modo, las políticas de fumigación producen un daño ambiental más profundo.[397] Además, el problema es aún más serio y complejo porque las turbulentas condiciones del aire y otras características del Amazonas no permiten una fumigación aérea efectiva. Las corrientes de aire desplazan los herbicidas y causan serios daños en las áreas que circundan los cocales.[398]

El injusto predicamento del campesinado

Por otra parte, la campaña emprendida por el Plan Colombia es particularmente dificultosa porque afecta muy adversamente los intereses de los empobrecido campesinos. Janette Landínez, que encabeza una cooperativa de campesinos en la ciudad de Pinuna Megro, explicó que cuesta aproximadamente 300 dólares hacer crecer y procesar un kilo de pasta base, que puede venderse a 800 dólares. Comenta que las guerrillas cobran 400 dólares de impuesto revolucionario. Trató de sustituir la coca con maíz, pero no funcionó. De acuerdo a un estudio de agrónomos locales, el maíz da una ganancia de 75 dólares por kilo. Landínez dice que sólo trae pérdidas. No alcanza ni para cubrir los costos del transporte.[399] Los campesinos ganan un promedio de 35,6% de retorno del dinero invertido en el cultivo de café, contra un 59% para los cultivadores de coca y un 49% para los de amapola. Una plantación exitosa de coca de tamaño promedio puede dar 2500 pesos anuales, mucho más que una de café. Muchos de los campesinos que inicialmente firmaron el programa de sustitución de cultivos se han retirado, declarando muy dificultoso el cultivo y muy riesgoso el retorno.[400]

Este problema de pobres campesinos que serán aún más pobres si adhieren a un plan incierto de desarrollo alternativo no conmueve a Klaus Nyholm, representante en Colombia del PNUFID, para quien el desarrollo alternativo debe ser entendido como un complemento de la aplicación de la ley y no como una alternativa. Según dice, el desarrollo alternativo depende en gran parte de un programa fuerte de aplicación de la ley. Si esta funciona, el precio de la coca baja y otros cultivos se vuelven más atractivos para los campesinos.[401] A su vez, el ministro del Interior de Colombia, Néstor Humberto Martínez, agrega la precisión de que los programas de desarrollo alternativo distinguen entre los cultivos de los campesinos y los cultivos “industriales”. En Colombia existen ambos tipos de cultivos. El desarrollo alternativo se concentra en el reemplazo de los pequeños cocales, no mayores a tres hectáreas.[402]

La contracara de la problemática es que estos argumentos de los halcones tampoco conmueven a los campesinos. Un ejemplo de las dificultades encontradas es el hecho de que mientras en diciembre de 2000 más de 500 familias firmaron los programas de sustitución de cultivos en la localidad de Puerto Asís, ningún granjero de La Hormiga lo firmó. A los campesinos se les ofrecerá nuevamente el plan, pero mientras tanto continuarán las fumigaciones. Gonzalo de Francisco, encargado de la instrumentación del Plan Colombia, declaró que “obviamente estamos tomando las denuncias (de daño a cultivos legales) seriamente y estamos tratando de obtener la mejor información para analizar la situación correctamente. La fumigación no es perfecta, y todos estaríamos mejor si los campesinos se unieran al programa”. Una inspección en la zona luego de las fumigaciones sugiere que los cultivos lícitos han sido casi tan golpeados como los de la coca.[403]

Por cierto, el efecto adverso sobre los intereses del campesinado no se limita a una cuestión de ganancias relativas. También está la cuestión de la destrucción de los cultivos legales. Recientemente, la campaña antidroga colombiana entró en una nueva fase de fumigación aérea que está destruyendo no sólo cocales sino también cultivos lícitos. Los campesinos poseen tanto cocales como plátanos, arroz y maíz, los unos al lado de los otros. En 1996, los pequeños campesinos marcharon en varias ciudades del sur exigiendo al gobierno que finalizara las fumigaciones. Cuando el gobierno continuó, muchos de ellos se unieron a las guerrillas.[404] En la instancia actual, se corre el riesgo de un desenlace similar.

Utilizando fotografías satelitales para determinar los bancos, el ejército y la policía aeronáutica han comenzado a lanzar herbicidas sobre pequeñas granjas en el oeste del Putumayo. Los vuelos se han realizado casi diariamente desde el 22 de diciembre de 2000. La gente local declara que los agentes químicos a veces han caído sobre ciudades o villas causando fiebre a la población. Asimismo responsabilizan a las fumigaciones por la muerte de vacas y peces. Un granjero local declaró que quiénes no cultivan coca están aún más afectados. Debido a que es imposible diferenciar las diversas especies durante el proceso de fumigación, todas las plantas son fumigadas. Generalmente los cultivos alimenticios son los más vulnerables. Hasta hace poco, las fumigaciones se centraban en áreas remotas, pero ahora los aviones trabajan en áreas más pobladas en las que, aún con mayor frecuencia, la coca se encuentra junto a otros cultivos. En La Hormiga, a 30 millas de Puerto Asís, funcionarios locales y residentes dicen que la fumigación ha sido devastadora. Decenas de granjeros declararon que las fumigaciones han matado cientos de hectáreas de cultivos alimenticios.

La estrategia del Plan Colombia en torno al desarrollo alternativo pretende introducir alternativas integrales, participativas, rentables y económicamente sostenibles en áreas rurales. Según se declara, se busca mejorar las condiciones sociales y el ingreso de los campesinos y constituye el marco de la política para el abandono de los cultivos ilícitos. El costo estimado de la estrategia de desarrollo alternativo para 1999-2002 es de 570,8 millones de dólares, desagregados en 342,5 millones para proyectos de producción y transferencia de tecnología, 100 millones para infraestructura, 86 millones para conservación y restauración de áreas ambientalmente frágiles y 42,3 millones para apoyar el desarrollo de las comunidades indígenas.[405]

Una comisión internacional ejercerá una veeduría permanente para vigilar el cumplimiento de los acuerdos, tanto por parte del Estado como de los campesinos cocaleros. Los U$S 87,5 millones destinados a los departamentos de Caquetá, Putumayo, Norte de Santander y Sur de Bolívar, provienen de lo aprobado por Estados Unidos para el Plan Colombia. Para planes similares en Guaviare, El Caguán, Meta y la región del Macizo Colombiano, el gobierno espera ayuda por 157,6 millones de dólares de la llamada Mesa de Aportantes de la Unión Europea.[406]

Para participar en el programa PLANTE los campesinos deben firmar un documento listando sus posesiones de cultivos ilegales y comprometiéndose a deshacerse de ellos. Solo son elegibles aquellos con menos de 8 acres de coca o 2,7 de amapola. El tiempo de erradicación es flexible. Pero con la promesa de ayuda viene una amenaza. Si en la fecha estimada permanecen los cultivos ilegales, son fumigados.[407]

Como ya se sugirió, muchos campesinos afirman que se dedican a los cultivos ilícitos porque dan mucho más dinero que los cultivos tradicionales como el café o la cocoa, y porque los traficantes les proveen las semillas, los fertilizantes y un mercado garantizado. Las FARC protegen a los campesinos, aunque colectan (según las versiones y quizá las circunstancias) entre un 10 y un 50% de “impuestos”. En cualquier caso, brindan más ayuda que la que proponen el gobierno norteamericano y colombiano juntos. El bien adoctrinado capitán Lizardo Vargas de la policía antinarcóticos declaró que:

> “Sabemos que cada vez que fumigamos le sacamos la comida de la boca a esta gente. Pero estos cultivos hacen más fuerte a la guerrilla, dañan el medioambiente y matan gente en otros países. Debemos frenar esto, pero debemos ofrecer alternativas a esta gente.

> Oficiales norteamericanos concuerdan en que se debe dar más dinero para cultivos alternativos. Mc Caffrey dijo que Estados Unidos está dando 15 millones en tres años para desarrollo alternativo pero reconoce que se necesita más".[408]

De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo el éxito en el establecimiento de cultivos alternativos ha sido modesto. Hay escasos indicadores de un mejor desenvolvimiento en los últimos cuatro años, a pesar de un crédito de 90 millones del BID para este tipo de proyectos. Solamente 28 millones y medio de ese dinero ha sido utilizado, porque el crédito requiere recursos de contrapartida y el gobierno no ha provisto demasiado.[409] No obstante, el temor a las fumigaciones ha generado algunas iniciativas de erradicación voluntaria de cultivos, con modesto apoyo gubernamental, en diversas áreas rurales, para evitar que los aviones lancen los herbicidas.[410]

Pero el empobrecimiento es inevitable. Los dirigentes campesinos de San Vicente del Caguán piden que en lugar de enviar aviones y glifosato envíen vacas. En la región los campesinos están intentando otras alternativas. Existe un proyecto denominado "leche por cocaína" financiado por 5,3 millones de dólares de las Naciones Unidas. En La Cristalina, alrededor de 600 familias han comenzado a vender leche a una fábrica de Nestlé en Florencia. Pero esto es poca cosa si se considera que en la región de Putumayo, tres cuartos de los 330.000 residentes dependen directa o indirectamente de los cultivos ilegales. El gobierno colombiano estimaba que gran parte del financiamiento para proyectos de desarrollo alternativo vendría de la Unión Europea. Pero en una reunión en Bogotá en octubre de 2000, diplomáticos europeos ofrecieron sólo 280 millones de dólares de ayuda, cuando los colombianos esperaban un mínimo de 2000.

La mezquindad europea se ampara en el hecho de que muchos gobiernos de ese continente piensan que el Plan Colombia es demasiado militarista, y están preocupados por el alto récord de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. El alcalde de San Vicente parece darles la razón a los europeos. Declaró que los norteamericanos "hablan de crear soluciones sociales, pero lo que vemos es más dinero para la guerra".[411]

En momentos en que campesinos y el gobierno firmaban los pactos para la erradicación manual de cultivos en Putumayo, voceros de las FARC avalaron el proceso. Pero los guerrilleros le pidieron a los campesinos que no arranquen planta alguna hasta que el gobierno cumpla con todo lo ofrecido.[412]

Por su parte, un líder cocalero anunció en el mes de octubre de 2000, en la zona controlada por las FARC, que:

> "La coordinadora nacional de coca y amapola nació hace 20 días, cuenta con dos millones de afiliados en 22 departamentos a lo largo y ancho de nuestro país y responderá políticamente a la intromisión norteamericana con el Plan Colombia".[413]

Así, la resistencia campesina se organiza, con el apoyo de las FARC, guerrilleros narcotraficantes convertidos en *Robin Hoods* gracias a los Estados Unidos, sus drogadictos y su Plan Colombia.

CONCLUSIONES

La paradoja

En el norte de la América del Sur está por intensificarse una guerra que fácilmente puede derramarse más al sur. Los cárteles probablemente invadan Ecuador y Brasil, los guerrilleros los seguirán, los cultivos de coca también, y la industria del secuestro se expandirá en todos los países vecinos en que las fuerzas de seguridad sean débiles y corruptas. De los países grandes del Cono Sur, el más seguro es Chile y el más vulnerable, la Argentina. El peligro adquiere un rostro aún más siniestro cuando se considera que fuentes de inteligencia norteamericanas atribuyen la temporaria clausura de las embajadas de los Estados Unidos en Ecuador, Paraguay y Uruguay, en abril de 2001, a la posibilidad de que las presiones sufridas por las FARC debido a los embates del Plan Colombia las lleven a articular atentados terroristas en combinación con sus aliados islámicos fundamentalistas, particularmente el Hezbollah y los representantes sudamericanos de la organización de Osama bin Laden.[414]

El derrame de la guerra ya presente es casi inevitable, vista desde una perspectiva conosureña, porque no tenemos el poder ni la influencia necesarias para cambiar la política norteamericana. Ni siquiera vale la pena intentarlo. Esta guerra es lo peor que nos podría pasar, y sin embargo padecemos la paradoja de que, aun cuando sea el producto de un error estadounidense, nuestro predicamento empeora si le negamos nuestro apoyo a esa política equivocada de los Estados Unidos. Lo único peor a la innecesaria pero casi inevitable guerra venidera es padecerla *sin* las bendiciones del departamento de Estado, que es el responsable de la penosa perspectiva.

Esto, sin embargo, no impide que como *homo sapiens* hagamos nuestro análisis, que se divide en dos dimensiones. La primera tiene que ver con nuestras políticas exteriores, y la conclusión es obvia: por las razones que anteceden, debemos apoyar al Plan Colombia. La segunda tiene que ver con nuestro diagnóstico, políticamente irrelevante, sobre el Plan Colombia, y en esto la conclusión también es clara: dicho plan es *aberrante.*

Medidas irresponsables, misión imposible

Como bien dijo Marc Cooper en el periódico *The Nation*, Plan Colombia es igual a *wrong issue, wrong enemy, wrong country* ("asunto equivocado, enemigo equivocado, país equivocado").[415] El 70% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos entra por México, que es el verdadero peligro narcotraficante para el país del norte[416], pero llevar a cabo una guerra contra las drogas del estilo que los norteamericanos quieren imponer en Colombia, en un vecino contiguo como México, sería peligroso para la seguridad de los Estados Unidos mismos. Tendría costos superiores a los del flagelo la droga misma.

Y este es precisamente el motivo por el cual los norteamericanos no atacan la verdadera raíz del problema, que se encuentra en su propia sociedad, principalmente en el consumo, pero consiguientemente también en cadenas de distribución locales que son más poderosas que el más poderoso de los cárteles colombianos históricos. En Estados Unidos hay un stock gigantesco de cocaína, pero muy raramente se incauta en su propio territorio más de una tonelada de la

sustancia. Localmente, sólo se reprime a intermediarios medianos y pequeños. La guerra grande se lleva a cabo puertas afuera.

Los norteamericanos no quieren abordar el problema desde su origen, la demanda y las grandes mafias locales, porque ello significaría un estallido de violencia en los Estados Unidos mismos. En lugar de ello, intentan usar su gran poder para atacar el problema desde el lado de la oferta, especialmente la colombiana, lo que significa exportar violencia en gran escala. También significa una mayor capacidad para llevar a cabo políticas encubiertas ilegales, como cuando se aliaron a la banda paramilitar y narcotraficante de Los Pepes para matar a Pablo Escobar. Implica poder terciarizar la fuerza militar, usando mercenarios, y no ser responsables frente al público de su país de las violaciones de derechos humanos que inevitablemente se perpetrarán.

En cambio, la estrategia opuesta de lucha contra la demanda, conduciría a una violencia interna que tendría altos costos políticos para un gobierno norteamericano, y nadie que cuente la quiere. La violencia en Colombia no tendrá estos costos en EE.UU. siempre que no implique un involucramiento como el de Vietnam, con gran bajas de soldados regulares norteamericanos... y siempre que no conduzca a un fracaso apabullante. ¿Se puede evitar, cuando se lucha contra una industria que produce mercadería de alta demanda, y contra una guerrilla que suma éxitos desde 1964?

Los norteamericanos han elegido lo que, desde su perspectiva, *parece* ser el menor de dos males, y desde una perspectiva sudamericana es con seguridad el peor de los males posibles. Aún así, para los mismos estadounidenses parece mucho más probable un fracaso que éxito, y ese desenlace desemboca en opciones del mayor costo político para Estados Unidos: involucrarse directamente en la guerra, o cambiar de política atacando a la demanda con el mismo vigor que la oferta. Hay, por supuesto, una tercera opción: legalizar el consumo de una manera reglamentada.

Existe una ley económica elemental que establece que donde hay una demanda, hay una oferta. No importa cuán ilegal sea la oferta, si hay una fuerte demanda siempre habrá un sector de la sociedad dispuesta a correr altos riesgos para satisfacer esa lucrativa demanda. Cuánto mayor es el riesgo, mayor es la ganancia para quien esté dispuesto a afrontar el peligro. Y cuánto mayor es la ganancia, mayor será la violencia que se aplicará para defenderla. Una esquina de distribución de droga en un barrio marginal de una ciudad cualquiera vale una fortuna, y mucha gente está dispuesta a matar para controlarla. Vale lo que vale porque la droga es cara. Y la droga es cara porque es ilegal y venderla significa correr altos riesgos no sólo en términos de vidas y sentencias penales, sino también en materia de pérdidas periódicas de mercadería.

Si la droga (o algunas de ellas) se legalizaran, desaparecería el peligro, caería el precio y perdería la mafia. Aunque las FARC abogan por la legalización de la droga, lo hacen porque saben que no se va a legalizar: es un argumento demagógico que los hace quedar bien. Pero nada sería más contrario a los intereses de las mafias que lucran con la cocaína, que la legalización de su expendio bajo receta. Mientras tanto, la prohibición equivale a una industria de violencia. La ilegalidad engendra mafia, violencia, asesinatos, tráfico de armas y todo tipo de horrores.

Lo mismo ocurrió cuando a los norteamericanos se les ocurrió poner una enmienda en su Constitución que prohibía las bebidas alcohólicas. Una prohibición legal no anula una demanda del mercado, así que los norteamericanos siguieron tomando bebidas alcohólicas, sólo que de

mucha peor calidad, y en el proceso generaron una mafia dedicada al rubro, y una violencia incalculable, que pudo eliminarse sólo cuando se regresó a la normalidad, derogando la enmienda que establecía la "ley seca". El moralismo de la ley seca causó muchos miles de muertes, pero no consiguió su objetivo. Lo mismo ocurrirá, en escala pavorosa, con la cuestión del narcotráfico.

Hace algunos años, un funcionario de la embajada de los Estados Unidos que era amigo de uno de los autores de este libro le dijo, bajo condición de anonimato:

"Carlos, yo enfrento un dilema terrible. Regreso a mi país y tengo un hijo adolescente. En EE.UU., mi hijo no podrá comprar una sola lata de cerveza, porque la venta de bebidas alcohólicas es legal y está reglamentada. Ningún comerciante sería tan estúpido como para arriesgar perder su licencia, que vale miles de dólares, para venderle a un menor de edad. Pero la venta de drogas, desde las más benignas hasta las más peligrosas, no está reglamentada, y por ese motivo mi hijo va a poder comprar cocaína, crack y heroína en cualquier esquina y hasta en el colegio mismo."

Naturalmente que cuando hablamos de los efectos positivos de una legalización reglamentada, no nos referimos a medidas como las que tomó Holanda, un país diminuto que al legalizar la droga se convirtió en el paraíso del adicto y de los narcotraficantes, que utilizaron a Ámsterdam y Rótterdam para el contrabando al resto de Europa, donde la droga seguía y sigue prohibida. Eso es bueno para la mafia y malo para la sociedad. La solución no radica en la legalización en países como Uruguay, ni tampoco la Argentina. Para que la legalización destruya a la mafia, condenándola a comprar acciones de los grandes laboratorios farmacéuticos, tiene que llevarse a cabo en grandes espacios económicos de gran demanda de droga: por ejemplo, toda Europa occidental, o todo Estados Unidos, o mejor aún, la suma de ambos.

Esto, políticamente, será muy difícil de alcanzar, porque cuando el debate comience a esbozarse de una manera seria e intensa, se producirá una alianza natural entre los mafiosos y los moralistas. Piadosos obispos verán llenarse las arcas de sus fundaciones contra la legalización de la droga, y se maravillarán de "lo sanas que son nuestras fuerzas vivas", sin sospechar jamás que quienes donan las mayores sumas son los mafiosos mismos, que por motivos muy distintos pero al igual que ellos, no desean la legalización de la droga.

Algunos beneficiarios "no mafiosos" de la industria de la droga

No solamente se producirá esta perversa alianza natural e imperceptible. Como en muchos otros casos, además, hay poderosos sectores para los cuales la guerra, o la situación actual, convienen más que la paz y la solución del problema. A la luz de la información presentada en los capítulos precedentes, pasemos revista a los sectores del *establishment* de las grandes potencias que ganan mucho dinero como resultado de la industria de la droga y la lucha contra la misma:

1. La industria de armas. Desde Estados Unidos a Rusia, pasando por Israel y varios otros países, son varias las industrias que lucran ya sea con la provisión de armas al Plan Colombia, o a la guerrilla y el narcotráfico.

2. Funcionarios retirados del gobierno de los Estados Unidos, incluyendo ex secretarios de Estado y de Defensa, que pasan a ocupar altos cargos ejecutivos en grandes empresas mercenarias (o "de seguridad", como eufemísticamente se las llama), que a su vez son contratadas por el Pentágono. También altos jefes retirados de las fuerzas armadas norteamericanas se benefician de esta perspectiva. Gracias a estos mecanismos estos ex funcionarios tienen a su disposición un "premio" por servicios prestados. Es cosa reconocida que estos cargos, que vienen junto con contratos multimillonarios para sus empresas, son privilegios de *old boys*, que pasan a ganar sumas muy superiores a las que obtenían cuando estaban en el poder. O sea, un equivalente prolijo de corrupción latinoamericana.

3. La industria química y de substancias biológicas trangénicas, que obtiene un fructífero campo de experimentación fuera del laboratorio.

4. Las prestigiosísimas aseguradoras de Lloyd's y sus pares en Estados Unidos, que ganan grandes sumas con los seguros de secuestro, rescate y extorsión.

5. Los paraísos fiscales de la Corona británica, como las islas Caimán, las islas del Canal, Gibraltar y la isla de Man, que a pesar de pertenecer al Reino Unido tienen una legislación bancaria más laxa, que las convierte en el mecanismo ideal para transferir beneficios a la economía británica, a través de las ganancias que sus bancos obtienen del blanqueo del dinero de la droga, una parte interesante de este gran negocio. La filosofía parece ser: "el negocio es malo, pero mientras exista no seremos excluidos de sus beneficios".

6. Finalmente, los grandes bancos como el Citibank, que lucran con estos mecanismos para el lavado de dinero y que siempre que son descubiertos en algún negocio sucio culpan a alguno de sus ejecutivos, que se distrajo.

En este sentido, el reciente y publicitado informe del Congreso norteamericano titulado "*Report on Corresponding Banks: A Gateway for Money Laundering*", es una demoledora incriminación del sistema bancario norteamericano. El documento indica claramente cuáles son sus logros:

"Este informe sintetiza una investigación de un año realizada por la planta profesional (*staff*) de la Minoría de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Congreso de los Estados Unidos, bajo el liderazgo del senador demócrata Carl Levin, sobre bancos corresponsales y su uso como instrumento para el lavado de dinero. Es el segundo de dos informes compilados por la planta de la Minoría bajo la dirección del senador Levin, sobre las vulnerabilidades del sistema bancario norteamericano al lavado de dinero".

Así como investigaciones judiciales del año 1998 habían demostrado que el Citibank era responsable del lavado del dinero de Raúl Salinas de Gortari en paraísos fiscales de la Corona británica, a través de tortuosos circuitos que pasaban por México, Nueva York, islas Caimán, Zurich y Londres[417], el exhaustivo informe del senador Levin ahora desnuda los mecanismos por el cual ese y muchos otros bancos "respetabilísimos" se benefician del lavado de dinero de la droga, la corrupción y la evasión de impuestos. Es verdaderamente folclórico ver como las luchas políticas de algunos países sudamericanos se montaron sobre el informe para intentar desestabilizar a los presidentes de sus propios bancos centrales. En realidad, cualquier lectura del

informe de Levin revela que si hay que inculpar a algún presidente de banco central, el primero y principal es Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque el verdadero horror del informe es cómo los norteamericanos usan su propio sistema financiero para beneficiarse de estos negocios sucios, para luego poner más leña en la hoguera colombiana para luchar (presuntamente) contra esos negocios. Y quizás, es en parte gracias a ello que son una superpotencia.

Si nos alejamos de los negocios sucios de los grandes bancos respetables de los Estados Unidos para centrar nuestra atención en grandes bancos mafiosos, como el BCCI (*Bank of Credit and Commerce International*), ya mencionado en el Capítulo 3, vemos como los más "respetables" miembros del *establishment* norteamericanos están involucrados con los negocios de los bancos mafiosos internacionales. Allí mencionamos el caso del filantrópico ex presidente Jimmy Carter, que recibió U$S 8 millones del BCCI para una de sus fundaciones. El banco también contribuyó medio millón al Centro Carter de la *Emory University.*[418] En realidad, gran parte de la clase política del estado norteamericano de Georgia (de donde es oriundo Carter) estaba involucrada con el BCCI, incluyendo el ex embajador norteamericano en las Naciones Unidas Andrew Young y el ex director de presupuesto, Bert Lance. La consultora de Young era regularmente contratada por el BCCI mientras aquel fue alcalde de Atlanta, y la relación se prolongó después. Más aún, en 1981 Lance vendió sus intereses en el Banco Nacional de Georgia a Gaith Pharaon, uno de los socios del BCCI bastante conocido en el Cono Sur de las Américas. Naturalmente que la versión oficial es que el bueno de Jimmy Carter "fue usado", y que de ingenuo no hizo preguntas sobre el origen de la fortuna de Agha Hasan Abedi, *capo* del BCCI. Carter y Abedi viajaban juntos dos veces por año. El jefe de la CIA, William Webster, sabía que el BCCI se dedicaba al blanqueo de dinero del narcotráfico, y calló.[419]

Pero quizá quien más se benefició del vínculo entre Carter y el banco mafioso fue el actual presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, porque gracias al involucramiento de eminentes demócratas, la propia relación de Bush hijo con el BCCI no se convirtió en materia de debate en la campaña que lo catapultó a la primera magistratura.

En realidad, la familia Bush en pleno estuvo involucrada. El actual gobernador de Florida, Jeb Bush, a quien su hermano debe la presidencia, estaba vinculado al banco a través de su filial de Miami y el gerente de la misma, Abdur Sakhia[420] (que se convirtió en el principal representante del BCCI en los Estados Unidos)[421].

Y como también vimos en el Capítulo 3, a principios de la década del '90 George W. Bush era tan solo un empresario petrolero fracasado hijo de un hombre muy importante, cuya empresa fue salvada por el BCCI. Gracias al banco, Harken Corporation, una pequeña empresa petrolera a la que Bush hijo apostó después de un quebranto anterior, canceló deudas y obtuvo un jugoso contrato en Bahrain. La empresa, cuyo directorio estaba integrado por el Bush actual, estaba totalmente infiltrada por conspicuos accionistas y miembros del directorio del BCCI.[422] Nada de esto causa demasiado escándalo. Sin embargo, si algún político sudamericano aparece vinculado al banco, nosotros mismos nos encargamos de crear un escándalo y desestabilizar nuestra vulnerables economías y sistemas políticos.

Hasta la Casa Blanca de George Bush (padre) estaba infiltrada por funcionarios vinculados al banco mafioso, con el que hicieron grandes negocios desde el ex presidente narcotraficante panameño Manuel Noriega hasta el también narcotraficante ex presidente surinamense Dèsi Bouterse. A través de Talat Othman, socio de George W. Bush en Harken, personeros del banco incluso tuvieron influencia en la política hacia el Medio Oriente del padre del presidente actual.[423] Por otra parte, la penetración del BCCI en el sistema financiero norteamericano fue tan grande que no sólo llegó a dominar al *Georgia National Bank*, una institución provinciana, sino también al *First American*, el más importante banco de Washington D.C.[424]

En el mundo actual existen varios circuitos subterráneos intercomunicados entre si: narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, guerrillas y terrorismo. Estos submundos, a su vez, tienen vasos comunicantes con las más altas esferas del poder político y económico de los *establishments* más prestigiosos. En casos como el del BCCI con los Bush, o el de Salinas de Gortari con el Citibank, ¿quién usó a quién?

¿Quién es el títere y quién es el amo?

NOTAS

[1] *La Nación*, 13 de octubre de 2000.
[2] *La Nación*, 3 de octubre de 2000.
[3] *La Nación*, 5 de octubre de 2000.
[4] *La Nación*, 6 de mayo de 2000.
[5] El nombre auténtico del "Padre Oliverio Medina" ha sido registrado con diversas ortografías por la prensa del mundo, aunque la más frecuente es Cadenas Collazos. En un primer momento *Clarín* lo registró como "Francisco Cárdenas", nombre que curiosamente coincide con el del juez federal colombiano que sobreseyó a dos notorios cabecillas del cártel de Medellín en 1989, Pablo Emilio Escobar Gaviria y José Gonzalo Rodríguez Gacha, por entonces acusados de asesinar al fiscal general del Estado, Pablo Hoyos (cable de *The Associated Press* del 26 de septiembre de 1989). Un cable de *World News Connection* lo llama "Cadenas Collazzo". Los boletines del *World Socialist Web Site* (WSWS) lo llaman "Cadenas Colazzos".
[6] *World News Connection*, 5 de septiembre de 2000.
[7] *Ibidem.*
[8] *New York Times*, 30 de octubre de 2000.
[9] *BBC Monitoring*, 11 de septiembre de 2000.
[10] *New York Times*, 30 de octubre de 2000
[11] *La Nación*, 6 de mayo y 3 de octubre de 2000. Calderón fue invitado a la Universidad Nacional de Mar del Plata por el Movimiento Universitario de Izquierda (MUI) y por la filial local de la Federación Juvenil Comunista, ambas las cuales tienen representación en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades. Había estado anteriormente en esa ciudad en febrero de 1999, cuando fue invitado al plenario de la CTA.
[12] Esto ocurrió en 1991, cuando guerrilleros de las FARC ingresaron al territorio brasileño y atacaron una base militar sobre el río Traira, en el extremo oriental del estado de Amazonas, dando muerte a soldados brasileños. Raúl Reyes, miembro del secretariado general de las FARC y "canciller" de la organización frente al mundo, asumió personalmente la responsabilidad por este operativo, justificándolo porque los soldados brasileños habían matado a buscadores de oro. Según las investigaciones brasileñas el ejército de ese país dio muerte a guerrilleros colombianos que se dedicaban a la búsqueda de oro en el Amazonas brasileño. Cable de *World News Connection*, 9 de mayo de 2000. Otro episodio similar—en tanto involucró al territorio brasileño en la guerra civil colombiana—tuvo lugar a fines de 1998, cuando las FARC atacaron y capturaron Mitu, una capital provincial colombiana pegada a la frontera. En ese entonces, las tropas colombianas se retiraron a Iauarete, una base brasileña del otro lado de la frontera, y contraatacaron desde Brasil. *New York Times*, 30 de octubre de 2000.
[13] *La Nación*, 3 de octubre de 2000.
[14] *La Nación*, 30 de septiembre de 1999. Un día antes del encuentro de Calderón con Alfonsín, el entonces presidente Carlos Menem había declarado, en Bogotá, que la presencia de Calderón en Buenos Aires "realmente nos molesta". Agregó: "La Argentina es un país que ya pasó por una experiencia muy dura en esta materia". Declaró que la Argentina *no* recibiría a esa persona como representante de las FARC en el Cono Sur porque "no estoy de acuerdo con la solidaridad hacia los insurgentes", y dijo que no dialogaría con altas instancias de la guerrilla colombiana como lo hace el gobierno venezolano de Chávez, "porque nosotros no vamos a dialogar con la guerrilla y sólo vamos a dialogar con el gobierno colombiano". Dijo que no avalaría una intervención unilateral de los EE.UU. en Colombia, pero que apoyaría toda iniciativa que contara con el apoyo del gobierno de Colombia. *La Nación*, 29 de septiembre de 1999. Ver también en ese diario la Editorial I del día 28 de septiembre.
[15] *The Scotsman*, 29 de abril de 2000.
[16] *Insight Magazine*, 24 de noviembre de 1997.
[17] *Ibidem.*
[18] "A Hug in the Colombian Jungle", *The Economist*, 17 de febrero de 2001.
[19] Arnaud de Borchgrave, "Pastrana Sees 'Commitment' of Rebel Units to Peace Talks", *Washington Times*, 10 de febrero de 2001 (se trata de una entrevista con el presidente Pastrana).
[20] "A Hug in the Colombian Jungle", *The Economist*, 17 de febrero de 2001.
[21] Véase "Colombia: Small Guerrilla Groups Complicate Peace Efforts – Intelligence Report", *BBC Monitoring*, 9 de agosto de 2000.
[22] "Global Intelligence Update", *Stratfor*, 8 de febrero de 2001. La página web de las AUC es www.colombialibre.org/ . La de las FARC es http://www.farc-ep.org/.

[23] Según declaraciones del presidente Pastrana, [23] Arnaud de Borchgrave, "Pastrana Sees 'Commitment' of Rebel Units to Peace Talks", *Washington Times*, 10 de febrero de 2001.
[24] "A Hug in the Colombian Jungle", *The Economist*, 17 de febrero de 2001.
[25] Michael McCaugham, "Clinton Turns Foreign Policy Attention to Colombian Narcotics Trade", *Sunday Herald*, 3 de septiembre d 2000, y Jack Kelly, "Military Expertise for Sale or Rent", *Pittsbugh Post-Gazette*, 15 de febrero de 2000.
[26] "Global Intelligence Update", *Stratfor*, 8 de febrero de 2001. La página web de las AUC es www.colombialibre.org/ . La de las FARC es http://www.farc-ep.org/.
[27] Jeremy Mc Dermott, "Government Killers Fight For Themselves", *The Scotsman Publications Limited, Scotland on Sunday*, 20 de agosto de 2000.
[28] Jeremy Mc Dermott , "Cocaine feeds FARC's revolution", *The Scotsman Publication Limited, Scotland on Sunday*, 13 de agosto de 2000.
[29] De Carlos Escudé, Ed. de Belgrano, Buenos Aires, 1999.
[30] "Cocaine feeds FARC's revolution", *The Scotsman Publication Limited, Scotland on Sunday*, 13 de agosto de 2000.
[31] "The FARC-Tijuana Axis", *Foreign Report*, 7 de diciembre de 2000.
[32] *Ibidem.*
[33] *Christian Science Monitor*, 13 de diciembre de 2000.
[34] *Clarín*, 23 de septiembre de 2000.
[35] Este sujeto a veces es presentado por la prensa de habla hispana con el apellido Sorgha Norian.
[36] *La República*, Lima 28 de diciembre de 2000. *Los Angeles Times*, 11 de enero de 2001.
[37] Ray Locker Media General News Service, "Iran-Contra Arms Sellers Supplied Iraq", *Richmond Times-Dispatch*, 16 de septiembre de 1990.
[38] *Los Angeles Times*, 11 de enero de 2001.
[39] *Ibidem.*
[40] *Expreso* (Lima), 3 de septiembre de 2000.
[41] "Peru: a spy story replete with arms, drugs-dealers and bears", *Inter Press Service*, 8 de septiembre de 2000.
[42] *El Nacional*, 7 de septiembre de 2000
[43] *La República*, 28 de diciembre de 2000. Este diario dice que el precio de compra inicial era de 65 dólares, cifra menor a la mencionada por el periódico de Los Ángeles.
[44] *Los Angeles Times*, 1 de noviembre de 2000; *Clarín*, 21 de septiembre de 2000.
[45] *Expreso*, 3 de septiembre de 2000.
[46] *La República*, 28 de diciembre de 2000.
[47] *Expreso*, 3 de septiembre de 2000.
[48] *Revista Cambio*, 28 de agosto al 4 de septiembre
[49] "Russian Mob trading arms for cocaine with Colombia rebels", *MSNBC*, 9 de abril de 2000.
[50] *Los Angeles Times*, 25 de enero de 2001; *New York Times*, 6 de noviembre de 2000; *Los Angeles Times*, 1 de noviembre de 2000; *Dallas Morning News*, 5 de noviembre de 2000; *World News Connection*, 21 de septiembre de 2000.
[51] *Los Angeles Times*, 11 de enero de 2001.
[52] *Ibidem*, y Revista *Cambio*, 28 de agosto al 4 de septiembre.
[53] Soghanalian fue introducido al público masivo por primera vez en un documental de CNN del año 1884, titulado *Merchants of Death*, cuyo autor principal fue Joe Trento, presidente de National Security News Service (NSNS), una organización de noticias dedicada a temas de seguridad nacional norteamericana. Desde entonces, Trento se convirtió en el principal experto mundial sobre la figura de Sarkis Soghanalian. Cuando Soghanalian fue detenido en Los Ángeles, Trento se asoció a Ángel Páez, un reconocido periodista peruano de *La República*, para investigar el papel de Soghanalian, y esta investigación contribuyó a poner al descubierto la responsabilidad de Montesinos y Fujimori en el operativo y el posterior intento de encubrimiento, tras el escándalo.
[54] *Los Angeles Times*, 11 de enero de 2001.
[55] "Peru: a spy story replete with arms, drugs-dealers and bears", *Inter Press Service*, 8 de septiembre de 2000.
[56] *La República*, 28 de diciembre de 2000.
[57] La página web de las FARC, ya mencionada, es http://www.farc-ep.org/.
[58] *Clarín*, 3 de febrero de 2000.

[59] La zona desmilitarizada, de unos 42.000 kilómetros cuadrados, fue concedida a fines de 1998. Las FARC aceptaron formalmente las negociaciones de paz el 7 de enero de 1999, sin acordar un alto al fuego excepto en la zona desmilitarizada.
[60] *Dow Jones International News*, 28 de junio de 1999.
[61] *Washington Post*, 5 de enero de 1999.
[62] *Dow Jones International News*, 28 de junio de 1999.
[63] *Barron's*, 5 de julio de 1999.
[64] *Clarín*, 3 de febrero de 2000.
[65] *Ibidem.* De tal manera, nos encontramos (como tantas veces) con un doble estándar de la justicia internacional: personajes que son *actualmente* delincuentes insurgentes se desplazan con impunidad, mientras que delincuentes del pasado con inmunidad soberana concedida por los actuales gobiernos *democráticos* de su país, como Pinochet, han sido arrestados. Pinochet, sin duda, merece estar entre rejas, pero la comparación de su caso con el de los guerrilleros de las FARC viajando impunemente por el mundo es una inmejorable oportunidad para generar conceptos sobre este doble estándar. Véase C. Escudé, *Estado del Mundo: las Nuevas Reglas del Juego de la Política Internacional Vistas Desde el Cono Sur* (Buenos Aires: Planeta/Ariel, 1999), especialmente el capítulo titulado "Las Reglas del Juego".
[66] *Clarín*, 15 de febrero de 2000.
[67] *World News Connection*, 8 de octubre de 2000.
[68] *Clarín*, 4 de mayo de 2000.
[69] *The Scotsman*, 29 de abril de 2000
[70] *Clarín*, 27 de abril de 2000.
[71] *The Scotsman*, 29 de abril de 2000.
[72] *Clarín*, 26 de mayo de 2000.
[73] *Clarín*, 2 de mayo de 2000. Otra propuesta reiterada por Tirofijo y ya antes presentada por el "canciller" Reyes al gobierno de Colombia (posteriormente propuesta, en forma indirecta, a los EE.UU.) es la legalización de la droga en Colombia y otros países.
[74] *Clarín*, 28 de octubre de 2000.
[75] *Clarín*, 30 de abril de 2000.
[76] Información obtenida por uno de los autores de este libro a principios del año 2000, en conversación de sobremesa con el Sr. Manuel Rocha, entonces encargado de negocios de los EE.UU. en la Argentina.
[77] Para mayor información sobre la problemática venezolana y el fenómeno chavista, ver: Margarita López-Maya y Luis E. Lander, "Refounding the Republic: The political project of Chavismo", *NACLA Report on the Americas*, 1 de mayo de 2000, páginas 22-28; y Deborah L. Norden, "Democracy and military control in Venezuela: From subordination to insurrection", *Latin American Research Review*, 1 de enero de 1998.
[78] *La Semana* (Colombia), 1 de febrero de 2001.
[79] Los intentos de golpe fueron perpetrados el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. El primero fue liderado por el mismo Chávez, y al segundo lo alentó desde la cárcel. *The Fort Worth Star-Telegram*, 24 de junio de 1994.
[80] *La Semana*, 1 de febrero de 2001.
[81] El general Omar Torrijos fue dictador de Panamá durante 13 años. Llegó al poder por un golpe de Estado en el año 1968 y negoció con Jimmy Carter el tratado por el cual el Canal de Panamá y su Zona revirtieron al control panameño. Murió en un accidente de aviación en 1981. Su Partido Revolucionario Democrático (PRD) fue el mismo cuyas banderas fueron tomadas por el dictador general Manuel Noriega, narcotraficante y agente de la CIA que finalmente fue depuesto y encarcelado por los EE.UU. el 3 de enero de 1990, después de una invasión militar. Martín Torrijos, hijo de Omar, perdió las elecciones presidenciales de 1999 frente a Mireya Moscoso. Fue candidato del mismo PRD, que nunca perdió vigencia en la política panameña.
[82] *Ibidem.*
[83] *NotiSur-Latin American Political Affairs*, 24 de marzo de 1995; *Agence France-Presse*, 14 de marzo de 1995.
[84] *La Semana*, 1 de febrero de 2001.
[85] *Miami Herald*, 1 de diciembre de 2000. La revista *Cambio* también informa sobre estos hechos.
[86] La CONAIE, bajo el liderazgo de Antonio Vargas y con el respaldo de mandos militares medios, ocupó la sede del Parlamento ecuatoriano el viernes 21 de enero de 2000. Fue entonces que el alto mando militar le pidió la renuncia a Mahuad. Si bien la toma del Congreso fue un claro triunfo político, la posterior ocupación de la Casa de Gobierno y la proclamación de una Junta de Salvación Nacional introdujo a la CONAIE en una dinámica donde pesó de forma determinante el mando castrense. Los indígenas abandonaron Quito el sábado habiendo logrado la salida de Mahuad, pero sin alcanzar su objetivo de fondo: lograr una transformación de la política económica. La cúpula militar

desconoció la Junta de Salvación Nacional y puso a Noboa en la presidencia argumentando la continuidad democrática y el respeto a la Constitución.

[87] La caída de la Junta fue producida por presiones internacionales, principalmente norteamericanas, que también desplazaron de la primera magistratura al jefe del ejército, general Carlos Mendoza, quien brevemente se puso al frente de dicha Junta. Noboa es un profesor de derecho de 62 años con fuertes lazos con el mundo empresario de Guayaquil. Tiene el apoyo del Partido Social Cristiano y en menor medida, de los "roldosistas". Antonio Vargas, el dirigente indigenista, emplazó al nuevo gobierno para que genere mejores condiciones sociales, so pena de enfrentar una "explosión social" o "guerra civil". Como los indígenas tienen por lo menos algún apoyo de los mandos medios (chavistas) de las fuerzas armadas ecuatorianas, la amenaza puede ser real. *The Economist*, 29 de enero de 2000.

[88] *Miami Herald*, 1, 5 y 15 de diciembre de 2000; *BBC Monitoring*, 8 de diciembre de 2000.

[89] *Dow Jones International News*, 6 de diciembre de 2000.

[90] *BBC Monitoring*, 8 de diciembre de 2000.

[91] Dieterich es coautor de otro volumen, más académico, en compañía de Naom Chomsky, hecho que agrega un intangible activo de prestigio a su currículo.

[92] *Inter-Press Service*, 9 de abril de 1996. A la reunión en la selva de Chiapas fueron invitados Eduardo Galeano, Mario Benedetti y Mercedes Sosa, pero no asistieron. Sí, en cambio, el asesor alemán de Hugo Chávez.

[93] *Washington Post*, 13 de agosto de 2000; revista *Time*, 9 de octubre de 2000.

[94] *Los Angeles Times*, 1 de septiembre de 1999 y 29 de septiembre de 2000.

[95] *New York Times*, 28 de Julio de 2000; *Miami Herald*, 5 de diciembre de 2000.

[96] *Miami Herald*, 29 de abril de 1999; *Los Angeles Times*, 1 de septiembre de 1999.

[97] "*Cambio* es un semanario colombiano de información y análisis sobre temas de actualidad, editado en Bogotá y cuyo presidente del Consejo Editorial es el escritor y Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. La revista fue fundada originalmente en 1994 con el nombre de Cambio16 Colombia, con participación del grupo editorial español del mismo nombre. En diciembre de 1998 la publicación fue adquirida por la sociedad Abrenuncio S.A., propiedad de un grupo de periodistas encabezados por García Márquez."

[98] *Revista Cambio*, 24 al 31 de julio de 2000.

[99] "El ideólogo errante", *Revista Exceso* (Caracas), Nº 132, julio de 2000.

[100] Digno es de destacar que algunos sectores "carapintadas", a través del "foro de Seprín" en Internet (julio de 2000), critican mesuradamente a Ceresole (de cuyo D.N.I., Nº 4.418.729, dejan constancia), y condenan también la participación de algunos carapintadas en el atentado contra la AMIA de 1994. Asimismo dan por válidas las acusaciones del pago de grandes sumas de dinero al dirigente del MODIN, carapintada Aldo Rico, por parte de gente del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. El mensaje del 5 de julio de 2000 es de la "Columna Patricio José Maguire", y reconoce que "la mayoría de los integrantes de (dicha columna) apoyamos periféricamente (…) los alzamientos del 15 de abril de 1987 (Semana Santa) y enero de 1988 (Monte Caseros) por parte del Sr. Tcnl. Aldo Rico, y las de diciembre de 1988 (Operación Virgen del Valle) y el 3 de diciembre de 1990 (operación Virgen de Luján), ambas lideradas por el Sr. Cnl. Muhammed Ali Seineldín". No obstante lo dicho, en el mismo foro aparecen cartas de Ceresole, algunas dirigidas a los iraníes, a quienes alaba y absuelve de toda participación en los atentados terroristas de Buenos Aires de 1992 y 1994.

[101] Información obtenida en su mayor parte de un currículo puesto en Internet por el propio Ceresole.

[102] *Los Angeles Times*, 1 de septiembre de 1999.

[103] *Associated Press*, 30 de mayo de 1995.

[104] Ver por ejemplo http://www.cubaliberal.org/sao_paulo.htm, donde se menciona específicamente al FREPASO como miembro del Foro de Sao Paulo. También *PT Noticias*, http://www.pt.org.br/ptnot/ptnot79/pagina4a.htm. Sobre el Primer Seminario Regional del Cono Sur del Foro de Sao Paulo, la Secretaría de Relaciobnes Internacionales del PT brasileño informa que estuvieron presentes los diputados del FREPASO Eduardo Jozami, Marcela Bordenave, María Elena Naddeo, Ramón Torres Molina, Enrique Dratman, Osvaldo Deza, además de otros frepasistas sin cargos legislativos, un comunista y un miembro del Partido del Trabajo y del Pueblo. También se informa: "se examinó la situación de los respectivos partidos de izquierda en la perspectiva electoral que se avecina tanto en Argentina como en Uruguay. En particular los compañeros del Frepaso examinaron las perspectivas que se abren con su alianza con la Unión Cívica Radical, en la llamada Alianza , a la cual las encuestas dan un pequeño margen de ventaja sobre el PJ." Ver http://www.pt.org.br/sri/primer.htm.

[105] *Revista Cambio*, 24 al 31 de julio de 2000.

[106] *Miami Herald*, 5 de diciembre de 2000.

[107] *Washington Post*, 1 de octubre de 2000.

[108] *Miami Herald*, 18 de enero de 2001.
[109] Insight Magazine*, 24 de noviembre de 1997*
[110] Ibidem.
[111] *Juan O. Tamayo, "Russian Banks, Firms, Sprouting Over Caribbean",* Miami Herald, 4 de Julio de 1998.
[112] Austin-American Statesman*, 16 de noviembre de 1996.*
[113] *Testimonio al Congreso por Richard L. Palmer,* Congressional Document Clearing House*, 7 de octubre de 1999.*
[114] Ibidem
[115] Ibidem
[116] Ibidem
[117] Ibidem
[118] *John Lloyd, "The Autumn of the Oligarchs",* New York Times*, 8 de octubre de 2000. Este largo artículo documenta los esfuerzos de Vladimir Putin por dominar a los "oligarcas".*
[119] *Testimonio al Congreso por Richard L. Palmer,* Congressional Document Clearing House*, 7 de octubre de 1999.*
[120] *Mark Galeotti*, *"Russia's Bleeding Wounds",* Jane's Intelligence Weekly*, 1 de noviembre de 1999.*
[121] *Brain Whitmore, "N.Y. Bank Scandal is Ammo for Politicians",* Moscow News*, 24 de agosto de 1999.*
[122] *Mark Galeotti, "Russia's criminals go global",* Jane's Intelligence Review*, 1 de marzo de 2000.*
[123] Ibidem.
[124] *Juan O. Tamayo, "Russian Banks, Firms, Sprouting Over Caribbean",* Miami Herald, 4 de Julio de 1998.
[125] Austin-American Statesman*, 16 de noviembre de 1996.*
[126] *Juan O. Tamayo, "Russian Banks, Firms, Sprouting Over Caribbean",* Miami Herald, 4 de Julio de 1998.
[127] *Mark Galeotti, "Russias criminals go global",* Jane's Intelligence Review*, 1 de marzo de 2000.*
[128] *Douglas Farra, "Russian Mob, Drug Cartels Joining Forces",* Washington Post*, 29 de septiembre de 1997.*
[129] *Alan Feuer, "In Miami, an Imported Mob Scene",* New York Times*, 3 de julio de 2000.*
[130] *Juan O. Tamayo, "Redfallas are Settling in South Florida",* Miami Herald*, 5 de Julio de 1998.*
[131] *Mark Galeotti, "Russia's criminals go global",* Jane's Intelligence Review*, 1 de marzo de 2000.*
[132] *Douglas Farra, "Russian Mob, Drug Cartels Joining Forces",* Washington Post*, 29 de septiembre de 1997.*
[133] *Phil Williams y Paul N. Woessner, "Gangs go Nuclear",* World Today*, 1 de diciembre de 2000.*
[134] *Latin America- Russia/Crime Russian Mafia Sinks Claws in Latin America, EFE News Service, 24 de septiembre de 2000;* La Nación*, 25 de septiembre de 2000.*
[135] La Nación*, 24 de septiembre de 2000.*
[136] Ibidem
[137] La Nación*, 25 de septiembre de 2000.*
[138] Ibidem
[139] La Nación*, 24 de septiembre de 2000.*
[140] Ibidem.
[141] Ibidem.
[142] Ibidem.
[143] *"Colombian Rebels Tap. E. Europe for Arms; Guerrillas Firepower Superior to Army´s";* Washington Post*, 4 de noviembre de 1999.*
[144] Ibidem
[145] Ibidem
[146] Ibidem
[147] "Peru: a spy story replete with arms, drugs-dealers and bears"; Inter Press Service, 8 de septiembre de 2000.
[148] *"Colombian Rebels Tap. E. Europe for Arms; Guerrillas Firepower Superior to Army´s";* Washington Post*, 4 de noviembre de 1999.*
[149] "Columbia- Advance of the Russian mafia"; Officer 1 de Julio de 1999.
[150] *"Colombia-Russia drug trafficking ties, drug routes reported",* BBC Monitoring*, 17 de agosto de 2000.*
[151] *Mark Fineman, "Case links Russian Sub, Colombian Drugs",* Los Angeles Times*, 21 de junio de 1998.*
[152] *Alan Feuer, "In Miami, an Imported Mob Scene",* New York Times*, 3 de julio de 2000.*
[153] *Kirk Semple, "High-Tech Smuggling: the Submarine Next Door",* New York Times *3 de diciembre de 2000.*
[154] *David Kidwell, "Alleged Mobster Turns Informant",* Miami Herald*, 3 de marzo de 1999.*
[155] Juanita Darling, "Submarine links Colombian Drug Traffickers with Russian Mafia Crime", Los Angeles Times, *10 de noviembre de 2000.*
[156] *Mark Fineman, "Case links Russian Sub, Colombian Drugs",* Los Angeles Times*, 21 de junio de 1998.*
[157] *Por Carlos Escudé, Buenos Aires: Ariel (Planeta), 1999.*

[158] *Mark Fineman, "Case links Russian Sub, Colombian Drugs",* Los Angeles Times*, 21 de junio de 1998.*
[159] Juanita Darling, "Submarine links Colombian Drug Traffickers with Russian Mafia Crime", *Los Angeles Times*, *10 de noviembre de 2000*.
[160] New York Times*, 3 de diciembre, y* Los Angeles Times*, 10 de noviembre de 2000.*
[161] Juanita Darling, "Submarine links Colombian Drug Traffickers with Russian Mafia Crime", *Los Angeles Times*, *10 de noviembre de 2000*.
[162] Mario Vargas Llosa, "Piedra de Toque/Pobredumbre Terminal", *Reforma*, 19 de noviembre de 2000.
[163] Ray Locker Media General News Service, "Iran-Contra Arms Sellers Supplied Iraq", *Richmond Times-Dispatch*, 16 de septiembre de 1990.
[164] Sydney P. Freedberg, "Merchant of Death in Trouble Again: Arms Dealer Works Many Angles", *Seattle Times* 2 de noviembre de 1986.
[165] Roberto Godoy, "Brazil: Arms Dealers Focusing on Plan Colombia", *World News Connection*, 8 de octubre de 2000.
[166] *"Colombian Rebels Tap. E. Europe for Arms; Guerrillas Firepower Superior to Army´s";* Washington Post*, 4 de noviembre de 1999.*
[167] *El Tiempo,* 23 de agosto de 2000.
[168] Expreso, *24 de agosto de 2000.*
[169] *El Comercio*, 23 de agosto de 2000, y *Stratfor*, 27 de septiembre de 2000.
[170] *El Espectador,* Bogotá, 27 de julio de 2000.
[171] *Insight Magazine,* 24 de noviembre de 1997.
[172] *CNN en Español*, 24 de noviembre de 2000. Las cosas se complican aún más si a la conexión mexicana se agrega la norteamericana. Cuando las autoridades norteamericanas siguieron el rastro de las armas incautadas a los rebeldes de Chiapas en 1994 encontraron rifles que habían sido legalmente importados desde los Estados Unidos al gobierno mexicano. También encontraron armas provenientes de un traficante del sur de California. Asimismo determinaron que el arma utilizada para el asesinato del candidato presidencial Luis Colosio venía de un negocio de armas en Texas. Estos hallazgos dejaron al descubierto el rol de los EE.UU. como punto de producción, negociación y traslado de armas, especialmente hacia México. De acuerdo a un informe del *San Diego Union Tribune*, el embarque de armas incautado en marzo de 1997 era originario de Vietnam, que ha provisto armas a organizaciones revolucionarias y terroristas en países como Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Uruguay. Persisten rumores no confirmados de que los rebeldes zapatistas han recibido armas y otro tipo de asistencia de los regímenes comunistas de Vietnam y Corea del Norte. La incautación de esas armas en San Diego sería la primera evidencia del involucramiento vietnamita en México. También ingresarían armas de las ex zonas de conflicto en Centroamérica ("Mexico´s crop of illicit guns has US roots", *San Diego Union Tribune*, 30 de marzo de 1997). Marco León Calarca, integrante de las FARC, aclaró que ninguno de los miembros de las FARC reside en México de manera permanente ("Niegan FARC los vínculos con Arellano", *Reforma*, 5 de diciembre de 2000).
[173] El Tiempo*, 23 de agosto de 2000.*
[174] *Excelsior,* 29 de junio de 2000.
[175] "Iranian Investment in Colombia Raises Suspicion", *Stratfor Global Intelligence Update*, 2 de diciembre de 1999.
[176] "Russian Mob Trading Arms for Cocaine with Colombian Rebels", *MSNBC*, 10 de abril de 2000.
[177] "Foreign Guerrillas Allegedly Among ELN Ranks", *Stratfor Global Intelligence Update*, 3 de junio de 1999.
[178] "Iranian Investment in Colombia Raises Suspicion"*, Stratfor Global Intelligence Update*, 2 de diciembre de 1999.
[179] "Ecuadorean police dismantle ring smuggling supplies to Colombian rebels", *BBC Monitoring*,12 de Julio de 2000.
[180] *El Nacional*, 9 de octubre de 1999.
[181] "FARC Supply Lines", *World News Connection*, 12 de Julio de 2000.
[182] "Colombian Rebels Tap. E. Europe for Arms; Guerrillas Firepower Superior to Army´s"; *Washington Post*, 4 de noviembre de 1999.
[183] El Comercio*, 23 de agosto de 2000.*
[184] El Comercio*, 23 de agosto de 2000.*
[185] *Financial Times*, 2 de noviembre de 2000. Autoridades colombianas capturaron cuatro personas e incautaron un cargamento de municiones dirigido a las FARC procedente de Ecuador. Los 500.000 proyectiles para ametralladoras y fusiles son de fabricación argentina, estadounidense y rusa *(El Nacional*, 17 de agosto de 1999). Por otra parte, más de 48000 proyectiles, la mitad de ellos con perforaciones para introducirles sustancias venenosas o explosivas, que tenían como destino a las FARC y que procedían de la capital ecuatoriana, fueron decomisados en el sur de Colombia. Cinco fusiles de fabricación alemana, estadounidense y rusa, lo mismo que 18 proveedores de bala,

completaban este arsenal, que era transportado hacia Bogotá en un camión con una carga de tubérculos comestibles. El jefe policial aseguró que el arsenal tenía como destino reductos subversivos que actúan en el departamento central de Cundinamarca, y en los vecinos del Meta y Tolima. El armamento fue ingresado por Nariño, departamento de la frontera sur con Ecuador (*El Nacional*, 11 de noviembre de 2000).

[186] *La República*, 24 de agosto de 2000

[187] *MSNBC*, 9 de abril de 2000.

[188] *Caretas*, 22 de septiembre de 2000.

[189] Reforma*, 27 de agosto de 2000.*

[190] Mundialmente, la industria de la droga es un 50% más importante, en términos del dinero que mueve, que la industria farmacéutica. Elma Lia Nascimento, "Just Saying Yes", *Brazzil*, 31 de enero de 1997.

[191] Elma Lia Nascimento, "Just Saying Yes", *Brazzil*, 31 de enero de 1997.

[192] *World News Connection*, 29 de septiembre de 1999.

[193] Elma Lia Nascimento, "Just Saying Yes", *Brazzil*, 31 de enero de 1997.

[194] Francesco Neves, "It's War", *Brazzil*, octubre de 1999.

[195] *World News Connection*, 29 de septiembre de 1999.

[196] *Clarín*, 24 de abril de 2001.

[197] *Clarín,* 22 de abril de 2001. La detención fue confirmada por el presidente Andrés Pastrana al presidente Fernando Henrique Cardoso durante la Cumbre de las Américas en Québec.

[198] Luis Esnal, "La violencia del narcotráfico ya no conoce límites en Río", *La Nación*, 14 de septiembre de 2000.

[199] *World News Connection*, 29 de septiembre de 1999.

[200] *Clarín*, 31 de marzo de 2000; *ABC Color*, 1 de abril de 2000.

[201] *Paraguay Ahora*, 9 de octubre de 2000.

[202] "Drug Kingpin's Link with Paraguay's General Oviedo Investigated", *World News Connection*, 29 de noviembre de 1999, y "Paraguay-Oviedo: Brazilian Legislative Committee Ties Oviedo to Drug Traffic", *EFE News Service*, 13 de junio de 2000.

[203] *El Mercurio* (Chile), 1 de diciembre de 2000.

[204] *Clarín*, 15 de junio de 2000.

[205] *Clarín*, 7 de diciembre de 2000.

[206] *Clarín*, 25 de abril de 2001.

[207] *Clarín*, 26 de abril de 2001.

[208] La Tercera*, 16 de octubre de 1999.*

[209] *La Nación*, 15 de octubre de 1999. En los primeros días de julio último, cuando fue detenido, el ex coronel estaba alojado en el hotel Chaco, en el centro de Asunción. En un auto no oficial se lo trasladó hasta un cuartel de las afueras de Asunción y allí comenzó el interrogatorio, que duró casi 36 horas. "Fue todo muy rápido, porque estábamos actuando sin orden judicial. Él estaba en un cuarto del regimiento, y allí entraba distinta gente que le preguntaba sobre diferentes cosas. Zamir es una persona difícil de interrogar, entrenada para resistir presiones", contó a *La Nación* uno de los agentes antidrogas. El interrogatorio fue dirigido por "un oficial de apellido judío", y desde un cuarto contiguo observaban la situación los agentes norteamericanos. Durante la "conversación" en el cuartel (que las fuentes describen como pasiva y muy tranquila), Meir Zamir reconoció que había vendido al ejército paraguayo ametralladoras Uzi y Jericó de procedencia israelí, y que había sido el instructor de la guardia personal del ex presidente Raúl Cubas y de los grupos paramilitares de Lino Oviedo (*La Nación*, 15 de octubre de 1999).

El traficante Meir Zamir, entró y salió de la Argentina, por el aeropuerto internacional de Ezeiza, al menos 19 veces en poco más de dos años. Los movimientos se produjeron entre marzo de 1996 y mayo de 1998, mientras residía en Paraguay, y los datos constan en su pasaporte. Altas fuentes del ministerio de Interior admitieron que conocían a Zamir y dijeron que había sido agregado militar de la delegación israelí en Buenos Aires y en Asunción hasta 1996. Por su parte, un vocero autorizado de la embajada israelí en la Argentina afirmó que "el señor Meir Zamir no trabaja en esta embajada y no nos consta que pertenezca a ningún organismo oficial del Estado de Israel". Los itinerarios de Zamir constan en su documentación personal, a la que tuvo acceso la inteligencia paraguaya. Entre marzo de 1996 y mayo de 1998, repitió circuitos que despertaron curiosidad sobre sus actividades. Por períodos de dos o tres días, viajó por Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Venezuela y Colombia, además de Israel y Estados Unidos (La Nación, 16 de octubre de 1999). Durante su fugaz detención en la capital paraguaya, en los primeros días de julio, las visitas a Bogotá llamaron la atención de agentes de inteligencia norteamericanos, que sospechaban que el militar podía estar vendiendo armas a los grupos guerrilleros y paramilitares de Colombia (*La Nación*, 16 de octubre de 1999).

[210] *Brazil, Paraguay: lax surveillance faciltates arms smuggling,* World News Connection*, 16 de Julio de 2000*.

[211] "Paraguay: Caribbean Isle used in arms Traffic to South Africa", *Inter Press Service*, 23 de marzo de 2000.
[212] ABC Color*, 8 de mayo de 1997. Ese mismo año en el mes de marzo, tres turistas brasileños fueron detenidos por efectivos de la Policía Federal de Brasil cuando estaban traficando un gran cargamento de municiones para fusiles AR-15 y pistolas 9 mm, adquiridas en Ciudad del Este y que tenían como destino traficantes y asaltantes de bancos de las favelas de Río.* ABC Color*, 8 de mayo de 1997.*
[213] *En febrero de 1996, tras la caída de un avión en el río Guaporé, estado de Mato Grosso, se encontró un gran cargamento de armas. Este caso abrió las sospechas de que las armas pertenecían a las Fuerzas Armadas Paraguayas, aunque la imputación fue negada por el entonces Ministro de Defensa, Hugo Estigarribia Elizeche (*Diario Noticias*, 23 de septiembre de 2000). En febrero de 1997 una avioneta Séneca, Modelo 810 C. PTWGO, propiedad de Hilario Marinho, residente en Ponta Porá, Brasil, cayó en Pontes e Lacerda, a 460 kilómetros al norte de Cuiabá, estado de Mato Grosso. Contenía un cargamento de fusiles G-3 (*ABC Color*, 8 de mayo de 1997). Se hallaron en esa oportunidad 22 fusiles (15 de los cuales tenían el sello del Ejército paragauayo), 8 pistolas, 20 litros de gasolina y una maleta con 49.000 dólares. En esa ocasión se sospechaba que las armas halladas tenían como destino, además de las favelas de Río de Janeiro, la guerrilla colombiana. El escenario de paso era Pedro Juan Caballero, desde donde los traficantes comercializaban la mercadería. En ese momento el precio de venta de las armas era entre 1500 y 3000 dólares. Se calcula que los traficantes que se encargan de llevar la mercadería reciben 5000 dólares por el trabajo (*Diario Noticias*, 23 de septiembre de 2000). La aeronave habría partido de Pedro Juan Caballero con destino a Barcelos, estado de Amazonas. La Policía Federal del Brasil supone que el cargamento debía ser entregado al Cártel de Cali para intercambiarla por cocaína* (ABC Color*, 15 de marzo de 1997). En el accidente falleció el piloto Rubén González Alderete, a cuyo hermano, Luis González, se lo vincula al narcotráfico en Pedro Juan Caballero (*ABC Color*, 1 de marzo de 1997). A fines de junio de 2000 un fusil calibre 7.62 x 51 mm. modelo M-964 con escudo de la República de Paraguay y dos pistolas Taurus 9 mm. modelo PT 99 AFS, también de procedencia paraguaya, fueron incautadas por el ejército colombiano en su territorio. De acuerdo a declaraciones del senador Basilio Nikiphoroff este hallazgo podría tener relación con el tráfico de armas que investigó la CBI. Estos hechos que van apareciendo ilustran omisiones y eslabones perdidos en las investigaciones de la CBI. Las Fuerzas Militares de Colombia solicitaron a Paraguay que realice el rastreo de armas que fueron incautadas en ambos operativos, a personas ligadas presumiblemente al narcotráfico y la guerrilla. Con esto se confirmarían las informaciones surgidas sobre el posible destino de las armas desaparecidas del ejército paraguayo. El pedido de informe señala que la información que ellos poseen del fusil M-964 indicaría que se trata de parte de un lote de 400 unidades que fueron robadas al ejército paraguayo poco después del golpe de 1989* (Diario Noticias*, 23 de septiembre de 2000).*

Por otra parte, de acuerdo a un trabajo del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, a pocos kilómetros de Ciudad del Este, en la localidad de Pedro Juan Caballero, se realiza un micro tráfico con la venta de armas a turistas brasileños. La frontera es simplemente una calle que se cruza sin problemas y desde allí se reinsertan las armas ilegalmente en el tejido social brasileño (*Clarín,* 29 de octubre de 2000). Por otra parte, de acuerdo a autoridades policiales brasileñas, las armas ingresan a San Pablo por la misma ruta que la droga. Los compradores van a Paraguay a comprar armas y municiones. Los traficantes de Río también proveen de armas a San Pablo. "Brazil arms trafficking: drug networks used to import clandestine weapons" (*World News Connection,* 16 de Julio de 2000).
[214] *ABC Color*, 29 de mayo de 2000.
[215] *El Tiempo*, 12 de octubre de 2000.
[216] "Colombia's *Semana* Links Brazil Drug Trafficker Beira-Mar to FARC", *World News Connection*, 11 de septiembre de 2000.
[217] *El Tiempo*, 7 de enero de 2001.
[218] *Expreso*, 20 de febrero de 2001.
[219] "Colombia's Military Says It Exposed Drugs-For-Arms Sale", *Dow Jones International News*, 20 de febrero de 2001.
[220] "Colombia's *Semana* Links Brazil Drug Trafficker Beira-Mar to FARC", *World News Connection*, 11 de septiembre de 2000.
[221] "Paraguay- Drugs: Important Colombian Guerrillas Arms Supplier Arrested", *EFE News Service,* 30 de octubre de 2000.
[222] *Diario Noticias* (Asunción), 20 de febrero de 2001.
[223] "Russian Mob Trading Arms for Cocaine with Colombian Rebels", *MSNBC*, 10 de abril de 2000.
[224] "Russian Mob Trading Arms for Cocaine with Colombian Rebels", *MSNBC*, 10 de abril de 2000.
[225] "Iranian Investment in Colombia Raises Suspicion", *Stratfor Global Intelligence Update*, 2 de diciembre de 1999.

[226] *El Tiempo*, 12 de octubre de 2000.
[227] *Expreso*, 20 de febrero de 2001.
[228] "Colombia's *Semana* Links Brazil Drug Trafficker Beira-Mar to FARC", *World News Connection*, 11 de septiembre de 2000.
[229] "Brazil-Drugs: Most-Wanted Brazilian Drug Lord Used Military Aircraft", *EFE*, 29 de noviembre de 1999.
[230] Luis Esnal, "La violencia del narcotráfico ya no conoce límites en Río", *La Nación*, 14 de septiembre de 2000.
[231] *Clarín*, 25 de abril de 2001. En los interrogatorios, Beira-Mar admitió que pagaba U$S 10 millones mencuales a las FARC a cambio de 20 toneladas de cocaína que entregaba a distribuidores en Brasil y exportaba a Europa vía Surinam.
[232] *Clarín*, 7 de diciembre de 2000.
[233] *Clarín*, 7 de diciembre de 2000.
[234] *Clarín*, 19 de febrero de 2000.
[235] *Clarín*, 19 de febrero de 2000.
[236] Juan Arias, "El presidente de Brasil pide al Parlamento que levante el secreto bancario", *El País*, 13 de noviembre de 1999.
[237] *Clarín,* 13 de julio de 2000; "Instalan narcos base en Surinam", *Reform*a, 23 de mayo de 2000.
[238] Bob Woodward, *"Veil: The Secret Wars of the CIA, 1981-1987".*
[239] Douglas Farah, "Drug Traffic Shifting to Surinam: Isolation Facilitates Shipment of Cocaine", *Washington Post*, 4 de noviembre de 1991.
[240] Douglas Farah, "Drug Traffic Shifting to *Surinam: Isolation Facilitates Shipment of Cocaine", Washington Post, 4 de noviembre de 1991.*
[241] Douglas Farah, "Drug Traffic Shifting to Surinam: Isolation Facilitates Shipment of Cocaine", *Washington Post*, 4 de noviembre de 1991.
[242] *Ibidem.*
[243] *Ibidem.*
[244] "Brazil´s Federal Police Focus on Guerrilla Migration, Arms-Drug Trade", *World News Connection*, 1 de septiembre de 2000.
[245] *Miami Herald,* 11 de agosto de 1991.
[246] "Brazil´s Federal Police Focus on Guerrilla Migration, Arms-Drug Trade", *World News Connection*, 1 de septiembre de 2000.
[247] "Brazil´s Federal Police Focus on Guerrilla Migration, Arms-Drug Trade", *World News Connection*, 1 de septiembre de 2000.
[248] *New York Times*, 30 de octubre de 2000.
[249] Clarín*, 13 de julio de 2000.*
[250] *Revista Cambio*, 2 al 9 de octubre de 2000
[251] Clarín*, 13 de julio de 2000.*
[252] *Revista Cambio*, 2 al 9 de octubre de 2000
[253]**"**Brazilian Police to sep extradition of FARC Guerrillas involved in trafficking", *World News Connection*, 16 de octubre de 2000. Para más datos ilustrativos de la "conexión", en abril de 2000 la Fuerza Aérea Colombiana destruyó dos aviones livianos con registro brasileño que entraron al país con armas que según autoridades militares, la guerrilla pagaba con cocaína. Esto sucedió en el Departamento de Guainia en la frontera con Brasil y Venezuela ("Colombian Air Force Destroyed 2 Brazilian Jets", *Xinhua: Comtex*, 17 de abril de 2000). Desde febrero hasta julio de ese año la Fuerza Aérea de Colombia destruyó seis aviones brasileños. Esas máquinas descargaron armas en la zona de influencia de la localidad de Vaupé, limítrofe con el estado brasileño de Amazonas, y fueron destruidas en tierra cuando ya habían cargado drogas y estaban listas para despegar. Los vuelos salieron de Surinam. El camino es a través del Amazonas brasileño con escala en el sur del estado de Pará. De allí continúan a Surinam (*Clarín*, 13 de julio 2000; y *Excelsior*, 3 de noviembre de 2000).
[254] *Clarín*, 13 de julio de 2000.
[255] *Miami Herald*, 30 de noviembre de 1997.
[256] *Reuters English News Service*, 9 de febrero de 2001; *Dow Jones International News*, 31 de enero de 2001.
[257] *Christian Science Monitor*, 13 de diciembre de 2000.
[258] "Dutch drop drug charges against Surinam´s bank chief", *Agence France Presse*, 15 de abril de 2000.
[259] "Former Surinam dictator dealt jail term for cocaine smuggling", *Deutsche Presse Agentur*, 16 de Julio de 2000.

[260] Informe al Congreso de los EE.UU., "The BCCI Affair - A Report to the Committee on Foreign Relations United States Senate", por los senadores John Kerry y Hank Brown, diciembre de 1992 (Capítulo "BCCI And Georgia Politicians").
[261] Sydney P. Freedberg, "BCCI's web entangles S. American Suriname Colonel called 'Noriega II'", *Miami Herald*, 11 de agosto de 1991.
[262] Informe al Congreso de los EE.UU., "The BCCI Affair - A Report to the Committee on Foreign Relations United States Senate", por los senadores John Kerry y Hank Brown, diciembre de 1992. (Capítulo "BCCI, the CIA and Foreign Intelligence").
[263] Thomas Petzinger Jr., Peter Truell y Jill Abramson, "Oil Firm Links Bahrain, BCCI, Bush Son", *Asian Wall Street Journal*, 9 de diciembre de 1991.
[264] Editorial, *Wall Street Journal*, 29 de octubre de 1991.
[265] *Tom Mooney, "Terror in Colombia – Love of Homeland, Fear of Violence, Tear a Nation Apart",* The Providence Journal*, 11 de febrero de 2001.*
[266] *"Kidnappings highlight risks americans face abroad",* The Kansas City Star*, 19 de febrero de 2001.*
[267] *"The world of International Kidnapping: Journalist Ann Hagedorn Auerbach talks about her book: Ransom: the untld story of International Kidnapping",* Time*, 15 de julio de 1998.*
[268]*De acuerdo a Richard Sinkin, director de Inter American Holdings Co., en México cerca del 40% de las empresas de seguridad son falsas. Operan gracias a que sobornan a los inspectores de la policía federal (*Global Business*, octubre de 2000). Además, muchos de los secuestros son perpetrados por la policía corrupta (Macko Steve, "Kidnapping: a Latin American growth industry*", ENN Daily Inteligence Report - ERRI Risk Asessment Services*, 30 de abril de 1997). Muchas bandas de secuestradores son protegidas por autoridades estatales. Según parece, en el Estado de Morelos, donde gobierna Jorge Carrillo Olea, estas organizaciones están formadas por elementos de los diferentes cuerpos de seguridad. Además se cree que son abastecidos de armas y equipo técnico por fuerzas especiales de la Procuraduría General de la República, por lo que de 65 raptos establecidos y documentados en esa entidad en fechas recientes, solamente se han aclarado 10, todos ellos de menor importancia ("La historia del secuestro en México",* La Revista Peninsular*, Edición 365, 18 de octubre de 1996). Uno de los hechos más salientes es la detención, en enero de 1998, del jefe del escuadrón antisecuestros del estado de Morelos, Armando Martínez Salgado. Él y dos agentes fueron detenidos en un vehículo que llevaba el cuerpo sin vida de un joven de 17 años posteriormente identificado como miembro de una banda de secuestradores. El procurador general abrió una investigación sobre la policía de Morelos, declarando que aparentemente protegía bandas dedicadas al secuestro y al tráfico de drogas ("Kidnappings highlight risks Americans face abroad",* The Kansas City Star*, 19 de febrero de 2001).*
[269] La Jonada*, UNAM, 27 de abril de 1999.*
[270] Global Business*, octubre de 2000.*
[271] *The cutting edge: focus on technology global savvy",* Los Angeles Times*, 20 de septiembre de 1999.*
[272] *Macko Steve, "Kidnapping: a latin American growth industry",* ENN Daily Inteligence Report - ERRI Risk Asessment Services*, 30 de abril de 1997.*
[273] La Tercera*, 13 de septiembre de 1997.*
[274] *"Colombia grows kidnap industry: latest hijacking by marxist guerrillas highlights dramatic rise in abductions",* The Washington Post*, 19 de abril de 1999.*
[275] *El EPL (Ejército Popular de Liberación) es un grupo maoísta mencionado en el Capítulo 1, que representa al sector disidente de un grupo del mismo nombre que se desmovilizó en 1991. Cuenta con una fuerza de entre 300 y 500 combatientes. A su vez, el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) es un grupo guerrillero nuevo que cuenta con unos 350 combatientes. En total hay 17 grupos guerrilleros chicos, además de las FARC y el ELN, que por su dispersión geográfica y descentralización pueden dificultar mucho cualquier negociación de paz con las organizaciones guerrilleras mayores. Véase "Colombia: Small Guerrilla Groups Complicate Peace Efforts – Intelligence Report",* BBC Monitoring*, 9 de agosto de 2000.*
[276] País Libre*, 26 de abril de 2000.*
[277] *Marc Cooper, "Plan Colombia: Wrong Issue, Wrong Enemy, Wrong Country",* The Nation*, 19 de marzo de 2001.*
[278] La Hora*, 1 de enero de 2001.*
[279] *"Colombia grows kidnap industry: latest hijacking by marxist guerrillas highlights dramatic rise in abductions",* The Washington Post*, 19 de abril de 1999.*
[280] *Macko Steve, "Kidnapping: a latin American growth industry",* ENN Daily Inteligence Report - ERRI Risk Asessment Services*, 30 de abril de 1997.*

[281] *Macko Steve, "Kidnapping: a latin American growth industry",* ENN Daily Inteligence Report - ERRI Risk Asessment Services*, 30 de abril de 1997.*
[282] *"Colombia grows kidnap industry: latest hijacking by marxist guerrillas highlights dramatic rise in abductions",* The Washington Post*, 19 de abril de 1999.*
[283] *"The world of International Kidnapping: Journalist Ann Hagedorn Auerbach talks about her book: Ransom: the untld story of International Kidnapping",* Time*, 15 de julio de 1998.*
[284] *"Violence crime continue to cast shadow over future oil investment Colombia",* The oil and Gas Journal*, 17 de enero de 2000.*
[285] *"Colombia grows kidnap industry: latest hijacking by marxist guerrillas highlights dramatic rise in abductions",* The Washington Post*, 19 de abril de 1999.*
[286] *"Rebels turn to kidnapping to raise funds",* The San Francisco Chronicle*, 10 de diciembre de 2000.*
[287] *"Rebels turn to kidnapping to raise funds",* The San Francisco Chronicle*, 10 de diciembre de 2000.*
[288] *"Colombia grows kidnap industry: latest hijacking by marxist guerrillas highlights dramatic rise in abductions",* The Washington Post*, 19 de abril de 1999.*
[289] *"Colombia grows kidnap industry: latest hijacking by marxist guerrillas highlights dramatic rise in abductions",* The Washington Post*, 19 de abril de 1999.*
[290] Associated Press*, 5 de diciembre de 2000.*
[291] *"Rebels turn to kidnapping to raise funds",* The San Francisco Chronicle*, 10 de diciembre de 2000.*
[292] *"Violence crime continue to cast shadow over future oil investment Colombia",* The oil and Gas Journal*, 17 de enero de 2000.*
[293] *"Violence crime continue to cast shadow over future oil investment Colombia",* The oil and Gas Journal*, 17 de enero de 2000.*
[294] *"Violence crime continue to cast shadow over future oil investment Colombia",* The oil and Gas Journal*, 17 de enero de 2000.*
[295] *"Guerrillas' Push for Bogotá Leaves 80 Dead",* The Scotsman*, 10 de Julio de 1999.*
[296] *"Fishing for ransom, Colombian rebels cast net wide",* The New York Times*, 3 de junio de 1999.*
[297] *"Fishing for ransom, Colombian rebels cast net wide",* The New York Times*, 3 de junio de 1999.*
[298] Revista Cambio*, 11/18 de diciembre de 2000.*
[299] Revista Cambio*, 4/11 de diciembre de 2001.*
[300] Semana*, 9 de septiembre de 2000.*
[301] Semana*, 5 de marzo de 2001.*
[302] *"Colombian Marxist Dies in Clash",* Washington Times*, 13 de marzo de 1999.*
[303] Semana*, 5 de marzo de 2001.*
[304] *The cutting edge: focus on technology global savvy",* Los Angeles Times*, 20 de septiembre de 1999.*
[305] *"Kidnappings highlight risks americans face abroad",* The Kansas City Star*, 19 de febrero de 2001.*
[306] El Norte*, 24 de febrero de 2001.*
[307] *"Colombia´s creeping war: neighbours fear spillover of violence",* The Washington Post*, 1 de octubre de 2000.*
[308] *"Kidnapping on the rise, even by decadent guerrillas",* The San Diego Union Tribune*, 9 de noviembre de 2000.*
[309] *"Kidnappings Highlight Risks Americans Face Abroad",* The Kansas City Star*, 19 de febrero de 2001.*
[310] *Lloyd´s de Londres no es una empresa sino que es una suerte de mercado de 122 empresas o "sindicatos" de seguros que simultáneamente cooperan y compiten entre sí. Comenzó, no obstante, como un consorcio fundado por Edward Lloyd en el siglo XVII en su café de la* city*. El mismo Lloyd no proveía seguros, pero sí noticias sobre la navegación y una constelación de otros servicios, que les servía a capitanes de ultramar, comerciantes e inversores para asegurar buques y sus cargas, desde el mismo café de la calle Tower. El café se convirtió en un centro de seguros marítimos donde los riesgos se compartían: diversos inversores firmaban la misma póliza, uno debajo del otro, y de allí salió el concepto inglés de* underwriters *para referirse a los aseguradores. Hacia fines del siglo XVIII los aseguradores, encabezados por un directorio, se mudaron a la bolsa de valores (*Royal Exchange*), donde sólo socios de Lloyd´s podían aceptar negocios de seguros. La ley que reglamentó el seguro en Inglaterra fue la Ley de Lloyd´s de 1871. Hacia el ´900, Lloyd´s ya había dejado el ámbito exclusivo de los seguros marítimos para dedicarse a asegurar la más amplia gama de riesgos, ganándose la preeminencia mundial en el rubro.*
[311] *Macko Steve, "Kidnapping: a latin American growth industry",* ENN Daily Inteligence Report - ERRI Risk Asessment Services*, 30 de abril de 1997.*
[312] *Charles E. Boyle, "Kidnapping, Hostage-Taking and Extorsion on the Rise",* Insurance Journal*, 14 de marzo de 2001.*
[313] *www.epoca.com.mx*

[314] *"Kidnappings highlight risks americans face abroad",* The Kansas City Star*, 19 de febrero de 2001.*
[315] La Jornada*, UNAM, 26 de septiembre de 1999.*
[316] La Jornada*, UNAM, 26 de septiembre de 1999.*
[317] *Macko Steve, "Kidnapping: a latin American growth industry",* ENN Daily Inteligence Report - ERRI Risk Asesment Services*, 30 de abril de 1997.*
[318] *Charles E. Boyle, "Kidnapping, Hostage-Taking and Extorsion on the Rise",* Insurance Journal*, 14 de marzo de 2001.*
[319] *"Kidnapping soar in Latin America, threatening region´s stability",* The New York Times*, 7 de abril de 1995.*
[320] *Tomás Ruiz Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, negó que compañías mexicanas comercialicen seguros contra secuestro. Explicó que dentro del territorio nacional quien lo desee puede adquirirlo, pero sólo contratándolo con compañías de otros países. En las condiciones actuales a las aseguradoras locales, que son más débiles que las transnacionales, no les interesa ofrecer este tipo de cobertura debido al alto riesgo y el elevado precio que representaría. Los mexicanos que desean adquirir un seguro contra secuestro acuden a empresas de países como Estados Unidos, algunas de las cuales operan en el mismo México, como lo reconoció la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas (www.epoca.com.mx)*
[321] La Jornada*, UNAM, 26 de septiembre de 1999.*
[322] *www.epoca.com.mx*
[323] *Kevin Whitelaw, "Your Money or your Life",* U.S. News and World Report*, 22 de marzo de 1999.*
[324] *Kevin Whitelaw, "Your Money or your Life",* U.S. News and World Report*, 22 de marzo de 1999.*
[325] Cable de Reuters, 24 de octubre de 2000. España aportaría 100 millones de dólares, Noruega 20 millones, y el resto de la Unión Europea unos 90 millones, cifras muy por debajo de las expectativas originales.
[326] Por Carlos Escudé, Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1999. Ver también David Shearer, *Private Armies and Military Intervention*, *Adelphi Paper Nº 316*, Londres: Oxford University Press,, 1988; y también un artículo de dicho autor en la revista norteamericana *Foreign Policy*, titulado "Subcontracting War". Shearer es investigador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) de Londres.
[327] Ken Silverstein, "Privatizing War: How Affairs of State Are Outsourced to Corporations Beyond Public Control", *The Nation*, 28 de Julio de 2000.
[328] Ken Silverstein, "Privatizing War: How Affairs of State Are Outsourced to Corporations Beyond Public Control", *The Nation*, 28 de Julio de 2000.
[329] Pedro Ruz Gutiérrez y E.A. Torriero, "U.S: Pilots Risk Lives in Colombia's Drug War", *Sun Sentinel-Fort Lauderdale*, 19 de septiembre de 2000. También en "Military Contractors Line Up for U.S. Drug War in Colombia", *Chicago Tribune*, 24 de septiembre de 2000.
[330] http://www.ov-10bronco.net/us-state-batf.cfm
[331] Ken Silverstein, "Privatizing War: How Affairs of State Are Outsourced to Corporations Beyond Public Control", *The Nation*, 28 de Julio de 2000.
[332] Juan O. Tamayo, "U.S. Mercenary Companies Conduct, Profit From War Against Colombia's Leftists", *KRTBN Knught-Ridder Tribune Business News: The Miami Herald*, 23 de febrero de 2001.
[333] Ken Silverstein, "Privatizing War: How Affairs of State Are Outsourced to Corporations Beyond Public Control", *The Nation*, 28 de Julio de 2000.
[334] Ken Silverstein, "Privatizing War: How Affairs of State Are Outsourced to Corporations Beyond Public Control", *The Nation*, 28 de Julio de 2000.
[335] "Colombia: Para no dirigir una guerra or poderes como en Vietnam y El Salvador, EE.UU. envía mercenarios contratistas", *St. Petersburg Times*, 31 de enero de 2001.
[336] La historia de la persecución de Pablo Escobar, escrita por el periodista Mark Bowden y titulada "Killing Pablo", fue publicada en una serie de 37 notas por el *Philadelphia Inquirer* entre noviembre y diciembre de 2000.
[337] Pedro Ruz Gutiérrez y E.A. Torriero, "U.S: Pilots Risk Lives in Colombia's Drug War", *Sun Sentinel-Fort Lauderdale*, 19 de septiembre de 2000. También en "Military Contractors Line Up for U.S. Drug War in Colombia", *Chicago Tribune*, 24 de septiembre de 2000.
[338] Juan O. Tamayo, "U.S. Mercenary Companies Conduct, Profit From War Against Colombia's Leftists", *KRTBN Knught-Ridder Tribune Business News: The Miami Herald*, 23 de febrero de 2001.
[339] "Juicio en Colombia contra 4 Mercenarios Israelíes y 2 Colombianos" (cable de AP), *El Informador* (Guadalajara, Jalisco, México), 26 de febrero de 1998.
[340] "U.S. 'Contractors' Fight Colombia Drug War", *Chicago Tribune*, 26 de febrero de 2001.
[341] Ken Silverstein, "Privatizing War: How Affairs of State Are Outsourced to Corporations Beyond Public Control", *The Nation*, 28 de Julio de 2000.

[342] Pedro Ruz Gutiérrez y E.A. Torriero, "U.S: Pilots Risk Lives in Colombia's Drug War", *Sun Sentinel-Fort Lauderdale*, 19 de septiembre de 2000. También en "Military Contractors Line Up for U.S. Drug War in Colombia", *Chicago Tribune*, 24 de septiembre de 2000.
[343] "Colombia: Para no dirigir una guerra or poderes como en Vietnam y El Salvador, EE.UU. envía mercenarios contratistas", *St. Petersburg Times*, 31 de enero de 2001.
[344] Ken Silverstein, "Privatizing War: How Affairs of State Are Outsourced to Corporations Beyond Public Control", *The Nation*, 28 de Julio de 2000.
[345] "Colombia: Para no dirigir una guerra or poderes como en Vietnam y El Salvador, EE.UU. envía mercenarios contratistas", *St. Petersburg Times*, 31 de enero de 2001.
[346] Jared Kotler, "Americans Work in Colombia War Zone", *AP Online*, 25 de febrero de 2001.
[347] Ken Silverstein, "Privatizing War: How Affairs of State Are Outsourced to Corporations Beyond Public Control", *The Nation*, 28 de Julio de 2000.
[348] Pedro Ruz Gutiérrez y E.A. Torriero, "U.S: Pilots Risk Lives in Colombia's Drug War", *Sun Sentinel-Fort Lauderdale*, 19 de septiembre de 2000. También en "Military Contractors Line Up for U.S. Drug War in Colombia", *Chicago Tribune*, 24 de septiembre de 2000.
[349] Juan O. Tamayo, "U.S. Mercenary Companies Conduct, Profit From War Against Colombia's Leftists", *KRTBN Knught-Ridder Tribune Business News: The Miami Herald*, 23 de febrero de 2001.
[350] Juan O. Tamayo, "U.S. Mercenary Companies Conduct, Profit From War Against Colombia's Leftists", *KRTBN Knught-Ridder Tribune Business News: The Miami Herald*, 23 de febrero de 2001.
[351] Pedro Ruz Gutiérrez y E.A. Torriero, "U.S: Pilots Risk Lives in Colombia's Drug War", *Sun Sentinel-Fort Lauderdale*, 19 de septiembre de 2000. También en "Military Contractors Line Up for U.S. Drug War in Colombia", *Chicago Tribune*, 24 de septiembre de 2000.
[352] Mario Chimanovitch, "Mercenarios Made in Brazil", *Istoé*, 20 de octubre de 1999.
[353] Dan Rather, "America's Secret War on Drugs", *CBS News: 60 Minutes II*, 5 de septiembre de 2000.
[354] Arnaud de Borchgrave, "Pastrana Sees 'Commitment' of Rebel Units to Peace Talks", *Washinton Times*, 10 de febrero de 2001.
[355] Kintto-Lucas, "Ecuador: Colombian Paramilitaries Reportedly Moving In", *Inter-Press Service*, 18 de octubre de 2000.
[356] Kintto-Lucas, "Ecuador: Colombian Paramilitaries Reportedly Moving In", *Inter-Press Service*, 18 de octubre de 2000.
[357] *"Paramilitaries, drug trafficking and U.S. policy in Colombia",* Dollars & Sense*, 1 de julio de 2000.*
[358] *"Rights-Colombia: military ties to paramilitaries pervasive",* Inter Press Service*, 24 de febrero de 2000.*
[359] *"Cocaine war: a special report. A web of drugs and strife in Colombia",* The New York Times*, 21 de abril de 2000.*
[360] The Irish Times*, 23 de agosto de 2000.*
[361] RCN*, 27 de noviembre de 1999.*
[362] *"US sought help of pariah army, according to Vega",* The Wall Street Journal*, 7 de diciembre de 2000.*
[363] Puede consultarse en: http://home3.swipnet.se/~w-34817/FARC/990120-para-militar-documento.htm y también en http://www.contrast.org/mirrors/farc/Documentos/paramilitares.htm; la segunda es una página del sitio oficial de las FARC.
[364] Plan Colombia, Gobierno de Colombia, 1999.
[365] Plan Colombia, Gobierno de Colombia, 1999.
[366] "Colombian President: To Use US Aid to Lure Farmers from Coca", *Dow Jones International News*, 10 de febrero de 2000.
[367] "Drugs Colombia: Seeking Local, not Imported Biological Controls", *Inter Press Service*, 8 de agosto de 2000.
[368] "Replacing Colombia´s Drug Crops Begins", *The News and Observer*, Raleigh, NC, 5 de diciembre de 2000.
[369] "Environment: Ecuador - Cross Border Impact of Plan Colombia", *Inter Press Service*, 16 de octubre e 2000.
[370] "Getting a Root of Drug Problem", *Houston Chronicle*, 8 de octubre de 2000.
[371] "Científicos Colombianos se Oponen al Control Biológico de la Coca", EDUCYT, Año N° 4, N° 130, 25 de agosto de 2000.
[372] NRC *Handelsblad*, 28 de diciembre de 2000.
[373] "Biowarfare in Colombia? A Controversial Fumigation Scheme", *NACLA Report on the Americas*, 1 de septiembre de 2000.

[374] "Environment: Ecuador - Cross Border Impact on Plan Colombia", *Inter Press Service*, 16 de octubre de 2000.
[375] Jim Hogshire, "Biological Roulette. The Drug War´s Fungal Solution?"; *Covert Action Quarterly*, Spring 1998.
[376] NRC *Handelsblad*, 28 de diciembre de 2000.
[377] "US Antidrug Aid Endangers Indigenous Communities and Amazon Biodiversity", *US Newswire*, 20 de noviembre de 2000.
[378] *La Nación*, 6 de octubre de 2000.
[379] "Repeating Past Mistakes: Aiding Counterinsurgency in Colombia", *NACLA Report on the Americas*, 1 de septiembre de 2000.
[380] "Government Recognizes Herbicide Risk, Seeks Other Biological Control Methods", *World News Connection*, 2 de agosto de 2000.
[381] "Environment: Drugs- Anti Coca Fungus Threatens Amazon", *Inter Press Service*, 19 de julio de 2000
[382] "Environment-Latam: Lethal Impact of Drug Crops and Spraying", *Inter Press Service*, 13 de julio de 2000.
[383] Jim Hogshire, "Biological Roulette. The Drug War´s Fungal Solution?"; *Covert Action Quarterly*, Spring 1998.
[384] "Fungi May be the Newest Recruits in War on Drugs", *Los Angeles Times*, 30 de agosto de 2000.
[385] "Fungus Considered as a Tool to Kill Coca in Colombia", *New York Times*, 6 de julio de 2000.
[386] Jeremy Bigwood, "Talk to 13th International Conference on Drug Policy Reform", 20 de mayo de 2000
[387] "Andean Community", *Press Releases*, 7 de septiembre de 2000.
[388] "Environment: Ecuador - Cross Border Impact on Plan Colombia", *Inter Press Service*, 16 de octubre de 2000.
[389] "Environment: Drugs- Anti Coca Fungus Threatens Amazon", *Inter Press Service*, 19 de Julio de 2000.
[390] "Environment: Ecuador - Cross Border Impact on Plan Colombia", *Inter Press Service*, 16 de octubre de 2000.
[391] Martín Jelsma, "Breve Historia de la Guerra Química y Biológica Contra las Drogas"; ponencia presentada en "La Guerra Contra las Drogas y el Uso de Agentes Biológicos", Universidad Andina Simón Bolívar (Quito), 10-11 de octubre de 2000; y Foro Internacional Política Antidrogas: Fumigación o la Erradicación Manual, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Colombia (Bogotá), 13 de octubre de 2000.
[392] *BBC Mundo*, 20 de agosto de 2000.
[393] *La Nación*, 14 de agosto de 2000.
[394] "Biowarfare in Colombia? A Controversial Fumigation Scheme", *NACLA Report on the Americas*, 1 de septiembre de 2000.
[395] "Drugs-Colombia: Shift in Areas Growing Coca", *Inter Press Service*, 11 de agosto de 1999.
[396] "The Colombian Quagmire", *American Prospect*, 31 de Julio de 2000.
[397] Ricardo Vargas, "The Impact of US Fumigation Process", Simposio *"Counternarcotics policy and prospects for peace: eradication and alternative development in Southern Colombia"*; George Washington University Andean Seminar on Culture and Politics and the Washington Office on Latin America, 29 de octubre de 1999.
[398] Rodrigo Velaidez, "Coca Cultivation and the Peasant Economy: Lessons from the Caguán"; Simposio *"Counternarcotics Policy and Prospects for Peace: Eradication and Alternative Development in Southern Colombia"*; George Washington University Andean Seminar on Culture and Politics and the Washington Office on Latin America; 29 de octubre de 1999.
[399] "The Colombian Quagmire", *American Prospect*, 31 de Julio de 2000.
[400] "A Long Way From Coca to Coffee", *Washington Post*, 11 de octubre de 2000.
[401] Klaus Nyholm, "The International Community and Development Programs in South Colombia", Simposio *"Counternarcotics Policy and Prospects for Peace: Eradication and Alternative Development in Southern Colombia"*; George Washington University Andean Seminar on Culture and Politics and the Washington Office on Latin America; 29 de octubre de 1999.
[402] Nestor Humberto Martínez, "Plan Colombia: Alternative Development in the Context of Negotiations", Simposio *"Counternarcotics Policy and Prospects for Peace: Eradication and Alternative Development in Southern Colombia"*; George Washington University Andean Seminar on Culture and Politics and the Washington Office on Latin America, 29 de octubre de 1999.
[403]"Aereal Attack Killing More than Coca", *Washington Post*, 7 de enero de 2001
[404] "The Colombian Quagmire", *American Prospect*, 31 de Julio de 2000.
[405] Plan Colombia, Presidencia de Colombia, 1999
[406] *El Tiempo*, 3 de diciembre de 2000.
[407] "A Long Way From Coca to Coffee", *Washington Post*, 11 de octubre de 2000.
[408] "To Turn the Heroin Tide", *Washington Post*, 22 de febrero de 1999.
[409] "Fungi May be the Newest Recruits in War on Drugs", *Los Angeles Times*, 30 de agosto de 2000.

[410] "Aerial Attack Killing More than Coca", *Washington Post*, 7 de enero de 2000; "The Colombian Quagmire", *American Prospect*, 31 de Julio de 2000; "Replacing Colombia´s Drug Crops Begins", *The News and Observer*, Raleigh, NC, 5 de diciembre de 2000; "Drug Crops Eradicated in Colombia", *AP Online*, 27 de julio de 2000; "A Long Way From Coca to Coffee"; *Washington Post*, 11 de octubre de 2000.
[411] "Send in the Cows: Alternatives to Coca in Colombia", *The Economist*, 25 de noviembre de 2000.
[412] *El Tiempo*, 3 de diciembre de 2000.
[413] *El Tiempo*, 5 de noviembre de 2000.
[414] "FARC and Hezbollah Possibly Behind Embassy Closures", *Stratfor Global Intelligence Report*, 6 de abril de 2001.
[415] Marc Cooper, "Plan Colombia", *The Nation*,
[416] Anita Snow, "Mexican Barons Muscle Into U.S.; Drug Trafficking Colombians Out of Picture", *Sun-Sentinel*, Ft. Lauderdale, 18 de junio de 1997.
[417] Ver Carlos Escudé, *Estado del Mundo: las Nuevas Reglas de la Política Internacional Vistas desde el Cono Sur*, Buenos Aires: Ariel, 1990, Capítulo 4, y revista *Time*, 24 de diciembre de 1998.
[418] Ronald Somthers, "Failed BCCI Gave to Carter Charities", *Houston Chronicle*, 15 de Julio de 1991.
[419] Gloria Borger y Matthew Cooper, "The Atlanta Connection: The BCCI Scandal Has Shaken Former Top Carter Administration Officials", *U.S. News and World Report*, 12 de agosto de 1991.
[420] *Wall Street Journal*, 6 de diciembre de 1991.
[421] Ellen Debenport, "Jeb Bush : His Name in Scrutiny", *St. Petersburg Times* (Miami), 20 de diciembre de 1993.
[422] Thomas Petzinger Jr., Peter Truell y Jill Abramson, "Oil Firm Links Bahrain, BCCI, Bush Son", *Asian Wall Street Journal*, 9 de diciembre de 1991.
[423] Thomas Petzinger Jr., Peter Truell y Jill Abramson, "Family Ties: How Oil Firm Linked To a Son of Bush Won Bahrain Drilling Pact---Harken Energy Had a Web Of Mideast Connections;
In the Background: BCCI ---Entree at the White House", *Wall Street Journal*, 6 de diciembre de 1991.
[424] Peter Truell y Larry Gurwin, "How BCCI Bought Washington", *The Wall Street Journal*, 27 de noviembre de 1992.